



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Facultad de Trabajo Social

Doctorado en Trabajo Social

Tesis de Doctorado en Trabajo Social

**Mujeres ecuatorianas y protagonismo sociopolítico en el contexto de la
Revolución Ciudadana**

-Un análisis crítico desde diferentes perspectivas teóricas-

Tesista:

Laura Alexandra Guachichullca Ordóñez

Director de Tesis

Dra. Cira Fernandez Espinosa

Codirector de Tesis

Dr. Diego Fernando Bermeo

La Plata, Argentina, diciembre de 2020

Contenido

AGRADECIMIENTOS	6
RESUMEN.....	7
INTRODUCCIÓN.....	9
A propósito del método y la construcción de la investigación doctoral.....	10
De la estructura de la Tesis.....	11
Del objetivo y la naturaleza de la investigación.....	12
De los procedimientos metodológicos	13
Capítulo I	15
MUJERES, GÉNEROS Y POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA.....	15
1. Retrospectiva histórica del protagonismo sociopolítico de las mujeres latinoamericanas	15
1.1. Los inicios del siglo XX	16
1.2. El desarrollo del siglo XX	20
1.3. Las primeras décadas del siglo XXI.....	28
2. Liderazgo y militancia en organizaciones con fines políticos.....	38
3. La participación política de las mujeres y sus progresos jurídicos	43
3.1. La legislación e iniciativas internacional favorables a la participación política de las mujeres⁴³	
3.2. Algunos países y su realidad en cuanto a garantizar la participación política de las mujeres por la vía jurídica u otras vías institucionales	47
4. Proceso de cambios en el ejercicio de la representatividad de géneros en cargos públicos	53
4.1. El Caso Uruguay.....	54
4.2. El Caso Colombia	55
4.3. El caso Perú.....	56
4.4. Otros casos, otras realidades, mismos derechos	57
Capítulo II.....	59
MUJERES, GÉNEROS Y POLÍTICA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR	59
1. Transformaciones históricas de la participación política de las mujeres en el contexto ecuatoriano.....	59
1.1. Las mujeres ecuatorianas desde inicios, hasta mediados del siglo XX.....	60
1.2. Las mujeres ecuatorianas en la segunda mitad del siglo XX	64
1.3. Las mujeres ecuatorianas en las primeras décadas del siglo XXI	68
2. La realidad organizacional: protagonismo de las mujeres en los partidos políticos	72
2.1. El protagonismo político de las mujeres en los partidos de orientación liberal	73
2.2. El protagonismo político de las mujeres en los partidos de orientación socialista	76

2.3.	El protagonismo político de las mujeres en los partidos de otras orientaciones ideológicas.....	81
3.	Rutas del empoderamiento institucional de las mujeres de las mujeres ecuatorianas	85
3.1.	Una aproximación al empoderamiento de las mujeres ecuatorianas a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI	85
3.2.	El caso emblemático del empoderamiento en las mujeres indígenas.....	89
3.3.	Presencia y protagonismo de las mujeres ecuatorianas en las instituciones del poder ejecutivo.....	92
3.4.	Presencia y protagonismo de las mujeres ecuatorianas en las instituciones del poder legislativo.....	95
3.5.	Presencia y protagonismo de las mujeres ecuatorianas en otras instituciones de poder	98
4.	Progresión histórica en derechos humanos y políticas públicas. Una mirada desde las mujeres ecuatorianas	101
4.1.	Mujeres, géneros y derechos humanos/políticos.....	101
4.2.	Mujeres géneros y derechos humanos en la República de Ecuador	102
4.3.	Mujeres, géneros y políticas públicas en la República del Ecuador	106
	Capítulo III	109
	LA REVOLUCIÓN CIUDADANA Y LA PERSPECTIVA DE GÉNEROS	109
1.	Políticas públicas y construcción social de la igualdad de géneros en el contexto de la RC	109
1.1.	Los elementos destacables en el origen de la RC en relación con la igualdad de géneros	109
1.2.	La transversalidad de géneros y las políticas públicas de la RC.....	116
1.3.	Políticas públicas, géneros y promoción de la participación en la RC	123
2.	Políticas públicas e igualdad de géneros: verdaderos y falsos dilemas en la RC	126
2.1.	Ejes para la implementación de políticas públicas en clave de géneros durante la RC	127
3.	La Institucionalidad política y la igualdad de géneros en el marco de la RC.....	143
3.1.	La Constitución de 2008.....	143
3.2.	El Centro Nacional de Mujeres (CONAMU).....	146
3.3.	El Consejo Nacional de Igualdad de Género (CNIG) y los planes de desarrollo en el proceso de institucionalización del enfoque de género	147
3.4.	La Defensoría del pueblo	153
	Capítulo IV.....	157
	PROTAGONISMO SOCIOPOLÍTICO DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN LA REVOLUCIÓN CIUDADANA.....	157
1.	La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAEI) y la perspectiva indígena como sustrato teórico de la RC.....	157
1.1.	Rasgos históricos de la CONAIE	158

1.2.	Ejes discursivos y praxis política de la CONAIE	161
2.	La configuración de la participación política de las mujeres indígenas en el marco de la RC	171
2.1.	Aproximación a la participación política de las mujeres indígenas en Ecuador...	172
2.2.	Condiciones favorables creadas por la RC para la participación política de las mujeres indígenas	175
2.3.	Condiciones producto de la RC que desfavorecen la participación política de las mujeres indígenas	179
3.	Presencia y activismo de las mujeres indígenas en cargos públicos	182
3.1.	Presencia y activismo de las mujeres indígenas en el ámbito económico.....	182
3.2.	Presencia y activismo de las mujeres indígenas en el ámbito de las políticas públicas.....	185
3.3.	Presencia y activismo de las mujeres indígenas en el ámbito educativo	191
4.	Interculturalidad, mujeres e indigenismo: prácticas y discursos políticos en el marco de la RC	194
4.1.	A propósito de la interculturalidad y las mujeres indígenas.....	195
4.2.	El indigenismo como reivindicación histórica de las mujeres ecuatorianas en el contexto de la RC.....	199
	Capítulo V	204
	CONCLUSIONES	204
	Una visión integradora del protagonismo sociopolítico de las mujeres en Ecuador durante la RC desde todas las perspectivas teóricas, incluyendo el trabajo social crítico	204
1.	En cuanto a la Reconceptualización del Trabajo Social y el proceso de inclusión sociopolítica de las Mujeres.....	204
1.1.	La transformación teórico-práctica del Trabajo Social y el protagonismo sociopolítico de las mujeres	205
1.2.	El Trabajo Social, el enfoque de géneros y la inclusión sociopolítica de las mujeres	207
2.	En cuanto a las transformaciones históricas y organizacionales de las mujeres ecuatorianas	209
2.1.	Una lectura integradora del siglo XX y la situación de las mujeres ecuatorianas frente a la educación, la familia y el trabajo.....	210
2.2.	El siglo XXI: dos décadas ecuatorianas con rostro de mujeres	214
3.	En cuanto a la relación teórica, axiológica y práctica de la perspectiva de géneros en el contexto de la Revolución Ciudadana	217
3.1.	La igualdad de géneros: bifurcaciones teóricas respecto a la RC	218
3.2.	Fuentes axiológicas para la igualdad de géneros en el contexto de la RC	221
3.3.	La praxis o la objetivación de la igualdad de géneros en la RC.....	225
4.	En cuanto a “los lugares” de las mujeres indígenas antes, durante y después de la Revolución Ciudadana.....	226
4.1.	La CONAIE y las mujeres, entre certezas y ambigüedades.....	227

4.2. Sujetos históricos, fuentes de las discontinuidades	230
5. El epílogo de las conclusiones.....	234
REFERENCIAS	236

AGRADECIMIENTO

A mi Dios Jehová por darme la oportunidad de emprender esta aventura de doctorarme.

A mi padre, José Guachichullca, que a pesar de no estar físicamente me da la fortaleza.

A mi Codirector de Tesis, Dr. Diego Berneo, por su apoyo a este trabajo investigativo.

A mi Directora de Tesis, Dra. Cira Fernández, por motivarme a terminar este Doctorado.

RESUMEN

Esta Tesis Doctoral se plantea, como objetivo general, la construcción de una reflexión teórica en torno a los enunciados históricos, sociales, ideológicos y jurídicos que se encuentran en las diferentes perspectivas teórico-discursivas que se han ocupado de estudiar los procesos de incorporación y protagonismo sociopolítico de las mujeres en la política latinoamericana y ecuatoriana particularmente. La pregunta de investigación, implícita en todo el recorrido de la disertación, se refiere a ¿Cómo y desde qué discursos se construye o destruye, según el caso, la incorporación y participación de las mujeres ecuatorianas en la dinámica sociopolítica, con especial atención, en el periodo temporal de la llamada Revolución Ciudadana (RC)?

La investigación estuvo orientada teleológicamente por el paradigma cualitativo, centrando su atención en comprender los significados de los discursos inherentes a cada una de las perspectivas incorporadas en la reflexión. Existe una constante referencia al método de Michel Foucault en cuanto al análisis del discurso, porque se considera un enfoque que permite percibir y comprender las relaciones y estrategias de poder latentes de la sociedad ecuatoriana en cuanto al protagonismo sociopolítico de sus mujeres. Son esas relaciones las que hacen que los procesos sociales se desarrollen de una forma y no de otra, por eso, al interpretarlas se intenta comprender las intersubjetividades que se producen entre actores, discursos y contexto.

Las perspectivas teórico-discursivas que integran esta reflexión están determinadas por el enfoque de géneros, el indigenismo y el discurso de la RC, tomado desde cualquiera de sus referentes, intelectuales, políticos o institucionales. A cada uno de los cuatro primeros capítulos o momentos de la investigación, se dedicó una determinada perspectiva, sus actores o sujetos, mientras que la última sección se utiliza para incorporar parte de la visión crítica del Trabajo Social, como herramienta heurística en el tema de las mujeres y, para construir ciertos instrumentos interpretativos, llamados “epílogos hermenéuticos” que resumen la posición definitiva de la autora, desde su responsabilidad como intelectual, frente a la temática abordada.

Respecto a esa posición de la investigadora, conviene decir que al optar por el enfoque cualitativo nos colocamos en un lugar desde el que involucramos intelectualmente, no solo es una necesidad, sino una exigencia del proceso de producción de conocimiento. Siendo mujer ecuatoriana y habiendo vivido el contexto en el que se tejen el conjunto de relaciones de poder que determinaron la génesis, discurrir y ocaso de la RC, consideramos que sus potencialidades no lograron alcanzar sus promesas discursivas. En el tema de la igualdad de géneros, no llegó a impulsar decisivamente un modelo de feminismo autóctono, de corte nacional o comunitario que podría ser muy útil para concretar una integración política de las mujeres ecuatorianas con

una mayor fuerza. Un feminismo con estas características lograría superar esa concepción europeizante del lugar social de las mujeres y alejarse de un pensamiento feminista que solo ha reforzado el discurso y las lógicas del poder patriarcal.

INTRODUCCIÓN

Desde tiempos antiguos, la segregación social de las mujeres ha sido una constante en casi todas partes del mundo, a pesar de los grandes cambios que generaron las revoluciones económicas (Revolución Industrial) y políticas (Revolución Francesa), la reiterada violación de los derechos humanos contra ese sector poblacional ha mutado en un caso, casi de salud pública. Se han logrado avances, sin duda, gracias al avance de los organismos multinacionales y la gran cantidad de movimientos sociales e institucionales que se han activado para la defensa de las mujeres y sus derechos sociales, económicos y políticos.

Sin embargo, sobre todo, en el caso latinoamericano, el tema de la inclusión sociopolítica de las mujeres sigue siendo de impostergable urgencia, tanto para quienes se dedican académicamente a reflexionar y producir ideas al respecto, como de aquellas personas que tienen la responsabilidad política de actuar para que las mujeres, finalmente, alcancen el reconocimiento que por méritos se han ganado en los espacios de participación y toma de decisiones. Los avances se han ido dando de manera continuada, pero en el campo jurisprudencial, la mayoría de los países han actualizado sus cartas magnas para sintonizar con los cambios promovidos internacionalmente; sin embargo, en el terreno de la praxis social, persisten ideas retrogradadas que obstaculizan la concreción de esos cambios.

Aunado a esa situación social que tiende a ser una constante en América Latina, se presenta la discusión en torno a las iniciativas organizacionales que, más allá de los discursos de inclusión, puedan destrabar los mecanismos para una verdadera y plena incorporación del enfoque de géneros (así en plural), en la conformación de los espacios de poder político. No se trata de luchar por una visibilización del voluntarismo de algunos líderes políticos que “generosamente”, abogan por la aplicación de ese enfoque en el campo de las organizaciones comunitarias y políticas, sino de alcanzar espacios de concreción para una sostenida participación transversalizada del enfoque de géneros, en el terreno de lo organizacional y, desde allí, alcanzar un protagonismo sociopolítico que aún las mujeres no han alcanzado a pesar de los progresos jurídicos.

Parte de esa dinámica de exclusión histórica que han vivido las mujeres latinoamericanas se ha revertido también en el contexto de las organizaciones. Ese confinamiento que las mantuvo limitadas al espacio de los hogares o, cuando mucho, ocupadas en trabajos menores, ha cedido ante la fuerza que algunos movimientos, organizados o no, han imprimido para la exigencia del respeto cultural que le sido negado por tanto tiempo. Casi subrepticamente, el

protagonismo de las mujeres ha ganado espacios, alimentado por la figura de algunas lideresas que, en el fragor de las movilizaciones sociales han alcanzado notoriedad dentro y fuera de sus organizaciones políticas.

En esas “arenas movedizas” es en las que queremos incursionar para reconocer las aristas de la problemática, profundizar en la comprensión de ese viejo debate y delinear, a la luz de la reflexión, las nuevas voces y caminos que emergen en los territorios discursivos de esa dinámica de géneros, en la que las mujeres, latinoamericanas primero, y ecuatorianas después, se debaten. Es preciso conservar una actitud siempre crítica pero cercana, como mujer y como estudiosa del fenómeno, una mirada que, lejos de toda ingenuidad pueda constatar los hilos del poder que se tejen en las relaciones sociales a través de las cuales se ha perpetuado, pero también resquebrajado la dominación patriarcal.

A propósito del método y la construcción de la investigación doctoral

La idea de partida de esta Tesis Doctoral es realizar un ejercicio de reflexión teórica que aborde las principales tendencias, sistemas o perspectivas desde las cuales se ha analizado e interpretado el tema de la participación e integración de las mujeres en el mundo de la política y el ejercicio del poder, con una especial referencia al contexto ecuatoriano y la Revolución Ciudadana planteada en los gobiernos de Rafael Correa. En esta orientación, el trabajo no pretende ser un registro de prácticas o herramientas organizacionales, emprendidas y usadas por las mujeres para incorporarse de manera exitosa y determinante en el espacio político latinoamericano, sino, generar, a partir de la investigación documental y el análisis de discurso, un conjunto enunciados y epílogos como resultado de la hermenéutica aplicada a las diferentes perspectivas que se presentan a lo largo de los cuatro capítulos de esta Tesis.

Se entiende que producir conocimiento desde una postura responsable como la que demanda una Tesis Doctoral, implica un compromiso intelectual de gran envergadura. En tal sentido, desde se parte de una convicción epistemológica y, en tanto metódica, que impulsa esta disertación doctoral desde sus primeras páginas: La realidad social es una construcción colectiva que no está dada. Ella es el resultado de múltiples relaciones de poder que se producen cuando las personas interactúan con otras, influyen y/o son influenciados desde los diferentes discursos que regulan esas interacciones. Así mismo, se considera como presupuesto de primer orden, en esta Tesis, el valor de la interpretación de los discursos, de su hermeneusis y sus contrastes, con las relaciones de poder que desde ellos se fundan.

De la estructura de la Tesis

Respecto al desarrollo de las argumentaciones en que se basa esta reflexión doctoral inicia con un momento que nos permite realizar un acercamiento al área de estudio, su temática central y sus aristas históricas, tomando como referencia el contexto latinoamericano en su generalidad, ubicando los contrastes pero, fundamentalmente, los elementos comunes de lo que ha sido la historia del tema de las mujeres, sus luchas, sus derrotas y sus victorias en el terreno de la igualdad y de la apertura de oportunidades para el protagonismo socio-político. Esa historia que no es lineal sino ondulante, que se ha escrito, la mayoría de las veces desde el discurso de los dominantes, pero que tiene muchas caras. Se trata entonces, de comenzar negando esa historia oficial, esas formaciones discursivas que componen las ciencias políticas, para auscultar detrás de ella o debajo de ella, donde sea que haya que mirar profundamente.

Posteriormente, a partir del capítulo dos, se abre un compás analítico para abordar por separado, las perspectivas o sistemas teóricos considerados por la autora, de mayor relevancia, manteniendo eso sí, la coherencia temática a través del hilo conductor que representan las mujeres como sujetos del discurso, Ecuador como contexto empírico y, la Revolución Ciudadana como fenómeno político concreto. En tanto, se quiere dejar claro que la referencia al contexto ecuatoriano es necesaria, solo como anclaje empírico para algunos pasajes de la reflexión teórica, pero la intención no es interpretar el periodo de algún gobernante en particular, ni un movimiento, ni una ideología específica. En todo caso, la hermenéutica de sus discursos deviene análisis de instituciones y personajes que van apareciendo en el texto, casi sin intención de la autora.

Es así como, cuando, en los capítulos dos, tres y cuatro, nos detenemos en las características discursivas que definen al enfoque de géneros, a la Revolución Ciudadana o la perspectiva Indígena; no se hace referencia a unas determinadas políticas públicas de la Revolución Ciudadana en Ecuador, o del gobierno de Morales en Bolivia, sino de la construcción teórico-discursiva de los sujetos que integran a los géneros, a las “mujeres indígenas”, o a las mujeres ecuatorianas en general, en el ámbito de las Reglas de Existencia (2002), que constituye la Revolución Ciudadana. Cada momento o capítulo no es más que una instancia del proceso para comprender analítica y, discursivamente el terreno avanzado por las mujeres ecuatorianas en la cotidianidad del debate y el ejercicio del poder político en el país.

Del objetivo y la naturaleza de la investigación

Dicho esto, y como se planteó antes, el interés de la autora desde esta investigación, es hacer una reflexión de orden teórico acerca de las mujeres y su protagonismo sociopolítico en el contexto de la Revolución Ciudadana vistos desde diferentes perspectivas, y asumiendo una postura crítica. Como consecuencia de esa intención, el objetivo o propósito central de la investigación es la interpretación, a partir del análisis de discurso y la hermenéutica, de los principios históricos, sociales, ideológicos y jurídicos se encuentran incorporados en las diferentes perspectivas teóricas que se han ocupado de estudiar los procesos de incorporación y protagonismo de las mujeres en la política latinoamericana y ecuatoriana particularmente.

Igualmente, en atención a este propósito de investigación es importante destacar que la concepción epistemológica de la tesis obedecerá a los criterios del paradigma cualitativo, por lo que se mantiene una aproximación contextual al fenómeno en estudio, subrayando esa dimensión cualitativa en donde el foco está colocado en los rasgos ideográficos que adquieren las mujeres como sujetos del discurso teórico en las diferentes perspectivas, en lo que respecta a su posicionamiento político, dejando de lado los aspectos cuantitativos que podrían conducir a detenerse en temas como: el número de legisladoras, gobernadoras o presidencias ejercidas, por ejemplo.

En tal sentido, la naturaleza del conocimiento que se quiere producir está, en parte determinado por este encuadre epistemológico para el que es indispensable mantener una aproximación naturalista y contextual al fenómeno en estudio, subrayando esa dimensión ideográfica que lo hace único e irrepetible. Un conocimiento con esas características se aleja de las certidumbres científicas propias del positivismo para mostrar la importancia que tienen también las dudas. Las faltas de certezas son tan humanas que es imposible construir un conocimiento nuevo sin que ellas merodeen por allí desde el inicio y, aún al final queden latentes.

En otras palabras, el paradigma cualitativo considera que la realidad es una construcción del sujeto investigador, no viene dada y en él se sustituir las nociones científicas de explicación, predicción y control del paradigma positivista por las nociones de comprensión, significado y acción. Busca la objetividad en el ámbito de los significados utilizando como criterio de evidencia el acuerdo intersubjetivo en el contexto que se estudia, lo que implica que no hay objetivación de “resultados”, sino comprensión de los procesos de interacción de los sujetos cuya realidad ha sido enfocada en la indagación.

Desde esta perspectiva se cuestiona que el comportamiento de los sujetos este gobernado por leyes generales y caracterizado por regularidades subyacentes. Lo que pretendo es seguir una orientación interpretativa centrada en la descripción y comprensión de lo que es único y particular del fenómeno más que en lo generalizable. Lo que pretendo es:

- Desarrollar conocimiento ideográfico de los fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales inherentes al proceso que conduce al protagonismo sociopolítico de las mujeres ecuatorianas.
- Aprender esa realidad de las mujeres ecuatorianas y las diferentes perspectivas teórico-discursivas que le interpretan en sus presentaciones dinámicas, múltiples y holísticas
- Cuestionar la existencia de una realidad externa y revalorizar el papel de las subjetividades de los actores-sujetos que se encuentran involucrados en esa realidad.

De los procedimientos metodológicos

Desde el punto de vista metódico, subyace una orientación teórica que tiene implicaciones fenomenológicas en el sentido de asumir un lugar de observación propio, desde el cual nuestra percepción esta mediada por nuestros conocimientos, pero también por lo que representa el ser mujer, profesional y parte de la realidad que está en el foco de la reflexión. Epistemológicamente, la identificación con la orientación cualitativa tiene que ver con esas convicciones, que, por cierto, no se traducen en reglas o normas rígidas de actuación en el campo de lo operacional, cuando de investigar se trata.

Así mismo, dada su naturaleza teórica, el desarrollo de esta investigación requirió una interpretación crítica de la literatura desarrollada en el contexto general y regional (Ecuador) acerca de los temas involucrados. Ese proceder metodológico demanda la revisión exhaustiva de variadas fuentes documentales tales como bibliografía tradicional, libros en línea, trabajos de investigación en universidades, documentales, tesis doctorales, artículos en revistas electrónicas y documentos en sitios web, entre otras. Concretamente el procedimiento metodológico para encontrar, organizar y analizar los documentos e investigaciones producidas en torno a la temática de este estudio se realizó mediante tres momentos a saber:

Momento exploratorio. En marcha desde el surgimiento de la idea de investigación, implicó realizar una primera búsqueda general teniendo como horizonte el tema central de la Tesis. Este primer proceso indagatorio se realiza a través de la recopilación de Bibliografía tradicional, pero, fundamentalmente a través de la Web y, especialmente de buscadores especializados como Google Académico, que tienen como cualidad la posibilidad de acceder

con rapidez a la producción intelectual registrada más importante sobre la temática, además de permitir delimitarla en el tiempo lo que agrega mayor claridad sobre su pertinencia para el trabajo que se está desarrollando.

Momento de organización selección y sistematización. Una vez finalizada esta fase se procede a realizar una selección sistemática de los documentos base para el proceso de investigación propiamente dicho. Este momento es determinante porque en él se deciden las unidades, objetos y sujetos del discurso que son tenidos como parte fundamental para desarrollar la temática. Concretamente, allí se decidieron deben salir los principales autores, instituciones o documentos de referencia por cada perspectiva teórica desarrollada.

Momento Hermenéutico. Esta última fase, se corresponde con el proceso de producción de conocimiento; sin embargo, siendo esta una reflexión teórica, desde la introducción hasta la conclusión, se plasman los resultados de una indagación exhaustiva de la documentación producida, especialmente en la dimensión intelectual de las perspectivas teóricas referenciadas. De esta manera se puede decir, que un último momento del análisis de discurso y la interpretación hermenéutica comprende la superposición de los momentos anteriores. Como síntesis de ese esfuerzo, en el capítulo 5, se presentan una serie de figuras, llamadas por la autora, “epílogos hermenéuticos”, que pretenden responder a esa intencionalidad de transversalización de la reflexión que nos condujo sinuosamente por documentos, autores, actores, actrices y sus discursos.

Capítulo I

MUJERES, GÉNEROS Y POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA

Los “espacios de demarcación” desde donde se comienza a pensar un trabajo doctoral tiene siempre una cercanía con los intereses intelectuales, pero en nuestro caso, representa la oportunidad, no siempre presente, de organizar pensamientos y producir ideas acerca de la realidad que nos preocupa y ocupa. Ser mujer en estos momentos y, más aún, sentirnos en el centro de una gran cantidad de cambios generacionales en los que ya no tienen sentido las etiquetas socioculturales, menos que nada, aquellas que derivan de nuestras determinaciones naturales como las del sexo, es un gran compromiso. Hay un impulso firme tanto en los escenarios intelectuales como en los sociales de producir ideas que colaboren en la consolidación de esos cambios que, para bien, impulsan el proceso de reivindicación e inclusión de las mujeres y el enfoque de géneros.

1. Retrospectiva histórica del protagonismo sociopolítico de las mujeres latinoamericanas

Reflexionar en torno al lugar que ocupa la mujer hoy en día, en el espectro político latinoamericano, pasa, necesariamente, por la auscultación del pasado reciente y no tan reciente, pues, ciertamente, es ya común en el contexto de este subcontinente, encontrarse con una activa participación femenina tanto en el debate como en el ejercicio del poder político. Por supuesto, esa presencia de la mujer, comparado con sus pares masculinos, sigue estando en minusvalía, pero se han dado claros y sólidos avances al respecto.

Entender esté presente, sin embargo, es en principio una tarea retrospectiva, en el sentido de rastrear como se ha dado ese camino, siempre espinoso de la lucha de género en la arena política latinoamericana, y es que la mujer ha alcanzado esa posición luego de muchas refriegas, muchos altibajos y todavía se enfrenta a esa imagen estereotipada de ser débil en el ejercicio del poder o, cuando menos, poco consecuente con la acción gubernamental sostenida. Tanto los medios de comunicación como los escenarios de interacción social, aún se mantienen algo escépticos a brindar los espacios de participación en igualdad de condiciones para mujeres y hombres (Rincón L., 2015).

Hay que recordar que históricamente las mujeres han tenido que luchar para ganarse ciertos espacios en los cuales fuesen escuchadas, lo que ocurría normalmente es que aquellas que se atrevían a ingresar en los terrenos reservados a los hombres, fuesen objetos de severas sanciones morales, religiosas y sociales. No se trata de pensar a la mujer como un ser sumiso,

por el contrario, el hecho de tener siempre al poder patriarcal en su contra ha hecho que las disputas que han involucrado a las mujeres, especialmente a las latinoamericanas hayan sido casi épicas. En contraste con los hombres, no tienen una trayectoria o expediente abundante en cuanto a su presencia en la dinámica política, pero lo han ido edificando de a poco y ya hoy no es de extrañar ver a las mujeres activamente involucradas en los sitios de toma de decisiones políticas.

En este recorrido por lo que ha sido el devenir sociopolítico de las mujeres latinoamericanas, se intentará una aproximación gradual a la realidad que se nos muestra hoy, una realidad que es el resultado de un complejo proceso de posicionamiento que, por supuesto no ha sido, ni lineal ni lento, por el contrario, ha ido configurandose como todos los cambios culturales, de manera acompasada con otros cambios de dimensiones civilizacionales como el tema de la tecnología o el de los medios de comunicación. Es que el mismo fenómeno, el protagonismo sociopolítico de la mujer es, en esencia algo ubicuo y por ende poco aprehensible con los formatos de pensamiento de la historiografía, solamente. En ese proceso que ha involucrado a muchos autores y corrientes de pensamiento, se ha analizado el tema con sumo cuidado, intentando no herir susceptibilidades y, al mismo tiempo, tratando de develar aquello que el mismo poder del patriarcado latinoamericano ha solapado (Morán, 2011).

1.1. Los inicios del siglo XX

No hay una manera adecuada para subsumir la historia de las mujeres latinoamericanas en un haz analítico o histórico, sin ser injustos con algunos contextos y movimientos. Y es que la senda real que han transido las mujeres de este subcontinente no es para nada homogénea. Se trata, por eso, de poder superar esa visión que unifica a la fuerza y que en esa unificación deja de lado las características que podrían ser más significativas en cada territorio, llámese Ecuador, Colombia o Venezuela. Es así, de suma importancia para los intereses de este estudio mantener una mirada al fenómeno global sin perder de vista lo particular, en sintonía con la propuesta de Kirkwood (1986), los inicios del siglo XX para las latinoamericanas estuvo signado por el auge de los movimientos obreros, pero en todos los países no hay mucha presencia femenina porque el mundo del trabajo era un feudo de los hombres.

Ahora bien, aunque la relatoria de este proceso histórico tiene como punto de partida el siglo XX, lo cierto es que la historia de los grandes cambios ocurridos en ese siglo respecto al papel sociopolítico de las mujeres no podría entenderse sin la revisión del siglo XIX, especialmente de aquellos eventos en los que, la participación de las mujeres fue determinante para la

consecución, en casi todos los países latinoamericanos, de la independencia. Las mujeres fueron activas participantes de las rebeliones y conspiraciones que impulsaron la sublevación popular en la región, logrando sembrar la semilla de la necesidad de cambios políticos que le dieran su lugar en la toma de decisiones (Lozano, 2010).

Los albores del protagonismo sociopolítico de las mujeres en Latinoamérica tuvieron sus matices, por ejemplo, de acuerdo con Bonilla (2007), es en Argentina donde se encontrarán las iniciativas de organización feminista más pronunciadas a inicios de ese siglo. Un país en donde la incorporación de la mujer a la industria ya era importante en esa época y aunque eso pudiera no traducirse en su presencia político partidista, lo cierto es que le permitía hacerse notar en la cotidianidad del país que al final es un paso previo. Allí mismo la historia del protagonismo de la mujer paso, en apenas 100 años, desde 1840 hasta 1940, a colonizar parte del empleo comercial y de allí a formar filas en los primeros movimientos de obreras con ese tono socialista propio de aquella época.

La misma autora, considera que el movimiento organizacional de las mujeres en esos inicios del siglo XX, produjeron en Argentina los primeros movimientos político-ideológicos en sintonía con los grupos anarquistas. Ese fenómeno fue motorizado por las características distintivas de la realidad argentina para el momento, comparación con otros países de la región: la economía del país era relativamente sólida y eso, en parte se debía al aporte de las mujeres en la actividad productiva; la llegada de ingentes grupos de europeos que huían de la guerra y encontraban en el país posibilidades de progreso y; el surgimiento de las primeras organizaciones con una orientación esencialmente obrerista.

En ese proceso evolutivo, en el caso mexicano, una de las autoras que se ocupó con mayor ahínco de recuperar la historia de la presencia femenina fue Asunción Lavrin, esta mujer de origen cubano, pero con toda una trayectoria en universidades estadounidenses, considera determinante el papel jugado por la religión en la trayectoria del patriarcado en México. (Escandón, 2011). Es importante destacar que en esos estudios históricos de Lavrin, se fue construyendo la noción de los estudios de género y que, además, se abonó el terreno para construir una reflexión en cuanto al control social ejercido por la iglesia sobre la condición de las mujeres. Aunque se trate de un control que nace en el ámbito religioso, sus consecuencias permean hasta lo social, lo educativo y, por ende, lo político.

La realidad de las mujeres mexicanas a principio del siglo XX es también una mixtura de las características que derivan de la imagen revolucionaria. Siendo la rebeldía una actitud puesta de moda en aquel momento, lo concreto es que las mujeres fueron erigiéndose como

seres con autonomía que eran capaces de pensar y debían ser pensadas para la construcción de una sociedad más equilibrada y justa. Porque hay que entender que la sociedad mexicana está plagada de atavismos culturales que constriñen la posibilidad de reconocimiento de las mujeres, sus ataduras, religiosas, morales, y, como no sexuales. Era una realidad en que la conjunción del papel de la Iglesia con el estatal no dejaba otra salida a las féminas, que someterse al dominio patriarcal.

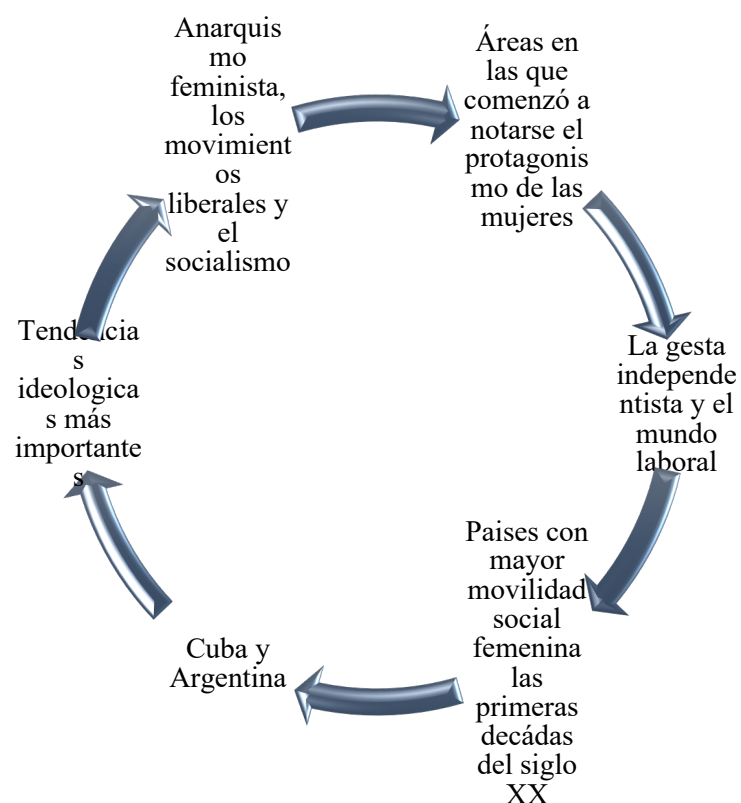
Además de México y Argentina, los movimientos feministas tuvieron presencia durante las tres primeras décadas del siglo XXI en todo el continente, con sus altibajos, pero manteniendo como signo común la necesidad de reafirmar el protagonismo de las mujeres en la lucha por derechos cívicos y culturales. En Cuba, por ejemplo, en los años de 1920 fue fundado el Club Femenino cuyo objetivo era precisamente la conquista de la igualdad de género; para el caso ecuatoriano, se recuerda el surgimiento organizacional del movimiento “Rosa Luxemburgo”, con su evidente tendencia ideológica que se puso de manifiesto cuando la gran mayoría de las mujeres trabajadoras que la integraban participaron en la llamada huelga de Guayaquil, y, en el caso venezolano la agrupación femenina de mayor fuerza pública tuvo como inspiración la lucha contra la tiranía de Juan Vicente Gómez, que lideraron, una vez caída la dictadura, varias iniciativas de modificación del Código Civil, para lograr más igualdad ante la ley (Vitale, 2020).

En el contexto venezolano la lucha por las reivindicaciones de las mujeres resulta todo un icono, como ya se adelantó, en el periodo de la dictadura gomecista, aunque aún no se asoma para Venezuela el halito de las gestas de Géneros, la mayoría de las mujeres que se hicieron sentir a nivel político, lo hicieron inicialmente movidas por su amor de madre. Fueron muchos los estudiantes universitarios de la llamada generación del 28’ que fueron a dar a las mazmorras de la Seguridad Nacional del dictador, un sitio tristemente célebre por ser el cementerio de quienes osaban participar en la resistencia (Dagnino, 2019). Es a partir de esa lucha antidictatorial que las mujeres venezolanas abren una brecha importante para que posteriormente se cuelen por allí las sufragistas, pues ya caído Gómez, y su sucesor Isaías Medina, lograron con la Constitución de 1947 el derecho a ser reconocida en su civilidad, tanto como lo eran los hombres.

Por otra parte, el contexto latinoamericano de principios del siglo XX estaba pleno de nuevas categorías sociopolíticas propias de un discurso que reivindica, desde el socialismo, la visión feminista de la sociedad. Se habla de ciudadanía y libertad para alumbrar los procesos de exclusión de las mujeres que son discriminadas en la mayoría de sus derechos políticos. (Luna,

2005). Siendo así, para este movimiento, la modernidad encubre desde la concepción de procesos falsos de inclusión, como sería la tendencia sufragista la ausencia de una verdadera inclusión que derivaría, por ejemplo, en el derecho de las mujeres a ejercer cargos de elección popular. No obstante, el mismo autor advierte que la trampa del patriarcado permea tanto a los socialistas como a los liberales. Por un lado, se exhiben las luchas por la igualdad de derechos políticos y económicos y, por el otro se alerta sobre la necesidad de eliminar las prácticas del patriarcado, del androcentrismo entre otros.

En síntesis, cuando se trata de rastrear los avatares de los escenarios sociopolíticos que le ha tocado trascender a las mujeres latinoamericanas para llegar a ocupar el lugar que hoy les corresponde, hay que profundizar en el origen de las luchas independentistas, las gestas de las madres que defienden a sus hijos sin importar la dimensión de sus enemigos y la entereza de las campesinas que han labrado las tierras para producir el pan que se consume en la mesa de muchos hogares latinoamericanos y el fragor de las mujeres obreras que desde las primigenias organizaciones de ese tipo, confrontaron de frente el poder omnímodo de los hombres en un mundo social creado por ellos, para ellos. La imagen 1, ilustra en buena medida el desarrollo de ese protagonismo femenino en las primeras décadas del siglo XX en el territorio latinoamericano.



*Figura 1 Protagonismo sociopolítico de las mujeres latinoamericanas. Inicios del siglo XX.
Fuente: elaboración propia*

1.2.El desarrollo del siglo XX

Los inicios inciertos de este siglo no dejaban ver las grandes transformaciones que se producirían en el campo de la lucha de las mujeres por la igualdad, social, económica y política en Latinoamérica. Luego de las primeras décadas, a mediados del siglo se fue acrecentando la intensidad y la frecuencia de la presencia femenina en los movimientos sociales y políticos del continente, (Lozano, 2010). Fueron apareciendo o formándose grupos de presión social en áreas tan disímiles como la del control de precios de los productos hasta la resistencia armada. Un exagerado cuestionamiento social vivió la mujer latinoamericana en este periodo, la cultura patriarcal reclamaba la culpabilidad de las madres en la falta de fortaleza para criar a sus hijos, incumpliendo su papel natural, según la tradición, las costumbres y la religión.

Algunos hitos históricos que impactan las luchas de las mujeres en este período

Son varios los eventos, organizaciones y protagonistas que apuntalaron el rol que van a desempeñar las mujeres en el desarrollo del siglo XX. Argentina, Cuba, Colombia, Venezuela, entre otros, son escenarios de un fuerte movimiento social que conducirá de a poco a las mujeres a posicionarse en el mundo que le había sido esquivo, al menos formalmente, hasta la llegada de las dictaduras en Latinoamérica.

La segunda Guerra Mundial. Aunque haya sido un evento que en la práctica se escenificó en Europa, lo verdaderamente cierto es que sus efectos culturales se sintieron en el mundo entero. En principio la ausencia de los hombres en el campo laboral producto de su demanda para la guerra, originó un fuerte incremento de la mano de obra femenina. En esas circunstancias comienza a generarse una situación novedosa para ese momento y tiene que ver con el desplazamiento de la mujer, desde su clásico lugar que era la vida privada y la atención del hogar, hasta la vida pública, bien sea en un trabajo tradicionalmente hecho para mujeres u ocupando algún puesto de trabajo dejado vacío por la partida de los hombres a la guerra (Ramírez, 2002).

Esta guerra marca un antes y un después en el mercado laboral femenino, las mujeres que ocupan puestos de trabajo, una vez que los hombres regresan de la guerra, ya han adquirido un cúmulo de experiencias que les hará incomoda la existencia bajo los criterios culturales prebélicos. De hecho, en América Latina, aunque no se produce la devastación de las ciudades y los centros industriales, se da el fenómeno inverso, hay una masiva llegada de inmigrantes, entre ellos muchas mujeres, que modifican en buena medida las características de las relaciones

entre hombres y mujeres, se va acrecentando el sincretismo cultural y las mujeres latinoamericanas que ya han formado organizaciones de rechazo a la guerra y sus efectos negativos, ven reforzados sus argumentos por aquellas que vivieron el evento bélico de primera mano.

La consolidación del movimiento sufragista. Es un movimiento de origen europeo, específicamente inglés, que data de antes de la primera Guerra Mundial, aunque de acuerdo con Camino (2017), ya en Oceanía, en Nueva Zelanda, específicamente, se había aprobado el sufragio para las mujeres, quienes en 1893 ya pudieron elegir a sus representantes en los poderes públicos, hecho que se muestra como otro acontecimiento de talla civilizacional que hizo fuerzas por una mayor presencia de la mujeres en el concierto del poder político. Hay que tener en cuenta que este esfuerzo por la emancipación política ocurre en un contexto que tiene como antecedente el siglo XIX, uno de esos periodos en los que la mujer había sido objeto de una fuerte codificación social, es imagen cándida que, con sus excepciones, se promovía en la mayor parte de la civilización occidental. Las mujeres son buenas para el hogar, para el amor, para la construcción de los lazos afectivos y para acompañar a los hombres solo como eso, una compañera sumisa.

Superar esa imagen y empoderarse en espacios en los que se le vio muy poco en el siglo anterior, es parte de la tarea de este movimiento, porque a pesar de ese ropaje social candoroso con el que se le vistió en la cultura decimonónica, fue este también un espacio en el que se impulsaron de manera expansiva las ideas del feminismo militante y contestatario. Y es que, durante todas las luchas de ese siglo, las mujeres acompañaron activamente a los hombres, sin que concretamente resultaran favorecidas por las conquistas de los derechos que se les endilgo a sus pares masculinos. Racionalmente a la mujer se le otorgó la igualdad durante el siglo XIX, desde la razón filosófica se le erige como un sujeto histórico de dimensiones abstractas porque en la praxis ciudadana, se le siguió considerando menor de edad, y es solo en el siglo XX en el que logra rebatir esa concepción patriarcal y apropiarse de un lugar en el discurso y en la dinámica política de las diferentes ideologías políticas (Castaño, 2016).

Es en el siglo XX, entonces, en el que la lucha por la igualdad política encuentra un estandarte en el derecho al sufragio de las mujeres, considerado uno de los elementos más indicativos de los cambios por venir en las formas de organización política de los países con etiqueta de “independientes”. Lo que fue evidente en la última etapa del siglo XIX, y que se puede rastrear en los avances en el mundo del trabajo, los sistemas educativos, la conquista de derechos civiles, entre otros, se convierte en una misión social para las mujeres en el terreno dl

sufragio. En EEUU, por ejemplo, se dan los mayores esfuerzos formales al respecto cuando, alrededor de 1890, se fusionan dos de los movimientos sufragistas más importantes de la época, formando la llamada “National American Woman Suffrage Association” (NAWSA, Asociación Nacional Americana de Mujeres Sufragistas).

A partir de ese momento, las mujeres (en Francia, Gran Bretaña, Uruguay, entre otros), comprenden que, de forma discreta o estruendosa, lo importante es mantener la presión, y a través de diversos métodos empujan las reformas políticas necesarias que les llevarán a crear en los inicios del siglo XX una red comunicacional y de acciones políticas que actuando bajo la dirección de la alemana Clara Zetkin, logró concretar la I Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Stuttgart (Alemania), en la que participaron mujeres provenientes de Japón, India y el resto de Europa. Fue desde esta organización donde más tarde se promovería la instauración del Día Internacional de la Mujer, utilizándolo como una punta de lanza para insistir en la necesidad del sufragio femenino como el único indicador válido de emancipación política de las mujeres (Castaño, 2016).

En el contexto latinoamericano es Uruguay el país que en primer lugar incluye el voto de las mujeres, lo hace en la constitución de 1917, y se aplicó en las votaciones para decidir, mediante un plebiscito, la jurisdicción de un pueblo llamado Cerro Chato en 1927, y luego en las elecciones generales de 1938. En el año 1935 se reconoció el sufragio universal para las mujeres puertorriqueñas, mientras que las brasileñas y las cubanas disfrutaron de este derecho en 1934 y 1936, respectivamente (Noragueda, 2015). En el caso argentino, la ley que aprobó el voto femenino por primera vez tiene el 23 de septiembre de 1947 como fecha de promulgación y fue el resultado de arduas luchas feministas que culminaron con Perón proponiendo e impulsando su aprobación.

Otros países en los que se impulsó y se aprobó el sufragio para las mujeres en estos años, fue en Perú en 1956, resultado puntual de una gesta de movimientos femeninos universitarios; en México en 1953, impulsado por el constitucionalismo feminista y la Alianza de Mujeres de México; en Panamá, la creación de la Sociedad Nacional para el Progreso de la Mujer y Partido Nacional Feminista, encabezaron luchas que lograron la aprobación del sufragio para las mujeres en 1946 (Bonilla, 2007).

En definitiva, la consagración del sufragio femenino en la mayoría de los países latinoamericanos representa uno de los hitos históricos más importantes del recorrido histórico del protagonismo sociopolítico de las mujeres. Ese movimiento, el sufragista, echa por tierra el estereotipo de la debilidad y subordinación de las mujeres y aviva la imagen de

independencia política del sujeto histórica que representan las mujeres, promoviendo un nuevo hecho cultural: las mujeres no solo son capaces de formar a las nuevas generaciones, sino también que están habilitadas para dirigir esas generaciones y tomar decisiones por ellas.

La sacudida de los ochenta. La década de 1980 quedará marcada en la historia como una de las que mayor número de transformaciones sociales albergó en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica. Se inicia en varios países un movimiento feminista que tiene como consigna la emergencia de las mujeres como nuevo sujeto político, afirmando la perentoriedad de hacer una praxis de lo público distinta, con una nueva nomenclatura para pensar, llegar y ostentar el poder, superando los esquemas democráticos tradicionales surgidos luego de la caída de las dictaduras. La particularidad de este movimiento de mujeres en los 80', estriba en el énfasis que coloca por colonizar los pequeños espacios. Logrado el reconocimiento macro a través del sufragismo, las mujeres enfilan sus fuerzas hacia el reconocimiento de su individualidad, de sus capacidades para dirigir tanto en lo público como en lo privado, logrando imponer la consigna "lo personal es político" (De Giorgi, 2016).

Esta misma autora recuerda que el proceso de posicionamiento de las mujeres en este periodo fue particularmente importante para la construcción de espacios democráticos desde donde se colocaran sobre el tapete, el tema de los derechos. La agenda de discusión de la transición política atravesada por la resignificación de la democracia, la revalorización de la política como espacio de encuentro y el discurso de los derechos en toda su amplitud, desde la política hasta la sexualidad, logrando conjugar un solo frente de lucha aunque los derechos fuesen diversos. La idea que subyace en esta intención es que el feminismo, más que un movimiento por la reivindicación de las mujeres se convirtiera, en una agenda humanística que trasciende la lucha por el poder político y coloca a las mujeres en una dimensión ontológicamente nueva.

Visto de esa manera, en los ochenta, en una tendencia que se forja en la década anterior, las mujeres enfilan sus luchas, no contra un sistema político que por siglos las invisibilizó en el escenario de lo público, sino contra todo un sistema de hegemonía patriarcal que tiene en lo simbólico-cultural su mayor activo y cuya solidez se sustenta de las escisiones clásicas entre lo público y lo privado, asociados, respectivamente a lo político y lo no político. Es la subversión contra estas dicotomías que proveen a las mujeres de un nuevo equipaje discursivo, que como mínimo le lleva a trascender esa visión reducida que la estigmatizó como buena ama de casa, buena madre, buena esposa, casi insensible a cualquier otra emoción que aquellas que se derivan de esas funciones sociales. Es particularmente interesante de este periodo, el

esfuerzo que, desde los mismos movimientos de mujeres, se hace para superar las etiquetas, incluso las de feministas, entendiendo que el uso de esas etiquetas, generalmente invalida los argumentos de las luchas y tiende a arrumarlas como meras cuestiones ideológico-temporales.

En esta perspectiva, la década de los ochenta termina por ser para las mujeres en Latinoamérica, una rebelión cultural sin precedentes, la neoidentidad femenina procura la superación de los signos modernos que elevaron al sujeto “hombre” como centralidad civilizacional. Se trata entonces de lograr el reconocimiento y la legitimidad social por encima del viejo sistema de creencias modernas, afincado en el esquema de pensamiento patriarcal. De allí puede haber llegado esa complicidad teórico-práctica entre los movimientos de mujeres y la izquierda latinoamericana de la época, en una suerte de socialismo emancipador que sin embargo no niega la existencia también contestataria del movimiento liberal y hasta de los conservadores.

En Uruguay, por ejemplo, los movimientos de mujeres se desplazaron en sus luchas organizadas hacia las barriadas, apoyando las iniciativas de solidaridad alimentaria frente a la crisis y promoviendo espacio para el debate en contra del régimen dictatorial. Sin embargo, casi enseguida trascendió esa puntualidad temática y se extendieron hacia la defensa o conquista de los derechos a la salud, el empleo igualitario, la educación y por supuesto, la participación política. El tamiz del patriarcado es puesto en evidencia como responsable de la fuerte resistencia al protagonismo sociopolítico de las mujeres, en tanto, el cuestionamiento en este país también se ocupa del sistema de dominación sexual y productivo, encarnado en el matrimonio y las relaciones conyugales. Aquí, además, se produjo la cercanía entre el feminismo y la izquierda, especialmente en la figura denominada “doble militancia”, defendida por algunos movimientos de mujeres que consideraban pertinente el paralelismo entre lo social y lo político, pero sin desnaturalizar ninguno de esos dos espacios (De Giorgi, 2016).

En síntesis, de acuerdo con Valente (2005), lo que hace distintivo los movimientos de mujeres de esta época es su heterogeneidad, que se muestra en la variedad de iniciativas lideradas por las mujeres, destacando:

- La vertiente feminista, que busca reivindicar el valor del juicio de las mujeres en los terrenos sexuales y sociales, con sus ramificaciones hacia el combate de la exclusión en lo público
- La vertiente de mujeres urbano-populares, que teniendo como punto de partida el terreno de lo público, permean hacia lo íntimo y lo privado.

- La vertiente de los movimientos formales, que prefieren incursionar en los espacios de las luchas tradicionales como los gremios o las organizaciones partidistas.

La caracterización de las mujeres de este siglo frente al Estado y la Democracia

Otro de los aspectos teóricos importantes de dilucidar cuando se trata de seguirle el rastro al protagonismo sociopolítico de las mujeres latinoamericanas durante el siglo XX tiene que ver con su forma de hacerse sentir frente al estado, especialmente, el estado democrático ya luego de la década de los setenta. Lo primero a tener presente en esa caracterización es que los movimientos de mujeres fueron diversos y con ciertas determinaciones contextuales, es decir, no en todos los países tuvieron la misma significación ni se plantearon las mismas luchas, ni utilizaron los mismos métodos.

Frente al Estado. La denominada “segunda ola feminista” adquiere en Latinoamérica una especial significación en lo referido a su particular lucha frente al estado, una diatriba que busca resignificación como sujeto político, ya no como simple sufragista, sino como actor principal o, cuando menos coprotagonista de las políticas públicas. Entre los setenta y los ochenta, las mujeres se erigen como un frente antiestatal, que es en realidad antidictatorial y antisistémico, si se toma en cuenta que la mayor fuerza les viene de organizaciones de izquierda que se plantan una confrontación al capitalismo y la búsqueda de espacios democráticos, cuestionando el androcentrismo y la invisibilización de la exclusión propia de dos modelos, según ellas, injustos el modelo político-militar y el modo de producción capitalista (Matos & Paradis, 2013).

El estado se convirtió en esa nueva necesidad de conquista para los movimientos de mujeres, al estar encarnadas en él, las prácticas más injustas de autoritarismo y opresión. Pero no se trata de alcanzar posiciones de poder a lo interno de esa jaula de hierro, sino de combatir sus prácticas desde los movimientos sociales, formando organizaciones de autodeterminación y creación de nuevas prácticas discursivas, donde el sujeto histórico “mujer” alcanzase la resignificación necesaria para la época. Al poner el foco en esta forma de luchar de los movimientos feministas de finales del siglo XX, puede observarse que en su óptica se revela la imagen del Estado como un ente legitimador de ciertas prácticas que, en el caso del periodo dictatorial, fueron hechos de desaparición forzada, torturas y asesinatos de líderes políticos, muchos de ellos mujeres.

Superada la década de los ochenta y avanzados los noventa, el estado en Latinoamérica se fue democratizando y adquiriendo, en esa perspectiva, una nueva postura frente a los movimientos de mujeres, y estas nuevas fórmulas de lucha frente a aquel. Devino este periodo

en una pluralización de los movimientos pro-mujeres, diversificándose, como ya se explicó en un apartado anterior, hacia los temas de la sexualidad, el trabajo, lo étnico, entre otros. Esa diversidad de movimientos es al mismo tiempo una unificación del método de lucha, la refriega da paso a la negociación con el Estado, encontrando cierta reciprocidad pues de alguna manera las mujeres lograron que el Estado dejara de desentenderse de los problemas de géneros como si fueran de la esfera privada.

Una de las “transacciones” que logran las mujeres frente al Estado en este ínterin, es precisamente la disposición de los entes públicos de asumir sus responsabilidades frente a la violencia de géneros y los derechos sexuales de las mujeres, algo considerado privado desde tiempos inmemoriales. Garantizar el derecho a la autonomía sexual y a una vida libre de violencia es algo que solo el ente estatal en ejercicio de sus funciones podía dar. No obstante, en palabras de López (2016), en el caso de Latinoamérica este proceso se vio entorpecido por las características socioeconómicas de las mujeres, la vulnerabilidad de las mismas ante una maternidad indiscriminada que la coloca en situaciones de riesgo y minusvalía constante frente al chantaje del hombre “proveedor”. El diseño de las políticas públicas orientadas a la atención de las mujeres queda reducido, con frecuencia a la necesidad de cubrir los problemas que les genera esa pobreza y esa maternidad recurrente.

Siguiendo en la línea de reflexión propuesta por López (ob.cit.), la vinculación entre las mujeres y el Estado en Latinoamérica presenta varias corrientes de análisis, cada una representada por una intelectual comprometida con la praxis de los movimientos que, no por distintas son excluyentes:

- La tendencia representada por Julieta Kirkwood, para quien la relación entre las mujeres y la política debían su tirantez a la forma en que cada uno entiende lo público y lo privado. Lo que es privado para las instituciones del Estado puede ser considerado de responsabilidad pública por las mujeres y allí radica la tensión.
- Para la socióloga peruana Virginia Vargas, el problema es más complejo aún, pero en la práctica consiste en la construcción una autonomía funcional de los movimientos frente al Estado, autonomía que no es lineal sino diversa y pasa por lo organizacional, lo ideológico y la autonomía para la negociación de las políticas públicas.
- Por su parte, Claudia Anzorena, considera que la clave para la comprensión de esta relación se encuentra en la realización de un análisis feminista de las políticas públicas orientadas al fortalecimiento o preservación de las mujeres. La idea es precisar en qué medida la

intervención del Estado, a favor de las mujeres, está articulada con una visión que nazca de estas últimas y no de quien dirige al Estado, generalmente con una óptica patriarcal.

- Nancy Fraser, propone por su parte, una discusión que gire en torno a la idea de justicia implicada en las formas de concebir las públicas y los procedimientos para concretarlas. La intención de Fraser es que hay una perspectiva más integral pues hasta finales del siglo pasado, el Estado mantuvo su visión asistencialista que mantiene a la mujer en una posición de beneficiaria pasiva de lo que se le quiera asignar, más como dadiva estatal que como parte de lo que, en justicia le corresponde.

Frente a la Democracia. Estado y democracia en América Latina son un binomio difícil de separar, por lo que mucho de lo que se comentó en aparte anterior a este es válido para esa relación entre el sistema democrático y la lucha de las mujeres por alcanzar protagonismo sociopolítico. En todo caso, la intencionalidad de las luchas feministas o de mujeres desembocan en un deseo por lograr un contexto de más amplitud para el ejercicio del poder político, algo que solo puede ser alcanzado en el sistema democrático. En democracia, el ambiente se vuelve proclive a la defensa y garantías de todos los derechos por los que los movimientos de las mujeres lucharon durante las dictaduras.

La democracia les planteó a las mujeres una situación maniquea en la que, sus triunfos frente al sistema resultaron en nuevas formas de subordinación frente a los hombres pues, alcanzaron derechos declarativos y burocráticos que prácticos. En la ebullición del activismo político, muchas mujeres vieron diluidos sus liderazgos sociales al insertarse en las estructuras de los partidos políticos, siendo relegadas a actividades de tipo comunitario, en sectores populares de alta densidad poblacional y elevada pobreza, diluyéndose sus luchas por una justicia social verdaderamente sustantiva (Vos Obeso, 2004).

Grosso modo la democratización del subcontinente terminó por dar a las mujeres el triunfo en muchos de sus motivos de lucha (sexualidad, participación política, igualdad laboral), pero le colocó en una posición ambivalente frente a la defensa de los derechos adquiridos sin menoscabar su femineidad. No se trataba de haberse “hombreado” para lograr sus metas, al contrario, se trataba de mantener su integridad naturalmente femenina y demostrar que, desde esa condición podía realizar las mismas tareas y asumir los mismos retos que sus pares masculinos. La lucha que originalmente significó democratizar el acceso a los centros del poder político confluyó en la necesidad de democratizar los espacios mismos de la cotidianidad, revalorizar, nuevamente, el papel de la familia como el espacio más conveniente para la

reproducción de una sociedad igualitaria, libre de violencia y paritaria, en sentido de repartir las responsabilidades que la democracia demanda de sus ciudadanos, sean hombres o mujeres.

1.3. Las primeras décadas del siglo XXI

Si las últimas dos décadas del siglo XX fueron determinantes en la historia sociopolítica de las mujeres latinoamericanas, las dos primeras del presente siglo solo han reafirmado la presencia protagónica de las mujeres y avizorado una perspectiva de avance amplio y decisivo en todas las esferas de la vida colectiva en estos países. Para constatar esta apreciación, se delinearán, los rasgos más marcados de este proceso de empoderamiento femenino, que -según algunos autores latinoamericanos- es irreversible.

Los Movimientos dentro del movimiento: feminismo y feminismos

Se ha dicho ya que la segunda y la tercera ola de feminismos latinoamericanos no son para nada homogéneos, su diversidad es elocuente y se intensifica en la medida en que las mujeres van encontrando respuestas a lo que ellas han considerado siglos de exclusión androcéntrica. Así, es posible hablar de la consolidación de la emergencia de nuevos enfoques y prácticas en la evolución de las luchas de las mujeres que persigue, ya no tanto la igualdad frente a los hombres, sino el reconocimiento de sus propias diferencias como género, y también la afirmación de la diversidad como única similitud en la búsqueda de los espacios de desarrollo humano que implican sus luchas, entendiendo que la alusión a la diferencia invoca los rasgos singulares que distinguen a las personas, ya sean hombres, mujeres o transgéneros o cualquier otra denominación socio-intelectual que se le quiera dar dentro de cada movimiento (Alcañiz, 2007).

Tomando en consideración los argumentos de Gutiérrez y Luengo (2011), la clasificación de los movimientos de orientación feminista en el siglo XXI solo obedece a una idea: la diferenciación. En ese sentido, las autoras se decantan por la siguiente clasificación:

Ciber o Tecnofeminismo. Se refiere al uso de la red como el nuevo campo para las luchas, lo que significa el uso de la web para plantear las reivindicaciones o simplemente la vía para el intercambio de ideas y posturas de las mujeres frente al poder patriarcal. Se postula como una corriente antidogmática que tiene como objetivo principal la diversificación y actualización constante de los métodos contra la exclusión femenina en el mundo postmoderno.

El feminismo migratorio. Ser inmigrante es por lo general un hándicap significativo cuando se trata de luchar por la igualdad de derechos, ya sean sociales, políticos o económicos. Gutiérrez y Luengo sugieren que, en el siglo XXI, más aún en la actual realidad latinoamericana (aunque ella trabaja especialmente la migración desde Suramérica a Europa), la migración se ha convertido en un fenómeno recurrente y las mujeres que llegan a nuevos territorios enfrentan la doble tarea de hacerse un espacio en el terreno del género y la nacionalidad. Las mujeres migrantes deben construir redes de apoyo que les permitan superar esas dos barreras, en esta modalidad, por cierto, pueden ser importante la combinación con la corriente ciberfeminista

El feminismo Transexual. Este movimiento enfrenta una realidad compleja que tiene que ver, inicialmente, con la construcción de su identidad. En tal sentido existen dos perspectivas, la biológica que asocia el género al desarrollo embrionario de machos y hembras y la del constructivismo que apunta a la personalidad como una construcción social. La lucha desde este nicho implica la superación de las dicotomías establecidas según la cual la identidad legítima aplica para los machos-masculino y las hembras-femenino, de hecho, se cuestiona igualmente esa dicotomía, masculino-femenino. El tema se complejiza aún más cuando, en su justo derecho a la diferencia, muchos transexuales se niegan a operarse para convertirse sexualmente en mujeres, prefieren mantenerse como un género distinto que, precisamente se erige de la diferencia.

La corriente ecofeminista. Aunque no es mencionada en el planteamiento de estas autoras, ha sido uno de los movimientos más pujantes de este siglo, con tema del calentamiento global ocupando el centro del debate mundial, la aparición de activistas muy jóvenes como la sueca Greta Thunberg han incentivado esta corriente que finalmente hace fuerza por una lucha global de las mujeres para conservar la vida, ya no se trata de igualdad ante la ley sino de ser iguales ante la naturaleza, que se ocupa de temas como el desarrollo, la pobreza, las identidades culturales y sus relaciones con el planeta en la perspectiva de la no-violencia (Alcañiz, 2007).

Mujeres, economía y empresas

Otro elemento determinante en ese largo proceso evolutivo de las mujeres en América Latina tiene que ver con el mundo empresarial, y es que en las dos primeras décadas del siglo XXI, las mujeres se han posicionado muy bien en el mercado laboral mejor remunerado, ya no se trata de ocupaciones menores en restaurantes o lavanderías, las mujeres han logrado escalar en las calificaciones laborales, han sido estudiantes exitosas y profesionales de primer nivel cuyo número se ha incrementado notoriamente. Es cierto que, en este campo les ha sido

particularmente duro competir con los estereotipos y los modelos socialmente arraigados del “jefe”, siendo un reto para las grandes empresas, apostar al liderazgo gerencial de las mujeres.

De acuerdo con los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en las primeras décadas del siglo XXI el crecimiento de la cifra de mujeres dedicadas al mundo empresarial demuestra que el pulso en este terreno, contra la mano de obra tradicionalmente masculina está equilibrado. Aunque siguen siendo muy pocas las mujeres que en proporción ocupan los cargos directivos de las grandes empresas, en los países del primer mundo, eso se puede constatar cuando se ubican las estadísticas que indican que apenas el 1% de las grandes empresas del mundo son presididas por mujeres y lo mismo ocurre en el tema salarial en donde las mujeres, aunque desempeñen los mismos cargos, siguen siendo peor pagadas que el personal masculino.

Esa reflexión es válida también para la mayor parte de América Latina, aunque no presentan situaciones similares, por ejemplo, en Venezuela y México la cifra de mujeres que ejercen funciones de liderazgo empresarial apenas alcanza la mitad de las que lo hacen en Colombia. También hay que tener en cuenta que la variación entre los países varía de acuerdo a varios factores, como el nivel de desarrollo industrial, el acceso a la educación y los avances en materia de legislación laboral (Contreras, Pedraza , & Mejía , 2012).

El panorama mejora, sin duda, cuando la atención se coloca en el emprendimiento empresarial de las mujeres latinoamericanas. Las mujeres han sabido mutar muy bien del hogar a las microempresas logrando dinamizar de manera importante las áreas en las que el emprendimiento ha dado mayores frutos, las evidencias estadísticas de esta realidad; sin embargo, siguen mostrando una realidad desigual y quizá atendiendo a ese fenómeno, las mujeres han generado organizaciones que se ocupan del debate y las prácticas para una economía más igualitaria respecto al tratamiento de mujeres y hombres.

La red latinoamericana de mujeres transformando la economía (REMTE). En su creciente proceso organizativo que va más allá de lo social y lo político, las mujeres latinoamericanas han emprendido iniciativas en el campo de la economía, pero con una perspectiva amplia, que no pierde de vista las luchas por la igualdad de género. Aquí se inscribe la REMTE, una estructura organizativa formada por diversas organizaciones de mujeres que están asentadas en todo el subcontinente y que procuran permear los acuerdos de libre comercio con la visión de géneros. Esta organización recibe un gran impulso de los grupos feministas que apuestan por la construcción de una economía solidaria (Díaz, 2007), basados en la crítica de las políticas de un libre comercio sin cortapisas.

Analizando su origen, evolución y actualidad, la REMTE, surge como una respuesta de solidaridad femenina a nivel transnacional para enfrentar las políticas de ajuste estructural neoliberales de los años ochenta en América Latina. No obstante, su consolidación se produce en el contexto de los gobiernos progresistas de la región que constituyen en los primeros años del siglo XXI un telón de fondo muy pertinente para que esta iniciativa encuentre el piso necesario para apoyar al crecimiento económico de las mujeres emprendedoras. De hecho, en su misma génesis, los impulsores de esta red, se autodefinen como un espacio de análisis para la promoción ya la construcción de alternativas económicas que permitan a las mujeres, apropiarse críticamente de las iniciativas y símbolos de una nueva economía con rostro femenino.

En suma, la retrospectiva histórica de lo que ha sido el protagonismo sociopolítico de las mujeres latinoamericanas, está impregnada de múltiples elementos sin los cuales será imposible entender el presente del sujeto histórico “mujer”. Es un ejercicio de evocación que no es puramente político pero no se entiende sin que se analice el pasado político de ese sujeto, no es meramente sexista, pero no se entiende sino se toma en cuenta esa variable, no es economicista, pero para entender a ese sujeto (mujer) hay que atender las nuevas formas de la economía donde la mujer es protagonista, en fin, esa retrospectiva histórica seguirá construyéndose durante y después de esta Tesis, porque la dinámica sociopolítica de las mujeres en Latinoamérica no camina en una sola línea, se asemeja más a un curso en espiral que sorprende por su elasticidad temática.

2. Presencia y acción política de las mujeres latinoamericanas: liderazgo y militancia

La comprensión integral de la relación entre mujeres, géneros y política es compleja pero posible en la medida en que se agreguen los elementos que, conjugadas pueden acrisolar la mirada sobre los acontecimientos, eventos, corrientes, y hasta personalidades que han contribuido a enriquecer esa historia del devenir de las luchas de las mujeres en la región por hacer sentir y hacerse incluir. De esta manera, en este segmento, se propone un acercamiento a algunos de esos elementos o procesos que amplían la perspectiva para el análisis.

2.1. Liderazgo y militancia en Organizaciones sociales

Uno de los espacios conquistados inicialmente por los movimientos de mujeres/feministas en América Latina se ubica en el terreno de los movimientos con orientación social, cabe decir que este proceso es quizá inducido desde las esferas del discurso dominante, patriarcal, para más señas, que busca en este repliegue de las mujeres hacia agendas más específicas y alejadas

de las esferas donde se decide el poder político, mantenerlas lo suficientemente ocupadas en ese trabajo, no menor, que es la lucha por adquirir su dimensión como sujeto social. En ese construirse y mostrarse como un nuevo sujeto, algunos estudiosos como Bartra (1992), sugieren el estudio de una serie de indicadores que arrojan claridad al proceso que implica el nuevo rol de las mujeres en el marco de las organizaciones sociales, entre esos indicadores menciona:

- En sus iniciativas de organización social, las mujeres de finales del siglo pasado se encuentra frente a la necesidad de vincularse a dos niveles organizativos y de lucha; por un lado debe involucrarse en la consecución de los recursos que le permitan la subsistencia de ella y de sus familias, de allí su creciente dinámica económica en las áreas de la economía, formal o informal y, por otro lado, las mujeres se encuentran encabezando las organizaciones barriales que se proponen el rescate de los servicios públicos y la armonización de la convivencia comunitaria.
- Se produce una fuerte concienciación de parte de las mujeres, de su importancia como gestor de cambios sociales, se consolida como un actor sociopolítico porque buena parte de las soluciones que les toca gestionar desde sus organizaciones de base, tiene que hacerse frente a las instituciones y autoridades formales.
- Las etiquetas tradicionales que relegaron por años a la mujer a posiciones secundarias en las comunidades empalidecen y se produce una revalorización del rol de las mujeres como líderes comunitarias, que les ubica más allá de lo micro, es decir, su acción social, aunque sectorizada, debe ser atendida en los espacios de decisión política que formulan las políticas públicas.
- La creciente importancia que fue adquiriendo la mujer como sujeto social se constituye en un avance continuo y sostenido que apuntala los demás cambios en el campo de los géneros, la sexualidad e incluso la construcción de su identidad como persona.

Estos indicadores, encontrados en la génesis del sujeto histórico-social, “mujer”, legan una fuerza inédita para la participación activa y protagónica de las mujeres en las organizaciones sociales de diferentes tipos y con motivos diversos, algo que echa por tierra la opinión general según la cual, las mujeres latinoamericanas han vivido largos periodos de tiempo en una especie de autoretramiento, y que se puede constatar tras una rápida mirada al liderazgo y la militancia de las mujeres latinoamericanas en las iniciativas organizacionales que han impactado los procesos de transformación del continente, se trata de seguir el trazo, seguramente sinuoso de lo que ha sido la presencia, la militancia y el liderazgo femenino en el contexto de los

movimientos sociales como el sindicalismo, las luchas de géneros, los movimientos en defensa de los derechos sexuales, entre otros.

Las mujeres y el sindicalismo

En este espacio, las mujeres latinoamericanas han encontrado un clima bastante favorable a pesar de la resistencia clásica del discurso patriarcal que suele imperar en él. En la actualidad la acción y la praxis femenina se considera sustancial para las luchas que a diario plantean los retos frente a los patronos, ya sean públicos o privados, las mujeres lucen integradas e integradoras, pues su accionar se orienta a la captación cada vez mayor de militancia sindical que al final es lo que hará fuerza del lado de la justicia laboral. Para este análisis, se seguirá la línea de reflexión de un estudio sobre sindicalismo, promovido por la fundación alemana Friedrich-Ebert-Stiftung, específicamente de su sede uruguaya. Esta disertación, realizada por Didice Godinho Delgado (2009), resulta un compendio muy interesante acerca de las principales centrales sindicales en Latinoamérica y el activismo de las mujeres en ellas.

Central Única de los Trabajadores (CUT-Brasil)

Esta central obrera fue fundada en 1983 y en la actualidad es considerada la más importante de Brasil, llegando a albergar alrededor del 30% del total de trabajadoras y trabajadores sindicalizados. De hecho, tomando en cuenta su dimensión es una de las más grandes del mundo (Godinho, 2017), que surgió de las revueltas de finales de los 70' en concordancia con los movimientos de los barrios que luchaban contra la inflación y la pobreza generalizada en el país. Su inspiración, indudablemente es de izquierda y es muy cercana al Partido de los Trabajadores, del expresidente Lula da Silva.

La CTU adopto de manera paulatina la paridad de género como el resultado de un prolongado proceso de reconocimiento del papel que han jugado las mujeres en su seno, desde su propio origen hasta la actualidad, el rol de las mujeres ha sido decisivo para la articulación de las luchas al interior del sindicato y en sus conexiones con otras organizaciones. El mismo Godinho (ob. cit.), reseña el transito que lleva, desde la creación de la Comisión Nacional de la Mujer Trabajadora hasta la elección de una de ellas como vicepresidenta de la CTU en el año 2000, cargo que aún es ostentado por una mujer.

Como se ve en este caso, es decisiva la negociación que a lo interno de la Central se plantean las mujeres con sus pares hombres que dominan los comités ejecutivos, utilizando la estrategia de la visibilización de las disputas, de forma tal que no eran diatribas en espacios cerrados de

decisión sino en el ámbito amplio de las asambleas sindicales, las mujeres demuestran en este caso, la disciplina de la militancia; pero -además- la fortaleza del liderazgo femenino que en Brasil, arroja mayor evidencia si se recuerda el dato no menor de la llegada a la presidencia de este país de una mujer: Dilma Rousseff.

Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)

Fundada en 1996, durante el gobierno de Carlos Menem, movida por las iniciativas de protesta contra los ajustes estructurales neoliberales de este periodo. Esta Central tiene la particularidad de funcionar con una especie de política de satélites en otras organizaciones, con la intencionalidad de cubrir la mayor cantidad de espacios en donde hay presencia de trabajadores y trabajadoras.

La CTA fijo sus límites para enfrentar las políticas neoliberales que le llevan a ser una referencia de lucha, especialmente para los trabajadores, sin embargo, la llegada al poder de Néstor Kirchner le planteo un dilema ideológico importante al inicio, al representar el discurso Kirchnerista una reposición de lo popular, la resignificación de las luchas contra las desigualdades, la pobreza y la inequidad social. Precisamente los códigos de vinculación con los ciudadanos son en Kirchner, un calco de las demandas tradicionales de la CTA, colocando en un fuerte cuestionamiento las políticas de corte neoliberal y proponiendo la construcción de una economía solidaria con rostro humano (Retamozo & Morris , 2015).

En lo que respecta al protagonismo sindical de las mujeres en esta Central, para el año 2000, se creó una Secretaría Nacional de Género e Igualdad de Oportunidades que fue replicada a nivel provincial. En el 2014, de los 20 cargos de dirección nacional cerca del 30% son ejercidos por mujeres que tienen muchas posibilidades de influir en las decisiones de la CTA que actúa, para esas decisiones a través de la figura de Secretarías.

Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS)

La convicción de que el movimiento sindical es uno de los fortines más importantes de las luchas sociales y políticas de las mujeres latinoamericanas, llega cuando, además de revisar lo que ha sido su protagonismo en algunas Centrales obreras, se observa el caso de esta organización supranacional que ha reservado en su estructura y acciones, un espacio importante para el desempeño de las mujeres. Su creación en 1996 obedeció a la necesidad de articular un frente de lucha popular y obrero en contra de las dictaduras aún vigentes en el continente.

Superado el periodo dictatorial, la preocupación de esta confederación estuvo signada por el debate con los gobiernos que crearon el Mercosur y que, según la opinión de la CCSCS,

apuntaban a la desregulación de la economía y sus consecuentes efectos sociales perjudiciales para los más pobres.

Para el año 1997 se propone la creación de La Comisión de Mujeres de la CCSCS que funcionará a partir de allí como una instancia encargada de deliberar temáticamente acerca de la situación de desigualdad de las mujeres en los diferentes ámbitos de acción que le corresponde al mundo sindical representado por todas las centrales obreras que hacen parte de esta confederación y aunque no va más allá de debatir los temas teóricamente y luego trasladar a las instancias particulares de cada central, de todas maneras se entiende que el trabajo de las mujeres y su relevancia como sujeto socio-histórico es reconocido.

Las mujeres y los derechos sexuales

Este es otro de los espacios de lucha clásicos tanto de los movimientos de mujeres en general como de las feministas en particular. se trata de una disputa en el terreno de los derechos sexuales y reproductivos que por su naturaleza siempre ha sido más complejo de enfrentar por parte de las mujeres, las connotaciones morales, religiosas y hasta culturales agregan unos matices que la dinámica organizativa de los movimientos ha tenido que ir desagregando y desbrozando para considerarlos en su justa dimensión. Han sido múltiples las iniciativas multilaterales que se han realizado en el esfuerzo por garantizar este espectro de derechos a las mujeres, entre los organismos o iniciativas lideradas por y para las mujeres citaremos los siguientes:

Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer. Esta organización creada en 1987 en Costa Rica trabaja desde diferentes perspectivas, pero esencialmente adopta esencialmente un enfoque complejo que subsume en una sola iniciativa organizativa las corrientes relativas a la igualdad de derechos culturales, étnicos, sexuales y reproductivos. Entre las preocupaciones más importantes que se debaten en su seno, en la actualidad se encuentra el tema de las leyes que penalizan el aborto y sus consecuencias en el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias (Núñez, 2016).

Convención Interamericana de derechos sexuales y derechos reproductivos. Aunque no se trata de una organización de mujeres, en este caso se trata de un convenio entre países que, en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), tiene como objetivo principal crear los espacios para el respeto, la protección y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas. Establece una definición de lo que debe entenderse como

“sexualidad” en el marco del derecho internacional, haciendo énfasis en que es una condición que se desarrolla durante toda la vida y contiene aspectos que incluyen el sexo, la identidad de género, la reproducción y la orientación sexual (Convención Interamericana de los Derechos sexuales y los Derechos Reproductivos).

Otros temas, otras luchas otras áreas de militancia social para las mujeres

Si bien la militancia en los sindicatos, en los movimientos ecologistas y los propulsores de una vida sexual y reproductiva autónoma traducen la mayoría de los espacios de lucha de las mujeres latinoamericanas, se pueden agregar otros temas sobre los que les ha correspondido armar gestas organizativas y liberadores de menor dimensión, pero igualmente complejas, veamos algunos de ellos.

El derecho al aborto. Uno de los temas más complejos que han enfrentado algunos movimientos feministas y de mujeres en general es este, tan complejo es que produce escisiones dentro de los mismos movimientos pues su impronta viene dada por aspectos religiosos, morales y culturales que varían significativamente entre países y entre continentes. Muchos países permiten el aborto sin restricciones, pero hay muchos en los que su realización está prohibida de manera absoluta o se permite en condiciones muy específicas que, de cualquier manera, mantienen una concepción de control sistemático del cuerpo femenino. De cualquier forma, la posición de las mujeres, la de los gobiernos y la de la misma sociedad están lejos de ser homogéneas en este punto, tal como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1
Contraste entre el derecho al aborto y su penalización

País	La situación
Argentina	Una ley que permitiría el aborto como decisión plena y autónoma de la mujer esta aun en discusión, por ahora las mujeres argentinas solo lo tienen permitido en caso de violación o de peligro de sus vidas
Chile	Desde el año 2017 el aborto es legal en este país, siempre y cuando exista una de estas tres causas: por riesgo de vida de la mujer, por inviabilidad fetal y por caso de violación. La violación a esta norma se castiga con penas de cárcel de tres a cinco años.
Paraguay	Según la Ley el aborto en este país es ilegal salvo que la vida de la mujer corra peligro por el embarazo, en caso de transgresión la pena de cárcel es entre cinco a ocho años de cárcel.
Ecuador	En Ecuador hay dos causales por las cuales una mujer puede realizarse un aborto: riesgo a la salud o vida de la mujer y violación. Pero esta última solo aplica para las mujeres que tengan discapacidad mental. Las penas por aborto ilegal incluyen a las personas que lo practican la cual puede pasar hasta 10 años en prisión.
Perú	En Perú sólo es posible si su vida corre algún riesgo está en riesgo o su embarazo puede causarle un daño grave o permanente en su salud. En el

Cuba

caso de las niñas menores de 12 años no se les permite el aborto, aunque por condiciones médicas su edad pone en riesgo su vida al parir. Es, junto a Uruguay, los únicos países en donde el aborto es una práctica gratuita y segura hasta las 12 semanas de gestación. Los criterios que aplica esta ley para permitir el aborto son: la mujer es quien decide; solo puede realizarse mediante procedimientos médicos y en instituciones de salud formales, y, es gratuito.

Fuente: Elaboración propia, basado en Distintas Latitudes (2018)

Los Encuentros Feministas Latinoamericanos y del Caribe (EFLAC). Desde 1981 se viene celebrando este gran foro que ha permitido una articulación del movimiento feminista alrededor de ciertas agendas que incluyen parte de los temas ya conversados (el sindicalismo, los derechos sexuales). Tras cada encuentro, las mujeres ratifican su unidad dentro de la diversidad, en procura de mantener y si es posible ampliar el reconocimiento como sujeto sociohistórico. Aunque para algún observador desprevenido, estos encuentros pueden no ser más que entretenimiento promovido por el statu quo para distraer la atención de lo importante, lo cierto es que se mantienen vigentes hasta la actualidad y eso desentumece constantemente la discusión sobre los derechos de la mujer. El más reciente EFLAC se realizó el 2019 en Uruguay, recordando que originalmente se realiza cada tres años, y tuvo como centralidad del debate dos temas fundamentales: los avances y desafíos de las políticas de género en Montevideo y la reformulación de la estrategia de atención en violencia doméstica en el territorio. Aunque por lo general estos encuentros debaten problemas locales de desigualdad de género en el país donde se sostiene el encuentro, hay que tener presente que la mayoría de esos problemas presentan similitudes entre los países de la región.

El fenómeno de la pobreza. Las latinoamericanas han tenido que lidiar como ningunas otras mujeres, con la dificultad de luchar por la igualdad de derechos sociales, políticos y sexuales, desde la gran barrera que supone la pobreza. Las diversas crisis por las que ha transitado la región han dejado poco espacio para la maniobra de las mujeres como ciudadanas y las han recludo casi con violencia, bajo la imagen de “necesitadas”, restando muchas posibilidades para que puedan alcanzar su plenitud como sujeto histórico (Barrig, 2005).

De acuerdo al PNUD (2019), en Latinoamérica las circunstancias de la pobreza que rodean a las mujeres no se han reducido, sino que mantienen cifras en alza y poco halagadoras. Por ejemplo, menos del 50% de las mujeres se encuentran incorporadas al mercado laboral formal mientras que los hombres están por encima del 75%, la mayoría de las mujeres realiza labores informales que no le garantizan ninguna seguridad social y que les deja desprotegidas frente a los abusos de los patrones o la posibilidad de sufrir accidentes laborales. La pobreza de las

mujeres latinoamericanas es, en este sentido de carácter multidimensional y muy difícil de combatir a través de programas asistencialistas focalizados solo hacia ciertas necesidades que esa pobreza devela.

En definitiva, el devenir del liderazgo y la militancia de las mujeres latinoamericanas en Organizaciones sociales revela diversos acontecimiento, situaciones, contextos y actores cuyo análisis será siempre parcial y temporal, aunque se intente una aproximación lo más integral posible, siempre quedaran algunas áreas difusas que incluso se solapan con los procesos vividos por las mujeres en otras esferas como la que se presenta en seguida.

2. Liderazgo y militancia en organizaciones con fines políticos

El reducto de los partidos y demás organizaciones con fines políticos han reproducido la lógica del discurso dominante con un claro dominio masculino que, solo en pocas ocasiones permitió en el siglo pasado, la aparición esporádica de protagonistas mujeres. Pareciera, en este sentido que lo logrado por las sufragistas, cuando obtuvieron el derecho al voto, haya amainado la fuerza de la rebelión política de las mujeres, ya sea desde su visión de género o simplemente en su rol de mujer como actor social.

La integración a organizaciones partidistas, supuso para las mujeres un paso importante para acercarse al poder y pensar en acceder a las instancias de decisión política, ya sean las dependencias locales, o las nacionales, en ámbitos como el poder legislativo, el judicial o el ejecutivo, si cabe alguna duda al respecto solo hay que mirar, finales del siglo pasado e inicios de este los casos de mujeres no solo militantes sino líderes de sus organizaciones y logrando la cima del poder como Michelle Bachelet, Cristina Fernández y Dilma Rousseff. En esos casos, el liderazgo de las mujeres se ha construido en un constante dialogo/confrontación con el discurso patriarcal dominante, y como resultado de una relación de iguales, no en el marco de las relaciones de géneros como algo reivindicativo de las mujeres sino como un proceso de reconocimiento de las diferencias mutuas entre personas que ejercen funciones de liderazgo (Rostagnol, 2017).

En esa lucha por hacerse un espacio en los partidos políticos, las mujeres latinoamericanas se han visto en la obligación de plantarse frente a los estereotipos que el poder dominante masculino ha difundido sobre ellas, lo ha internalizado y utiliza para establecer sus relaciones, no de géneros sino de dominación. En el Grafico 2, se muestran los rasgos estereotipados que

enfrentan las mujeres para desarrollar su militancia y alcanzar liderazgo en los partidos políticos de América Latina.



*Figura 2 Estereotipos que enfrentan las mujeres latinoamericanas en los partidos políticos.
Fuente: Elaboración propia basada en Rostagnol (2017)*

En su confrontación con ese estereotipo, las mujeres deben rebatir el sistema de creencias que subyace en él y que les termina relegando a ámbitos o espacios en donde solo se debaten temas que “competan a las mujeres”. Mantenerse allí, implica en la practica la persistencia de las desigualdades de géneros, cerrando de hecho, las posibilidades de ascenso y liderazgo general de las mujeres, pues su reclusión en esos límites las convierte en miembros sectorizados dentro de los partidos con poco margen para darse a conocer y colectivizar propuestas.

Con todo, las mujeres han sorteado buena parte de los efectos negativos de este estereotipo porque, aunque su militancia y liderazgo haya accedido tarde a las instancias partidistas, poseen una serie de rasgos que le son propios y comprenden una ventaja competitiva frente a sus pares masculinos, entre esos rasgos se pueden mencionar:

- Su versatilidad para moverse hábilmente en varias esferas, oficios o actividades de manera simultánea. Es lo que en estudios neurolingüísticos puede llamarse capacidad multitarea (Sanchez, 2017), en esa perspectiva, las mujeres llevan ventaja a la hora de sacar adelante la complejidad que encarna la dirección de organizaciones políticas en las que se reúnen múltiples personalidades, caracteres y ambiciones

- Su amplitud de enfoque y pragmatismo a la hora de ver todas las aristas de una situación para encontrar las ventajas de una determinada actitud frente a ella. Esta habilidad cultivada en la necesidad cotidiana de resolver múltiples “microproblemas” durante su cotidianidad podría traducirse en una mayor eficiencia para el tratamiento de algunos temas (Rostagnol, ob.cit).
- La resistencia y la perseverancia que la caracterizan al tener que enfrentar tantas situaciones de discriminación en contextos hostiles (cuando se mueve en el espacio político) y además, la permanencia, durante muchos eventos y circunstancias de su vida diaria en actitudes de subordinación le han fortalecido esa capacidad para resistir y esperar los momentos más oportunos para actuar.

De acuerdo con todas estas consideraciones, la incursión, permanencia y éxitos de las mujeres en el seno de las organizaciones con fines políticos se produce un repensar del poder tanto de estas organizaciones como del Estado, la acción de los movimientos de mujeres y de algunas particularidades, muestran que el poder no es un instrumento que se posee y usa solo en, desde y por el Estado, por el contrario, el poder es una especie de magma que se filtra a todas las relaciones, incluyendo las de género y condiciona las prácticas y los discursos que construyen realidades, llámese militancia o liderazgo (Piedra, 2004).

Ahora bien, un análisis de la situación de las mujeres al interior de los partidos políticos en América Latina, además de ser una tarea compleja, sería de una dimensión que escapa a la intención de esta tesis, sin embargo, es posible encontrar datos confiables sobre ese tema en estudios promovidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de sus programas e instituciones, especialmente el Programa de Apoyo al Liderazgo y Representación de la Mujer, PROLID, y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional). En las líneas que siguen se tomarán referencias de esos estudios para esbozar algunos rasgos de lo que ha sido la militancia y liderazgo de las mujeres latinoamericanas en los últimos años (Banco Interamericano de Desarrollo, 2015).

Para ilustrar mejor, en la perspectiva de este apartado y su objetivo, se presenta en la figura 3 una síntesis del estudio del BID, en atención a algunas situaciones, eventos y circunstancias que, sin menoscabo de la necesidad de profundizarlos más adelante en el desarrollo de esta investigación, muestran la generalidad de la situación del liderazgo político de las mujeres en algunos países de América Latina:

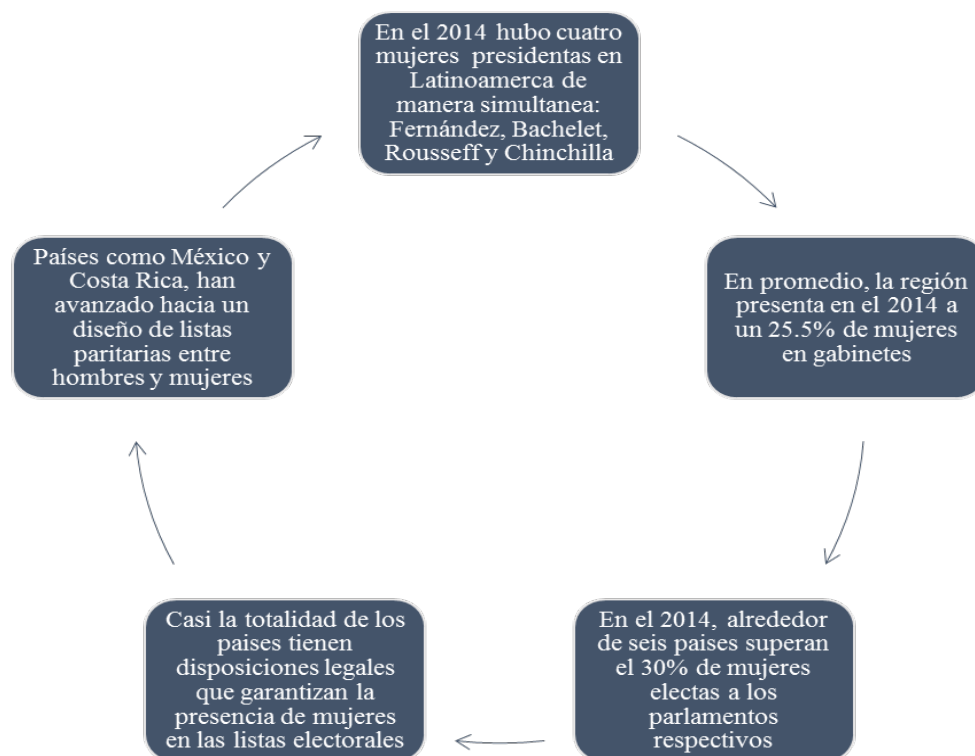


Figura 3. Indicadores de la situación de la militancia de las mujeres latinoamericanas en partidos políticos. Fuente: elaboración propia basada en BID (2015)

Hay que destacar, en forma general de este estudio del BID, que las mujeres siguen siendo minoría cuando se observa su presencia, bien sea en cargos de elección popular o en designaciones ministeriales, aun cuando, en algunos países se ha alcanzado el porcentaje asumido como gran minoría que es del 30%. Eso les puede ayudar a las mujeres en tener un mayor peso específico en las decisiones que se toman a lo interno de los partidos políticos, así como para el manejo de recursos cuando deban asumir la dirección de proyectos que favorezcan a ese grupo minoritario. Así mismo se destaca en el mismo estudio que los cambios cuantitativos solo pueden traducirse en cualitativos, si las mujeres ejercen una presión real y, en la medida que surjan liderazgos sólidos como los de Fernández, en Argentina, que aun en el 2019 fue capaz de acompañar protagónicamente una fórmula presidencial y ganar las elecciones.

No obstante, esas evidencias estadísticas y de percepción acerca del momento positivo que puedan estar viviendo las mujeres latinoamericanas en lo que respecta a su militancia y liderazgo en los partidos políticos, lo cierto es que se siguen presentando situaciones de inequidad diversas que no permiten todavía, hablar de una situación paritaria en el ejercicio concreto del poder. De acuerdo con Fernández (2006), los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para incursionar y liderar partidos políticos se resumen en lo siguiente:

- Las dificultades socioeconómicas. La situación que enfrentan las mujeres en cuanto a los problemas derivados de la pobreza, el desempleo, y la doble jornada laboral, entre otros es bastante pesada a la hora de incursionar en el mundo de la política o ejercer cargos públicos. Cuando se trata de pagar el precio social por eso, las mujeres enfrentar divorcios, ausencia de maternidad o poco número de hijos que la someten a una presión familiar que no tienen los hombres. A esos problemas económicos se agregan los aspectos de la socialización de las mujeres, perseguidas por una imagen social que les relega al hogar y que, cuando ingresan a la función pública, muchas veces las someten a situaciones de acoso sexual, entre otras relaciones de discriminación.
- La superación de las barreras ideológicas y psicológicas por parte de las propias mujeres. Cuando le corresponde competir con sus pares hombres en la arena política, las mujeres enfrentan sus propios miedos, la crianza mediante estereotipos sociales arraigados por años coloca frente a ella la imagen de la buena esposa, la buena madre, la buena hija, que muchas veces son incompatibles con un trabajo que suele no tener horarios ni límites de espacio.
- Las prácticas de nominación al interior de los partidos políticos. Resumido en la figura 3, este obstáculo implica un largo forcejeo de las mujeres a lo interno de los partidos políticos, en donde, por tradición existe un modelo masculino de la política que controla el acceso a los cargos de dirección política. Probablemente esta sea la dificultad de mayor envergadura que enfrentan las mujeres, pues los partidos operan con una cultura sexista que, aun cuando permitan el acceso como militantes, de las mujeres, les sigue poniendo condiciones desiguales cuando se trata de competir con los hombres por los cargos de dirección o la designación en las listas electorales.
- Las expectativas sociales en torno a la honestidad y capacidad de las mujeres, suele colocar muy alto el listón para evaluar su desempeño, por lo que al acceder a cargos de dirección o liderar procesos son exigidas mucho más que lo que naturalmente se hace, colocándola en clara desventaja para mantenerse en esos cargos. En suma, probar sus capacidades le es a la mujer, casi siempre una tarea mucho más compleja de lo que representa para los líderes masculinos.

En resumidas cuentas, tanto la militancia como el liderazgo político de las mujeres en Latinoamérica se mantienen en un constante forcejeo contra la cultura patriarcal que aun impera en los países de este subcontinente, es cierto que luego de varias experiencias presidenciales de mujeres, el panorama luce algo más distendido para que la paridad de género

se convierte en una realidad frecuente, sin necesidad que exista una obligación jurídica que obligue a las organizaciones a adoptar ese patrón sino que el hecho de ser mujer sea apenas un detalle menor para los electores y las instituciones sociales.

3. La participación política de las mujeres y sus progresos jurídicos

Comprender la ruta que ha conducido a la consolidación del rol de las mujeres en la dinámica sociopolítica de América Latina, pasa también por examinar cuales han sido los progresos desde el punto de vista jurídico de ese rol. Que mecanismos, procesos o cambios se han activado en la región para que los avances, tanto en el campo laboral, educativo, cultural y político sean una realidad que no retroceda según el capricho de quienes ejerzan el poder en un período determinado. En este tema hay que distinguir dos iniciativas claras que marcan el progreso jurídico favorable a ampliar las posibilidades de participación política de la mujer, una que se libra desde los organismos internacionales, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), especialmente, y las experiencias locales que se desarrollan en función de la realidad particular de cada país.

3.1. La legislación e iniciativas internacional favorables a la participación política de las mujeres

En el marco de las iniciativas internacionales sobre los derechos a la participación política de las mujeres hay un amplio repertorio de leyes, normas, consensos y pactos que engloban desde los derechos humanos como contexto normativo más amplio, hasta los aspectos jurídicos multilaterales de organismos regionales y subregionales. Esto significa que las mujeres, como tales, están protegidas por una gran cantidad de instrumentos que en la normativa internacional regulan la posibilidad que tienen todas las personas, independientemente de su sexo, edad, raza o religión a involucrarse activamente en los espacios de participación política que conduzcan a la obtención de cargos en los poderes públicos.

Para la reseña de estos avances en materia internacional de las normativas favorables a la inclusión de las mujeres en la vida política y pública, se toma como referencia principal el documento del PNUD, específicamente de la ONU mujeres (2014), esta organización funciona como un dispositivo de apoyo de las Naciones Unidas para impulsar la paridad de género en la participación política, en tanto, promueve y asesora la instauración de normas ese orden. Igualmente, desde ONU Mujeres, se respaldan ciertos procesos que procuran la igualdad de género en áreas prioritarias como: el incremento del liderazgo de las mujeres en organizaciones políticas, la eliminación de la violencia contra las mujeres; el progreso económico de las

mujeres; y la incorporación de la paridad de género como enfoque de la planificación del desarrollo en la región.

Convención interamericana sobre la concesión de los derechos políticos de la mujer.

Es una de las declaraciones normativas pioneras en el reconocimiento de la inclusión de las mujeres en la esfera política y fue aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1948, estableciendo en su primer artículo, la prohibición de los Estados suscritores de la Convención de colocar obstáculos al derecho al voto como consecuencia de discriminación sexual.

Convención sobre los derechos políticos de las mujeres. Esta Convención que entra en vigencia en 1954, establece los principios marco, que en adelante se desarrollaran con mayor profusión en otras iniciativas legislativas, allí se establece, entre otros aspectos determinantes para el impulso de la participación política de las mujeres en general, que las mujeres, además del derecho al voto, tienen derecho a ser elegibles para todos los organismos públicos y a ocupar cargos públicos (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1954).

A partir de este instrumento, la ONU muestra su disposición y apoyo a defender el derecho de todos los ciudadanos a participar sin ningún tipo de discriminación en las acciones y organizaciones de carácter político en sus respectivos territorios, intentando de esta manera salvaguardar los derechos políticos, no solo de las mujeres, sino de cualquier otro grupo social, étnico o religioso que pudiera estar siendo sometido a prácticas de segregación. De hecho, establece de manera explícita en su primer artículo, el derecho de las mujeres a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna (Tello F., 2009).

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue firmado en 1966, establece explícitamente en el artículo 25 que toda la ciudadanía, solamente por ese hecho y sin ninguna otra restricción, tiene el derecho de la participación, la elección y, de ser el caso, la facultad de dirigir los procesos de diseño y ejecución de las políticas públicas en cada contexto nacional. En ese mismo documento, como en toda legislación internacional, que refrendada la obligación de todos los Estados que suscriban el Pacto, a respetar y hacer respetar todos los derechos incluidos en él.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (conocida como CEDAW, por su sigla en inglés). Aprobada en 1979, este instrumento legal establece en su artículo 1, lo que debe entenderse como discriminación contra las mujeres,

a la que asocia a cualquier tipo de distinción o exclusión cuya base sea sexual. Estas estimaciones normativas las profundiza a lo largo de su articulado, así, por ejemplo, en el artículo 7 insta a todos los Estados a hacer cumplir la Convención y prevenir todo acto discriminatorio que pueda obstaculizar la inclusión y protagonismo de las mujeres en la política.

Todos los Estados que suscriben esta convención se comprometen a plantear y producir las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres garantizando de esa manera la participación de las mismas en los procesos electorales y en el ejercicio de cargos públicos, ministeriales y de otra índole, con iguales condiciones de exigencia que puedan tener los hombres. La CEDAW parte de la concepción de igualdad sustantiva, la cual, deja de lado la generalización y atiende de manera concreta a los efectos materiales de las normas que regulan o vigilan las políticas de género.

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995. Fue el resultado programático de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, y su principal cualidad es la de haber producido un cambio esencial para las lechías por la igualdad de las mujeres que fue el traslado conceptual de la noción “mujeres” al de género. En sus postulados, esta declaración reclama a las diferentes instancias, organizaciones y gobiernos a proponer o asumir el ejercicio estratégico de acciones que garanticen, en la práctica la equidad en la representación de hombres y mujeres en la función pública

Siguiendo a Tello (2009), la intención de esta declaración es colocar el foco de la mirada internacional en la situación de la participación política de la mujer y sus derechos en cuanto al ejercicio del poder. Entre los aspectos más importantes que destaca esta declaración se encuentran:

- La exigencia de garantizar una inclusión en condiciones de igualdad de todos los ciudadanos en la toma de decisiones políticas, tomando en cuenta, desde el enfoque de género, que hombres y mujeres, aunque sean ciudadanos de un mismo país pueden tener intereses distintos.
- Combatir las prácticas de carácter discriminatorio que se producen a lo interno de las organizaciones políticas, casi siempre como resultado de estereotipos y atavismos culturales respecto a las condiciones y cualidades de las mujeres. Erradicar esa imagen dentro de los partidos políticos y las instituciones públicas será un paso previo para lograr la igualdad de género en la esfera de la política.

- Diseñar iniciativas de carácter jurídico que establezcan la obligación de los partidos y demás organizaciones con fines políticos a incorporar a las mujeres en las listas para las elecciones a fin de caminar hacia la paridad de género en ese ámbito.
- Promover la necesidad de las naciones de favorecer, en igualdad de condiciones respecto a los hombres, la capacitación de las mujeres, tanto en lo educativo como en lo laboral para concretar sus oportunidades de empoderamiento sociopolítico

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (también conocida como Convención Belém do Pará) celebrada en Brasil en 1994, determina en su artículo 4 que todas las mujeres tienen derecho al reconocimiento, goce y protección de todos los derechos establecidos por los tratados de derechos humanos, los cuales comprenden, entre otros, el derecho a participar en los asuntos públicos, incluida la toma de decisiones (ONU Mujeres, ob. cit.).

Declaración de los Objetivos del Milenio. Enunciados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000, fueron aprobados con 189 países signatarios. Entre esos grandes objetivos programáticos se encuentra uno que está especialmente referido al tema de género, que insta a los países miembros a trabajar por la igualdad entre los sexos, impulsando el empoderamiento de las mujeres. La mayoría de los objetivos del milenio, que se colocaron como límite para su cumplimiento el 2015, siguen con deudas, lo destacable de este principio es que llama la atención sobre las oportunidades educativas de las mujeres y, como consecuencia, una mayor activación de su vida pública.

No obstante el reconocimiento que hace de las mujeres en el ámbito de la participación política, son muchas las falencias en cuanto a su aplicación práctica y, más allá de la disparidad que aún existe en cuanto al ejercicio igualitario del poder por parte de hombres y mujeres, se critica las pocas referencias que se hacen en los informes de avance respectivos, de esta premisa de los objetivos del milenio, de hecho se considera que se ha dejado de lado la importancia de la educación para el cese de las desigualdades.

Consenso de Quito. Aprobado en la X Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe en el año 2007, lo suscribieron la gran mayoría de los países latinoamericanos y en él se exhorta al reconocimiento de la paridad entre mujeres y varones como indicador por excelencia de un sistema democrático justo y equilibrado. Esa paridad es vinculante con un sistema igualitario para el ejercicio del poder y la participación protagónica de las mujeres en

la toma de decisiones, no solo en aquellos aspectos calificados como “asuntos de mujeres”, sino en las demás áreas de la vida pública.

Aunque como la mayoría de estas exhortaciones conjuntas de países hay bastante de voluntarismo en ella que a veces es muy difícil concretar, lo cierto es que se logró revertir algunas de las consecuencias de los programas estructurales aplicados a la economía, realizándose un seguimiento de sus avances en los consensos que le siguieron en Brasilia, Montevideo y Santo Domingo (Tello, ob. cit.).

Como conclusión de este punto referido a las iniciativas jurídicas internacionales se presenta la tabla 2.

Tabla 2

Cuadro síntesis de las iniciativas jurídicas favorable al protagonismo político de las mujeres

Documento y fecha	Idea fuerza
Convención interamericana sobre la concesión de los derechos políticos de la mujer (1948)	Afirma el derecho al sufragio de las mujeres y prohíbe cualquier acto de discriminación que les obstaculice el goce de ese derecho
Convención sobre los derechos políticos de las mujeres	Se centra en el derecho al sufragio de las mujeres, ya no solo en sus posibilidades como electora, sino también en las de ser elegida y ejercer cargos públicos
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer	Se considera el instrumento jurídico más importante en cuanto al establecimiento de garantías de igualdad de género, se le reconoce su amplitud y la fuerza que imprime a los procesos de seguimiento y sanción a aquellos países que infringen la normativa
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995	Presenta una amplia perspectiva acerca de los derechos y garantías que deben recibir las mujeres, en una síntesis cualitativa que va desde lo electoral, pasando por lo laboral hasta lo sexual y étnico
Consenso de Quito	Consolidó un foro abierto para la discusión y acciones frecuentes en procura de la ampliación de la democracia desde la perspectiva del enfoque de género y sobre la base de la paridad de la participación política.

Fuente: Elaboración propia

3.2. Algunos países y su realidad en cuanto a garantizar la participación política de las mujeres por la vía jurídica u otras vías institucionales

El término “Latinoamérica” pretende, de manera muy ambiciosa, abarcar una gran cantidad de realidades sociales, culturales, económicas y políticas que, en este caso, ilustran en una “unidad diversa”, las situaciones que les corresponden enfrentar a las mujeres de varios países. En este apartado, una vez reseñada a grandes rasgos la dinámica jurídica bajo la cual se ha

constituido la historia de la participación política de las mujeres en esta región, se focalizarán algunos de esos países que, en forma particular han avanzado en los que se conoce como la paridad electoral y el enfoque de género para la democracia.

Venezuela. El caso venezolano es bastante singular en la región pues desde finales del siglo pasado vive un proceso autocalificado como “Revolución Bolivariana”, impulsado originalmente por el liderazgo mesiánico y antipolítico de Hugo Chávez, el cual, ante la inminencia de su muerte designó a su sucesor Nicolás Maduro que aun hoy se mantiene en el poder. Chávez llega al poder luego de una intentona golpista contra el expresidente, también fallecido, Carlos Andrés Pérez con la impronta de un nuevo liderazgo, preconizando una democracia de nuevo tipo, participativa y protagónica, frente a lo que él llamaba, el viejo modelo de la partidocracia, que era eminentemente representativo.

Según y cómo se enfoque el análisis, las conquistas de las mujeres venezolanas, durante los últimos veinte años tienen su punto de partida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) aprobada en 1999 como resultado del proceso constituyente convocado por el mismo Chávez. De acuerdo con Mota (2017) , entre los logros más significativos del proceso revolucionario se cuentan: El uso de un lenguaje no sexista, el otorgamiento de rango constitucional a los acuerdos y tratados firmados por la República en materia de Derechos Humanos, el reconocimiento del trabajo doméstico como trabajo productivo, entre otros.

En el ámbito legislativo, Mota considera que ha habido avances importantes como la aprobación de la Ley de trabajadoras y Trabajadores en la que hubo un largo debate nacional con la activa participación de las mujeres organizadas en colectivos sociales; La Ley Orgánica para el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada en el año 2007 mediante la cual se esclarecen una gran cantidad de formas de violencia contra las mujeres, muchas de ellas hasta ese momento ocultas y sin justicia; y, la norma oficial para la atención integral de la salud sexual y reproductiva, una norma novedosa que contempla los procedimientos metodológicos para la preservación de estos derechos tan complejos a veces.

En el caso Venezolano, es importante tomar en cuenta lo que han significado los planes para la Igualdad y Equidad de Género llevados adelante, tanto por Chávez como por Maduro, en el último de estos planes, contemplado para el período 2013-2019 (Gobierno Bolivariano de Venezuela, 2013) En los argumentos justificativos y enunciados propios del plan hay una especie de hoja de ruta para la defensa de los derechos de las mujeres en cuanto a su militancia, participación y protagonismo sociopolítico y su realización se exhibe como el fruto de:

- Un conjunto de debates realizados de manera sostenida por diversas organizaciones llamadas “colectivos”, donde mujeres y hombre, identificados con la Revolución Bolivariana, analizaron las premisas del Plan de la Patria del mismo periodo y buscaron traducir algunos aspectos de ese Plan, para el cumplimiento del compromiso con la igualdad de género.
- Un esfuerzo continuado desde la llegada de la Revolución Bolivariana por institucionalizar la participación colectiva, especialmente el enfoque de género en la discusión y formulación de las políticas públicas.
- El cumplimiento de los pactos, tratados y convenciones internacionales, particularmente lo establecido en CEDAW-Beijing, con especial atención al seguimiento de las políticas que identifican al Gobierno Bolivariano con los demás procesos de toma del poder democrático por parte de líderes progresistas, comprometidos con las causas que enfrentan la desigualdad en la región.

El caso de Venezuela es emblemático si se considera el hecho no menor de la presencia de mujeres en muchos de los principales poderes del país, como lo son, el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Fiscalía General de la República y hasta el Tribunal Supremo de Justicia, en varias ocasiones. Así mismo, la Revolución Bolivariana ensalzó lideresas importantes en cargos de elección popular como la Asamblea Nacional y las gobernaciones de varios estados del país.

Colombia. Este es otro país latinoamericano que le han tocado vivir episodios y periodos sociopolíticos turbulentos, cruentos en muchas ocasiones y con un papel protagónico de las mujeres, prácticamente en todas las áreas de la vida pública. La etapa de violencia armada, tanto por parte de la llamada Guerrilla colombiana como desde el Estado generó un contexto, hasta hace poco tiempo lleno de convulsión política en el que la lucha de las mujeres no fue ajena.

Puede decirse que en este país, como en los demás que integran la región se han dado dos ámbitos de lucha: el informal, algo difuso, cotidiano para más señas, que se libra todos los días en el proceso de socialización y que se desarrolla en escuelas, iglesias, instituciones y, por supuesto en las familias, una lucha que por tener implícitos una serie de rasgos culturales que se modifican con mucha lentitud y no siempre de manera lineal, y, el ámbito formal-institucional que, entre otras cosas tiene relación con instrumentos jurídicos, institucionales y organizacionales.

En ese último aspecto, que es el más compatible con el objetivo de este trabajo, se pueden tomar como referencia elementos difundidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNE) (2014), según el cual las mujeres colombianas continúan siendo una minoría al momento de optar por cargos de elección popular, aun cuando, desde el punto de vista demográfico representan un poco más de la mitad de la población. Jurídicamente hablando, Colombia ha mantenido progresos significativos en sus marcos legales, en virtud de garantizar la igualdad de géneros en lo que respecta a la participación política de las mujeres.

En el ámbito constitucional, la realidad de las mujeres colombianas comienza a tomarse en cuenta, al menos desde el punto de vista formal, en la Constitución de 1886, donde por primera vez se avanza normativamente para el establecimiento de los derechos al sufragio, a la educación superior a la abolición de la potestad marital del hombre sobre la mujer, así como la libertad para que las mujeres casadas puedan administrar sus bienes. Aunque en la práctica no es sino hasta 1954 cuando, se aprueba el sufragio de las mujeres y su derecho a ser elegidas, mediante el Acto Legislativo número 03 (Cardona, Carrillo, & Caicedo, 2019).

Sin embargo, es en la Constitución de 1991, (Congreso de la República de Colombia) en la que se dan pasos firmes hacia la igualdad de géneros, particularmente en la esfera de la participación política de las mujeres y esto puede constatarse en una rápida mirada a su articulado:

- El artículo 40 es explícito al señalar que los organismos del Estado deben garantizar la participación efectiva de las mujeres en los cargos o niveles decisorios de la Administración Pública, garantizándole, como a todos los ciudadanos colombianos, el derecho a elegir y ser elegido, constituir y liderar partidos, entre otros derechos políticos.
- El artículo 43, por su parte es claro al establecer la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, desprovistos de cualquier acto de discriminación sexual o de géneros.
- Por último, en el artículo 53, se encuentra la exhortación a la institución respectiva para que tome las medidas necesarias para que no se produzcan en el territorio nacional y en el contexto de las empresas, ninguna discriminación laboral por cuenta del sexo o géneros de las personas.

Bolivia. Este país, al igual que Venezuela vivió un proceso sui generis los mandatos sucesivos de Evo Morales, un líder campesino cocalero que llegó con el halito del hombre de pueblo, sometido desde siempre a procesos de discriminación social y que tenía una gran

oportunidad de cerrar las brechas en cuanto a situaciones de injusticia social que existían en muchas áreas de la realidad boliviana, entre ellas el caso de las mujeres, muy particularmente las indígenas. Tal como ocurre en el caso colombiano y venezolano, aquí hay una clara evidencia de progreso en lo jurídico que encabeza la Constitución nacional. En la tabla 3, se reflejan parte de ese marco normativo favorable a la igualdad de géneros en Bolivia

Tabla 3

Cuadro síntesis de los principios constitucionales que coadyuvan a la igualdad de géneros en Bolivia

Artículo	Idea fuerza
11	En este artículo, al hacer mención a la forma de gobierno que le es compatible como Estado, de manera explícita de condiciones entre hombres y mujeres
15.II y 15.III	En este artículo se deja sentado el papel protector del Estado contra la violencia de género, al hacer énfasis en la necesidad de mantenerlas a salvo de cualquier forma de violencia
45.V	El estado protege a las mujeres bolivianas en sus momentos de mayor vulnerabilidad social como es el caso de la maternidad, garantizándole sus derechos sexuales y de reproducción
48.V y 48.VI	El aspecto laboral es considerado un elemento importante para la igualdad de géneros según el legislador boliviano al establecer en este artículo el derecho al trato y salario igualitario, de acuerdo al trabajo para mujeres y hombres
66	Manteniendo el enfoque de igualdad de géneros, el Estado boliviano garantiza en este artículo, de forma igualitaria, los derechos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres.
78.IV	Al garantizar la educación para sus ciudadanos, en esta parte del artículo 78, el Estado considera necesario suscribir los derechos a la educación, según su vocación, tanto de hombres como de mujeres, renunciando así, de manera expresa a cualquier forma de tutelaje estatal.

Fuente: Elaboración propia basada en CPE de Bolivia (Asamblea Constituyente de Bolivia, 2009)

- **Otras realidades, otras leyes, iguales derechos.** Tal y como se dijo al inicio de este apartado, el hecho de querer cubrir en la expresión, “latinoamericanos”, una realidad compleja que posee múltiples determinaciones, culturales, económicas, sociales y políticas, es parte de la economía analítica propia de un esfuerzo de investigación como el que está planteado en este trabajo, siendo así, en el cuadro sinóptico (tabla 4), que se muestra ahora, se plasman los preceptos normativos, básicamente constitucionales, de otros países de la región que han marchado al ritmo que marca la jurisprudencia internacional cuando de derechos de las mujeres y los géneros se trata.

Tabla 4

Cuadro síntesis de los principios constitucionales que coadyuvan a la igualdad de géneros en otros países de Latinoamérica

País	Principios (artículos)
Argentina	Más que la Constitución se debe destacar la reforma constitucional del año 1994, en la cual se elimina toda discriminación de las mujeres y promueve acciones que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos en particular respecto del niño, mujeres, ancianos y personas con discapacidad (Iturrez, s/f).
Perú	En la Constitución peruana, aunque no hay una mención expresa a la protección de las mujeres, si se contempla explícitamente la no discriminación por motivos de raza, sexo, idioma, ya sea en los procesos políticos, como en la dinámica laboral del país (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2000).
Cuba	Como caso particular, en este país, aunque la constitución contempla la no discriminación por razones de sexo, ha jugado un papel fundamental la Federación de Mujeres Cubanas, fundada en 1960 y encargada de hacer el seguimiento y evaluación de las normativas que garantizan la igualdad de géneros en la Isla.
Chile	La realidad chilena se encuentra en la actualidad (2020) estremecida Por una serie de protestas sociales que, aunque tienen como base, aspectos de carácter socioeconómico, en la práctica se ha convertido en un gran reclamo social por una sociedad más justa y equitativa, ello incluye los reclamos de las mujeres, pues Chile, siendo signatario de la mayoría de tratados a favor de los derechos de la mujer, y habiendo sido gobernada recientemente por una mujer, no presenta en su texto constitucional una clara alusión a ese tema
Uruguay	El principio de no discriminación se encuentra contemplado en el artículo 8 de la Constitución uruguaya y así mismo establece la necesidad de una regulación especial para el trabajo de las mujeres en función de garantizar la igualdad de géneros.

Fuente: Elaboración propia basada en documentos citados en la tabla

Como se ha mostrado a lo largo de esta sección, la participación política de las mujeres y sus progresos jurídicos no han sido ni lineales, ni homogéneos, ciertamente, desde finales del siglo XX y en estas dos primeras décadas del XXI, todos los países en América Latina al menos desde el punto de vista declarativo han apoyado los avances en materia normativa para el resguardo y/o expansión de los derechos de las mujeres, tanto en el ámbito político como en otros temas igualmente álgido. De hecho, el trazo analítico dibujado hasta aquí en este capítulo no pretende ser, de ninguna manera una mirada desde la jurisprudencia, por el contrario, ha intentado detenerse en una buena cantidad de variables que son imprescindibles para comprender de manera integral la situación en estudio.

4. Proceso de cambios en el ejercicio de la representatividad de géneros en cargos públicos

Para concluir el recorrido en este primer capítulo dedicado a describir una panorámica general que dé cuenta de la evolución del tema de las mujeres, tratado bajo esa denominación genérica y originaria, o de la igualdad de géneros como ha sido profusamente abordado desde la perspectiva política en América Latina; se procederá a profundizar brevemente en un aspecto que hasta ahora se ha tocado solo tangencialmente y que si tiene que ver con algo jurídico y político: la representatividad de géneros en cargos públicos.

Más allá de lo que se puede desprender como inferencia del subtítulo utilizado aquí, lo que se busca es pesquisar sobre algunas ideas, consensos e iniciativas que se han implementado, promovidas desde la institucionalidad, para concretar la tan anhelada igualdad de géneros en el ejercicio de la función pública, pero en las oportunidades para acceder a ella porque, si la mujer compite con los hombres en igualdad de condiciones, ya habrá logrado concretar el espíritu de las leyes formuladas para resguardar sus derechos, aunque finalmente no resulte ganadora en las elecciones para esos cargos.

Para el desarrollo de esta sección se utilizará como guía los informes del Proyecto ATENEA, un mecanismo de investigación y generación de información, puesto en práctica desde el año 2011, a través de la triple alianza entre ONU Mujeres, PNUD e IDEA, (PNUD, IDEA y ONU Mujeres, 2018) con la finalidad de estimular los avances necesarios en la dirección correcta para alcanzar el goce en igualdad de condiciones de los derechos políticos por parte de las mujeres. Esta propuesta multinacional y compleja, pretende arrojar luces acerca de las fallas que hasta ahora se han producido y que puedan estar relacionadas con la falta de información acertada y oportuna. Si la ansiada paridad en el ejercicio del poder político por parte de las mujeres no es una realidad, quizá sea porque no se han investigado con suficiencia los factores que la determinan y esa es la razón de ser del proyecto ATENEA.

De acuerdo con los preceptos que manejan esos organismos, y con especial observancia de los objetivos de este proyecto, se diseñó un baremo que permite medir el grado Índice de Paridad Política de los países, instrumento que ha sido aplicado en las diferentes experiencias analíticas en que se ha llevado a cabo el informe de ATENEA. Puesto que se registrarán las características de algunos países que han sido objeto de este análisis, se cree conveniente presentar ese baremo del que se habló.

Tabla 5*Cuadro síntesis sobre las dimensiones e indicadores del Índice de Paridad Política*

Dimensión	Definición y número de indicadores en ()
1. Compromisos nacionales con la igualdad en la constitución y el marco legal	Recoge las condiciones formales mínimas que cada Estado debe implementar para garantizar la igualdad de las mujeres en el ejercicio de la participación política (5)
2. Ejercicio del derecho al sufragio	Monitorea el ejercicio del derecho a elegir democráticamente a las autoridades (1)
3. Cuota/paridad	Monitorea los esfuerzos del Estado por cumplir sus compromisos generando condiciones, a través de acciones afirmativas o medidas paritarias, para asegurar la presencia de las mujeres en cargos de toma de decisiones de todo nivel (9)
4. Poder ejecutivo y administración pública	Mide la presencia de las mujeres en el gobierno nacional y las condiciones existentes para influir en el diseño de políticas públicas (5)
5. Poder legislativo (cámara baja/única)	Mide la presencia de las mujeres en el cuerpo legislativo y las condiciones existentes para influir en el diseño y aprobación de leyes nacionales (10)
6. Poder judicial y poder electoral	Mide la presencia de las mujeres en la administración de justicia y las condiciones existentes para influir en ella (3)
7. Partidos políticos	Mide la presencia de las mujeres en las estructuras partidarias y la existencia de condiciones que les permitan influir en la toma de decisiones partidarias y, por tanto, en la agenda política y el debate público (5)
8. Gobierno local (Municipal)	Mide la presencia de las mujeres en los gobiernos municipales y las condiciones existentes para influir en el diseño de políticas públicas a nivel municipal (2)

Fuente: (PNUD, IDEA y ONU Mujeres, 2018)

Ahora bien, se debe aclarar respecto a los casos que se citan aquí, que no se establece ningún orden, se ubican aleatoriamente eso, por una parte, y por la otra, se registran los países en donde se ha aplicado el instrumento, o sea, han sido objeto de análisis de parte del proyecto Atenea, no se incluye Ecuador, que lo ha sido, porque es la unidad de análisis central de esta Tesis Doctoral y será trabajado a profundidad en los capítulos que siguen.

4.1. El Caso Uruguay

Es uno de los países latinoamericanos que mejor ha protegido sus avances en materia democrática y de derechos humanos, de acuerdo con la percepción de organismos internacionales (PNUD, IDEA y ONU Mujeres, 2018), sus esfuerzos para formalizar los procesos, institucionalizar los partidos políticos, garantizar los derechos ciudadanos y

promover el bienestar colectivo siguen siendo loables. Sin embargo, el país ha sido criticado cuando se coloca la atención sobre el análisis de las variables que competen a la igualdad de géneros, y eso ha afectado seriamente su evaluación al momento de determinar la calidad de su democracia.

Empero, aunque las inequidades entre hombres y mujeres mantienen una brecha importante cuando se mide en clave de igualdad, la mayoría de los organismos le reconocen a Uruguay sus avances sostenidos en términos del acceso a empleos dignos y bien remunerados, por parte de las mujeres, así como al sistema educativo que parece mostrar un proceso de feminización continuo y firme. Pero, cuando se trata de la igualdad en la participación política y la toma de decisiones en las altas esferas de la vida pública, por parte de las mujeres, el país se coloca rezagado comparado con otros de su región. En ATENEA, se determinaron entre otros aspectos negativos del país, lo siguiente:

- En los últimos años en los que se ha dado su consolidación democrática, ninguna mujer ha formado parte de las fórmulas presidenciales con algunas posibilidades de éxito reales.
- Desde el regreso al país del sistema democrático, la presencia de las mujeres como candidatas a cargos en el parlamento ha sido bastante baja, solo se incrementó en algo en las elecciones de 2014 cuando se utilizó en el país la ley de cuotas que obliga la inclusión de cierto porcentaje de mujeres en las listas de candidatas.
- Mantiene un rezago importante en la aprobación de leyes que llevan de la ley de cuotas a la paridad, pues, a pesar de ser pionero en la inclusión de ciertos mecanismos democráticos como el sufragio femenino, cuando se trata de colocar a tono su marco normativo para los derechos de las mujeres en la actualidad, se ha movido muy lento de manera tal que hoy luce bastante retrasado en el objetivo de lograr la paridad política entre mujeres y hombres.
- Como resultado de todas estas situaciones, la posición de Uruguay en el Índice de Paridad Política que propone ATENEA no es satisfactoria pues solo obtuvo un puntaje de 44,6 sobre 100 puntos, una cifra que lo relegan a un lugar secundario en materia de avances para la paridad y la igualdad de género en la región comparado con países de un perfil similar, como Argentina y Chile. PNUD, IDEA y ONU Mujeres (ob. cit.).

4.2. El Caso Colombia

Tal como se mostró en el apartado anterior, la Constitución Política de Colombia garantiza a las mujeres, el pleno derecho a participar en la vida política sin ningún menoscabo de su condición sexual o de género, garantizándole así mismo condiciones de igualdad como ocurre

en la mayoría de los Estados modernos en la actualidad. En el caso colombiano, ATENEA encontró una realidad muy positiva, al constatar más que aceptables progresos en el ámbito de la igualdad formal, referida a la praxis legislativa y el desarrollo normativo. Colombia ha avanzado en materia de suscribir y observar los convenios internacionales que regulan la defensa de los derechos políticos de las mujeres; pero, a pesar de eso, aún mantiene un ritmo lento en el proceso que conduce a la paridad política. (Sánchez, Llanos, & Burgos, 2019)

En un ejercicio de síntesis, se pueden recoger los rasgos más significativos que arrojo el análisis de ATENEA a la realidad de las mujeres colombianas, sin perder de vista que, aunque el objetivo del organismo es ponderar el Índice de Paridad Política del país, recoge información valiosa sobre las características que definen el andar institucional, programático y hasta social del país. He aquí, algunos datos reveladores de Colombia, en ese sentido:

- El país obtuvo un Índice de Paridad Política de 53,9 de un total de 100 puntos posibles, logrando muy buena evaluación en las dimensiones acerca de los compromisos nacionales con la igualdad en la Constitución y el marco legal y Poder Ejecutivo y administración pública; sin embargo, quedó muy mal parado al momento de evaluar la dimensión Cuota/paridad, justamente una dimensión medular que ATENEA pretende impulsar decididamente.
- La participación de las mujeres en la política ha evolucionado muy positivamente en el contexto colombiano, sin embargo, esa participación tiende a ser azarosa y poco reglamentada en el nivel interno y micro del país. Y es que, en el nivel de las relaciones concretas, donde operan los códigos culturales y de ciudadanía, persisten ciertos estereotipos en torno al rol de las mujeres, que las mantiene alejadas de los centros de decisión política, aunque muestren un alto grado de militancia partidista.
- Quizá el hecho más significativo en los últimos años en cuanto al camino hacia la paridad política en Colombia ocurrió en octubre del 2019, cuando Clara López, gano con más de un millón de votos la principal alcaldía del país en Bogotá, convirtiéndose en la primera mujer que ejercerá ese cargo habiendo llegado por la vía de las urnas y proyectándose desde ya como una posible candidata a las presidenciales próximas.

4.3. El caso Perú

En el año 2016 comenzó a implementarse el análisis de ATENEA para la realidad peruana, procurando la integración de las variables ya descritas para los casos anteriormente reseñados, y, por supuesto, atendiendo a la medición de las dimensiones que permiten obtener el Índice

de Paridad Política (Tello & Villar, 2018). En el caso particular de Perú, la información que se obtuvo puede resumirse en lo siguiente:

- Su puntaje en el Índice de Paridad Política fue de 60.1 sobre un total de 100 puntos posibles, lo que no es tan bajo, aunque tampoco llega a ser medianamente satisfactorio. En dos de las dimensiones supero el 80%, es decir, estuvo bien evaluado, que fue en cuanto al derecho al sufragio y el respecto a las leyes internacionales.
- El país mostró claros avances en el terreno del ejercicio de cargos ministeriales por parte de las mujeres, llegando a situarse en el 30% que es tenido por estos organismos como el nivel de masa crítica, pero lejos de la paridad.
- Perú mostró cosas positivas cuando se le evaluó la presencia de las mujeres en el parlamento, por supuesto, haciendo la salvedad que en el país se aplica la normativa de las cuotas. Aunque, la situación de las candidaturas y la conformación de las listas cuando se desarrollan procesos electorales sigue siendo negativa para las mujeres, se considera que hay buenas perspectivas, a pesar del controversial paso que tuvo por la política peruana, Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori que hoy cumple prisión por cargos relacionados con la saga de corrupción de Odebrecht
- De acuerdo con Tello y Villar (ob. cit.), en la realidad de las mujeres peruanas, no pueden hacerse reflexiones teóricas dejándose guiar únicamente por los indicadores del Índice de Paridad Política pues, aunque su diseño sea excelente, la verdad es que hay muchas variables que tienen relación con la vida cotidiana de las peruanas que juegan un rol importante a la hora de observar las caracterizaciones de las mujeres en este país.

4.4. Otros casos, otras realidades, mismos derechos

Sin querer restarles el mérito que tienen, sino obedeciendo a los intereses propios de realizar un análisis sucinto acerca de realidades relativamente parecidas, en la tabla 6, se esbozan las condiciones de otros países de la región, en lo que respecta al ejercicio del poder político por parte de las mujeres, bien sea a partir de la Ley de cuotas-paridad o de otros instrumentos parecidos.

Tabla 6*Cuadro síntesis de la situación de representatividad de géneros en otros países latinoamericanos*

País	Situación
Argentina	Obtuvo un puntaje global promedio de 44,7 en el Índice de Paridad Política, sobre un total de 100 puntos posibles. La ley de cupo femenino favoreció el acceso de las mujeres a las candidaturas partidarias y a los cargos de representación popular La cifra del 30 % en la dimensión “cuota-paridad”, la ubica en un lugar privilegiado respecto a otros países de la región (Caminotti, 2017).
Guatemala	Obtuvo un puntaje global promedio de 42.6 sobre un total de 100 puntos posibles, siendo el cuarto más bajo en un total de 8 países analizados El más alto puntaje lo tuvo en la dimensión del Poder Judicial y Poder Electoral donde alcanzó 77.5 puntos, bastante por encima del 50 aceptable (Vásquez, 2018).
Chile	Cifras de 2015 indican que Chile no andaba muy bien en el Índice de Desigualdad de Género (IDG) por discriminación de las mujeres en áreas como la participación política, la salud reproductiva y el mercado laboral En cuanto a los derechos políticos, a pesar de ser uno de los primeros países en elegir y reelegir una mujer como presidente de la República, en los demás poderes públicos la cuota femenina es baja (Atenea, 2015).

Fuente: Elaboración propia basada en documentos citados en la tabla

Sin duda, el protagonismo sociopolítico de las mujeres en Latinoamérica termina siendo una larga sucesión de aventuras y desventuras en donde el azar no tiene ningún peso, las luchas de género, los movimientos en múltiples áreas y dimensiones, pero, sobre todo, la tenacidad propia de las mujeres cuando les corresponde enfrentar la adversidad, han sido solo partes de ese ganarse a pulso de las mujeres, en lugar en la historia social y política de América Latina.

Capítulo II

MUJERES, GÉNEROS Y POLÍTICA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ese largo recorrido histórico, para nada lineal, que ha llevado a las mujeres latinoamericanas a enfrentar el actual estado de cosas, ha sido, como la realidad del subcontinente: diverso, incierto y cambiante. Cada país, con sus diferentes matices ha llevado el proceso con una marcada aceleración, pero con mucha dependencia de las tonalidades ideológicas que dominan el escenario en cada caso. Tal como se presentó en el capítulo anterior, existe una macrotendencia que ha conllevado al progresivo protagonismo de las mujeres y de la incorporación del enfoque de géneros en la formulación de políticas públicas en cada país y, en caso suramericano, esa tendencia ha recibido un impulso importante con la consolidación de ciertos liderazgos emergentes, identificados con la nueva izquierda mundial.

En algunos casos, como Brasil, y Argentina, la presencia de mujeres en la máxima instancia gubernamental, significó un indicador concreto del avance de una nueva forma de concebir la política, una forma en la que el género no representa una variable de importancia para definir los talentos de los y las políticas. Esos nuevos liderazgos, asociados más tarde con el llamado movimiento progresista, ha abierto espacios para un debate entre iguales, un diálogo sociopolítico en el que las mujeres dejan oír su voz con mucha fuerza y con menos atavismos culturales que en otras épocas.

En algunos países como Venezuela, la emergencia de organizaciones de nuevo tipo, la situación no ha sido tan resonante por la variedad de posturas que hacia afuera y hacia adentro ha habido respecto al proceso político que se vive en ese país. Sin embargo, eso solo ha dejado claro que, sin importar los matices ideológicos que tomen los nuevos movimientos feministas y de géneros, sus efectos se sienten con igual fuerza en la escena latinoamericana. De esta manera, en países con mayor pluralidad cultural étnica como Bolivia, Perú y Ecuador, el protagonismo sociopolítico de las se mueve sin prisas, pero también sin pausas.

1. Transformaciones históricas de la participación política de las mujeres en el contexto ecuatoriano

Ecuador es uno de los países de esa América Latina diversa, pluricultural e históricamente hostil con las mujeres, dibujada a grandes rasgos en el capítulo I. Su historia sociopolítica está llena de matices que llaman a la inquietud de quien investiga por conocer y reconocer los avatares propios de su geografía, en cuanto al papel que han jugado las mujeres para la

constitución de este presente, la forma en que el sujeto histórico, “mujer” ha trascendido los linderos que le han colocado constantemente los discursos y praxis dominantes para erigirse como un sujeto protagonista e indispensable en la dinámica de la vida pública cotidiana. Si bien es cierto, algunos de los procesos internos que han vivido las mujeres en este país, guardan similitudes con sus vecinos suramericanos y Latinoamérica en general, no es menos cierto que se pueden rastrear elementos distintivos de una realidad mutable, dialéctica y políticamente muy interesante.

1.1. Las mujeres ecuatorianas desde inicios, hasta mediados del siglo XX

Escribir sobre el proceso histórico que ha conducido a las mujeres ecuatorianas hasta su presente político es una tarea ineludible, pero -en ese sentido- hay que reafirmar que, desde estas líneas, no se pretende hacer una historiografía del protagonismo sociopolítico de las mujeres ecuatorianas a partir del siglo XX, se trata, muy por el contrario, de avivar nuevos enfoques, en donde tengan un lugar central las meditaciones en torno a los juegos de poder que, en el sentido de Michel Foucault, han entretejido las relaciones recíprocas de dominación entre las mujeres y los protagonistas del patriarcado político. Aquí se entienden las luchas de las mujeres ecuatorianas, como ese forcejeo constante del dominado frente al dominante, un forcejeo en el marco de las relaciones de poder, visto este último como una tecnología para la dominación que no es empleada, sino alimentada desde el discurso dominante (Foucault, *Microfísica del poder*, 1980).

Un enfoque de tal característica implica una visión compleja del fenómeno enriquecido desde las diferentes disciplinas, la historia, la educación, la política, el derecho, entre otras, que se entrecruzan en ese tejido social que se construye con los encuentros y desencuentros de las mujeres con su otredad edificada por el discurso patriarcal dominante. Probablemente, sea el inicio del siglo XX el periodo en el que se produce una primera, sacudida social de las mujeres ecuatorianas que, en contra de la imagen de sumisión, alimentada durante el gobierno conservador de Gabriel García Moreno (Moscoso, 1999), con la aprobación del matrimonio civil y también del divorcio.

Muchos cambios se sucedieron en esta fase inicial del siglo XX, tocando áreas importantes, desde lo religioso, pasando por lo educativo, hasta lo político, provocando cambios significativos en el orden de las estrategias de poder de los hombres en Ecuador. Considerando esos cambios y en el entendido que se trata de un haz sistémico de relaciones que mutan al

tiempo que lo hace el poder, se consideran aristas importantes de esos cambios los espacios o campos siguientes:

Las mujeres en la educación hasta mediados del siglo XX

Uno de los componentes más importantes de las estrategias de poder tejidos sobre el cuerpo, los discursos y el sentir de las mujeres es el educativo. Desde ella, se articulan un conjunto de tecnologías del poder que están dirigidas a adormecer cualquier atisbo de insurrección contra el grupo de poder, máxime cuando se trata de aminorar los intentos por irrumpir en el terreno de la cosa pública por parte de las mujeres. La división entre hombres y mujeres estaba perfectamente delineada por la sociedad ecuatoriana y remarcada por los contenidos y saberes que desde la escuela –muy pocas veces-, o desde sus hogares, formaban el espíritu y el carácter femenino.

Mientras las mujeres tenían como espacio de socialización casi exclusivo, sus hogares, los hombres tenían la libertad para actuar en el terreno de lo público, por lo que cualquier desavenencia, conflicto e inequidad entre hombres y mujeres quedaba relegado al espacio íntimo. Esa imagen de sumisión femenina quedaba sellada con la impronta cultural de los hombres como proveedores económicos, garantes del sostenimiento del hogar y sus miembros, libres incluso de la necesidad de mostrarse moralmente probos, pues el tema de la moralidad y la formación de los hijos, si quedaba en el campo de las obligaciones de las mujeres (Moscoso, 1999).

La función educativa, en el contexto de las relaciones de poder de la sociedad ecuatoriana de comienzos del siglo XX, encuentran entre sus objetivos principales, malograr la insurgencia de una imagen moderna de las mujeres ecuatorianas que pugnaban por contrarrestar ese estereotipo femenino hecho con ropajes de la moralidad y la religión lleno de bridas. La modernidad ecuatoriana, de la mano del pensamiento liberal, sin embargo, impulsa una imagen renovada de las mujeres, una imagen que les coloca en otros espacios, lejos de la oscuridad de lo privado, promoviendo el concepto de unas mujeres polifuncionales, hechas para el hogar, pero también para la construcción del espacio público.

La educación, en este sentido, va apuntalando nuevos posicionamientos de las mujeres, aunque aún muy tímidamente, y curiosamente, es el campo educativo en el que las mujeres ecuatorianas ganan terreno con mayor rapidez, cuando del espacio público se trata. Esto puede ser visto como positivo, porque se trata de la salida de las mujeres, del estrecho espacio del hogar, sin embargo, también podía ser considerado un reforzamiento de las estrategias del

poder masculino al asumir la educación que pudiesen impartir las mujeres en el campo escolar, como una continuación de su labor hogareña. En tanto la existencia de mujeres dedicadas a la docencia por aquella época, deja pistas ambiguas sobre su lucha por la igualdad sociopolítica. Ello si se toma en cuenta, además, que la iglesia católica con toda su estructura de dominación reafirmaba la necesaria sumisión femenina frente al hombre.

De acuerdo con algunos autores (Mantilla , Galarza, & Zamora , 2017), no puede analizarse el decurso de las mujeres ecuatorianas en el campo de la educación sino se toma en consideración la figura Matilde Hidalgo, la primera mujer que obtuvo el título de médico en este país a inicios del siglo XX y también la primera mujer en ejercer el voto. Este evento, lejos de ser anecdótico, comprende para el análisis, la incursión de otro elemento a tomar en cuenta cuando de las incursiones femeninas en el espacio público se trata: para el apalancamiento de la presencia de las mujeres en la dinámica pública del Ecuador, especialmente en el área educativa, es determinante la clase social a la que representa y, por ende, el dinero que posea la familia.

Con todo, es conveniente ser cuidadosos a la hora de examinar el devenir educativo de las mujeres ecuatorianas en el transcurso de las primeras décadas del siglo XX, lo ordinario es que, cuando se trata de estudios universitarios, las mujeres hicieran presencia en aquellas carreras, especie de cotos cerrados que la cultura patriarcal considera adecuada para la naturaleza femenina. Esto implica en sí mismo un mecanismo de segregación aplicado desde el discurso científico-técnico que establece demarcaciones de acuerdo a la legitimidad que otorgan quienes manejan el discurso, los jerarcas de la ciencia establecen lo que está permitido y lo que está prohibido, ya no en el campo de la socialización, sino en el espacio de los conocimientos y la formación del talento.

Desde esa perspectiva, la educación de las mujeres podrían considerarse como estrategias o herramientas que el poder androcéntrico considera pertinentes y viables para sostener el proceso de dominación, lo que en otras palabras significa, el perfeccionamiento o afinamiento del poder como maniobra, en el lenguaje foucaultiano, se cumple la máxima aquella, según la cual, el poder no es ejercido por una clase o un ente, es tramitado, extendido, prolongado, desde diferentes fórmulas de gestión que lo convierten en relaciones de reciprocidad. El dominado, participa, muchas veces gustoso, de su dominación (Foucault, Microfísica del poder, 1980), la mayoría de las veces de forma animosa y dando las gracias por su posición subordinada. Claro está, no es un beneplácito que se exhiba, como tampoco lo es, el placer que pueda sentir el

dominante. Los lugares que se ocupan en esa dialéctica del poder, la mayoría de las veces son invisibles culturalmente, por su naturalización a través de las dinámicas cotidianas.

Las mujeres ecuatorianas y la familia

Otro aspecto destacable en la primera parte del siglo XX ecuatoriano y sus mujeres, tiene relación con el papel que juega el contexto familiar como motor o inhibidor de sus transformaciones. Ahí también se debe agregar el rol de la iglesia católica por un lado y el pensamiento liberal por el otro. Sin duda, el laicismo impulsado por los liberales trajo fuertes dolores de cabeza, preocupaciones prácticas y morales para una Iglesia Católica ecuatoriana anquilosada y paquidérmica cuando de aceptar cambios culturales se trata.

Para la institucionalidad eclesiástica de la época, la familia ecuatoriana, remite a un lazo de eternidad en el que, si hubiese motivos de disolución, la culpabilidad recaerá, casi con exclusividad en las fallas femeninas. El matrimonio civil, en el marco del cual se introdujo el divorcio como una de las novedades que hacían pensar en un proceso liberador de las mujeres, solo se puede revertir, en el caso de adulterio femenino, que, considerado una afrenta moral imperdonable, otorgaba al hombre muchos más grados de libertad que a las mujeres (Moscoso, 1996). Incluso, en aquellos casos en que el adulterio se produjera del lado masculino, las leyes establecían que esto tendría que ser “público y notorio” para poder ser considerado, lo que habla a las claras del discurso patriarcal impuesto en esos primeros progresos de la valoración social de las mujeres en Ecuador.

Estos derroteros solo conducen a la consolidación como cancerberas de la moral que se le atribuye a las mujeres en ese periodo, desde el hogar, es su función mantenerse en los límites de lo establecido para ellas, socialmente hablando, importa más aquí lo cultural que lo legislativo. En ese sentido, la unidad familiar es vista como una tarea eminentemente femenina y, en consecuencia, cuando existe entropía en ese nicho, son también las mujeres quienes cargaran con la responsabilidad, descargando completamente la imagen de los padres respecto a la formación axiológica y educativa de los hijos.

En este contexto, la preocupación, social, estatal y, hasta política, pasa por mantener la lejanía entre las mujeres y las corrientes del laicismo, por ejemplo, que intentan apertrecharlas de un discurso y unas prácticas decididamente contrahegemónicas. Las mujeres aparecen como un eslabón que no puede desligarse de las relaciones de dominación alrededor de las cuales se estructura un modelo societal que las necesita para reproducirse y sostenerse. Las Iglesias, particularmente las católicas, son dispositivos del poder establecido, del poder patriarcal que

requiere mantener la invisibilización de las demandas de las mujeres pues, sobre ellas reposa mucho del peso del sistema completo sobre el que se han construido las lógicas de la dominación moderna.

La querella en este proceso, más que entre las mujeres y el androcentrismo, es entre la iglesia y el laicismo, toda vez que este refuerza los esfuerzos autonómicos de un sector femenino que no solo es clave para la constitución de la moralidad familiar, sino para la organización de la sociedad bajo los criterios de la solidaridad mecánica, fuente principal de la solidaridad orgánica que mantiene las sociedades modernas, unidas en función del progreso (Durkheim, 2014).

De hecho, esa agresiva política de laicización por parte del Estado tiene en la educación una de sus puntas de lanza, convirtiéndola en una de las principales herramientas mediante las cuales la ideología liberal, como pensamiento dominante del momento, edifica sus estrategias de poder con y desde la escuela, apoyándose en la legislación que a mitad de la primera década del siglo XX, declaró a la educación un bien de interés estatal y para cumplir con esa tarea anticlerical, blindó la ley para obtener los recursos de los mismos ingresos que la Iglesia hasta ese momento recibió para educar a la sociedad en las ideas religiosas (Sinardet, 1999).

En suma, la educación y la religión forman parte de esa triada tradicional que, entrelazada a veces, confrontada en otras ocasiones, ha contribuido de manera determinante en el entramado que deviene en estrategias y tecnologías del poder para mantener a las mujeres ecuatorianas en su condición de sumisión cultural. Como parte de ese poder androcéntrico que está en todas partes, aunque se muestre solo como elemento de algunas instituciones, escuela e iglesia se trasvasan los hilos de la dominación patriarcal sobre las mujeres ecuatorianas que, sin embargo, encuentran en la educación un buen riesgo del cual asirse para seguir ganando espacio en la consecución de la igualdad de géneros aún muy lejana para esta primera parte del siglo XX

1.2. Las mujeres ecuatorianas en la segunda mitad del siglo XX

En el transcurrir del siglo XX, más específicamente después de los años 50, con la resaca de la Segunda Guerra Mundial que asola Occidente y sume en la crisis buena parte de los países más desarrollados de la época. Las mujeres ecuatorianas, como ocurre en otras latitudes del orbe, entran en una fase de ganar terreno para la disolución de los lazos de la domesticación, mucho del poder patriarcal se debilitó ante el debilitamiento de las familias que favorecieron la consolidación del matricentrismo, un fenómeno que, aunque no es el objetivo en la búsqueda

de la igualdad de las mujeres frente a los hombres, se encuentra más cercano a la realidad social que les toca vivir a muchas mujeres, abandonadas a su suerte como resultado, muchas veces de la paternidad irresponsable, más que de la crisis económica.

Según Zúñiga (2006), es precisamente en el año de 1950 que el censo nacional en Ecuador, devela una gran proporción de mujeres respecto a lo que podía estimarse antes de dicho censo. Este evento, representa un elemento analítico de envergadura para constatar la transformación que sufre la imagen pública de las mujeres ecuatorianas en este contexto, su importancia demográfica la perfila en el campo laboral como una mano de obra importante para las áreas del trabajo doméstico, pero también de las incipientes fábricas o como pequeñas emprendedoras en la elaboración y venta de alimentos.

Las circunstancias laborales que rodean a las mujeres ecuatorianas

Desde mediados del siglo XX hasta su conclusión, las mujeres del Ecuador son parte importante de un proceso de fortalecimiento de la economía nacional que, sin embargo, las mantiene en una posición de subordinación laboral o salarial, incomprensible desde la perspectiva de género que poco a poco va ganando terreno en el país y en Latinoamérica en general. Su labor económica, cada vez más necesaria para el desarrollo de la nación se mantiene bajo perfil relegado por prácticas de cultura empresarial entronizado en los estilos gerenciales que predominan en el contexto económico ecuatoriano.

Esa imagen de una mujer subpagada, a quien no se le reconoce su doble jornada laboral perdura incluso hasta principios del siglo XXI. En ese sentido existe un proceso paradójico, en cuanto a la percepción de la igualdad entre las mujeres y los demás géneros, porque, por una parte, se da una gran apertura y flexibilización del mercado empleador para las mujeres, más, sin embargo, persiste las condiciones desiguales impuestas por los empleadores. Y es que, en condiciones de igualdad o paridad de géneros, lo deseable es que, ni los salarios, ni los sistemas de movilización dentro de los organigramas empresariales, dependan del género o el sexo de los empleados y empleadas.

Una clara perspectiva de las condiciones del empleo femenino en Ecuador, durante este período es complicada de estructurar cualitativamente, porque en todo caso la interpretación está relacionada con la tendencia ideológica de quien interpreta, pero en la figura 4, se resumen algunos datos estadísticos aportados por Zúñiga (2006), sobre el tema en su visión cuantitativa

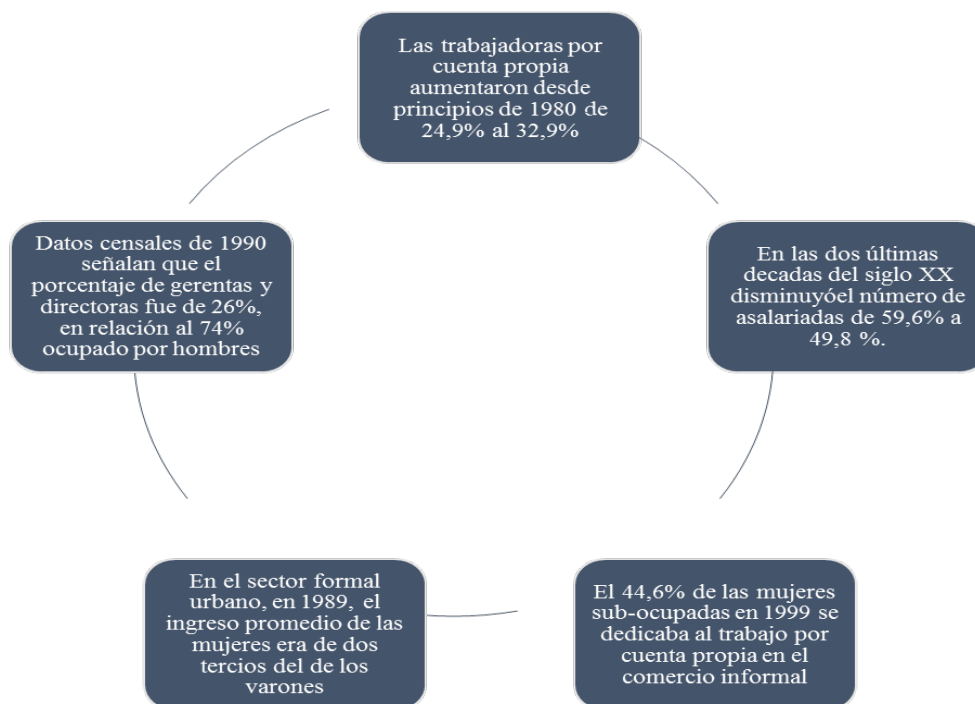


Figura 4. Indicadores generales de la situación laboral de las mujeres ecuatorianas después de la mitad del siglo XX. Fuente elaboración propia basada en Zúñiga (2006)

Lo que se desprende de estas cifras es la convicción de un incremento cuantitativo en casi todas las esferas o dimensiones de la vida laboral de las mujeres, pero al tiempo se obtiene una clara idea de la discriminación que, en ese terreno, mantiene a las mujeres ecuatorianas en un plano secundario respecto a los hombres, y es que, la integración de las mujeres al mundo fabril y empresarial se da de manera condicionada a una transformación de las redes de poder que se articulan como parte de esquema del patriarcado cultural que las mantiene en estado de sumisión. Ciertamente, en la década de 1980, sobre todo, se produce un fuerte aluvión de mujeres ganando grados de autonomía al ser considerada mano de obra especializada, sin embargo, allí se mantiene un esquema y un discurso que le impide, en la mayoría de los casos, competir en condiciones de igualdad con sus pares masculinos.

Las mujeres, el contexto educativo y su desarrollo en esta etapa

Las transformaciones que se iniciaron a mediados del siglo XX, acicateadas por la necesidad de superar las dificultades de la crisis post bélica mundial, siguen mostrando sus efectos en el crecimiento de la incorporación de las mujeres ecuatorianas al mundo educativo. Hay, sin duda, un cambio significativo, social y culturalmente hablando, en cuanto a la evaluación de los talentos femeninos para la vida pública, eso se consolida con la sostenida incursión universitaria de las mujeres que, aunque aún les mantiene en el ámbito de las profesiones

conocidas tradicionalmente como “para mujeres”, de a poco, ganan terreno para los oficios en donde las diferencias de géneros tienden a ser relegados a un plano menos importante.

Las barreras persisten, pero las mujeres siguen labrando un espacio mediante su constancia y motivación al logro, que es acompañada desde la dinámica estatal ecuatoriana con algunas acciones enmarcadas en la estructura jurídica internacional cuyos instrumentos principales -tratados, declaraciones, entre otros- han sido refrendados por el Estado ecuatoriano, lo que le obliga a accionar en ese sentido. Puede ser que esa dinámica marcada por la obligatoriedad del Estado no sea lo socialmente deseable, no obstante, ayuda a abrir espacios de participación que antes no existían para la educación y el trabajo de las mujeres.

Uno de los indicadores de la ampliación de oportunidades educativas para las mujeres y búsqueda de la igualdad de géneros, es el progresivo incremento del número de niñas matriculadas, que se produjo a partir de 1960, que además va acompañada de nuevas políticas educativas con vocación feministas en las que se privilegia la perspectiva de las mujeres como actores sociales e históricos, integradas de pleno derecho a una sociedad de iguales. Formalmente se fortalece esa imagen de una igualdad social que es reforzada por la educación, sin más obstáculos que los que se produzcan como derivación de los talentos individuales que cada persona tenga, independiente de su género.

Obviamente, la situación concreta en lo que respecta a los indicadores cuantitativos en el terreno de la educación para hombres y mujeres, no se traduce, para la época un resultado directamente positivo para la eliminación de las formas que adopta la discriminación de las mujeres en el territorio ecuatoriano, pero va sumando elementos, jurídicos y políticos que poco a poco van trastocando las relaciones y la lógica de poder que suelen venir adheridas a la situación educativa. Se puede decir, en cualquier caso, la accesibilidad que se crea para una educación con enfoque de géneros, aunque aún no consolidada, se debe a la permeabilidad de aquellos espacios, en donde se toman las decisiones educativas, por lo que la formación que reciben las mujeres en este contexto trocará las relaciones de dominación en los periodos siguientes.

Los movimientos de mujeres

Durante todo el siglo XX se consolidaron los movimientos de mujeres en sus diferentes nomenclaturas, feministas, géneros, o simplemente “de mujeres”, y es que ya desde el siglo anterior se habían sentado las bases para una reacción enérgica de las féminas, en cuanto al cuestionamiento de los discursos y las prácticas que se tejen alrededor de la relación entre

hombres y mujeres. Tradicionalmente estas críticas se dirigen a los temas que tienen que ver con las relaciones sexuales, los roles dentro de las familias, y los aspectos laborales; más contemporáneamente se extienden a las cuestiones sobre el poder, el reconocimiento de los derechos políticos y, por supuesto, el trato igualitario en el terreno educativo y laboral (Vega, 2004).

En el caso ecuatoriano, y en el resto del mundo, la segunda mitad del siglo XX es determinante para la reivindicación de las mujeres, pues se da una suerte de revolución teórica que destaca la necesidad de fortalecer el papel de la cultura y sus determinaciones para el desarrollo en sociedad de hombres y mujeres. Hay un claro rechazo al enfoque biologicista, para rescatar el análisis del papel dominante en la configuración de las relaciones sociales en que se involucran las personas.

En este período, queda claro que los movimientos feministas no se constituyen en iniciativas para la venganza, hombres y mujeres son vistos como dos partes complementarias de la sociedad que requieren un tratamiento igualitario. La idea es lograr un ambiente social que posibilite el ejercicio de la libertad por parte de las mujeres; una libertad que implique instituciones educativas justas y neutrales, en donde el talento de las mujeres encuentre la misma disposición y medios para su desarrollo; una estructura jurídica sin tendencias patriarcales que le proteja contra la pérdida de derechos adquiridos y le permita obtener los que aún le son negados y; una cultura sensible naturaleza a su lucha por la igualdad en el contexto de las familias, con hijos y padres conscientes de su, frecuente doble rol.

En esa perspectiva evolutiva, el Estado ecuatoriano, ya en la última década del siglo XX, fortalece, desde los cambios constitucionales, el enfoque de géneros y la lucha de las mujeres, pues en esa etapa se impulsan una buena cantidad de transformaciones que se orientan en varias direcciones, entre ellas, el tema de los derechos humanos y su reconocimiento pleno en el terreno jurídico; la mixtura de los movimientos de mujeres que incorpora una diversidad de perfiles, desde las indígenas, pasando por las ecologistas y las mujeres que defienden la diversidad sexual, hicieron parte de ese movimiento de mujeres multidiverso y complejo que, aun hoy día, identifica los movimientos de mujeres en el Ecuador (Aguinaga, 2012).

1.3. Las mujeres ecuatorianas en las primeras décadas del siglo XXI

No cabe duda que el siglo XXI desencadena una serie de transformaciones sin precedentes en la historia del mundo moderno, especialmente de Occidente, y uno de los espacios más trasmutados de estas dos primeras décadas es aquel en donde se debate acerca de la igualdad

entre mujeres y hombres, igualdad de géneros e igualdad en la diversidad sexual. En el caso ecuatoriano, este inicio de siglo es particularmente intenso para el debate y las acciones que articulan el poder político con la defensa de los derechos de las mujeres, la cara indígena de los movimientos de mujeres se convierte en multicolores con la integración de las luchas contra el neoliberalismo, el patriarcalismo y el racismo que aún persiste en la cotidianidad de los ecuatorianos.

Ahora bien, continuando con el objetivo de plasmar una imagen socioeconómica y política de las mujeres ecuatorianas en estos períodos, lo más amplia posible dentro de la parquedad propia de un trabajo como este, se procede a tocar, de nuevo, los temas que tienen que ver con su situación en tres de los ámbitos ya tocados para otras etapas: en el terreno de lo laboral, el ámbito de la educación y en lo que respecta a los movimientos sociales -el tema político es materia de un apartado completo más adelante-, siempre teniendo como marco general, el contraste con las relaciones de poder que construyen, modifican y alimentan cada uno de estos espacios de relaciones sociales.

Las mujeres ecuatorianas y el trabajo a inicios del siglo XXI

Las primeras décadas del siglo XXI, encuentran a Ecuador con un claro protagonismo de las mujeres en el campo laboral, su masiva incorporación a las empresas, industrias y fábricas es una realidad. Queda atrás entonces, esa cotidianidad laboral en la que las ecuatorianas hacían sentir su presencia solo en labores domésticas o en trabajos y profesiones “para mujeres” (Zúñiga, 2006). No obstante, la incorporación constante de las mujeres en actividades empresariales no se traduce en una reducción de su jornada doméstica, lo que sigue mostrando una discriminación y explotación social de las mujeres y las funciones socioculturales asociadas a su papel en la sociedad del nuevo milenio.

En virtud de estas consideraciones, es prudente no atomizar las circunstancias laborales de las mujeres ecuatorianas para su análisis, pues en este país, más que en ningún otro de Latinoamérica, la composición y el mercado laboral es complejo. Se tiene, en un primer momento, una situación significativa para sopesar, que es la división entre trabajo formal e informal, encontrándose una gran franja de población, mujeres y hombres, en el sector informal, con muy pocos controles gubernamentales, leyes ambiguas e inobservancia de las regulaciones del trabajo establecidas por el Estado. Con seguridad, entre los trabajadores informales, hay muchas mujeres que poseen trabajos con mucha menor remuneración que sus

pares masculinos, pero es difícil precisar cifras por las anormalidades que presenta este ámbito laboral.

De otro lado, las mujeres que se incorporan masivamente al mercado laboral en este periodo enfrentan un contexto con una débil seguridad social y condiciones de trabajo riesgosas o discriminatorias que las relegan, en muchas ocasiones a la categoría de subempleadas o subpagadas, ya que persiste una infravaloración de las mujeres como sujeto económico. Incluso en su rol como profesionales y, aun en pleno siglo XXI, a las mujeres se les discrimina salarialmente y se les obstaculiza de manera estructural, sus posibilidades de hacer carrera en las esferas más altas de las empresas, independientemente que se trate de empresas públicas o privadas.

El debate en torno a la idoneidad de pasar de los “trabajos para mujeres” a la imagen de “mujeres que trabajan” no ha seguido un camino sencillo tampoco en los inicios de este siglo. Aunque, también hay que decir que algunas empresas en el Ecuador si han entendido que la igualdad de género y su incorporación como una variable económica puede representar una ventaja competitiva pues ayuda a crear una imagen positiva de la empresa de cara a la valoración social (Estrada, 2019). Eso es parte de los cambios que se producen aledaños a la transformación de las relaciones entre los géneros, se debilitan las etiquetas culturales rígidas y las personas adquieren una significación, eminentemente más subjetivas, más vinculadas a su “ser”, que al hecho de “pertenecer” a un género.

En cuanto al tema laboral, el llamado de atención que realizan algunas organizaciones multinacionales en los inicios del siglo XXI, en medio del convulsionado clima ecuatoriano que resurgía luego de un golpe de estado -año 2000- y comenzando la breve presidencia de Lucio Gutiérrez, estaba referido a la necesidad de incorporar en las legislaciones y prácticas del Ecuador, las regulaciones derivadas de las normativas aceptadas internacionalmente que procuran un equilibrio entre las oportunidades de empleo, los niveles de salario igualitario y condiciones de trabajo adecuadas para las mujeres. Temas por demás actualizados a la luz de una sociedad global que requiere una sintonía con los centros de poder económico, pero también con el progreso de las organizaciones profeministas.

De nuevo se hace énfasis en que las políticas de promoción de la equidad de géneros en el ámbito empresarial, en ningún caso procura ventajas para las mujeres frente a los hombres, sino que, por el contrario, unas reglas de competencia laboral claras que tomen en cuenta la naturaleza de las nuevas leyes y el contexto de una sociedad de la información en boga que, en el albor del nuevo siglo, sugiere la imagen de unas mujeres talentosas y empoderadas que solo

demandan igualdad de oportunidades. Este ambiente de “ganancias” para el enfoque de géneros se articula, políticamente hablando al discurso de los movimientos progresistas, entre los cuales, la situación del Ecuador, como la de otros países latinoamericanos comienza a ganar adhesión.

Mujeres ecuatorianas y educación a inicios del siglo XXI

Este siglo comenzó de manera bastante particular en Ecuador, el golpe de estado que depuso a Lucio Gutiérrez y que fue seguido por varias presidencias consecutivas, antes de la llegada de Rafael Correa al poder, produjo un desencadenamiento de acontecimientos que bien pueden significar los antecedentes de la presencia protagónica de las mujeres ecuatorianas en el contexto de la Revolución Ciudadana, cuyos inicios se ubican en el año 2007.

No obstante, la verdad es que comenzando el siglo, hay al menos desde lo formal, igualdad en las cifras y oportunidades de acceso de las niñas y niños al sistema educativo ecuatoriano, lo que, sin embargo, no garantiza las mismas oportunidades de prosecución de sus estudios y del resguardo de las niñas, en cuanto a no exponerlas a ambientes poco seguros o violentos, por lo que se considera que en estos años la equidad de géneros en las escuelas es más ficción que realidad (Consejo Nacional de las Mujeres del Ecuador, 2005).

Esta situación de inequidad en la permanencia o éxito final de niñas y niños en el sistema educativo formal, se alimenta de la falta de transparencia para medir la variable en cuestión, lo que suele ocurrir es que las mediciones se hacen respecto al ingreso y no sostenidas en el tiempo. Si esa variable se considerara en su justo valor, podrían sopesarse adecuadamente también al momento de formular políticas públicas con perspectiva de géneros que puedan sostener el apoyo para las mujeres, más allá de su formación, apuntando a lo es su proyecto de vida y, armándole intelectualmente para enfrentar el hostil mundo patriarcal que aún impera en algunos espacios de la sociedad ecuatoriana del siglo XXI.

Profundizando un poco más en los argumentos y datos presentados por el Consejo Nacional de las mujeres del Ecuador (CONAMU) en el año 2003, las dificultades que atraviesan las niñas ecuatorianas para mantenerse y egresar del sistema educativo no pueden ser menospreciadas como datos menores. Las razones de ese fenómeno hablan a las claras de la persistencia de relaciones de dominación sexual o de géneros, en los que las mujeres son obligadas, desde muy temprana edad, a asumir compromisos que están más allá de su desarrollo social, es decir, las niñas, aun en edad escolar y con la necesidad de comprometerse con su

formación académica, deben ocuparse del cuidado de hermanos menores o de ayudar en labores de la casa, respondiendo estas asignaciones, casi exclusivamente a su condición de mujer.

A su vez, muchas de las niñas y adolescentes que desertan del sistema escolar, lo hacen obligadas por un embarazo no deseado que desata de allí en adelante, una serie de eventos y circunstancias sociales en las que, difícilmente las mujeres puedan competir con los hombres, por ejemplo, en los espacios laborales, pues una joven mujer y madre soltera, tiene dos contrapesos en su contra -ser mujer y ser madre- que se traducirán en la creación de ambientes de mayor discriminación social. Esta última realidad, el embarazo a temprana edad, contradice el derecho de las mujeres a recibir la necesaria información y formación para desarrollar una salud reproductiva óptima, aunque, cuando se trata de ese tipo de aprendizaje, es justo decir que las responsabilidades están repartidas en forma igualitaria entre la familia, el Estado y la educación.

En definitiva, el inicio del siglo XXI fue turbulento en el Ecuador, prácticamente toda la primera década la paso en un proceso, primero de rectificaciones, de corrección de rumbos económicos, sociales y políticos y; posteriormente en la construcción de un nuevo modelo societal, de la mano de Rafael Correa que, sin duda, inundo el discurso y la praxis política de una gran cantidad de nuevos enunciados, nuevas praxis y nuevas estrategias alrededor del tejido socio-cultural ante el que se debaten las mujeres ecuatorianas, en procura de su igualdad.

En ese contexto, los movimientos de mujeres también jugaron un papel fundamental para la construcción de nuevas políticas e instituciones, ofrecidas desde la retórica del correísmo, como parte de un conjunto de procesos de inclusión pensados para subsanar las heridas de la discriminación promovida por el neoliberalismo, en tal caso, la reivindicación de las mujeres, en este periodo de la dinámica sociopolítica del Ecuador, no es un fin en sí mismo, sino, una de las tantas estrategias discursivas que fortalecen el poder asumido en estos años por la llamada Revolución Ciudadana.

2. La realidad organizacional: protagonismo de las mujeres en los partidos políticos

En el terreno más pertinente al objetivo general de esta Tesis Doctoral, se procede en este apartado a analizar, a partir de una hermenéutica crítica, la situación/posición que han ocupado, ocupan y se proponen ocupar las mujeres ecuatorianas en las estructuras organizativas de los partidos políticos; en sus prácticas y estrategias de poder; el lugar que ocupan como enunciados discursivos de sus postulados y; la manera en que las mujeres se mimetizan, se confrontan y/o negocian con el poder del patriarcado cultural-político para mantener abiertas las

oportunidades de convertirse, no solo en sujeto del discurso político dominante sino en productoras de ese discurso.

Se entiende que Ecuador presenta una realidad compleja cuando se le analiza desde la perspectiva sociopolítica en cualquiera de sus áreas, pero lo es aún más, cuando se trata de determinar cuál ha sido el rol que han cumplido las mujeres ecuatorianas en la trama organizacional de los partidos políticos, sin importar cuál ha sido la trayectoria de estas organizaciones, ni su orientación ideológica. Es un ejercicio a la vez, de historiadora y de antropóloga lo que toca hacer, pues las prácticas culturales que han invisibilizado a las mujeres se reproducen como “objetos” discursivos, sustentados en la tradición, con todo el peso social que ella tiene. El dominio ejercido por el poder androcéntrico ha de ser develado y higienizado, como se haría con una pieza de cualquier metal, encontrado en algún recóndito lugar del territorio ecuatoriano.

2.1. El protagonismo político de las mujeres en los partidos de orientación liberal

Hay coincidencias importantes, entre economistas, politólogos y científicos sociales en general, en atribuir el origen del pensamiento liberal a las ideas que germinaron en Inglaterra, en el siglo XVII, alrededor de planteamientos como el de Adam Smith en su investigación sobre “Naturaleza y causas de la riqueza de las naciones” (Trimíño, 2010). Asimismo, hay consenso en cuanto al argumento, según el cual, el movimiento de mujeres y el feminismo en general, tiene amplios fundamentos en las ideas liberales, especialmente aquellas referidas a la igualdad de sexo y de géneros que se consolidan en los sistemas políticos modernos y por ello es particularmente importante conocer la forma en que las mujeres han ido tomando protagonismo en las organizaciones políticas que tienen sus cimientos en los planteamientos liberales, especialmente los partidos políticos en el contexto ecuatoriano.

No obstante, cuando se ausculta la relación de la lucha de las mujeres por alcanzar la igualdad frente a los hombres en el ámbito político, independientemente se trate de la realidad ecuatoriana o no, lo conveniente es recordar que existen tantas coincidencias como divergencias entre las ideas liberales y los movimientos feministas. Y lo que ocurre es que no hay un solo feminismo, sino una diversidad de manifestaciones de esa índole que pueden ser cercanas o críticas de las organizaciones de orientación liberal. En tal sentido debe contextualizarse de que feminismo se trata cuando se plantea una relación cercana entre estas dos concepciones.

Por otro lado, tampoco puede plantearse una homogeneidad absoluta entre los movimientos liberales pues el liberalismo, ya sea como filosofía o como movimiento político también es diverso y conviene mantener la precaución analítica para no etiquetar ciertas organizaciones como liberales sino se destacan los matices organizacionales que posea. En sus fundamentos el liberalismo puede ser abordado desde tres perspectivas: a) el liberalismo clásico, que tiene una fuerte connotación política y económica inspirado en el individualismo o los derechos individuales como uno de sus axiomas fundamentales; b) el liberalismo moderno, que se nutre de las ideas propias de la postguerra y la superación de la crisis económica de los años 20' y; c) el neoliberalismo, concebido como una respuesta al agotamiento de ciertas premisas económicas del liberalismo moderno, con una fuerte influencia del proceso globalizador y, por ende, de los diferentes movimientos críticos en los ámbitos económicos y sociales (Vargas, 2007).

Por su parte, en lo que respecta al liberalismo en Ecuador, no es el propósito de este estudio realizar una cronología histórica del tema, se trata, en todo caso de acercarse a la realidad organizacional de los partidos ecuatorianos, con ideas liberales en sus estrategias programáticas, subrayando la necesidad de examinar los partidos como entidades referenciales, en atención a su trayectoria en la dinámica sociopolítica del país, y a la participación activa en su seno de lideresas que hayan sido sujetos importantes en la vigencia y resonancia que puedan tener esas organizaciones. Como es previsible, aunque la presencia de las mujeres no haya sido importante en su origen, los partidos de orientación liberal muestran una mayor receptividad a los enfoques de géneros, producto de los principios que sustentan su ideología.

El Partido Liberal Radical Ecuatoriano (PLRE). Fundado oficialmente en 1925, puede tomarse como el representante originario de esta corriente ideológica es, además, el partido que más presidentes tuvo desde su fundación hasta su disolución en el año 2002. Esta organización considera necesario rescatar la civilidad y promover la importancia del ser humano individual y su motivación al logro para lograr la construcción de una sociedad económicamente sólida. Enfatiza igualmente en las ideas de igualdad y justicia, pero como lógicas derivaciones del ejercicio de una libertad individual en la que cada persona se convierte en una fuente de desarrollo, por lo que sus propuestas son tomadas por algunos como de centro derecha (Quintero, El mito del populismo en el Ecuador, 1980).

Es interesante destacar, en cuanto a la presencia de las mujeres en esta organización, el protagonismo de Ivonne Juez Abuchacra de Baki, una exestudiante de artes en la Sorbona, diplomática, y quien justamente alcanza su mayor realce en el año 2002, en el que esta

organización desaparece, al menos con esta denominación. Baki fue candidata presidencial ese año en el que resultó electo Lucio Gutiérrez. Entre sus propuestas programáticas, la candidata consideraba primordial y un fortalecimiento de la dolarización y la participación de las empresas privadas en los planes de desarrollo del país. Su candidatura no logró calar las preferencias del electorado, alcanzando apenas el 1.77 % de los votos lo que impidió al PLRE seguir existiendo oficialmente por no alcanzar el 5% mínimo requerido para mantener su status.

El Partido Social Cristiano (PSC). Su eslogan “progreso en libertad”, es un claro indicador de su orientación ideológica, en tanto se erigen como una organización que defiende la necesidad del libre mercado con cierto contenido conservado al vincular sus premisas fundantes a la doctrina social de la iglesia católica. Entre sus fundadores destacan Camilo Ponce Enríquez y Sixto Durán Ballén, quienes alcanzaron la máxima magistratura del país en 1956 y 1952, respectivamente (Quintero, 1980). Puede decirse que al igual que otros partidos de su orientación, el PSC vivió una etapa muy difícil para mantener su vigencia y trascendencia social durante el gobierno de Rafael Correa, encarnando junto a otras organizaciones como el Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) uno de los frentes parlamentarios más críticos de la gestión del presidente y opositores a la convocatoria para una Asamblea Nacional Constituyente propuesta en el año 2007.

El protagonismo de las mujeres en esta organización toma cuerpo con la figura de Cynthia Viteri, quien ha sido candidata presidencial en un par de ocasiones por este partido en las elecciones de 2006 y, más recientemente en el año 2017. Viteri, abogada, periodista y con experiencia en la Asamblea Nacional, en su segunda disputa presidencial se enfrentó a siete candidatos hombres e intentó conducir el debate hacia lo que ella consideró las prioridades del pueblo, tratando de focalizar el interés hacia las políticas de empleo, educación y producción (Molina, 2018). La figura de Viteri, enfrente no solo los prejuicios sociales que producen las mujeres cuando alcanzan ese nivel de liderazgo; el rechazo a su figura también es el resultado del descreimiento o desconfianza que se genera como consecuencia del debilitamiento de la figura reivindicativa de la RC, pues, aunque ella no perteneciera al partido de Correa, se inscribe en la figura del político tradicional.

Movimiento Creo. Es un partido político de reciente aparición en la escena democrática del Ecuador, pues fue aceptado oficialmente en el año 2012 por los organismos electorales, participando por primera vez en las elecciones presidenciales de 2013, alcanzando un segundo lugar con su candidato, Guillermo Lasso. Su doctrina puede ser considerada de derecha moderada y su lugar en la política ecuatoriana se consolidó el año 2014, cuando, en las

elecciones seccionales, alcanzó 22 alcaldías, conformando además parte importante en el frente opositor al gobierno de Rafael Correa y las iniciativas legislativas de su gobierno, especialmente respecto al tema de la reelección indefinida. (Enríquez, 2017)

En cuanto al protagonismo de las mujeres, destaca la figura de Mae Montaña quien es fundadora del movimiento y aunque en estos momentos se encuentra fuera de la organización, fue quien encabezó en el año 2013, la lista de candidatos a la asamblea en la que el movimiento alcanzó once curules convirtiéndose así en la segunda fuerza parlamentaria del Ecuador. De origen humilde, esta mujer forma parte de los actores políticos que, una vez fuera Rafael Correa, pudiese representar el resurgimiento de los partidos con orientación liberal y, aunque no se encuentre actualmente en el radio de acción de su partido, su accionar ha contribuido a darle un lugar a las mujeres ecuatorianas en el debate político ecuatoriano.

2.2. El protagonismo político de las mujeres en los partidos de orientación socialista

Es relativamente previsible que una de las ideologías con mayor propensión a acoger en su seno los movimientos de mujeres sea la socialista. Considerando que la fuerza con que se consolida la economía capitalista en los albores del siglo XIX mantiene el sistema de ideas patriarcales dominantes y, es en ese sentido que el ideario socialista es enarbolado por algunas visionarias de los futuros movimientos feministas, como es el caso de Flora Tristán (Iribarne, 2009). Esta mujer francesa con raíces peruanas es presentada como la más firme representante del llamado feminismo socialista en el que parecen fundirse las manifestaciones filosóficas del pensamiento ilustrado respecto a los derechos de las mujeres, la subsiguiente igualdad de género y, las ideas propias de la utopía socialista que rechaza el androcentrismo y el patriarcado propio de la sociedad capitalista.

En su pensamiento, que en la práctica es el pensamiento de los partidos y organizaciones socialistas originarias, se apuesta por la unidad de la clase obrera y, fundamentalmente, por la reivindicación de las mujeres cuyos derechos han sido recurrentemente vulnerados por el patriarcalismo moderno. Sin encasillar sus planteamientos en el marco recurrente de oponerse a las ideas de la industrialización, la idea de la unidad de aquellos que tradicionalmente sufren las imposiciones del poder, esta figura propone una integración del talento de las mujeres en cualquier esquema de progreso, alertando, por supuesto, a la imposibilidad del capitalismo para generar la justicia social que las reivindicaciones de las mujeres necesitan.

En lo que respecta a Ecuador, de acuerdo con Melgar (2015), las ideas socialistas comienzan a debatirse en la década de 1920, precisamente el periodo histórico de la primera postguerra

mundial y en congruencia con la realidad política de otros países de América del Sur. Es así como, el contexto formativo del socialismo en el país está marcado por la crisis económica que supuso el deterioro de la producción de cacao y la agroexportación en general, más aún, frente a la elevación de la competitividad en el mercado de bienes a nivel mundial. De cualquier forma, en ese proceso y, de nuevo, congruente con las circunstancias regionales, son los universitarios los primeros en enarbolar las ideas de la igualdad socialista a través de las críticas que le hacen a las estructuras tradicionalistas del poder académico y político, apoyados en la emergente clase intelectual de izquierda que comenzaba a ganar tribuna y que culminaría en la formación de las primeras organizaciones políticas socialistas.

El Partido Socialista Ecuatoriano (PSE)

Fundado en 1926, acompañando en su origen al opositor PLRE, se autodenomina partido de izquierda y se apoya directamente en las ideas del socialismo latinoamericano de la primera postguerra mundial. Ciertamente, aunque su fundación pueda considerarse una reacción de las clases intelectuales de izquierda frente al surgimiento del liberalismo y conservadorismo, más allá de eso, el PSE, representa la formalización organizacional de las ideas marxistas en el contexto ecuatoriano, proponiendo entre sus iniciativas originales, la necesidad de socializar los medios de producción e imponer una economía planificada desde el Estado para centralizar y distribuir de manera más justa e igualitaria los servicios públicos (Freidenberg & Alcántara, 2004).

Para entender la evolución y la actualidad de la izquierda ecuatoriana, es importante tener en cuenta que, en sus orígenes, las ideas socialistas se concretan en varias tendencias, tales como el militarismo, el cristianismo, el intelectualismo, el gremialismo, entre otros. Estas vertientes participan activamente en la transformación social de un país que sentía los efectos perturbadores de la crisis económica. Sin embargo, persistieron serias diferencias y cuestionamientos internos que distanciaban a los grupos de socialistas emergentes en diferentes partes del país, siendo los más distantes, las agrupaciones de Quito y la de Guayaquil. Está por demás decir que esas diferencias organizacionales, algunas con raíces profundas en la cuestión étnica y cultural, impidieron la formación de un bloque ideológicamente más fuerte, de cara al futuro.

Finalmente, es la Asamblea Nacional Socialista, realizada en mayo de 1926, la que da origen al PSE, allí se fijan, igualmente las propuestas programáticas del partido, se organizan alrededor de la convicción en cuanto a la construcción de una sociedad igualitaria donde se

concrete la supremacía del bien colectivo sobre el individual, la defenestración del estado burgués para constituir una planificación popular con una base esencialmente educativa, de hecho, la educación es planteada como una necesidad, de ser preciso coactiva, pues en ella está la base para desarrollar una conciencia de clase que permita a los sectores productivos asumir las riendas de la sociedad y sustituir la explotación social de los trabajadores por un modo de producción social (Páez A. , 2001).

En su evolución el PSE sufre varias escisiones, lo que es completamente normal, no solo por las tensiones propias de la política moderna, sino por el hecho de haber estado constituido, como ya se dijo, por diversas tendencias que llevarán posteriormente, a la creación de una gama de opciones izquierdistas en el panorama político ecuatoriano. Entre los grupos que derivan de esa división, quizá el más importante sea el que termina con la fundación del Partido Comunista ecuatoriano, pero también surgen en ese proceso la Vanguardia Socialista Revolucionaria del Ecuador (VSE) y otras organizaciones orientadas por las ideas marxistas. El marxismo es, en todo caso, una suerte de etiqueta social más que programática, pero igual está allí como marco de referencia.

En cuanto al protagonismo de las mujeres en esta organización socialista, conviene destacar la polémica figura de Guadalupe Larriva. Esta destacada educadora política ecuatoriana tuvo importantes figuraciones como representante del PSE al cual dirigió en el año 2005, también fue gremialista dirigiendo la Unión Nacional de Educadores y, en su última figuración de importancia se desempeñó como Ministra de la Defensa del primer gobierno de Rafael Correa siendo la primera mujer y además el primer civil en ocupar un cargo de esta magnitud, aunque apenas unos días después falleció en un accidente aéreo. La forma trágica en que terminó su vida, con apenas 50 años de edad y en plena figuración política, quizá hay impedido el protagonismo de una mujer que parecía destinada a ser protagonista de la escena política en el marco de la RC.

La Izquierda Democrática (ID)

De acuerdo con los planteamientos de Freidenberg y Alcántara (2004) esta organización ha sido una de las más sólidas del sistema de partidos del Ecuador, tomando en sus estructuras y los procesos internos mediante los cuales propone una acción política que sobrepasa lo meramente ideológico y plantea la unión entre la teoría y la praxis. En sus orígenes, representa un frente organizacional frente a la hegemonía de Velasco Ibarra y las intenciones del PLRE de pactar con el velasquismo sin tomar en cuenta el sentir de sus bases. Es entonces, en 1970,

cuando Manuel Córdova es capaz de articular el descontento de varios exlíderes de los partidos liberal y socialista, creando la plataforma programática de la ID.

La orientación ideológica de esta organización queda clara, no solo en su denominación, sino en su declaración de principios de 1994 en el cual declara su adhesión al socialismo democrático, y la necesidad de transformar el Estado ecuatoriano en aras de propulsar una sociedad igualitaria con una distribución equitativa de la propiedad y de la riqueza en general, destacando entre sus propuestas las ideas fuerza de: a) la libertad, pero aclarando que ella solo es posible en un contexto en el que los medios de producción han sido socializados; b) la justicia social, entendida como el complemento de la libertad, cuya conjunción permite a su vez, la construcción de una sociedad de iguales; c) la mujer, destacando que sobre ella recaen con mayor fuerza los efectos perversos de los ajustes económicos neoliberales, más aun, considerando la composición de las familias ecuatorianas (Convención Nacional de la Izquierda Democrática, 1993).

En cuanto a su posición frente al protagonismo sociopolítico de las mujeres ecuatorianas, esta organización fue una de las más grandes impulsoras desde el parlamento nacional de la Ley de cuotas, que ha permitido una mayor presencia electoral de las mujeres, frente a la dinámica patriarcal tradicional en el seno de los partidos políticos. Una de sus líderes más importantes en la actualidad, es mujer, se trata de Wilma Andrade, quien es presidenta del partido además de haber sido vicealcaldesa del municipio metropolitano de Quito desde el 2002 hasta el 2006, año en el que fue electa para el Congreso Nacional. Andrade es, además, una mujer reconocida por haber logrado la reinscripción del partido ID en el Consejo nacional Electoral en el año 2016.

Su figura, cobra importancia por ser en la actualidad la Presidenta Nacional de la Izquierda Democrática. Así mismo, por haber participado por su partido en las elecciones legislativas del año 2017, en donde resultó electa hasta el 2021. Allí tendrá la posibilidad de acrecentar su liderazgo y, eventualmente, convertirse en un sujeto político con el peso suficiente para colonizar el discurso que prepara los nichos sociales en los que se habitan las aspiraciones presidenciales. El valor de Andrade adquiere valor, más que por su carácter emblemático al representar una opción clara de poder político, por tener una presencia formal, concreta en la dinámica sociopolítica del país. Podría decirse que la labor legislativa de ella, solo es la consecuencia de estar allí, en un lugar en el que tradicionalmente se toman las decisiones y desde donde puede tener injerencia para la, tan ansiada transversalización del enfoque de géneros.

El partido Alianza País

Aunque en la actualidad, a raíz de la ruptura entre su líder histórico máximo, Rafael Correa y el Presidente de la República actualmente, Lenin Moreno, lo cierto es que esta organización se dio a conocer en el marco del resurgimiento de las ideas socialistas en el cono sur y, más específicamente, durante la emergencia del llamado socialismo del siglo XXI, propuesto por el desaparecido Hugo Chávez, y con quien Correa exhibió constantemente una cercanía personal e institucional muy importante, sobre todo en su primer periodo presidencial. El movimiento vio la luz en el año 2006 en el contexto del debate latinoamericano que cuestiona fuertemente la partidocracia y las formas tradicionales de hacer política.

Una de las características de la escena política del Ecuador en el momento en que surge el movimiento es el deterioro de la imagen de los partidos políticos en la percepción del ciudadano común. Al igual que en otros países de la región, hay una crisis de fundamentos de la forma partido, sobre la que se montan los nuevos liderazgos con rasgos mesiánicos y antipolítico como son, por ejemplo, los de Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. Las ideas, a ratos socialistas, a ratos populistas de los líderes del movimiento, calaron en el imaginario colectivo de tal manera que aún mantienen el poder en el país, aunque a juicio de algunos críticos, ha tenido que moderar sus posturas y moverse un poco más hacia el centro, ofreciendo la construcción de un socialismo moderno (Meléndez & Moncagatta, 2017)

No hay duda que el proceso político en el que se enmarca la aparición y evolución de este partido es altamente complejo y requiere un análisis más profundo, máxime cuando es parte de la centralidad de esta Tesis Doctoral, por ahora, en lo que respecta a este apartado es conveniente acotar el carácter “revolucionario” que sus fundadores, especialmente Correa le atribuyeron al partido, por lo que es lógico suponer, y así ocurrió, que entre sus prácticas discursivas y de poder estuviese una constante retórica reivindicativa de las mujeres como sujetos políticos.

En tal sentido, son muchas las lideresas surgidas en el seno de esta organización, entre las figuras femeninas destacables del periodo de Correa y posteriormente de Lenin Moreno (este seriamente cuestionados por algunas bases del correísmo), se puede mencionar a Gabriela Rivadeneira, quien fue Presidenta de la Asamblea Nacional, del 2013 al 2017 y, a María Alejandra Vicuña, quien estuvo originalmente formando parte de la Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), y posteriormente llegó a Alianza País, en cuya representación asumió en el 2018, aunque por breve tiempo, la Vice-Presidencia del país.

2.3. El protagonismo político de las mujeres en los partidos de otras orientaciones ideológicas

La presencia protagónica de las mujeres ecuatorianas en los partidos políticos más importantes del país es más que proceso anecdótico, de hecho, puede decirse que forma parte de una macrotendencia que permea a todas las organizaciones con alguna pretensión de poder, ello en congruencia con la evolución de la gesta reivindicativa de las mujeres que ya fue esbozada en el desarrollo del capítulo 1 de esta tesis. Ahora bien, además de las dos grandes corrientes ideológicas que enmarcan la organización y praxis de los partidos políticos modernos, existen otros en el contexto del Ecuador que han incorporado de una u otra manera, desde el discurso y desde su dinámica factual, la figura de la mujer como actor y sujeto político.

El Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE)

Aunque desde el 2014, el CNE declaró su extinción como partido político dado los malos resultados de los últimos eventos electorales en los que participó, merece una mención por haber tenido entre sus fundadores uno de los líderes más polémicos de la vida política contemporánea en el país. Dada su controvertida imagen organizacional, no es sencillo colocar una etiqueta ideológica a este partido, para algunos fue un partido de orientación centro izquierdista, para otros, es más una organización de centro derecha y, para la mayoría encaja con mayor precisión en la imagen de un partido populista, con toda la ambigüedad que representa esa noción.

La importancia de esta organización política pasa por el hecho de haber postulado y llevado al cargo la primera mujer que ejerció la Vicepresidencia en el país. Aunque Arteaga provenía del Movimiento Independiente para una República Auténtica (MIRA), es en llave con Abdalá Bucaram que logra acceder a ese cargo en 1996 y más adelante, ante la destitución de Bucaram, en 2007, asumió provisionalmente la presidencia del país, mientras se convocaban nuevas elecciones y se adecentaba el escenario social y político de la nación. (Freidenberg & Alcántara, 2004). Así tenemos, como de manera accidental, una mujer alcanza el mayor cargo de toma de decisiones que se puede tener en el Ecuador, creando, a pesar de lo azarosa en que se produjo la situación, la irrupción de una expresión que horada en el imaginario colectivo “Presidenta de la República”

El Partido Sociedad Patriótica (PSP)

Otra organización partidista contemporánea, surgida en el contexto de la inestabilidad política que vivió Ecuador a finales del siglo XX. Su origen está ligado al levantamiento militar ocurrido en enero del año 2000 que hizo célebre al Coronel Lucio Gutiérrez, el fundador de este partido y a la postre presidente de la República. La orientación ideológica de esta organización está permeada por la ambigüedad propia de la época en que surge, pero hay algunas coincidencias en ubicarlo como un movimiento de centro derecha y mucho más consenso en catalogarlo como una organización de rasgos populistas.

En su declaración de principios, el PSP, se presenta como una organización de carácter progresista, incluyente que defiende la libertad y la necesidad de consolidar un Ecuador con menos conflictividad entre las clases sociales que le conforman y con una mejor distribución de las riquezas o, en todo caso una mejor distribución de los recursos administrados por el Estado. (Asamblea Nacional del PSP, 2000). Más allá de esta declaración principista con una fuerte orientación de izquierda, lo cierto es que el líder del PSP, una vez alcanzado el poder comenzó un desplazamiento a la derecha que socavó buena parte de las alianzas que le sostenían y le llevaron a su caída en 2005.

Respecto a su respaldo al protagonismo de las mujeres en la política ecuatoriana, el PSP, fue de las organizaciones que impulso la Ley de Cuotas de género para las postulaciones partidistas a cargos públicos. Además, en el año 2012, cuando por segunda ocasión Lucio Gutiérrez intento acceder a la Presidencia de la República, eligió como compañera de fórmula a Pearl Ann Boyes, una exreina de belleza que, aunque haya tenido una motivación de mercadotecnia, de cualquier manera, representa una muestra de la significación que han adquirido las mujeres en la dinámica sociopolítica del país (Paltan, 2005).

Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik - Nuevo País (MUPP-NP)

En el ambiente político ecuatoriano, esta organización no se ajusta a la imagen tradicional de un partido político (Freidenberg & Alcántara, 2004), es más bien, la conjunción de una serie de iniciativas novedosas y, en cierta forma marginales (por encontrarse a los márgenes de la política convencional) que recogen el llamado colectivo a una suerte de unidad plurinacional en la que puedan verse representados, desde los indígenas, pasando por los mestizos, los migrantes, los sindicalistas, entre otros. En sus estatutos la organización se dice abierta a todos los perfiles y tendencias, lo que es coherente con la descripción de sus componentes organizacionales, convirtiéndole en la opción más lógica para pensar en nuevos enunciados

discursivos para la construcción de la inclusión sociopolítica que requiere el enfoque de géneros.

El MUPP-NP, puede considerarse en esencia una organización con orientación indigenista y con ideas cercanas a la izquierda ecuatoriana, tal como lo presentan sus fundadores al enunciar sus postulados, entre los que se encuentran: a) armonizar las actividades humanas con las necesidades de la naturaleza, respetando los derechos de las generaciones actuales, pero el de las que están por venir; b) impulsar la participación productiva de los actores tradicionalmente relegados por su vulnerabilidad -indígenas, mujeres, mujeres, niños, ancianos, campesinos- propiciando la construcción de una patria multicolor e inclusiva; c) impulsar una democracia participativa y protagónica, fundamentada en el derecho de los electores a elegir y revocar según sea el caso y el comportamiento de los gobernantes y; d) promover una nueva ética de la función pública, como principal bastión anticorrupción, se trata de enaltecer la práctica de la despolitización, institucionalizando el control popular sobre la gestión política (Dirección Nacional del MUPP-NP, 2006).

Una de las mujeres con trayectoria y trascendencia esta organización es la abogada, integrante de la etnia indígena, Lourdes Tibán quien en la actualidad se desempeña como miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU. En su trayectoria partidista ha sido además de fuerte opositora al expresidente Rafael Correa, precandidata presidencial en varias ocasiones y Asambleísta Nacional, desde cuya palestra ha insistido en la deuda social que posee el Estado ecuatoriano con la población cuya vulneración de derechos ha sido más recurrente. Aunque ella misma acepta que se han dado pasos importantes para transformar esa realidad. “En América Latina y particularmente en el Ecuador, hasta hace pocos años atrás los pueblos y nacionalidades indígenas constituían unos simples espectadores de la vida pública, porque estaban representados por el sistema del ventriloquismo” (Tibán, 2001).

El Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN)

Este partido que en la actualidad cambio su nombre a “Partido Adelante Ecuatoriano Adelante” (PAEA), fue fundado en la década de 1990, por el abogado y empresario Álvaro Noboa tras separarse del Partido Roldosista Ecuatoriano. Es una organización con una tendencia de centro derecha que, de acuerdo con sus principios (Asamblea Constitutiva de Fundación del Partido, 2001), aboga por la institución de un Estado plural, democrático

orientado por una visión humanista y solidaria, basado en la soberanía nacional que garantice los derechos sociales y políticos de todos los ecuatorianos.

Entre las lideresas del partido se encuentra Annabella Emma Azín, esposa de Álvaro Noboa y en dos ocasiones su compañera de fórmula presidencial (2009 y 2013). Azín tiene una larga trayectoria en el trabajo social a través de la Fundación “Cruzada Nueva Humanidad”. Entre sus figuraciones y praxis partidista se cuentan las diputaciones ejercidas, tanto para la Asamblea Nacional Constituyente como en la Asamblea Nacional de Ecuador durante el llamado periodo de transición. Con un trabajo político propio, un discurso eminentemente socializador, esta figura logró desprenderse de esa imagen de actor secundario que, sin embargo, no alcanza a deslindarse, en la práctica de esa cultura patriarcal que parece haber guiado su protagonismo político.

Este recorrido por lo que ha sido la práctica partidista de las organizaciones partidistas de diferentes tendencias ideológicas en el Ecuador, y la manera en que algunas mujeres han sido protagonistas de esas organizaciones, deja ver, tal como lo plantea Prieto (2006), que en la actualidad es una constante, cuando menos, la participación organizacional de las mujeres ecuatorianas en el seno de los partidos políticos. Más allá de la filiación ideológica, los últimos años muestran un posicionamiento discursivo importante del enfoque de géneros en la dinámica organizacional del Ecuador. De allí han surgido mujeres, que han logrado subjetivar las propuestas políticas y aparecer como verdaderas protagonistas para la toma de decisiones colectivas.

Las mujeres han conquistado la escena pública, ganando espacios que en otras épocas estuvieron reservados solo para los hombres, y eso es reconocido, además, por todos los líderes tradicionales o emergentes, dando cuenta de una realidad sociopolítica que no tiene detractores. Aun así, es necesario que las mujeres sigan en esa recurrencia discursiva y práctica que las ha llevado al momento actual porque siguen existiendo muchas reservas por parte del patriarcalismo político a la hora de debatir las cuotas de paridad de las mujeres para eventos electorales. El proceso de visibilización del liderazgo de las mujeres ha resultado relativamente exitoso, no obstante, el problema continua siendo las dificultades para que haya una rutinización en el discurso político que ya no divida ese liderazgo, es decir, que no haga notar el género en las ocasiones en que se postulan candidatos a los cargos de elección popular y, más aún, que la pertenencia a un determinado género, carezca de importancia cuando se evalúen las posibilidades de éxito de las candidatas.

3. Rutas del empoderamiento institucional de las mujeres de las mujeres ecuatorianas

La importante escalada de las mujeres ecuatorianas en el marco de sus organizaciones políticas implica un proceso paulatino de empoderamiento, tanto en el orden del discurso como en el nivel de las prácticas institucionalizadas de poder. La mayoría de las instituciones gubernamentales han ido tomando nuevas fisonomías a raíz de la inclusión de las mujeres, bien sea como sus líderes o como parte de sus estructuras gerenciales. El poder ejecutivo, el legislativo y las instituciones del poder judicial en el Ecuador son, en la actualidad espacios permeables para la influencia de las mujeres como sujetos políticos y sociales. De hecho, al examinar ese proceso de integración del discurso y la acción de las mujeres en las diferentes instituciones del Estado, es posible comprender con mayor precisión, lo que teóricamente se trató en el capítulo 1 de esta Tesis.

3.1. Una aproximación al empoderamiento de las mujeres ecuatorianas a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI

El proceso conocido como empoderamiento, alude a la acción mediante la cual se van sumando espacios o estrategias para dirigir u orientar determinados procesos, bien sea en la vida pública o privada de las personas. Hasta la década de 1960, aproximadamente, era un concepto de poco uso, pero se popularizó a raíz de los planteamientos educativos del brasileño Paulo Freire, para quien la educación debía tener como objetivo fundamental fortalecer las capacidades autonómicas de las personas, procurando su independencia a partir del descubrimiento de sus potencialidades, tanto como individuos y como integrantes de los grupos sociales a los que pertenezcan (Orsini, 2012). Esa concepción involucra, no la desaparición de lo individual en lo colectivo, sino la suma de las individualidades como entidades independientes que impulsan hacia un mismo lado.

Por otra parte, el empoderamiento ha sido asumido, según Banda, Morales y Vanegas (2015), por los grupos de defensa de los derechos de los grupos a quienes con frecuencia se les vulneran sus derechos, especialmente de las mujeres. Partiendo, en esos casos, de la convicción de acuerdo con la cual, las sociedades modernas hicieron una norma no escrita, de la dominación patriarcal. Tradicionalmente las mujeres han sido relegadas de los procesos de toma de decisiones, considerándoseles, explícita o implícitamente, personas incapaces de dirigir acciones colectivas. En esa orientación que proponen estas autoras hay diversas

tendencias teóricas pero la mayoría convergen en las premisas del desarrollo humano que reviste de pertinencia el concepto de empoderamiento en los análisis de procesos políticos como el que ocupa la centralidad de este estudio. En un ejercicio de síntesis conceptual, la figura 5, muestra los principales rasgos conceptuales del empoderamiento.

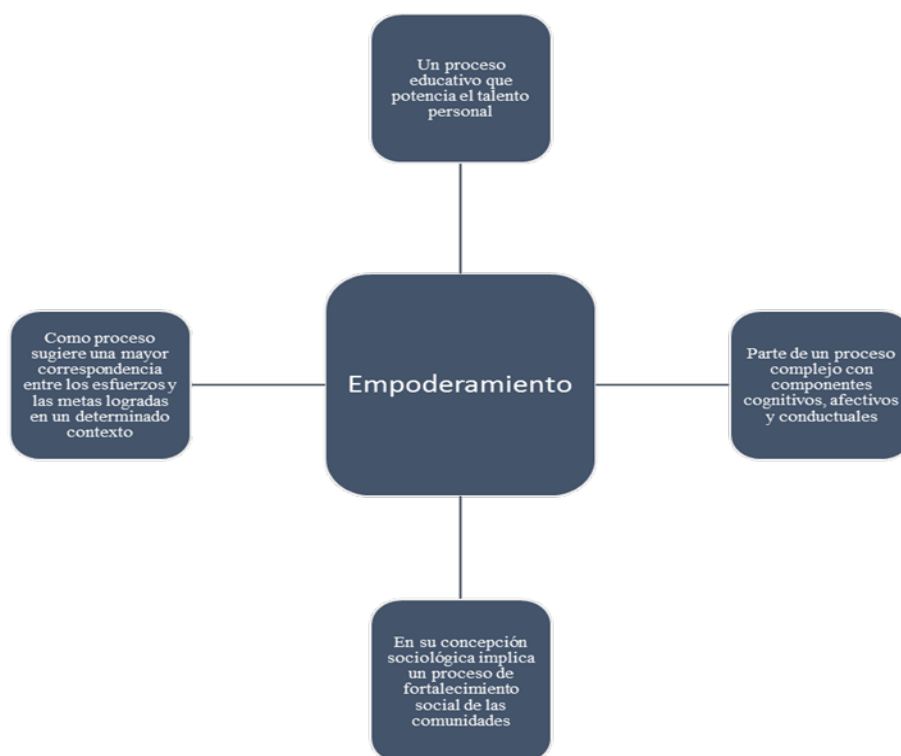


Figura 5. Rasgos conceptuales del empoderamiento.
Fuente elaboración propia basada en Silva y Loreto (2004)

Ahora bien, desde el punto de vista del poder político y sus luchas, se entiende, como ya se advirtió, que empoderarse es un proceso complejo que no depende de una individualidad o, al menos, no enteramente, sino que involucra una serie de componentes correlacionados que, puestos a funcionar, explicarían con una mayor cercanía teórica lo que ha ocurrido en la sociedad ecuatoriana y en el desarrollo de su sistema político. Es, además, el efecto a largo plazo de acciones microsociales que no siempre es posible distinguir, se debe seguir el curso diverso y heterogéneo, como hemos intentado hasta ahora, de muchos fenómenos, involucrando factores económicos, políticos y, sobre todo culturales. Es desde la cultura precisamente desde donde es más congruente observar los procesos de empoderamiento, pues, la dominación es, por definición, un fenómeno cultural.

En términos más psicosociales, pero congruentes con los planteamientos políticos y de género, esgrimidos en las ideas expuestas por Banda, Morales y Vanegas (ob. cit.), el

empoderamiento implica cuatro componentes a saber: a) El componente intrapersonal vinculado a los procesos sociopolíticos en donde se dirimen los asuntos del liderazgo y el control político; b) El componente interaccional que comprende las relaciones que los individuos establecen con su círculo de influencia más inmediato para potenciar sus posibilidades de éxito en otros ambientes sociales y políticos; c) El componente de comportamiento referido a la capacidad que desarrollan las personas para involucrarse en diferentes organizaciones sociales participando activamente en la toma de decisiones y; d) el componente interpersonal cuya función es, si se quiere, relacional, facilitando las acciones interpersonales que se pueden llevar a cabo los ciudadanos cuando participan en los procesos de transformación del poder.

El empoderamiento y los movimientos de mujeres

La evolución conceptual y práctica del empoderamiento le condujo a la arena del feminismo y los movimientos de mujeres en general, aproximadamente en la década de 1970, las organizaciones de carácter popular comenzaron a ser influenciadas por la idea de ganar espacios en los centros de poder. Particularmente los grupos feministas apuntando al socavamiento del poder patriarcal tanto en la política como las organizaciones ciudadanas. Para las mujeres empoderarse se convirtió en sinónimo de independencia y libertad frente al yugo de los varones y, en consecuencia, una ruta para la construcción de una sociedad más igualitaria (Murguialday, 2006)

A partir de estas ideas, se puede entender cómo y por qué, los movimientos de mujeres han fomentado diversos procesos formales e informales en donde se plantean como objetivo, lograr empoderarse en el sentido politológico del término. Es quizá, este el sentido que pueda darles un posicionamiento de mayor alcance a las mujeres, pues el poder político es el más esquivo a la hora de flexibilizar su acceso, a pesar del avance que han tenido las ideas del igualitarismo de géneros. Detrás de ese empoderarse políticamente, las mujeres entienden que esta la posibilidad real de ser reconocidas como sujetos colectivos, con peso histórico. Las ideas de Murguialday, permiten profundizar en el concepto de empoderamiento desde la concepción de los movimientos de mujeres, tal y como se muestra en la tabla 7

Tabla 7*Cuadro conceptual del empoderamiento desde la óptica feminista*

Fundamento conceptual	Características
Ganar poder	Es un llamado de atención acerca del discurso sobre el poder y las estructuras de dominación que se sustentan desde el, reflexionando sobre la necesidad constante de revertir ese anquilosamiento del poder Los movimientos de mujeres refuerzan la noción antagónica el empoderamiento, es decir, “desempoderar”, un mecanismo que debe activarse para develar las potencialidades de los colectivos, tradicionalmente relegados del ejercicio del poder como son las mujeres
Cambiar	Desde la concepción feminista, empoderarse es un proceso continuo que empieza, pero no termina nunca, pues nadie está empoderado de manera absoluta. Visto de esa manera, las mujeres deben entender que, aunque hayan logrado una gran resonancia en su lucha por derechos culturales, sociales y políticos, todo está por hacerse aun
Establecer relaciones	El carácter relacional del empoderamiento es destacado por los movimientos feministas, esto significa que, al empoderarse, las mujeres activan una especie de reacción en cadena que afecta un buen número de las relaciones que ellas establecen socialmente, tanto con los integrantes de su género, como con los demás.

Fuente: Elaboración propia basada en Murguialday (2006)

Las mujeres ecuatorianas y sus procesos de empoderamiento

En el Ecuador las mujeres como sujetos del discurso político, han ido resinificándose desde finales del siglo XX y en las primeras dos décadas del siglo XXI. Tanto las organizaciones culturales-indígenas, como las que se corresponden con la política tradicional han abierto espacios de participación, a veces no de buena gana, pero arropados por la dinámica globalizadora que ha terminado por reconocer los aportes determinantes que pueden hacer las mujeres, bien sea desde su accionar individual, como desde la participación en organizaciones de vocación colectiva. En otras palabras, esa inclusión se logra, no como una concesión del poder patriarcal, sino como la obligación que la lógica dominante debe cumplir para que las rupturas no terminen de fisurar el tejido social en pleno.

La presión ejercida desde los movimientos de mujeres ecuatorianas, logro, a finales del siglo XX, promover la creación de mecanismos u organismos desde el Estado para canalizar sus demandas o, mejor aún, institucionalizar la igualdad de género en los diferentes ámbitos y así no dejar a capricho del gobernante de turno la participación igualitaria de las mujeres en los procesos de toma de decisiones públicas. En la tabla 8 se resumen el conjunto de iniciativas institucionales que dan cuenta de los avances de las ecuatorianas en ese continuo de empoderarse.

Tabla 8*Ruta institucional del empoderamiento de las mujeres ecuatorianas*

Institución/Instrumento jurídico	Objetivo
Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU)	Creado en 1997, busca mantener el enfoque de género en la concepción y ejecución de los planes y programas gubernamentales, estableciendo la su obligatoriedad para todos los organismos públicos
Comisión Permanente Especializada de la Mujer, el Niño, la Juventud y la Familia del Congreso Nacional	Data de 1998 y su creación obedecía a la necesidad de mantener una agenda continua para atender los temas de género y sus correlaciones con otros asuntos relacionados con las demandas o necesidades de los grupos sociales más vulnerables
Defensoría Adjunta de la Mujer y la Niñez como parte de la Defensoría del Pueblo	En la Defensoría del Pueblo, se consideró la necesidad de separar los procesos de los que se ocupa la institución para privilegiar aquellos orientados a atender las necesidades de las mujeres y de infancia, en el entendido que son dos grupos frecuentemente vinculados en sus insuficiencias y sus derechos
Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia	Atendiendo a la frecuencia con la cual se presentan situaciones de violencia intrafamiliar, casi siempre dirigida contra las mujeres. Se trata de hacer visible una situación social que muchas veces la cultura patriarcal dominante logra ocultar tras el velo de la rutinización
Reformas a la Ley de Elecciones	En este instrumento legal se logra avanzar en el tema de las cuotas electorales que permitan una mayor presencia de las mujeres ecuatorianas en las disputas electorales y las listas partidistas. Sobre este tema debe agregarse que en diciembre de 2019 fue aprobada en la Asamblea Nacional, la obligatoriedad de la paridad del binomio presidencial a partir de 2025

Fuente: Elaboración propia basada en Prieto (2006)

3.2. El caso emblemático del empoderamiento en las mujeres indígenas

Tal como se ha dejado ver en apartados precedentes, el Ecuador es un país rico en pluralidades étnicas, pero sobre todo culturales, su constitución como pueblo habla fuerte cuando se trata de identificar una naturaleza homogénea porque no la tiene. Sus diversidades le hacen una realidad compleja que, para un análisis pertinente, requiere una visión transdisciplinaria, no tanto desde lo académico sino desde la misma subjetividad de la investigadora. Desde lo formal, el proceso de visibilización del empoderamiento de la cuestión indígena y de las mujeres en particular, se puede refrendar en la figura, harto conocida, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la cual reúne en su estructura a las “Nacionalidades, Pueblos, comunidades, Centros y Asociaciones indígenas del Ecuador” (CONAIE, 2020).

Lo emblemático en este caso, no es que las mujeres andinas se empoderen en un país que, formalmente es declarado plurinacional y que cuenta con un modelo educativo que privilegia lo intercultural. Lo distintivo, es que, una cultura tan poco permeable a las transformaciones

que se impulsan desde fuera de sus trincheras ordinarias haya sido tocada de frontalmente, por la necesidad de adecuar sus procesos a la emergencia discursiva que representan las mujeres indígenas. Ese nuevo orden o reglas de existencia en el que la presencia de las mujeres no es incidental, sino protagónica, se forja por la capacidad para tensionar el poder, que muestran las organizaciones indigenistas del Ecuador.

La CONAIE

Esta organización, sobre la que se profundizará más adelante en esta Tesis, se presenta, desde 1986, como una organización que pretende romper con las lógicas del poder, preconizando la resistencia frente a la discriminación histórica que ha sufrido la población indígena, sus premisas incluyen una declaración de principios que apunta al sostenimiento de las luchas populares de todos los grupos oprimidos por razones étnicas, religiosas o de géneros. Llama a la denuncia de todo proceso de sometimiento social, político o cultural que siga la línea de la destrucción de la huella indígena en el Ecuador, por encima de cualquier retórica pública sobre sus derechos, esta organización existe prácticas de emancipación real que terminen de colocar la perspectiva indígena en los mismos lugares de observación nacional e internacional que tienen otros enfoques de la vulnerabilidad social de ciertos grupos sociales.

En este punto es conveniente recordar que el análisis de los procesos de empoderamiento de las mujeres, indígenas o no, tiene ya larga data en América Latina, de acuerdo con Pérez, Vásquez y Zapata (2008), se han desarrollado al respecto, básicamente dos enfoques: el enfoque de las Mujeres en Desarrollo (MED), y el llamado, Género en Desarrollo (GED). El primer enfoque se hizo popular en los años 70' y consideraba necesario que las mujeres fuesen tomadas en cuenta en la formulación de las políticas de desarrollo, lo que podría diversificar aún más los trabajos a los que se dedicaban las mujeres, pero sin afectar mucho sus relaciones sociales de poder. Al ser cuestionada esta visión que, en lugar de favorecer a las mujeres, aumentaba sus tareas formales, surge el GED, que entre sus aportes tiene, haber generado una mayor conciencia y visibilidad de las relaciones de subordinación ocultas tras la aparente igualdad que fueron adquiriendo las mujeres en esos años.

El GED es el enfoque pertinente para el análisis de la cuestión indígena en Ecuador y la CONAIE, implícitamente lo adopta para la formulación de sumisión y sus objetivos institucionales. Este es un enfoque que trasciende el aspecto meramente intelectual en el análisis de las relaciones de poder que se imbrican en las actividades económicas que exige el desarrollo. Su valor reside en la capacidad que tiene para mostrar las falencias de un desarrollo

sin el protagonismo de las mujeres y sin la incorporación de la equidad de género como uno de sus ejes transversales.

En atención a ello, la Confederación asume una actitud proactiva en el derecho de los indígenas ecuatorianos, especialmente las mujeres, formulando sus objetivos, entre los cuales están: a) promover el ejercicio de los Derechos Colectivos de pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador, reconocidos en la Constitución Política de la República; b) construir una sociedad intercultural; promover la participación mediante el establecimiento de una democracia participativa, con fines de alcanzar la descentralización del poder y los recursos económicos, la solidaridad y la equidad y; c) Lograr la igualdad y la justicia en los pueblos y nacionalidades indígenas, por ende en la sociedad en general

Otras referencias históricas de empoderamiento de las mujeres indígenas

Una de las características principales que puede adjudicársele al indigenismo en Ecuador es que mantiene su unidad en la diversidad, su capacidad para moverse colectivamente fue ilustrado en la figura de la CONAIE, sin embargo, cuando se analiza su naturaleza en clave de géneros, se vislumbra cierto distanciamiento, al menos en términos discursivos, a la lucha por la igualdad frente a los hombres, su activismo está vinculado más concretamente a la procura de derechos para el pueblo indígena en general, en temas relacionados, por ejemplo a la preservación de sus manifestaciones culturales, su idiosincrasia y la explotación de sus tierras.

Aquí se precia la historia de los movimientos indígenas en relación con su condición de campesino, circunstancia en la que las mujeres sufrían el mayor grado de explotación y discriminación en el contexto del sistema de haciendas (Del Alamo, 2011). Es allí en ese espacio de las luchas del campesinado y de las mujeres indígenas, que surgen las primeras grandes referentes que pueden ser consideradas precursoras de la igualdad de géneros en Ecuador, con la adición del factor cultural indígena, algo que, sin duda les incorpora mayor valor a sus iniciativas: Transito Amaguaña y Dolores Cacuango.

Tanto las figuras de Amaguaña y Cacuango, como la cuestión de la pluriculturalidad y el indigenismo serán tratadas de manera deferente en las páginas que constituyen el capítulo IV de esta tesis, pero es importante tener en cuenta que ese tema, así como la participación política de las mujeres y el enfoque desde el trabajo social son elementos intrínsecos en todo este trabajo de investigación. Estas dos mujeres, fueron en su momento, el mejor ejemplo de empoderamiento de las mujeres ecuatorianas, pues viniendo de la pobreza y de los extremos de la vulnerabilidad social, fueron capaces de articular toda una gesta histórica en pro de la

justicia social encarnada en el movimiento social indígena. A manera de síntesis, la tabla 9, muestra el perfil de ambas lideresas.

Tabla 9

Empoderamiento de las mujeres indígenas-ecuatorianas: Amaguaña y Cacuango

Lideresa	Aproximación a su perfil y actividades pro-igualdad
Rosa Elena Tránsito Amaguaña Alba	De origen huasipungueros, se erige como uno de los principales referentes del movimiento feminista en Ecuador, aunque su acción se enmarca en el terreno de las luchas por la igualdad de los campesinos indígenas. Al lado de Cacuango y otras lideresas de la época, funda la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), y es figura importante en la consolidación de los derechos sindicales de su pueblo. Fue precursora de la llamada rebelión de Cayambe. Allí, surge El Sindicato de Trabajadores Campesino que tenía como objetivo, entre otras cosas, defender los derechos sobre las tierras de los campesinos, elevar los salarios y reducir el número de tareas y horas de trabajo. Políticamente estuvo ligada al Partido Comunista, por lo que sufrió algunos episodios de hostigamiento por parte del Estado ecuatoriano, como, por ejemplo, luego de uno de sus viajes a la Unión Soviética, queriendo que renunciara a su activismo, cosa que denegó.
Dolores Cacuango Quilo	Nacida a finales del siglo XIX, es un ícono de las luchas indígenas en el Ecuador. Desde el punto de vista político, estuvo en las filas del Partido Comunista Ecuatoriano y desde allí impulsó la creación de la Federación Ecuatoriana de Indios, en la que se desempeñó como Secretaria General, lo que vendría a ser uno de los casos pioneros de mujeres en cargos de decisión política. En el contexto de la reforma agraria en el país, fue líder de los movimientos que asumieron como una bandera sociocultural este proceso. En el marco de la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), organizó la primera escuela de alfabetización bilingüe en este cantón con alfabetizadores indígenas provenientes de la Federación.

Fuente: Elaboración propia basada en Del Álamo (2011)

3.3. Presencia y protagonismo de las mujeres ecuatorianas en las instituciones del poder ejecutivo

Desde finales del siglo XX, no hay duda de que la participación política de las ecuatorianas ha ido en alza, los datos de su protagonismo en el seno de las organizaciones partidistas ya han aproximado una visión concreta de este fenómeno que si bien, dista mucho de haber alcanzado la plenitud, se encuentra en un continuo creciente que no ha aminorado su marcha, sino que más bien se ha consolidado. Es cierto que en ese impulso ha tenido un rol importante la legislación que regula las cuotas electorales y la reformas que se han dado desde 1997, pero no hay que desmeritar el progreso cultural que misma sociedad ecuatoriana muestra respecto a este tema.

En cuanto al análisis que significa e ejercicio práctico del poder por parte de las mujeres en Ecuador, hay que aceptar que hay altibajos, el poder factual que mantiene el patriarcado político

se impone a veces a la letra de la ley por lo que suele encontrarse divergencias entre lo que las legislaciones imponen en teoría y lo que ocurre en la realidad cuando se trata del progreso del empoderamiento de las mujeres ecuatorianas. No obstante, en este apartado se intenta mostrar que, aunque haya sido a través de individualidades y, en algunos casos, propiciado por eventos circunstanciales algunas mujeres han tenido la oportunidad de mostrar sus cualidades como líderes en los poderes, como es el caso del poder ejecutivo.

El poder más esquivo para las mujeres en toda América Latina es justamente el ejecutivo, más del protagonismo de Bachelet en la presidencia de Chile por dos periodos y los 8 años de Cristina Fernández en Argentina, los demás casos de dirigencia del poder ejecutivo por parte de mujeres han sido pocos o por poco tiempo. En el caso de Ecuador, el poder ejecutivo, sin incluir los ministerios, se reduce al binomio presidencial (Presidencia y Vicepresidencia) y algunas experiencias de mujeres en esos cargos son:

Rosalía Arteaga. Aunque haya sido circunstancial y por muy breve tiempo, es hasta ahora la única mujer en haber ejercido el cargo de presidenta de la República de Ecuador. Arteaga ejerció la presidencia de Ecuador, en el brevísimo lapso del 9 al 11 de febrero de 1997, en una situación sobrevenida y confusa en la que el congreso ecuatoriano depuso por insania mental al presidente Abdalá Bucaram. En su breve estancia a la cabeza del poder ejecutivo, solo pudo intentar formalizar un decreto que permitiera la realización de una consulta popular acerca de la destitución de Bucaram y la organización de un nuevo gobierno legal y legítimo. Su paso por el poder ejecutivo lo completo Arteaga, regresando al cargo de vicepresidenta una vez que fue cesada en sus funciones como encargada del poder ejecutivo, siendo designado en el cargo transitorio, Fabián Alarcón, quien fungía como Presidente del Congreso de la República para la época.

María Alejandra Vicuña. Luego de Arteaga, es la única mujer en desempeñarse en el cargo de vicepresidenta de la República, posición a la que llegó por una situación sobrevenida ya que el Vicepresidente electo en la formula presentada por el partido Alianza País en las elecciones que llevaron a Lenin Moreno a la Presidencia fue destituido por presuntos actos de corrupción. Vicuña fue designada por Moreno, y se mantuvo en el cargo durante los siguientes 11 meses, alcanzando notoriedad propia, no por el hecho de ser mujer sino como una clara alternativa de poder en un contexto dominado, discursivamente por expresiones altisonantes que podrán haber puesto a prueba su talante como sujeto histórico que se erige en una ocasión cruzada por la incertidumbre institucional, pero -por encima de eso- marcada por el escepticismo social.

Durante su gestión la vicepresidenta, Vicuña mantuvo un perfil bajo y se ocupó de los problemas sociales y económicos que se sucedieron en el país como consecuencia del terremoto del 2006. Así mismo, le fue encomendada la tarea de coordinar con los diferentes organismos del Estado, la atención prioritaria de los grupos vulnerables para potenciar la construcción de una economía popular y solidaria, conformando así un eje importante entre la gestión centralizada de la presidencia de la República, el rol de mediación de la Vicepresidencia y los organismos socio comunitarios para el fortalecimiento de una democracia verdaderamente participativa.

Esta nueva experiencia de una mujer en el ejercicio de un poder ejecutivo tampoco terminó de buena manera, Vicuña fue acusada de haber incurrido en cobros indebidos durante una gestión anterior y debió renunciar al cargo en diciembre del 2018, obligada ante la posibilidad de generar una mayor inestabilidad de un gobierno que, ya de por sí había atravesado serias dificultades para iniciar y consolidarse en el poder. Sin embargo, hay que destacar que lo accidentado de su periplo no fue asociado a su identidad de género, sino a la vinculación con prácticas del poder político tradicional en el que no juega un papel principal el hecho de ser una mujer dedicada a la política como profesión.

En general, las experiencias de mujeres en el ámbito del poder ejecutivo de Ecuador son muy escasas como para generar una percepción equilibrada y justa de lo que pueda ser considerada una gestión adecuada o no. Por ahora, son más los accidentes, los culpables de la llegada de mujeres a estas instancias del poder porque las ocasiones en que se han postulado mujeres para este cargo no han logrado influir positivamente en el gusto del electorado. Ello no habla bien de la rutinización del protagonismo de las mujeres en la dinámica política porque, al depender de situaciones contingentes, la misma contingencia impide un despliegue integral del talento y la gestión de las mujeres en esos cargos a los que ha llegado.

Visto así, podría asumirse desde el análisis, que la aceptación de las mujeres en el ejercicio de cargos públicos no se posesionó en el imaginario colectivo, con la misma fuerza que ha calado la promoción de sus derechos en otros ámbitos, por supuesto, esto puede ser el resultado de los atavismos culturales que aún permanecen entre la población ecuatoriana para quien la idea de una mujer a la cabeza del ejecutivo le sigue haciendo ruido, aunque si acepta e impulsa con beneplácito sus procesos de empoderamiento en otras instancias a partir de la reivindicación política, organizacional, laboral y sexual. Esa misma observación, no puede hacerse cuando del orden del discurso se trata. En ese espacio, las mujeres han alcanzado un

mayor relieve y se mantienen como sujetos involucrados en formaciones discursivas como las que describen a la democracia participativa.

3.4. Presencia y protagonismo de las mujeres ecuatorianas en las instituciones del poder legislativo

La presencia de las mujeres ecuatorianas en el parlamento ha ido creciendo en la medida en que se modernizan los procesos y se adecuan las leyes a la realidad que imprime el enfoque de género aplicado a la dinámica política. En el caso ecuatoriano, de acuerdo con Trujillo (2018), sin la aprobación de la Ley de cuotas, antes de 1998, el porcentaje de mujeres en el parlamento apenas alcanzaba el 6%, mientras que una vez que comenzó a aplicarse esta ley, fue subiendo paulatinamente el porcentaje, siendo de 13% en 1998 y así sucesivamente. Algunos datos interesantes, en cuanto a la participación protagónica de las mujeres ecuatorianas en el poder legislativo quedan ilustradas en la figura 6.



*Figura 6. Mujeres ecuatorianas y poder legislativo.
Fuente: elaboración propia basada Trujillo (2018)*

Aunque al parecer la Ley de Cuotas ha sido determinante en el auge que han tenido las mujeres en su presencia y protagonismo en el legislativo, es importante mantener la claridad

analítica para precisar el verdadero alcance de estas iniciativas jurídicas cuando se trata de impulsar los cambios de la cultura política que terminan por entorpecer esos procesos y procedimientos de apoyo legal a los derechos que asisten a las mujeres en su lucha por mantenerse vigentes en el ejercicio del poder político. Se entiende que la permanencia de ciertas iniciativas favorecedoras de la igualdad de género depende en buena parte de las propuestas que ellas mismas puedan llevar al Parlamento, y eso es más factible manteniéndose como actrices decisorias de ese poder.

Figura y gestión de Gabriela Rivadeneira. Esta mujer, en su corta vida representa todo un fenómeno político en cuanto a lo que ha logrado o alcanzado en el ámbito del ejercicio del poder político, de hecho, en sus mejores días, llegó a sonar como probable sucesora de Rafael Correa en la Presidencia de la República. Rivadeneira comenzó su carrera política en el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, en cuyas filas participó en las elecciones cantonales de 2004, siendo designada, posteriormente como Vicealcaldesa de Otavalo en 2006, año en el que abandonó su organización política original, para ingresar a las filas de Alianza País, luego de haber fundado y disuelto su propio partido.

Se puede entender mejor la afirmación anterior si hace una retrospectiva de lo ocurrido para el periodo legislativo que comenzó en el año 2013. De acuerdo con Pila (2019), el periodo legislativo que va de 2013 a 2017, representó el mejor periodo para la representatividad de las mujeres en el Parlamento pues, en términos porcentuales, las mujeres alcanzaron casi el 40% del total de escaños. Además, en su primera sesión, Rivadeneira, de apenas 29 años fue electa como presidenta de la Asamblea Nacional, convirtiéndose, no solo en la primera mujer en alcanzar tan alto cargo y la persona más joven en asumir tal distinción en América Latina. Además, junto a ella asumieron Rosana Alvarado, como primera vicepresidenta y Marcela Aguiñaga en la segunda vicepresidenta, marcando un hecho sin precedente en el país, en cuanto a la dirección del poder legislativo.

En los primeros meses de su mandato, según reseña periodística de la época (Gómez, 2013), Rivadeneira se dedicó con ahínco a la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones, un punto de honor del presidente Correa y de su partido, en frecuente disputa con los medios de comunicación más importantes del Ecuador, por considerarlos elitismos, con muy poca tribuna para las clases excluidas. Los procesos de construcción de la realidad que se le atribuye a los medios, es un signo de los gobiernos progresistas del subcontinente y es también un punto de

honor para la RC, controlar ese poder para obstaculizar la alienación que puede producirse como producto de la mediatización de la vida pública.

Así mismo, en ese tiempo impulso la discusión y aprobación de la “Ley para la reparación de las víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en el Ecuador entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008, en cuyo articulado, el Estado ecuatoriano hace un mea culpa y asume sus responsabilidades respecto a las violaciones de los derechos humanos documentadas por la Comisión de la Verdad, designada en su momento para documentar todos aquellos hechos en los que algunas personas hayan sufrido la vulneración del derecho a la vida, la libertad y la dignidad, en ese periodo.

En lo que respecta a su periodo completo, siguiendo la reseña de su última rendición de cuentas, el 27 de abril de 2017 (González M. , 2017), Rivadeneira destaca haber desarrollado un trabajo integral con el objetivo de darle piso legal a los derechos conquistados por los ecuatorianos en la Constitución de 2008. Con el norte puesto en la delineación de una verdadera reforma agraria mediante la estrategia que permita que la tierra sea distribuida de manera más equitativa entre quienes la trabajan, rescatando así la capacidad productiva de los campesinos, pero sobre todo el control sobre lo que producen para avanzar en el mayor objetivo propuesto por la llamada Revolución Ciudadana que era la soberanía alimentaria. El relato de estos hechos, no obstante, se queda en el nivel retórico si quienes reciben el discurso no han sentido en su realidad inmediata lo que allí se describe.

A decir de la presidenta, el periodo legislativo que culminó en abril del año 2017, fue uno de los más fructíferos de cualquier parlamento latinoamericano, Asegurando que, en promedio se aprobaron cerca del 95% de las leyes propuestas por la mayoría oficialista de la Asamblea nacional. En total, la cantidad de leyes aprobadas fue de 65, lo que avala el trabajo de cada una de las comisiones del parlamento, de acuerdo a Rivadeneira. Se observa en esta reiteración discursiva que la gestión política se asume como una tarea cuantitativa, colocando el énfasis en aquellos eventos que puedan ser contrastados con la realidad, aunque esa realidad sea solamente teórica. A manera de síntesis de la gestión legislativa de la primera mujer que presidió el Parlamento ecuatoriano se presenta la tabla 10.

Tabla 10*Síntesis jurídica del período legislativo presidido por Gabriela Rivadeneira*

Instrumento jurídico	Fecha y Objetivos
Ley Orgánica de comunicación	Aprobada por el Parlamento en junio de 2013, como parte de una promesa electoral de un instrumento que democratizara los medios y la información que recibe el pueblo ecuatoriano. La ley establece parámetros regulatorios, entre otras cosas para: la propiedad de los medios, el tipo de información que se puede transmitir, la necesidad de códigos deontológicos de los medios, entre otros (Asamblea Nacional, 2013).
Código Orgánico Integral Penal	Fue aprobado en el mes de enero de 2014, con la intención declarada de eliminar la pluralidad de organismos con fines legales que en la práctica derivó en la impunidad y la desconfianza de la población. El Código desarrolla los aspectos referidos entre otros a: la constitucionalización del derecho penal, actualización doctrinaria de la legislación penal, adecuación de la normativa nacional a los compromisos internacionales, la ejecución de las penas (Asamblea Nacional, 2014).
Ley orgánica de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua	Suscrito por el parlamento en 2014, dispone una serie de regulaciones, partiendo del principio que el agua es patrimonio nacional estratégico y su control es materia de seguridad del Estado. Entre sus principios se encuentran: la gestión sostenible y sustentable del agua, el acceso al agua como un derecho humano de la población, una gestión integrada y participativa de este recurso, (Asamblea Nacional, 2014)
Ley Orgánica de Cultura	En diciembre de 2016, se concretó esta importante Ley que para la gestión de una mujer con una trayectoria en la defensa de los derechos indígenas era un punto de honor. Entre sus rasgos más significativos destacan los principios de: diversidad cultural, interculturalidad, buen vivir, identidad nacional, soberanía cultural y cultura viva comunitaria (Asamblea Nacional, 2016).

Fuente: Elaboración propia

3.5. Presencia y protagonismo de las mujeres ecuatorianas en otras instituciones de poder

Además del poder ejecutivo y legislativo, en otras instancias de poder, también se ha sentido el progreso de las mujeres en su lucha por convertirse en actores y/o sujetos políticos que compiten en igualdad de condiciones con los hombres, teniendo en consideración que se trata no solo de un tema de géneros, sino de democratización de los poderes públicos a la luz de la justicia social. Las mujeres se han convertido en fuente importante de innovación política, no porque antes no lo fuesen, sino porque sus luchas las han vuelto visibles frente a la ciudadanía que finalmente es la encargada de juzgar y elegir sus gobernantes. Se procede entonces a mostrar brevemente, otras gestiones de poder, adelantadas por las mujeres ecuatorianas en los últimos años, como síntoma de su empoderamiento.

Nubia Villacís. Resulto ser la primera mujer en presidir el poder electoral en el Ecuador una vez aprobada la nueva Constitución (2008). En su carrera pública ya había sido vocal de ese organismo en el 2011 y asumió el cargo de presidenta encargada en noviembre de 2017, a

raíz de la renuncia de su presidente Juan Pablo Pozo, de quien Villacís había sido una fuerte crítica. En su gestión la acompañó como vicepresidenta Ana Marcela Paredes y ambas, junto al resto del CNE fueron las encargadas de llevar adelante el referéndum constitucional y la consulta popular propuestos por el Presidente Lenin Moreno y efectuadas en febrero de 2018.

Su trabajo al frente del poder electoral fue bastante corto, pero sin embargo no estuvo exento de polémicas. Tanto por su arribo como resultado de una renuncia que probablemente ella misma impulsó, como por su salida, pues fue destituida con el resto de las integrantes de la institución mediante una resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), quienes les habían cuestionado ciertas actuaciones en torno a la eliminación de algunas organizaciones con fines políticos. De cualquier manera, su nombre ya forma parte de la historia de las mujeres ecuatorianas que han ejercido funciones gerenciales en alguno de los poderes públicos más importantes.

Shiram Diana Atamaint. Este caso de una mujer en el poder es interesante, no solo por una cuestión de géneros, sino por el tema de la interculturalidad en el Ecuador. Atamaint, originalmente militante del partido Pachakutik y quien en la actualidad (2020), ejerce la Presidencia del Consejo Nacional electoral, pertenece a la etnia shuar, un pueblo indígena que habita entre la Amazonia peruana y la ecuatoriana, muchas veces estigmatizado por la práctica milenaria de la reducción de cabezas (Rubenstein, 2005). Este aspecto, casi mitológico, no tiene relación directa con su protagonismo como sujeto político, pero si agrega un elemento étnico interesante para el análisis cuando se trata de detectar los rasgos culturales que van apareciendo, adheridos al tema del enfoque de géneros.

La actual presidenta del CNE ecuatoriano, antes de ingresar a este organismo ya probó lo que significa pertenecer a un poder del Estado pues fue legisladora electa en el 2009, año en el que tuvo cierta resonancia pública al unirse a las protestas protagonizadas por su comunidad shuar y haberlos representados en los diálogos que esta etnia mantuvo con el gobierno de Correa, este acto representa un dato no menor a la hora de evaluar su probidad como autoridad electa y su sentido de pertenencia, propio de una persona con un claro sentido de lo que significa manejar el poder en términos de lo que significa su ejercicio para lograr el bienestar colectivo.

Al frente del organismo electoral, Atamaint dirigió, en el 2019, las elecciones seccionales, un evento de magnitudes considerables pues en total se eligieron 5670 cargos, entre los cuales estuvieron 221 nuevos alcaldes que representan el poder político más cercano al ciudadano (2018). Por ahora, el mayor reto planteado para la gestión de esta presidencia son las elecciones

generales previstas para febrero del 2021, donde se espera renovar presidente, vicepresidente y asambleístas, si es que la situación de emergencia nacional por la pandemia del Covid-19, no altera el calendario electoral ya aprobado por el pleno del CNE.

María Paulina Aguirre. Si se trata de pioneras, esta abogada tiene todos los méritos para ser tenida en cuenta como una de las que inicio el camino de las mujeres ecuatorianas en su andar por uno de los poderes más complejos de dirigir, el poder judicial. Esta mujer de 61 años de edad es graduada en Jurisprudencia, tiene además titulaciones en las áreas de ciencias sociales, políticas y económicas, con especializaciones en derecho administrativo y derecho procesal civil, entre otros (Corte Nacional de Justicia, 2020). Su formación es acorde es acorde a los cargos de dirección que le ha tocado desempeñar

Aguirre, fue electa en enero del 2018 para presidir la Corte Nacional de Justicia (CNJ), cargo que recae por primera vez en manos de una mujer desde su creación en 1830 (Ortiz, 2018). No cabe duda de que, de los tres poderes políticos clásicos, aquel que cumple la función judicial tiende a ser el que menos atención le merece al ciudadano común, quizá porque, como señala Andrade (2007), al considerársele un poder jurídico y no político tiende a quedar fuera del imaginario colectivo en sus análisis de la gestión gubernamental.

No obstante, siendo uno de los espacios de poder de mayor exigencia en cuanto a la formación profesional de sus miembros, el hecho que una mujer lo dirija habla muy bien de lo que ha calado la igualdad de géneros, al menos en lo que respecta a esos espacios tecnocratizados. Por supuesto, dirigir un poder como este, representa un doble reto para alguien como Aguirre, por un lado, tiene que demostrar que está a la altura de esa investidura; y, por otra parte, le corresponde enfrentar los clásicos embates de los demás representantes de los poderes públicos en contra de la función judicial.

Hasta aquí, queda reflejado a grandes rasgos que las mujeres ecuatorianas han sabido “surfear” con éxito sobre las condiciones que imponen los nuevos tiempos de la política en Ecuador. Devenido un país frecuentemente convulso, no ha sido sencillo para las protagonistas de las breves historias de poder reseñadas en este apartado, representar tendencias políticas y, al mismo representar un amplio sector de la sociedad, tradicionalmente relegado por el patriarcalismo político latinoamericano y ecuatoriano particularmente. La figura 7, pretende mostrar en un mosaico, las caras más significativas de las mujeres en los diferentes ámbitos del poder político en Ecuador.



*Figura 7. Mujeres con rostros de poder.
Fuente: elaboración propia*

4. Progresión histórica en derechos humanos y políticas públicas. Una mirada desde las mujeres ecuatorianas

Otro de los temas transversales en el análisis de la relación entre mujeres, géneros y política en el Ecuador, está referido a la evolución que han tenido los derechos humanos en el país, pero no como un dato aislado o simplemente jurídico, se trata de mirar esa progresión tras el colorido vitral que hasta ahora se ha configurado con el análisis del protagonismo de las mujeres en organizaciones políticas y en poderes públicos. En otras palabras, se busca trazar una línea que vincule lo histórico-cultural, lo político y lo jurídico en la interpretación de las luchas de las mujeres ecuatorianas por ser más que un acompañante silencioso del poder androcéntrico para convertirse en un actor principal de la trama que tejen, tanto el discurso como la praxis política en el país.

4.1. Mujeres, géneros y derechos humanos/políticos

En la actualidad, no solo en el contexto ecuatoriano, sino a nivel global existe una clara tendencia a concebir la igualdad de géneros como un proceso de en el que se construye una simetría entre derechos, obligaciones, compromisos y oportunidades tanto de mujeres como de los hombres, lo que no tiene por qué involucrar una ingenua homogeneidad entre que no existe. De lo que se trata es de considerar la equidad en la definición y asignación de esos deberes,

derechos y responsabilidades con independencia del sexo de las personas y de los géneros a los que pertenezcan.

La igualdad de géneros aparece entonces, como un elemento emergente en lo que tiene que ver con la amplitud y plenitud de los derechos humanos, y entre ellos los derechos políticos de las mujeres, más aun, en el entendido que para el Consejo Nacional de Igualdad de Género, la misma debe ser considerada un eje transversal de las políticas públicas, de tal manera que se convierta en un instrumento contra la exclusión o discriminación de la mujer, como ciudadana, es decir, como un actor principal de la vida política y social con plenas capacidades de intervención en las diferentes instancias de toma de decisiones (Consejo Nacional de Igualdad de Género, 2018).

En congruencia con este significado de la igualdad de géneros, se comprende que un paso inicial para que las mujeres alcancen una mayor presencia y protagonismo político, implica su integración paritaria con respecto a los hombres, tanto en la dinámica productiva como en la reproductiva, promoviendo así la apreciación particular de roles. Se trata de una evolución y transformación social que involucra valores, normas y prácticas culturales, las cuales, a su vez, estipulan las formas en que se presentan las relaciones entre hombres y mujeres. Por supuesto, esas relaciones siguen y seguirán siendo complejas porque sus determinantes están asociados a factores socioeconómicos, políticos y culturales, que persisten pero que pueden modificarse de manera positiva.

En todo caso, con el enfoque de géneros se impone la necesidad de que se proponga un cambio de paradigma de un sistema patriarcal a un sistema de igualdad real, tomando en cuenta las necesidades de cada quien, el espacio y el momento. Muchas son las vías para ese cambio, difícil es el camino para esos cambios, pero no imposible, las vías ya están abiertas, ahora falta recorrerlas desde todos escenarios desde el jurídico hasta el político, desde el social hasta el cultural, desde el económico hasta el ambiental, la meta es el reconocimiento en el escenario de la humanidad, el reconocimiento pleno como sujetas de derechos, con capacidades y aptitudes óptimas para todas las facetas de la vida pública y privada.

4.2. Mujeres géneros y derechos humanos en la República de Ecuador

La dinámica vital en la que se involucran las mujeres representa el espacio más conveniente para hablar de los derechos humanos y sus características en América Latina y, por supuesto en el Ecuador. A esto se refiere Fries (2000), al señalar el protagonismo encarnado por las mujeres latinoamericanas en la lucha por los derechos humanos en el subcontinente, desde,

más o menos, la década que comienza en 1970, época en que muchas mujeres se involucran decididamente en los conflictos tendientes a promover, integralmente, sus derechos civiles. De acuerdo con esta autora, los apoyos les llegan a las mujeres desde muchos ámbitos, el sindical y/o gremial, sobre todo, pero siempre apuntando a la necesaria transformación de los poderes del Estado, que son, como se reseñó en el apartado precedente de este capítulo, en donde se concreta la presencia y el protagonismo de las mujeres empoderadas.

Ahora bien, aunque puede haber cierto disenso al respecto, con frecuencia la noción de los derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad humana frente al Estado, concretamente frente al poderío estatal, que por acción u omisión puedan afectar o vulnerar dicha dignidad. Destaca en este sentido, la concepción de la dignidad, como peculiaridad inherente al ser humano, que esta predeterminada y, en tanto, no requiere de instrumentación jurídica ni política (Bohorquez & Aguirre, 2009). Derechos y dignidad humana se yuxtaponen convirtiéndose en obligaciones que toda Nación debe cumplir en atención a: garantizar el acceso a esos derechos, impedir que algunos, representantes o no del Estado, limiten el goce de esos derechos y vulneren, en consecuencia, la dignidad humana.

En el caso ecuatoriano, los derechos humanos tienen rango constitucional y están implícitos desde el propio artículo 1, de la Constitución Nacional vigente desde el 2008, el cual estipula, entre los rasgos que definen a Ecuador, como un Estado de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, organizado bajo la forma de república con un sistema gubernamental de carácter descentralizado. En esa enumeración, hay una descripción formal, pero igual se traduce en un ejercicio principista necesario cuando de construir un nuevo modelo de sociedad se trata.

Estas características, además, se afianzan con lo previsto en el artículo 3 constitucional, al preceptuar como deber primordial del Estado la garantía del efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, con especial énfasis en los derechos sociales y ambientales, destacando que dicha garantía debe ejecutarse sin discriminación alguna (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008). Esa no discriminación se traduce en un discurso de inclusión jurídico-formal que, aunque no garantiza una real situación social de igualdad, si posibilita la activación de otros mecanismos, más allá de lo enunciativo que abone el terreno cultural para una transformación material de las reglas sociales de convivencia.

De esta manera, queda evidenciado que, en el Constituyente ecuatoriano del 2008, privó la igualdad como el principio teleológico más importante del ordenamiento jurídico naciente, y

en concordancia, el reconocimiento de los derechos humanos, como el escudo contra todo tipo de discriminación por razones de sexo o género, entre otros. De tal manera, pese a la ausencia de mención expresa de la mujer en cuanto a su trato igualitario respecto del hombre, los principios y fundamentos dejan claro que se trata de igualar y/o equiparar el disfrute de los derechos humanos tanto para hombres como para mujeres. Esto último, lo refrenda el CONAMU (2009), al reafirmar los nuevos preceptos constitucionales que colocan al país en sintonía con lo establecido por organismos internacionales cuando se trata de combatir la discriminación por cualquier causa.

Por su parte, las regulaciones jurídicas internacionales de naturaleza especial que lógicamente son de obligatorio acatamiento por el Estado ecuatoriano, y que aluden como centro de su regulación y protección a la mujer, se caracterizan porque atienden a circunstancias en las cuales las mujeres de una u otra manera han visto vulnerados sus derechos humanos, se trata de circunstancias o factores que, dada su importancia y constante inobservancia por parte de los sistemas patriarcales, la comunidad internacional procedió a su estipulación normativa con efectos globales. Es importante tener presente que toda norma internacional termina permeando los instrumentos jurídicos nacionales y es que la mujer se ha convertido en un sujeto del Derecho Internacional por excelencia (Vega, 2004).

En síntesis, tanto en su dimensión nacional como en la esfera internacional, al menos en lo que respecta a lo jurídico, los derechos de las mujeres ecuatorianas se encuentran protegidos en la actualidad, de tal manera que cualquier desviación de los órganos del Estado, de personeros del mismo o de individualidades, pueden ser corregidas de inmediato, claro está, si existe la voluntad política para hacerlo. En todo caso, se percibe la construcción de un nuevo orden mundial en donde es esencial fomentar la participación de todas las personas con equidad e igualdad, pues los beneficios de esa participación se traducen en mayores grados de bienestar social, se trata, finalmente, de allanar el camino para alcanzar una sociedad más justa y pacífica, objetivo básico de todo orden nacional y mundial.

Las declaraciones de la igualdad tampoco son nada nuevo pues la misma Revolución Francesa ya la tenía como una de sus principales ideas políticas, pero no deja de ser interesante, observar como los rastros históricos de ese discurso moderno, se pueden seguir aún en las transformaciones del presente, lo que puede ser un síntoma negativo pues implicaría que ha pasado el tiempo y no se ha logrado ese objetivo. En todo caso, como reflejo de esto, en la tabla 10 se recogen algunos instrumentos jurídicos internacionales, suscritos por el estado ecuatoriano, y las normas que se orientan al resguardo de los derechos de las mujeres.

Tabla 11

Síntesis de elementos de la jurisprudencia internacional respecto a los derechos humanos de las mujeres

Instrumento jurídico	Fecha y Objetivos
Convenio sobre igualdad de remuneración	Aprobado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 29 de junio de 1951, Establece como obligación del país signatario promover y garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor (OIT, 1982).
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer	Aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 18 de diciembre de 1979. Los países signatarios se comprometen, entre otros aspectos a: consagrar el principio de igualdad y de la mujer y su realización práctica; adoptar medidas adecuadas que prohíban toda discriminación contra la mujer; establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los hombres y garantizar la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación (Tamayo, 2003).
Convención sobre los derechos políticos de la mujer	Este instrumento fue aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 22 de diciembre de 1952. Destaca entre sus disposiciones: el derecho igualitario del voto en todas las elecciones, sin discriminación alguna; las mujeres serán elegibles para todos los cargos públicos electivos, en condiciones de igualdad con los hombres; las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas en igualdad de condiciones con los hombres (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1954).
Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer	Aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), el 9 de junio de 1994, celebrada en Brasil. Los Estados signatarios se comprometen entre otras cosas a: abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer; actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; incluir en la legislación interna normas penales, civiles y administrativas, que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; modificar o derogar leyes y reglamentos vigentes y modificar las prácticas jurídicas o consuetudinarias que respaldan la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer (Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, 1994)

Fuente: Elaboración propia basada en documentos citados en la tabla

Tal como se deja ver en este apartado, la ordenación constitucional e internacional establece una amplia serie de derechos y garantías orientados a la protección y reconocimiento de las mujeres como iguales respecto de los hombres. En el caso ecuatoriano hay que destacar la voluntad del constituyente nacional en ese sentido y, por su parte, a nivel internacional el esfuerzo, por lo menos normativo, no es menor. De ambos contextos, emerge la figura de las mujeres como esencial, necesaria e importante en el desarrollo social, político, económico, jurídico y cultural de la humanidad, lo es hoy día, en tiempos de globalización, como ya lo fue en tiempos de aislamientos nacionales y dictaduras, tiempos de mayor represión y menor democracia, siendo así, en el Ecuador se perfila una relación recursiva entre dignidad, derechos humanos y empoderamiento de las mujeres.

4.3. Mujeres, géneros y políticas públicas en la República del Ecuador

Resulta indudable que el tema de las mujeres y el género se identifican con la vigencia de los derechos humanos previstos en la Constitución de la República de Ecuador de 2008, no obstante, para hacer viables, reales y eficaces dichos derechos es necesario el diseño, formulación, regulación, ejecución, evaluación y control de políticas públicas de corto, mediano y largo plazo. Esas políticas pueden presentarse como políticas de Estado y estar intrínsecas en la forma y el sistema estatal adoptado, pero pueden ser políticas de gobierno, más coyunturales, que permitan la aplicación del enfoque de géneros a las grandes decisiones nacionales.

En todo caso, las mujeres y los géneros constituyen vertebras fundamentales de la columna de la República del Ecuador, por ello, deben propiciar políticas públicas cuyo destino sea la garantía final de las disposiciones constitucionales e internacionales. No sirve de nada blindar jurídicamente la nación para que se establezcan los mecanismos formales de la justicia y la igualdad de géneros, cuando en la planificación y la formulación de los instrumentos de políticas públicas, esas que hacen posible la igualdad material, no está involucrado el enfoque de géneros y el protagonismo de las mujeres.

Esto lo deja ver con precisión Ruano (2015), cuando comenta los planteamientos constitucionales que se esgrimen en el texto de 2008, desde sus propios preliminares. Desde allí, el legislador aclara la importancia que para el Estado ecuatoriano tienen los principios axiológicos relacionados con la igualdad, la convivencia pacífica, la libertad, y, en consecuencia, dignidad humana. En esa perspectiva, las políticas públicas que desarrolle el Estado deben arroparse con estos axiomas que buscan proteger la vulnerabilidad de los grupos más débiles, socialmente hablando, como quiera que sea, estos argumentos jurídicos robustecen las luchas de las mujeres contra la discriminación y les dota para que esa lucha se concrete en acciones prácticas del gobierno, independientemente de su orientación ideológica o partidista.

Más específicamente, en el terreno de la formulación de políticas públicas, se entiende que la nueva armazón constitucional del Ecuador apunta a la necesidad, de vincular el conjunto de exigencias que provienen de los diversos actores sociales, con las iniciativas de la planificación pública en cada uno de los ámbitos en los que se sitúan esas demandas (Canto, 2008). Por tanto, al formular las políticas públicas, el gobierno del Ecuador, debe incorporar como factores

coadyuvantes de ese proceso; las capacidades y destrezas en los sectores sociales, tales como: capacidades organizacionales, en cuanto al funcionamiento de la organización social; destrezas técnicas, para elaborar, ejecutar y darle seguimiento a acciones específicas; destrezas políticas, en cuanto a la existencia de una figura de autoridad con conocimiento del gobierno; y, arraigo social, para lograr la articulación de los actores de la comunidad.

En ese orden de ideas, el mismo texto constitucional, establece los parámetros regulatorios para que la planificación estatal, incorpore el enfoque de géneros en el diseño de los instrumentos especializados para la implementación de las políticas públicas, esto es, los planes y programas, debiendo garantizarse para tal fin la asistencia técnica necesaria cuando el caso lo requiere, por ejemplo, cuando se trata de formular estrategias para atender los grupos vulnerables. Allí queda evidenciada la relación entre mujeres, derechos humanos y políticas públicas, pues si se trata de luchar contra la discriminación, no vale que eso solo sea una norma, es preciso que se adecuen los medios necesarios para que esa norma se convierta en una práctica gubernamental que haga viva la normativa.

Una actuación con esas características, sin duda le otorga al Estado ecuatoriano, ciertos rasgos definitorios que le identifican con actitudes y percepciones sociales tendentes a la evolución de la igualdad de género, puesto que lo convierten en un eje transversal para la consecución de una planificación de arriba hacia abajo que exigen ser complementadas con propuestas y apoyo direccionadas desde abajo hacia arriba, destinadas al empoderamiento de las mujeres en los distintos sectores de la comunidad.

En otras palabras, luchar por la igualdad de género, implica ampliar las políticas y las acciones concretas que garanticen la participación paritaria de mujeres y hombres en cada una de las áreas, cuya atención prioritaria conducen, a la larga, a la calidad de vida y al buen vivir (Ruano, 2015). Ese axioma de la RC no puede construirse sobre la base de una sociedad que, ni siquiera por su carácter plurinacional ha sido capaz de generar los dispositivos culturales para convivir en igualdad de condiciones. Muchos grupos sociales (ancianos, indígenas, mujeres) no logran articular sus vidas con lo que podría considerarse una vida plena y en tanto, con el llamado “buen vivir”.

Todo esto indica que en la medida en que los gobiernos ecuatorianos, partir de la Constitución del 2008, apliquen con integralidad las normas constitucionales y en el enfoque de géneros, mediante políticas, planes y programas públicas; reconozca igualitariamente las actitudes y los roles culturales de cada uno; incentive la transversalidad de la igualdad de género en las distintas funciones estatales; promocióne la igualdad de género de manera que

debilite las actitudes negativas que la obstaculizan; inste cambios sociales mediante la educación; implemente mecanismos sostenibles de enseñanza en género; incorpore a los miembros de las comunidades en el planteamiento de ideas que generen medidas micro pero contundentes en materia de género; en esa misma medida los ciudadanos de este país lograrán cambios significativos en su percepción de la democracia y la convivencia social.

En consecuencia, la vigencia de los derechos humanos, el enfoque de géneros y las políticas públicas son conceptos que coinciden cuando se trata de analizar el protagonismo de las mujeres en la dinámica sociopolítica del Ecuador. Una convivencia en el marco del respeto a la otredad que representa la diversidad étnica, cultural y de géneros, sería lo congruente con todos esos principios teleológicos que se encuentran subsumidos en la búsqueda de ese protagonismo de las mujeres. Obviamente, todo esto sería letra muerta si no existen, por un lado, una cultura ciudadana que lo internalice y, por el otro, la voluntad política necesaria para que estos procesos se den, y se pueda construir una sociedad más justa.

Llegado este punto, es interesante recordar que el hilo conductor que llega hasta aquí, al menos en este capítulo 2 intenta caracterizar, ha intentado caracterizar los progresos, históricos, sociopolíticos y jurídicos por los que ha transitado el proceso de empoderamiento de las mujeres ecuatorianas, en esa batalla histórica-cultural que le ha tocado librar para hacerse con un lugar protagónico en la construcción y dirección del sistema político de este país. En ese esfuerzo, es fundamental detenerse con prodigalidad analítica en los gobiernos de Rafael Correa y ese fenómeno político llamado Revolución ciudadana, un periodo, hoy bastante cuestionado por los detractores de Correa, pero que -sin duda- representó para toda la sociedad ecuatoriana, especialmente las mujeres, profundos cambios políticos y socioculturales. A esa tarea, se dedica, en pleno el capítulo 3 de esta tesis doctoral.

Capítulo III

LA REVOLUCIÓN CIUDADANA Y LA PERSPECTIVA DE GÉNEROS

Las desigualdades sociales y políticas del Ecuador tienen una larguísima data y es común que cada gobierno, sobre todo en la era democrática del país haya tomado como bandera la necesidad de construir acuerdos sociales para la igualdad. El enfoque de géneros es una de esas perspectivas teórico-discursivas desde las que hemos escogido para interrogar la realidad ecuatoriana en lo que respecta a ese fenómeno de la igualdad, particularmente en lo que atañe a las relaciones de poder que se establecen entre mujeres y hombres en la escena pública. Al observar desde ese lugar (el enfoque de géneros), se enfatiza en el tema del protagonismo sociopolítico que se ha tomado como enunciado principal de estas argumentaciones a favor de la igualdad.

En parte, esta perspectiva de géneros se asume como un instrumento más en el proceso de producción de conocimiento que representa esta Tesis, pues desde ella es posible acercarse con mayor asertividad, tanto a los sujetos, como a las organizaciones que se seleccionaron como fuentes del discurso. Acorde con lo que señala Serrano (2012), “El enfoque de género, desde un punto de vista epistemológico, ha ido generando conocimiento científico, construido reflexivamente en unas circunstancias históricas y sociológicas, y en conexión con otros marcos teóricos” (p. 3).

1. Políticas públicas y construcción social de la igualdad de géneros en el contexto de la RC

Uno de los elementos más celebrados de los llamados gobiernos progresistas en Latinoamérica es su preocupación por visibilizar institucionalmente el tema de la igualdad de géneros. Rafael Correa, en Ecuador, no es la excepción pues, tal como se ha venido referenciando en otros apartados de este trabajo, durante sus diez años en el poder, mantuvo una retórica de reivindicación política y social de la mujer que, más allá de sus concreciones, habla de esta inquietud por mantener a las mujeres en el radio de acción de las políticas públicas, tanto en su papel de liderazgo, como en el protagonismo reivindicativo, recibiendo, al menos desde el discurso una atención sostenida.

1.1. Los elementos destacables en el origen de la RC en relación con la igualdad de géneros

La RC debe ser abordada, antes que nada, como el proyecto político de un partido (Alianza País) y de un líder Rafael Correa, el cual emerge a la escena pública ecuatoriana, unos años

antes de convertirse en Presidente de la República por primera vez, en 2006, pero dio sus primeros pasos en el marco de la compleja situación resultante de la caída de Lucio Gutiérrez. Es en el año 2005 donde comenzó a forjarse el liderazgo político de Correa tras renunciar al cargo de Ministro de Economía, durante el gobierno transitorio de Alfredo Palacio, pues, en aquel momento se mostró ante las masas como un político de nuevo tipo, opuesto a la hegemonía tradicional de los viejos partidos ecuatorianos que apuntaban a una alianza con el Fondo Monetario Internacional (FMI), considerado por Correa como un organismo representante de la oligarquía internacional.

De acuerdo con Stoessel (2014), el correísmo se inicia entonces, como una corriente político ideológica heterogénea que se debate entre los populismos de nuevo cuño, la tendencia del llamado socialismo del siglo XXI, preconizada por el controvertido presidente de Venezuela, Hugo Chávez y, el Postneoliberalismo que intenta matizar desde la visión humanista, los atavíos clásicos del viejo liberalismo. Estas definiciones iniciales del discurso bajo el que se promueve la visión de este liderazgo dan cuenta de la complejidad en la que le corresponde insurgir, un contexto caracterizado por una madeja de ideas, a ratos contrapuestas que buscan un lugar en la ya convulsa realidad latinoamericana.

Correa y su propuesta política, se perciben como originarios porque no es posible enlistarlos entre los estereotipos del caudillismo latinoamericano que, a partir de la reivindicación populista, pretende hacer de la pobreza, su trinchera para justificar un ejercicio justiciero del poder -como podría hacerse con Evo Morales en Bolivia y Hugo Chávez en Venezuela- sino, que mantiene, durante su primera fase, sobre todo, un crecimiento económico sostenido y niveles inflacionarios, bajos a pesar del incremento del gasto público como hicieron algunos de los líderes mencionados. La reacción de los indicadores económicos en esa primera fase de la RC, contribuye a la estabilidad política que requería el talante democrático pero recio que muestra Correa cuando de proponer los cambios se trata.

Sin embargo, a pesar de las imprecisiones conceptuales, es posible ubicar los inicios de la RC en Ecuador, encabezada por Correa, como parte de los reacomodos, o mejor dicho, de la emergencia en Suramérica de discursos que retoman el rechazo a las formulas neoliberales para la concreción de propuestas gubernamentales de izquierda, que ponen el énfasis del cambio, nuevamente, en un protagonismo estatal que logre una autentica redistribución del ingreso y del fruto de las riquezas naturales de cada nación, abogando de forma reiterada por la “no injerencia” de los EEUU, en los asuntos domésticos de cada país. De esta manera, antes que se popularizara con el nombre de RC, la propuesta de poder del correísmo asume una serie de

rasgos teóricos que son rastreables y registrables como sus características genéticas (Ospina, 2009).

Nacionalismo, géneros y políticas públicas de la RC

Las señales de nacionalismo económico del gobierno de Correa, una vez en el poder, son variadas y contundentes, aunque no consiste en la expulsión de las compañías transnacionales, sino en tensar hasta el límite la negociación con ellas. No implica una denuncia retórica de los imperialismos en los diferentes foros internacionales, en los que con frecuencia se debaten esos temas, sino impulsar la conformación de espacios para la consolidación de los intereses nacionales y regionales, como es el caso de la llamada, Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA), propulsada por Hugo Chávez desde Venezuela.

Por supuesto, cuando se coloca la etiqueta nacionalista para entender parte de la propuesta originaria de la RC de Correa, hay que entender este tema en su sentido más amplio pues, si bien adopta una postura similar a otros líderes regionales, en cuanto al rechazo antiimperialista, la defensa de la nación que se encuentra en el discurso político de Correa pretende ir más allá de lo meramente político-geográfico e incorpora elementos de lo que Cruz llama “nacionalismo cultural” (1995). Existen, en este sentido, varias propuestas teóricas que permitirían registrar los enunciados discursivos de la RC, encuadrados en el nacionalismo, bien de caracteres explícitos o implícitos.

De hecho, desde sus inicios, Correa se plantea una confrontación frecuente con quienes él considera responsables directos, en pro y en contra, de la construcción del nacionalismo ecuatoriano, como son los medios de comunicación. Las iniciativas legislativas para regular la actuación de los grandes medios, emprendidas por Correa, son parte de esa concepción desde la que el discurso del presidente, valora las interferencias que, a su entender puede suponer la injerencia mediática en los procesos de construcción social de un modelo de democracia participativa y protagónica.

La identidad nacional no se construye en momentos especiales solamente, sino en un sinnúmero de gestos cotidianos que fijan la idea de un “nosotros”, salvo que se trate de una política de refundación de la nación en sí misma, y en ese caso, la imaginación de discursos primigenios debería pasar por la creación de una nueva prensa, por un nuevo momento primordial de definición no sólo de la institucionalidad estatal, sino de la pareja de esta dualidad, de la nación y de la nacionalidad (Mancero, 2017).

Conviene entonces reseñar el aditamento del nacionalismo en la configuración y desarrollo de la RC en el contexto ecuatoriano, como una distinción de este fenómeno que, en lugar de

empujar su comparación con otros movimientos político-ideológicos similares, proveyó a Correa de una herramienta pragmática al momento de formular sus políticas públicas y, enfrentar desde ellas, la resistencia de algunos actores internos, como por ejemplo la prensa tradicional. Siguiendo a Ospina (ob.cit.), la concreción del discurso nacionalista de la RC se puede observar en las acciones iniciales del gobierno de Correa, tales como: a) la renovación de concesión de CONECEL, previo un pago millonario; b) la mejora de la producción de PETROECUADOR y renegociación de contratos petroleros con compañías transnacionales; c) su adhesión al ALBA y; d) la auditoria de la deuda externa del país para verificar su legitimidad

En cuanto a la relación que estos acontecimientos, de carácter nacionalista, tienen con la lucha de las mujeres ecuatorianas por la igualdad de géneros y la incorporación protagónica en las políticas públicas, debe mirarse, la importancia que adquieren, en ese periodo, las organizaciones de corte indígena y, particularmente, aquellas que tienen un discurso de rescate de la soberanía. Allí, en el seno de esas organizaciones se van gestando, las interpelaciones sociales por la igualdad que, eventualmente se traducirán en un reclamo sostenido en todas las demás esferas en las cuales suele reproducirse la dominación y, por ende, las inequidades sociales, como pueden ser, la escuela, y las relaciones de géneros.

El rechazo a las organizaciones y la política tradicional

Otro de los elementos fundantes del discurso político sobre el que se instituye la RC, tiene que ver con el énfasis colocado por su líder, en el rechazo de los actores, organizaciones y retórica política que dominó en el pasado reciente, la escena pública en el Ecuador. Correa se afirma en la figura de una organización (Alianza País), que tiene una función relativamente transitoria: llegar a la presidencia de la República. En procura de ese objetivo, el líder asume una predica que le aleja de cualquier negociación con las viejas elites, bien sean económicas o políticas, acercándole, por el contrario, a la masa desposeída que venía de frecuentes decepciones y fuertes conmociones sociales generadas en los fracasos de anteriores movimientos políticos, como el de Lucio Gutiérrez.

Consciente de ello, el manejo discursivo que hace Rafael Correa, sobre todo en su primera campaña electoral, echa mano del descontento social, forjado por el fracaso de todos los liderazgos fraudulentos anteriores, los canaliza a su favor y, como señala Chaparro (2015), logra aglutinar las simpatías de los diferentes grupos y organizaciones populares que están habidas de un remozamiento de la política y de una gerencia política que reivindique la preocupación estatal por la población cuyos derechos sociales han sido históricamente

vulnerados por los grupos de poder. El discurso y la praxis política de la RC en sus inicios promueven entonces, una mayor proximidad institucional y popular entre el liderazgo político y las necesidades del pueblo o, más bien de los ciudadanos, revalorizando la función contralora que estos últimos deben ejercer para que se concrete una verdadera democracia.

En ese sentido, la enunciación correísta de sus adversarios políticos, no se inscribe en el léxico de la confrontación partidista tradicional, por el contrario, desde el principio, la “figura partido”, es cuestionada y asociada a prácticas “mafiosas” o “clientelares” que solo empobrecen más a los que no tienen para robustecer a los poderosos. Hay una combinación que le da muchos resultados positivos a Correa, en su necesidad de consolidarse como un líder distinto y confiable: lo político y lo económico.

Así, cuando critica a los viejos partidos, critica a los viejos empresarios que conviven y se aprovechan de las políticas públicas para reforzar su dominación en el terreno de lo económico. De hecho, desde su discurso, el presidente Correa logra homologar el rechazo a los políticos tradicionales con el rechazo a las prácticas del “neoliberalismo salvaje”, impulsando políticas públicas de redistribución del ingreso encuadradas en una mayor carga impositiva para la gran empresa.

En materia de políticas públicas, esta retórica antipartido y antielitista de Correa, conlleva la formulación de su propuesta constitucional (previa la Constituyente), que reivindicaría a los grupos tradicionalmente relegados de la atención estatal, como los indígenas y las mujeres. Es una propuesta constitucional que se estructura en estricto alineamiento con los preceptos del pregonado (para la época), socialismo del siglo XXI. Ya otros líderes de esta tendencia, como es el caso de Hugo Chávez en Venezuela, habían llevado a cabo cambios constitucionales de tal magnitud que lograron modificar toda la estructura y la institucionalidad de la vieja democracia representativa.

En todo caso, es una construcción discursiva estrechamente vinculada con la izquierda latinoamericana, que contiene los requerimientos de las organizaciones colectivas y que hacen fuerza por la formulación de políticas igualitarias. En ese contexto es en donde, figuras como el indigenismo, el feminismo o el género, se convierten en realidades institucionales logrando, en primera instancia la concreción material del discurso de la inclusión que tanto habitó en los deseos, nunca satisfechos, de ciertos grupos. La RC, pretende ser, en ese sentido, un proyecto de nuevo cuño, en donde la igualdad de géneros, más que un enunciado discursivo e ideológico, sea una construcción social cotidiana, una edificación propia de la ciudadanía que se mira a sí

misma y se organiza en función de sus intereses, diversos, variables, pero, articulados en torno al deseo de una sociedad más igualitaria.

Se trata de un concepto de igualdad que se enlaza con la noción de equidad, que alude a justicia y se relaciona con la reivindicación de la protección a los débiles/vulnerables. La base de la justicia distributiva, “el tratamiento desigual de los desiguales” para disminuir y eliminar brechas, aplica el criterio de la igualdad al servicio de la equidad (Carosio, 2014).

En ese contexto, es lógico que los primeros efectos benéficos de la RC, se sientan en las organizaciones contestarías del liderazgo tradicional, las mujeres ecuatorianas emergen de esa primera fase, repotenciadas en su protagonismo sociopolítico y, no como meras favorecidas de las acciones gubernamentales, sino como parte de la vanguardia colectiva que implica el giro de la institucionalidad ecuatoriana que se imprime desde la constituyente y la nueva constitución que será aprobada en el año 2008. En la misma discusión assembleísta, como en la dinámica social y cultural que supone su divulgación y aprobación de la nueva carta magna, ya las mujeres eran un sujeto omnipresente, tanto en el discurso como en las acciones de la Asamblea.

El mismo proceso que conlleva el discurso parlamentario en el que se recrean las condiciones jurídicas necesarias para una sociedad de perfil democrático, se siembran las simientes de esa igualdad que luego es reclamada en las relaciones históricas concretas. Las mujeres son subjetivadas como parte de las transformaciones que están por hacerse. Unos cambios que no se dan por la discusión parlamentaria, ni siquiera por la aprobación de la nueva Constitución, sino por la certeza social de estar envueltos en una acción colectiva de la que todos hacen parte, sin mayor exclusión, que la generada por las limitaciones de espacio y tiempo que presentan este tipo de discusiones.

Ciertamente, el texto constitucional es importante para impulsar el trato igualitario de los diferentes géneros, sin embargo, es imprescindible que ese respeto por la igualdad sea una construcción social, es decir, un comportamiento colectivamente aceptado e impulsado desde las relaciones sociales cotidianas que son, finalmente, las que refuerzan los prejuicios y esquemas discriminatorios, transformados luego en políticas públicas desiguales. Atender esto último ya no es materia política ni mucho menos jurídica, estos son solo elementos que se consolidan solo si son cajas de resonancia de lo que pasa en los escenarios educativos y familiares que son, quienes copian la lógica de la dominación.

El redimensionamiento de la figura estatal

La clásica crítica de la izquierda latinoamericana dirigida hacia el posible desmantelamiento del Estado como parte de las tácticas neoliberales para expropiar los espacios públicos, a los grupos más vulnerables; tiene una presencia más que importante en el discurso y la praxis inicial de la RC. Se considera, desde sus planteamientos fundantes, que el Estado ecuatoriano debe ser redimensionado y colocado al servicio de los más vulnerables, cayendo, muchas veces en una posición, calificada por Ospina (ob.cit.), como “corporativista”, corriéndose el riesgo de malversar uno de los recursos más importantes de la propuesta revolucionaria de Correa: el protagonismo de la sociedad civil.

La figura del Estado adquiere una estatura poco vista anteriormente, durante los primeros pasos de la RC. De a poco, se va incrementando la presencia estatal en el control de la sociedad civil y, por supuesto de las diferentes corporaciones que hacen vida en la dinámica política, social y económica de Ecuador. Y es que parece haber una creencia colectiva en los propulsores de la RC, respecto a las bondades que tendrá sobre el bienestar de la nación, revalorizar el control estatal sobre aquellos actores tradicionalmente dominantes, manteniendo incluso, una retórica querellante sobre la necesidad que los diversos grupos, sean mujeres, indígenas, sindicatos u otros; depongan sus intereses particulares en procura del bien de la “Nación”, entendida esta última, como representación simbólico-cultural de las diferentes instituciones que componen el Estado.

En tanto avanza la construcción social de los nexos ciudadanos con el proyecto político de Rafael Correa, impulsado desde Alianza País, se va reconfigurando el imaginario colectivo de un estado fuerte que funciona como un guardián del bien común. Un Estado que, entre otras cosas, crea y re-crea los espacios para el diseño y ejecución de políticas públicas de carácter sectorial que apuntalan la búsqueda de la igualdad entre los diversos estamentos que componen la sociedad ecuatoriana, con una visión, por cierto, no estamental, sino holística; en donde, más que un intervencionismo estatal a la vieja usanza latinoamericana, se produzca una simbiosis proteica entre estado, economía y sociedad. En concreto, los elementos del “estatismo” presentes en la propuesta originaria de la RC y correlacionados con la construcción social de géneros, se pueden observar en la figura 8.

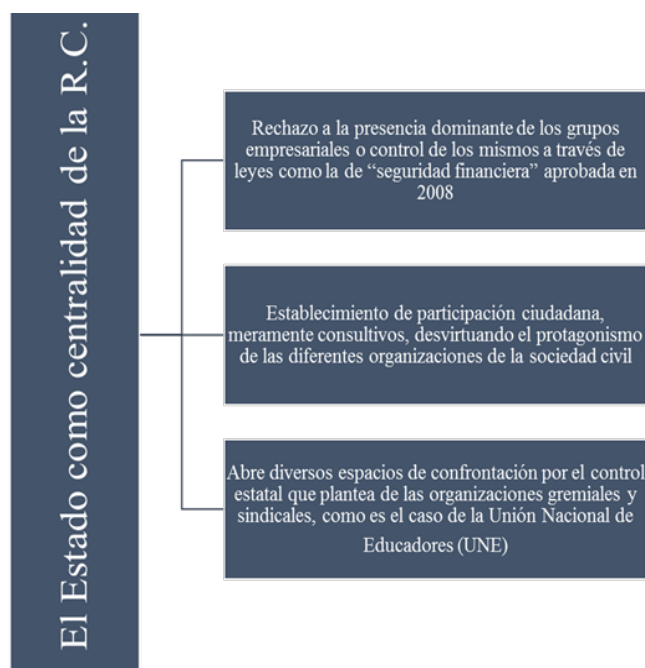


Figura 8. El Estado como figura central de la RC.
Fuente: elaboración propia basado en Ospina (2009)

1.2. La transversalidad de géneros y las políticas públicas de la RC

La discusión sobre la necesidad de incorporar la visión y acción de las mujeres en la dinámica sociopolítica del “Ecuador revolucionario”, se abrió desde los inicios de la RC, consistente esta demanda, con el discurso inclusivo del líder, Rafael Correa. No obstante, es justo reconocer que estos requerimientos igualitarios ya tienen una larga trayectoria en el contexto latinoamericano por lo que la RC, viene a proyectar o, ejecutar esa propensión igualitaria en la formulación de políticas públicas concretas. Además, ese reconocimiento de la obligatoriedad que tiene el Estado ecuatoriano de garantizar la presencia activa del enfoque de géneros en el accionar de la nueva institucionalidad emergente de la Constitución del año 2008, se asocia con la necesidad de mantener una perspectiva de géneros que atraviese de manera transversal el nuevo Estado.

Ahora bien, ¿qué se entiende como transversalidad de géneros y, en qué medida, su implementación permite mantener o impulsar la igualdad social en los términos que se estipulan en el texto constitucional del 2008?, de acuerdo con Munevar y Villaseñor (2005), cuando se habla de transversalidad, se está intentando revalorizar el papel que juega “lo diverso” en la construcción de las prácticas sociales, se está queriendo ampliar y alimentar los significados de los discursos de integralidad que requiere la formación de proyectos colectivos. Así mismo, si esa transversalidad implica una praxis de acercamiento y superposición de los

intereses de géneros en el marco de las políticas públicas, puede ser tomada como una herramienta valiosa en la construcción de sociedades más democráticas, inclusivas e igualitarias.

La transversalidad de géneros y los principios de igualdad

Uno de los aspectos que más deben cuidarse por parte de los servidores públicos cuando se quiere mantener el enfoque transversal de géneros, es la comprensión de los principios bajo los cuales se aplican los criterios de igualdad. En palabras de Fernández (2012), la igualdad tiene, básicamente dos concepciones fundamentales: igualdad formal e igualdad material. En el caso de la primera, su garantía es legal o normativa; y, por lo tanto, en la actualidad, es sencillo que esté presente en la mayoría de los sistemas políticos modernos. Y, es que ningún régimen de gobierno va a sustentar su legalidad y legitimidad en la formulación de esquemas legislativos desiguales, por el contrario, una manera de protegerse de críticas internas y externas, es establecimiento de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, sin distingos de raza, sexo, credo o ideología política.

Por su parte, la igualdad material, alude a la concreción de la no discriminación que se encuentra establecida en la norma, es decir, la consecución real del principio igualitario que suscribe el texto constitucional. Esta dimensión del principio igualitario es aplicable, tanto para los ciudadanos individuales como a los grupos o corporaciones a las que puedan pertenecer. En el caso de las democracias latinoamericanas, especialmente en el Ecuador de la RC, la igualdad de tipo formal se encuentra en el discurso, tanto del candidato, como del presidente Correa y, puede decirse que uno de sus primeros aciertos fue lograr la aprobación, una vez en el poder, de una nueva Constitución que recogiera ampliamente esa dimensión de la igualdad, incluida allí, el tratamiento igualitario de los géneros.

Pero, además, es preciso tener presente que una igualdad establecida formalmente no es suficiente para que se consolide la transversalidad de géneros como praxis política. Lejos de eso, en la mayoría de los países latinoamericanos, las deudas sociales con los grupos sociales que tradicionalmente son burlados en sus derechos tienen su origen en la incapacidad de los gobiernos para formular políticas sociales efectivas a la hora de hacer coincidir lo formal-abstracto con lo material-concreto. Convertir los deseos en hechos, el discurso en acción práctica es parte de la asignatura pendiente para los gobiernos latinoamericanos y, frente a esa realidad indeseada, quiere actuar la RC. ¿Más leyes?, puede ser, pero ellas por si solas no

representan ningún cambio real, su internalización por parte de los ciudadanos y la conversión de las mismas a partir de la socialización es lo que importa.

Es así como, en el proceso de transformación que vive de la sociedad ecuatoriana con la llegada del correísmo al poder, se produce la estructuración de estrategias para configurar una suerte de igualdad de oportunidades que, superando la dicotomía entre formalidad y materialidad, pueda proyectar nuevas prácticas igualitarias para los grupos de iguales, pero también, para los desiguales (Lugo, 2010).

Este tipo de estrategias busca reducir la brecha entre lo que se legisla y lo que se vive, con particular énfasis en el acceso igualitario a las posiciones o procedimientos que puedan favorecer los objetivos de un ciudadano, en consideración de sus habilidades o talentos. Cuando se trata de la transversalidad de géneros, igualar desde el punto de vista de las oportunidades, sugiere la eliminación de los obstáculos que puedan presentarse a mujeres u hombres como resultado de las condiciones que le hacen parte de uno u otro género.

La transversalidad de géneros y algunas de sus áreas de concreción

Conceptualmente, la transversalidad de géneros tiende a ser difusa, aunque generalmente se entiende como un proceso en el que las mujeres consiguen ciertas cuotas de participación, más allá de ser sólo sujetos de derecho de los bienes que se producen en una sociedad. Así la concepción es producto de los debates multilaterales generados en el seno de las organizaciones que integran la mayoría de las naciones a nivel mundial. “El concepto de mainstreaming de género, traducido al castellano como transversalidad de género, está ligado en sus orígenes al campo de la cooperación para el desarrollo” (Fernández, ob.cit., p.82). De acuerdo a su concepción original, este concepto implica la incorporación de las mujeres en igualdad de condiciones, a los procesos de desarrollo económico de las naciones, es decir, se trata de la consagración de intencionalidad económica y por lo tanto tiende a ser bastante limitada en su alcance.

Siguiendo con las ideas de Fernández, la transversalidad de géneros evoluciona positivamente, superando la visión limitada de sus inicios y ya, a finales del siglo XX, se transforma en un conjunto diverso de estrategias de desarrollo integral de la igualdad de géneros, entendido este último, como una construcción social que involucra elementos no solo económicos, sino, esencialmente políticos y culturales. Al redimensionar el concepto de género, las políticas públicas en las que se pretende concretar la transversalidad se transforman en acciones de desarrollo integral con una participación activa de las mujeres, tanto en la

formulación como en la ejecución de las políticas en cuestión. De hecho, la transversalidad de géneros es adoptada en la Plataforma para la Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre Mujeres de Naciones Unidas celebrado en Beijing en 1995, como un llamado urgente para la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas públicas, ya tengan un radio de acción social, política o económica.

En el caso ecuatoriano, la transversalidad de géneros, se extiende, concretamente, a partir de las políticas públicas impulsadas por la RC en diversas áreas, siempre bajo la premisa de atender el proceso de avenencia que debe privar entre los derechos de los diferentes grupos sociales y, en el caso específico de la igualdad de géneros, el equilibrio necesario en la atención de las demandas de las mujeres para no ser objeto de discriminación y, ser tratada de forma igualitaria tanto por las instituciones como por los demás colectivos que hacen vida común en la convivencia ecuatoriana. Entre las áreas más importantes, analizadas desde el discurso y la praxis de algunos sujetos políticos (personalidades u organizaciones), son:

En el área educativa. La complejidad que subyace en la lucha por la igualdad de géneros en un país pluricultural como es Ecuador, se percibe con mayor fuerza en el ámbito educativo, y es así, porque la discriminación de las mujeres parece ser parte del magma cultural propio de los preceptos patriarcales bajo los que se estructuran, tanto los procesos educativos, como los métodos y contenidos desarrollados en su contexto. Ese clima de dominación patriarcal, aunque se ha venido difuminando a lo largo de la historia reciente, mantiene ciertos influjos en la construcción de los currículos y planes educativos que deben ser combatidos casi a diario, en las aulas de clase, pero más aún en las prácticas sociales que se articulan alrededor del hecho educativo.

Es así como, la importancia trascendental que tiene la educación en los procesos de socialización secundaria, hace presencia a través de la transversalización del enfoque de géneros y es asumida por las políticas públicas en la educación ecuatoriana. Un ejemplo de esa situación se puede encontrar en el documento elaborado por el Ministerio de Educación, en el año 2013, titulado “Guía para la transversalización de la perspectiva de género en la gestión operativa de la educación técnica en el Ecuador (Ministerio de educación del Ecuador, 2013). Allí, se desarrolla una visión general del funcionamiento de ese fenómeno de transversalización en atención a ciertos elementos que permean las prácticas de enseñanza en el área.

Se entiende, en ese sentido, que la guía presentada por el Ministerio pretende orientar en la realidad concreta, la aplicabilidad de los criterios que deben tomarse en cuenta para que la igualdad de género pase de lo formal a lo material. Esto se inscribe en el proceso de

transformación institucional y socio-política que vive el país a partir de la aprobación de la nueva Constitución Nacional. Se trata de la institucionalización del enfoque de género más allá de lo teórico y, es lo que resume la tabla 12.

Tabla 12

Síntesis de elementos de transversalidad de géneros en las políticas educativas de la RC

Elemento	Descripción
Cambiar las creencias de y sobre género, estereotipadas y persistentes	Esta es una de las primeras tareas que debe asumir una transversalización de géneros en el ámbito educativo. Es preciso que ese esfuerzo sea emprendido en todos los espacios institucionales posibles, es decir, es una tarea tanto de los docentes en el aula, como de los directivos en el proceso de gestión como en el comportamiento o actitudes de los estudiantes en sus relaciones escolares.
Transformar las actitudes diferenciadas de la comunidad educativa	El proceso educativo tiene su principal razón de ser en el acto de la relación enseñanza-aprendizaje-enseñanza, la transversalidad se concreta en el conjunto global de las relaciones que se establecen como resultado de ese proceso, no hay que descuidar el valor que adquiere la implementación de la perspectiva de género en la convivencia de la comunidad educativa en general, incluyendo, los padres y representantes, el personal obrero y administrativo y, el entorno institucional.
Incorporar la coeducación como un fenómeno integral	Educación con una perspectiva de géneros transversal, no es solo cuidar la integración de las mujeres en el acto educativo y sus consecuencias, como sería, por ejemplo, la profesionalización de ellas. Es tomar en cuenta la internalización, por parte de todos los actores educativos, de los derechos que privan para el establecimiento de relaciones igualitarias, sin desmeritar la consideración de la diversidad que encarnan todos los seres humanos, más allá de su identidad de género, sus creencias religiosas, o sus orientaciones ideológicas.
Planificar estratégicamente con perspectiva de género	La adopción del enfoque estratégico de planificación en el contexto educativo sirve al objetivo de visibilizar las necesidades, expectativas y talentos de mujeres y hombres de manera discriminada, primero y luego integradas. Superar la visión tradicional en la que se suele planificarse desde la racionalidad de la sociedad patriarcal, es una de las funciones de este elemento de la transversalidad. “Por esa razón es de suma importancia colocarse los lentes de género a la hora de la planificación para que la institución participe plenamente en la creación de culturas de trabajo favorables a la equidad y el cambio” (Ministerio de educación del Ecuador, 2013).
Fomentar la evaluación institucional desde una perspectiva de géneros	Las instituciones educativas pueden y deben evaluarse de manera integral, tanto en sus procesos como en sus productos. Parte de la integralidad de esa evaluación, implica la incorporación como criterio de excelencia y pertinencia, de la perspectiva de géneros, preguntarse acerca de las contribuciones de la dinámica institucional, en los logros para una sociedad más inclusiva. En cuanto a este elemento, es necesario que se manejen de forma objetiva, las variables e indicadores de evaluación institucional, correlacionados con las estrategias para sopesar la participación de mujeres y hombre en las acciones educativas del presente y sus perspectivas para el futuro.

Fuente: elaboración propia basada en el Ministerio de Educación del Ecuador (2013)

En síntesis, la transversalidad de géneros aplicada en el ámbito educativo, comporta una serie de discursos y prácticas que se encuentra a lo largo y ancho de las políticas educativas en

general y, desde allí, debe ser extrapolada a cada uno de los sectores o niveles de la enseñanza formal, sin olvidar que, la única forma de mantener unas relaciones de igualdad de géneros, sostenibles en el tiempo, es que esas relaciones se propaguen hasta aquellos espacios no formales en los que interactúan todos los ciudadanos, aunque no se trate de instituciones propiamente dichas.

En el área laboral. Tanto en Ecuador como en el resto de Latinoamérica, las relaciones laborales y, en general el mercado del trabajo ha cambiado profundamente en las últimas décadas, particularmente, desde inicios del siglo XXI. Uno de esos cambios se ha producido en las circunstancias bajo las cuales se incorporan, actúa y se mantienen las mujeres en el terreno del empleo formal, pues, está claro que, en el contexto del hogar y el trabajo doméstico, aunque se han dado cambios, la resistencia cultural es mayor. De hecho, uno de los debates más importantes que deriva de la aplicación de la transversalidad de géneros en esta área, es la complejidad que implica armonizar las dimensiones formales e informales del trabajo femenino, lo que ha llevado a la profundización del subempleo y la explotación laboral de las mujeres (Albuja & Enríquez, 2018).

En ese orden de ideas, las mujeres ecuatorianas parecen haber logrado una mayor cuota de participación en el mercado laboral desde el punto de vista normativo durante la RC, pero si se acerca la mirada, es posible divisar la persistencia de relaciones de subordinación injustificadas entre mujeres y hombres, así como una ampliación del acceso a puestos de trabajo que implican responsabilidades similares a las que enfrentan los hombres pero, persisten esquemas de permanencia y remuneración inestables e informales para las mujeres.

Desde el punto de vista de la igualdad formal, el texto constitucional garantiza, en su artículo 34, la consideración del derecho a la seguridad social de aquellas personas, generalmente mujeres que desarrollan un trabajo doméstico no remunerado. (Consejo Nacional de las Mujeres - CONAMU, 2008), además de otros principios normativos que protegen con la discriminación, por lo que el avance en materia de derechos es un hecho incontestable.

Una transversalización de género exitosa en el ámbito laboral debe, en cualquier caso, propiciar la incorporación de las mujeres a los procesos económicos de manera que eso les permita y reproduzca nuevos esquemas de relaciones equitativas, con la generación de ingresos y recursos propios que potencien su capacidad para tomar decisiones sin que se vea afectada su autonomía y su proyecto de vida. Así, si se desempeña un trabajo remunerado, tiene que ser en condiciones y circunstancias similares a las de los demás géneros, en otras palabras y, encuadrada en la nueva Constitución ecuatoriana y el “Buen Vivir”, el trabajo de las mujeres,

y los miembros de la comunidad LGBTI, por ejemplo, permitirá una consecución del derecho a la no discriminación, al tiempo que abre los espacios para una realización plena de los ciudadanos.

Tomando como referencia la Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género, elaborada para el periodo 2014-2017, (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014), la participación y la inserción de las mujeres en la economía ecuatoriana, puede producirse en un marco de igualdad si se garantizan una serie de lineamientos que se ilustran en la figura 9.

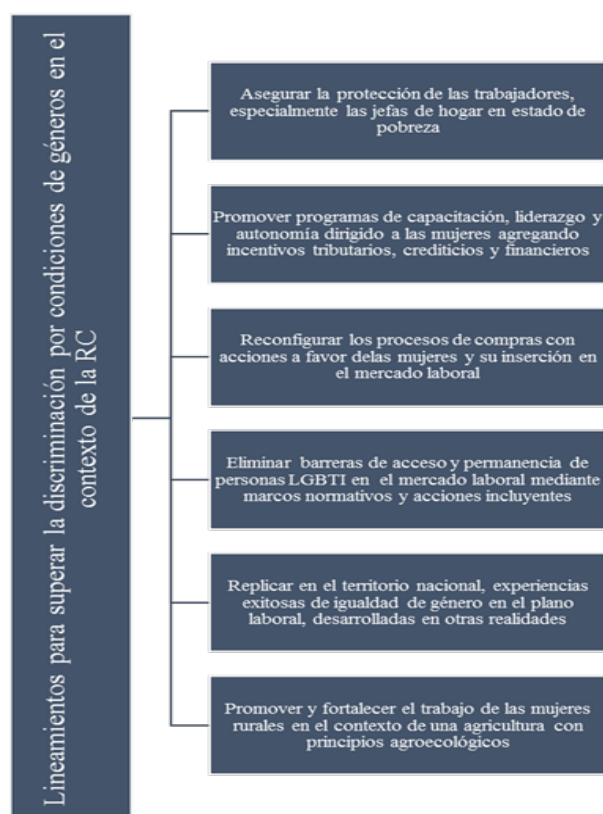


Figura 9. El Estado como figura central de la RC.

Fuente: elaboración propia basado en Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2014)

En términos generales, el progreso en la prosecución de los derechos laborales de las mujeres y la aplicación de la transversalización de géneros es notable cuando se analiza la ampliación de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, enfatizándose la formulación de las políticas públicas para concretar, en acciones de gobierno, cada uno de los objetivos reseñados en la figura 9. De cualquier manera, la idea fuerza de la RC en relación a este aspecto, es la de fomentar una igualdad económica y social que se traduzca en la elevación del buen vivir y la consolidación de los principios normativos que resguardan el derecho de

todos a convivir en una sociedad justa, de iguales y con un claro rechazo a los esquemas discriminatorios engendrados en las sociedades patriarcales del pasado.

1.3. Políticas públicas, géneros y promoción de la participación en la RC

El tema de la participación política en clave de géneros es, precisamente, un tema transversal para esta Tesis Doctoral, por lo que ya ha sido tratada en otros apartados y lo seguirá siendo más adelante, así que, en este espacio del capítulo 3, solo se quiere reafirmar una serie de elementos que han sido revalorizados desde los inicios de la RC, en lo que respecta a ampliar los mecanismos de inclusión y protagonismo de las mujeres en las instancias de poder político del Ecuador. En tal sentido, se comparte la idea según la cual, la construcción social de las relaciones de géneros, son parte del entramado del poder que exhibe y concreta el Estado, en función del discurso dominante que prefigura los estereotipos e identidades de género desde los dispositivos clásicos de difusión de las ideas dominantes, como la educación, por ejemplo.

El ejercicio de participación ciudadana, como se encuentra conceptualizada en la Constitución de 2008, ha significado un cambio radical con relación a las formas que se conocen en la democracia tradicional de los Estados modernos, incluido el ecuatoriano, ya que la intervención ciudadana se ha caracterizado por un bajo impacto de influencia en las esferas del poder político. En la práctica, los ámbitos de participación de la ciudadanía se han reducido exclusivamente a la designación de representantes, que tienen el encargo de adoptar las decisiones que en rigor le pertenecen al pueblo elector (Páez A. , 2011).

Tal como señala esta autora, el norte de la RC, apoyada en esos cambios constitucionales fue redimensionar las fórmulas de participación democrática, de manera que pudiese darse el giro de una democracia representativa en la que participar era un acto meramente electoral, a una participación de carácter protagónico, convirtiendo al ciudadano en un sujeto político, con todo lo que eso implica. Se trata de una ciudadanía que se ejercita en el diario forcejeo con el poder político instituido y, más aún, formando parte de ese poder, en algunas instancias populares que pueden articular la organización social de soporte estatal para la gestión y supervisión de las políticas sociales.

Esta situación de la democracia ecuatoriana, se inscribe en el contexto más general de transformaciones operadas en los sistemas políticos latinoamericanos, desde Venezuela hasta Brasil, pasando por Argentina y Uruguay, en donde los gobiernos de orientación izquierdista promovieron un cuestionamiento radical a formas democráticas tradicionales y el surgimiento

de estos mecanismos de participación ciudadana sin intermediarios, en la búsqueda de una democracia más auténtica, según ese discurso de la izquierda emergente.

Evolución de la participación política de las mujeres desde la perspectiva de género

Si se atiende a la jurisprudencia, el camino que conduce a la formalización de la participación política de las mujeres en Ecuador es largo y sinuoso, en general el país es un claro ejemplo de la reproducción de la cultura patriarcal, en cuanto al tratamiento de las mujeres como seres intelectualmente inferiores e incapaces de tomar decisiones políticas, trato que se mantiene casi inalterable hasta finales del siglo XIX. (Páez, ob. cit.). De hecho, no es sino hasta comienzos del siglo XX (Constitución de 1906), que se elimina la condición de ser hombre para ser considerado un ciudadano, con derechos políticos y, en tanto, podría considerarse, esta época, como el punto de partida legal para que las mujeres fuesen tomando cierto rol participativo en la dinámica sociopolítica del país.

Siendo así, cuando a ese proceso continuado de discriminación sociopolítica de las mujeres, se le analiza desde la perspectiva de géneros, se puede tener una visión más completa del fenómeno, una mirada holística que lleva implicada una serie de elementos que confluyen en las relaciones sociales que son, finalmente, las que determinan las circunstancias en las que puede surgir la igualdad de género como un conjunto de prácticas sociales, culturales y normativas. La construcción social de los géneros es la que impulsa las diferentes creencias y estereotipos que median en la desigualdad que puede imperar al momento de determinar las oportunidades para la participación política de las mujeres.

Ahora bien,, más allá de la perspectiva de géneros, la comprensión de la subordinación histórica de las mujeres en el terreno de la política, pasa por entender lo que esta última significa, esto es, implica develar el conjunto de discursos y prácticas que invisibilizan esa discriminación, colocándola bajo el ropaje de las “responsabilidades biológicas”, o más bien, de la conversión del sexo, en una suerte de conexión con destinos sociales y culturales de los cuales las mujeres no pueden escapar.

Sin ambages, la igualdad de géneros como destino de la lucha por los derechos políticos de las mujeres, requiere comprender que solo habrá una democracia plena, cuando los ciudadanos sean protagonistas directos de los asuntos públicos, y esa ciudadanía no puede estar filtrada por atavismos culturales y patriarcales, para los cuales las diferencias de géneros son determinismos sociales.

En provecho del análisis que se requiere para entender en pocas líneas un tema complejo como este de la participación política de las mujeres y su evolución, se tomara en cuenta la periodización constitucional propuesta por Ávila (2012). Se alerta en todo caso, que no se trata de registrar la evolución del constitucionalismo en Ecuador, sino de observar con un enfoque crítico, aquellas normas constitucionales que explícita o implícitamente contribuyeron al progresivo protagonismo sociopolítico de las mujeres ecuatorianas. Aclarado esto, en la tabla 12, se exponen de forma cronológica los fundamentos constitucionales que aportan, de a poco, al redimensionamiento de la intervención y toma de decisiones de los grupos más vulnerables, especialmente de las mujeres en la vida pública.

Tabla 13

Síntesis de la evolución del reconocimiento de los derechos de las mujeres ecuatorianas, según algunos elementos constitucionales

Tipo de constitucionalismo	Elementos destacables
Constitucionalismo conservador: desde la Constitución de 1830 hasta la de 1883	En este período comprende una sucesión de 10 constituciones, que mantienen la herencia cultural patriarcal y, por tanto, las mujeres permanecen alejadas del hecho político, reclusas en el seno de la dominación doméstica. De hecho, la última Constitución, listada en este período es la de 1883, justamente aquella en la que se agrega la condición de ser varón para ser considerado ciudadano.
Constitucionalismo liberal-laico: Constituciones de 1897 y de 1906	Es un período en el que se reconoce cierto pluralismo social, destacando, asimismo, la inclusión de la sociedad ecuatoriana en el marco del sistema capitalista. Sin duda hay avances en la ampliación de derechos, sobre todo para los diferentes grupos de trabajadores, pero aun no aparece en el panorama normativo una atención al tema de las mujeres, incluso se mantuvo la discriminación de la ciudadanía solo para los hombres.
Constitucionalismo neoliberal: Constitución de 1998	Más allá de la etiqueta ideológica que utiliza, Ávila para identificar este período, y que puede provocar prejuicios en el lector, lo cierto es que en esta Constitución se plasman la mayoría de los avances en materia de derechos de las minorías con los que se cierra el siglo XX. Es en este texto constitucional donde se visibiliza de forma definitiva el papel que las mujeres deben tener en la dinámica sociopolítica de la nación, aunque, en principio ese reconocimiento no se traduzca en actitudes colectivas de las organizaciones sociales y los grupos políticamente dominantes.
Constitucionalismo postmoderno-estado constitucional de derechos: igualitarismo en la Constitución de 2008	Este lapso de tiempo está marcado por la llegada al poder de Rafael Correa y su propuesta de RC. Es lógico, en tanto, que sea el período que aglutina el mayor número de conquistas sociales y de pluralismo político en el Ecuador, de cara al siglo XXI. Es un periodo intenso y complejo pero que, al momento de analizar el rol político que asumen las mujeres ecuatorianas, es claro en cuanto a su protagonismo institucional, organizativo y social. El modelo político propuesto en esta carta magna es de carácter pluralista e igualitarista y de allí derivaran una serie de instrumentos jurídicos que fundamentan las políticas públicas bajo la perspectiva de géneros que concreta la participación política, tanto de las mujeres como de otros grupos tradicionalmente minoritarios.

Fuente: elaboración propia basada en Ávila (2012)

No cabe duda que la periodización realizada por el autor tomado como referencia, mantiene un sesgo de carácter ideológico importante, sin embargo, lo que conviene aquí es observar la forma en que los derechos constitucionales de las ecuatorianas, plasmadas en sus diferentes “contratos sociales” a lo largo de la historia, permiten seguirle la pista a construcción social de la ciudadanía, como un fenómeno cultural y social que, al igual que los géneros, está ligada a una serie de discursos, prácticas y relaciones de poder en las que se estructura la dominación, y, es desde allí, desde donde el constituyente del 2008, se afirma para tratar de develar esa dominación cultural discriminatoria de las mujeres, para apuntalar nuevos procesos de empoderamiento que les permita alcanzar nuevas cuotas de participación política, ya no como simples acompañantes o “seguidoras” de los líderes, sino ejerciendo el rol de vanguardistas.

2. Políticas públicas e igualdad de géneros: verdaderos y falsos dilemas en la RC

La propuesta de una Revolución Ciudadana en el Ecuador, adelantada por Rafael Correa, como todo proyecto político que pretende transformaciones profundas y duraderas, propicia una gran cantidad de debates que han venido siendo develados a lo largo de las páginas anteriores y entre los cuales destaca la misma concepción de ciudadanía y género. Más aún, el gran debate al que se enfrenta la propuesta “revolucionaria” de Correa, tiene que ver con la adopción por parte del Estado ecuatoriano, de una serie de políticas públicas que cancelen la enorme deuda social que se acumuló tras años de discriminación social sufrida, tanto por las mujeres como por las personas LGBTI.

Claro está, dentro de las limitaciones que impone la economía y la misma cultura, la RC debió articular, diversas políticas, estrategias y acciones a corto, mediano y largo plazo, algunas de las cuales probablemente se hayan quedado como meras formulaciones teóricas, pero es posible que muchas hayan obtenido resultados a favor de la igualdad de géneros. De esa reflexión se trata este apartado que se fundamentará en las líneas gruesas elaboradas por el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, en diferentes momentos durante la RC. Esta organización, de carácter gubernamental, nace con la intención de darle un carácter formal al discurso correísta que propone la construcción de fórmulas institucionales que consoliden la igualdad y no discriminación por razones de géneros, en todos y cada uno de los ámbitos de acción estatal.

Para tener una idea de la legitimidad histórica y política que tiene esta institución cuando se trata de analizar las políticas públicas orientadas a la igualdad de géneros en el Ecuador, hay que recordar que no es una creación particular del proyecto político de Correa, su carácter

plural se puede sopesar si se realiza una retrospectiva hasta el año 1970, en donde se encuentran sus inicios en el seno de lo que para la época era el Ministerio de Previsión Social y Trabajo, el cual contaba con un Departamento de la Mujer dedicado, específicamente al análisis del mercado laboral de las mujeres y su situación. (Consejo Nacional para la Igualdad de Género, 2020). Fue así, en plena RC, en el año 2014 que se promulga la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, mediante la cual se crea el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, el cual, a su vez, funge como instrumento la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de género.

2.1. Ejes para la implementación de políticas públicas en clave de géneros durante la RC

Uno de los retos más importantes de la RC fue pasar de la retórica política a la praxis social, incluso, una vez lograda la transformación formal del sistema político (a través de la Constitución de 2008), era preciso superar el nivel de la abstracción teórica y generar los anclajes necesarios con la realidad en la que se forjan las relaciones sociales concretas que es, en definitiva, en donde se materializan las relaciones de dominación entre los hombres y las mujeres.

Para efectivizar las estrategias y acciones hacia la igualdad de géneros el CNIG en el Ecuador estructuró una serie de Ejes axiomáticos mediante los cuales se abordan la discriminación de las mujeres en diferentes ámbitos y se desarrollan programas, estrategias y acciones, tendentes a reducir la desigualdad real que persiste en la dinámica social y económica de las mujeres ecuatorianas. Se trata de visibilizar ese proceso que, aunque formalmente eliminado en las normas constitucionales, permanece subyacente, en el conjunto de relaciones sociales, bien sea públicas o privadas de las mujeres y sus pares masculinos.

En cuanto al Eje “Reproducción y sostenibilidad de la vida”

Este tema es verdaderamente complejo y dilemático cuando se le analiza desde la perspectiva de géneros, pues tiene una dimensión multidiversa que integra aspectos culturales, económicos y, en menor medida, políticos. Resolver la subsistencia es una de las tareas más profundamente humanas que existen, y en la sociedad moderna, esa tarea ha recargado ostensiblemente a las mujeres en detrimento en favor de los hombres. Esto es lo que plantea Carrasco (Carrasco, 2003) , cuando se pregunta sobre el trasfondo del tema: ¿cómo resuelven las sociedades las necesidades de subsistencia de las personas? Muchas veces se ha respondido

esa pregunta desde el punto de vista meramente economicista y, hacerle desde allí es reactivamente sencillo, pues se trata de un problema de integración a un determinado sistema de relaciones productivas.

Sin embargo, cuando se emprende una reflexión más profunda, comienzan a surgir una serie de elementos teóricos, pero -fundamentalmente culturales- que llevan la discusión al campo de la construcción social de la reproducción de la vida humana y su sostenibilidad. Nótese que sería fácil despachar esta reflexión si se aborda solo en sus implicaciones biológicas, pero no es ese el caso, reproducir y sostener la vida no se agota en la sexualidad o, en la capacidad para construir un techo donde convivir. Y es que el ser humano no se limita a su estructura biológica como otros animales, y por lo tanto, no le basta con cubrir sus necesidades básicas, por el contrario, incluso la obtención de alimentos y la protección frente a las inclemencias del clima, por ejemplo, se dan en un contexto de humanización que lleva implícitos el carácter relacional y de interacción afectiva que no pueden obviarse como detalles menores.

De cualquier modo, lo que ha ocurrido muy frecuentemente es que se le ha dado un tratamiento economicista e incluso “sociologicista”, a este componente subjetivo la reproducción y sostenibilidad de la vida humana, relegando del análisis, el papel que cumple el contexto del hogar en esa tarea. Allí subyace una de las fuentes más recurrentes de la discriminación de las mujeres y se trata de la ejecución del trabajo no remunerado que se realiza sin que la mayoría de los actores beneficiados de él, ni siquiera se den por aludidos.

Olvido que se nos presenta poco inocente porque esconde un conflicto de intereses: los distintos espacios, trabajos y actividades que forman parte de los procesos de vida y reproducción no gozan del mismo reconocimiento social, sino que existe entre ellos un componente valorativo jerárquico, resultado de una larga tradición patriarcal liberal (Carrasco, 2003, p. 6).

Con todo, la reproducción y sostenibilidad de la vida, transformado en un eje para la estructuración de las políticas públicas para la igualdad de género en el marco de la RC, contiene una serie de elementos que van desde la visibilización del tiempo que trabajan las mujeres en el hogar y otras funciones de reproducción y sostenibilidad, que no se encuentran normalmente contempladas como “horas de trabajo”, hasta el combate de las condiciones de pobreza que se reproducen en los hogares de aquellas mujeres que, en su doble rol (trabajo remunerado-trabajo no remunerado), encuentran serias dificultades para lograr el bienestar o, el buen vivir. La igualdad de género, pasa entonces por redefinir las ocupaciones que ameritan un esfuerzo físico, mental y sentimental, para que se entienda que no son tareas separadas por características “naturales” de hombres y mujeres.

Igualmente, al establecer los límites de las tareas reproducción y sostenibilidad de la vida humana, el reconocimiento que se consigue más que social, es institucional. De ese reconocimiento derivan las acciones programáticas que se propusieron el CONAMU y el CNIG, cada uno en su momento, para consolidar acciones sustentables y sostenibles en el tiempo, en procura de fomentar esa cultura igualitarista entre los géneros, establecida formalmente en los preceptos constitucionales aprobados en el año 2008. Para ilustrar, el alcance que, como política pública, tiene este eje en la RC, se elaboró la figura 9.

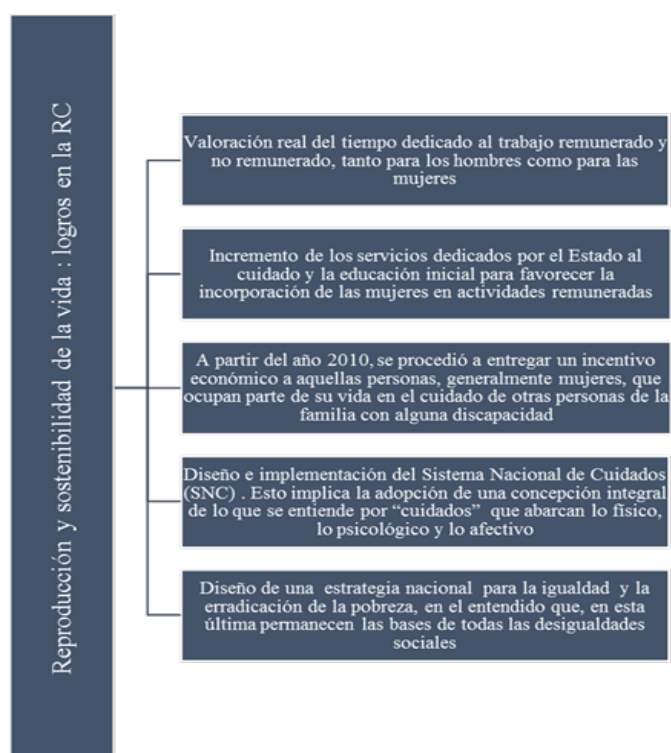


Figura 9. Reproducción y sostenibilidad de la vida: logros en clave de género.
Fuente: elaboración propia basado en CNIG (2018)

Más allá de lo que muestra la figura 9, es importante destacar que el alcance de los objetivos en este eje concreto para la igualdad de géneros, no es registrable en función del número de ayudas económicas entregadas o la cantidad de personas con discapacidad atendidas o, el incremento de la matrícula de niños en educación inicial. Lo más importante para la sociedad ecuatoriana y las mujeres en particular, es invisible a las estadísticas, pues tiene que ver con la sensibilización de vastos sectores; mujeres y hombres; con poder de decisión o no; pobres o ricos; blancos, indígenas o mestizos; para la comprensión del componente subjetivo que involucra el sostenimiento de la vida, que esa vida, además, pueda ser percibida como tal, pues

no se trata de “sobrevivir”, como muchas veces hacen los integrantes de los grupos más vulnerables.

En cuanto al Eje “Una vida libre de violencia”

La violencia de géneros es uno de los fenómenos patológicos más importantes que le ha tocado enfrentar a los gobiernos latinoamericanos en los últimos años, bajo el propósito de lograr acercarse a la ansiada igualdad. Existe en ese sentido, la necesidad de abordar este tema de manera desprejuiciada, pues, en el contexto de la región, la violencia llega a ser, en muchas ocasiones, una de las múltiples consecuencias de una familia que sea formado a destiempo - por embarazos a temprana edad, por ejemplo-, en un ambiente de pobreza extrema y con una serie de factores coadyuvantes que dificultan el abordaje del problema y sus soluciones. Es decir, cuando las interacciones en el seno familiar no son funcionales, se produce una conflictividad, que muchas veces se resuelve por la imposición violenta de normas o criterios, no esclarecidos entre los integrantes de la familia que producen mayor rebeldía y activación del círculo creciente de la violencia de géneros.

En ese orden de ideas, las transformaciones sociales, políticas y jurídicas propuestas por la RC conllevaron a la presentación, a partir del año 2007, de una política nacional que pudiese enfrentar, en su complejidad la violencia de géneros y construir, de acuerdo con el discurso del correísmo, una sociedad de paz y justicia. En la perspectiva de concretar este objetivo, es que el presidente Rafael Correa, a través de un decreto, fechado en septiembre de ese año, “...creo una comisión de coordinación interinstitucional para el diseño e implementación del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres” (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2015, p. 6).

De esta manera, el progreso en la lucha por erradicar la violencia de géneros, si bien se fue fraguando con el tiempo, es limitado por la gran cantidad de variables sociales, culturales, educativas, jurídicas y, por supuesto, políticas que intervienen en su persistencia. El CNIG, produjo, en el año 2014, un análisis completo de esos elementos que encuentran involucrados en la violencia de géneros y, en el, deja claro que la política pública que pretenda crear un clima social que denuncie y se oponga culturalmente al maltrato de las mujeres, debe ser integral y sostenida, debe promover la injerencia de todos los actores sociales e institucionales y, determinar las cuotas de responsabilidad y compromiso que cada quien debe asumir para que se detecten y se detengan los factores de riesgo, allí donde originalmente se producen.

En el análisis desarrollado por el CNIG que fue presentado por Camacho (2014) se tomaron en cuenta los resultados de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, específicamente aquella que se aplicó a finales del año 2011. Este esfuerzo por registrar, a partir de un gran diagnóstico nacional, el estado de la igualdad de género, en lo atinente al derecho de las mujeres a una vida libre de violencias; profundiza en aquellas variables involucradas en los diferentes tipos de violencia que se presenta en la sociedad ecuatoriana, particularmente, aquellas situaciones en las que las mujeres son sometidas a maltratos de tipo psicológico, físico y sexual; considerando los diferentes espacios y relaciones en las que esos tipos de vejaciones suelen ocurrir, tales como la familia, el trabajo o la misma comunidad. La figura 10 resume, en este sentido, algunos de los aspectos claves, en los que se detiene el trabajo de investigación de Camacho.

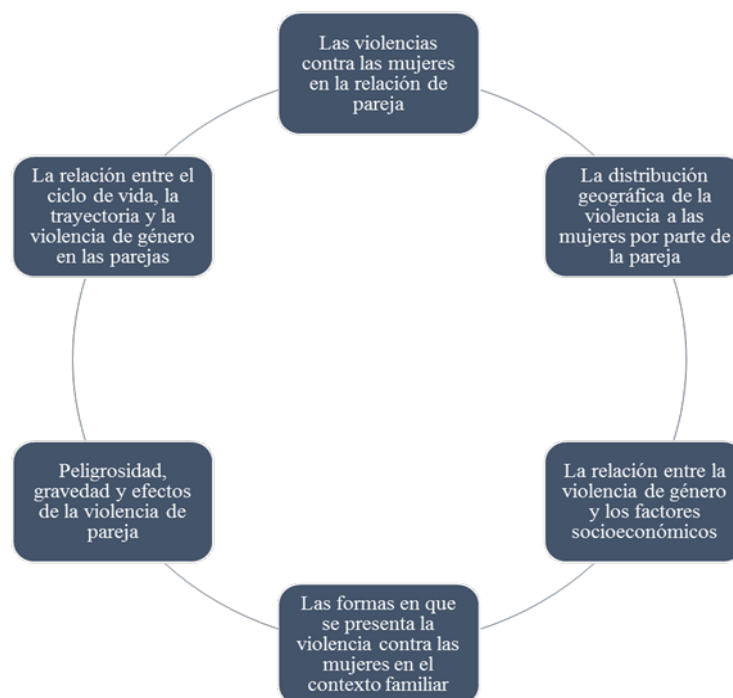


Figura 10. Elementos, factores o situaciones de la violencia de género en Ecuador
Fuente: elaboración propia basado en Camacho (2014)

La sobriedad de la figura 10, quizá no transmite al lector la verdadera dimensión en que se realiza el análisis del tema por parte de la autora, sin embargo, si permite ilustrar las aristas de la situación de violencia a la que son sometidas las mujeres por sus parejas, generalmente hombres, en los contextos que fueron estudiados: hogar, instituciones, comunidades, ambientes laborales, entre otros. Además, al ser un análisis integral y nacional, sus resultados dan luces para que, desde la legislación o, desde las instituciones orientadas a la garantía de una vida

libre de violencia, se pueden desarrollar las diferentes estrategias y acciones para combatir los diferentes formatos en que se presenta esa violencia.

En todo caso, queda claro que la violencia de géneros debe ser tratada como un problema multicausal asociado a una gran cantidad de factores sociales, individuales, políticos y comunitarios cuya confluencia deben ser parte de la perspectiva de análisis para que pueda comprenderse el fenómeno en toda su dimensión. Ahora bien, aunque todos los factores inciden decisivamente en la proliferación de la violencia como fenómeno social, quizá sean los factores culturales los que tengan mayor influencia a la hora de reproducirse la violencia de géneros. En general todos los factores sociales inciden, aunque no necesariamente determinan las situaciones de violencia pues cada factor de riesgo tiene su propio impacto marginal en la probabilidad de que una persona se comporte violentamente o sea objeto de violencia.

En otras palabras, hay una especie de sinergia entre cada uno de estos aspectos en la que los factores comunitarios y sociales interactúan con las características individuales y la dinámica del hogar. De esa interacción, por cierto, es de donde generalmente se produce la expansión del conflicto que provoca en el mediano plazo que un evento de violencia familiar se convierta en violencia de géneros y, por ende, afecte la sociedad en su globalidad, dado que las situaciones comunitarias pueden reafirmar antivalores de los que, muy frecuentemente se alimenta el autoritarismo patriarcal.

Esto significa que, cuando el tema de la violencia de géneros no es tomado en cuenta entre las necesidades sociales que derivan en políticas públicas, otros componentes problemáticos de la sociedad, como la delincuencia juvenil, por ejemplo, pueden convertirse en problemas críticos. Un contexto familiar insano, en el que los niños, niñas, adolescentes y mujeres, son expuestos a eventos de violencia, produce a su vez, una sociedad desequilibrada. Por el contrario, crecer en un ambiente armónico, de respeto por la personalidad de los demás y por la tolerancia, puede abonar el terreno para una convivencia social igualitaria.

Un aspecto importante en este punto tiene que ver con el soporte legal que se desarrolló en Ecuador, para ir de lo formal a lo concreto cuando se trata de erradicar la violencia de géneros y propiciar, para las mujeres una vida libre de este flagelo histórico. Además de Constitución Nacional de 2008 que tiene un enfoque eminentemente igualitarista en su consideración de la ciudadanía, están, el Código Orgánico Integral Penal del 2014 y la Ley Orgánica Integral para la prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres de 2018, cuyo reglamento deja establecido que este fenómeno debe ser enfrentado de manera conjunta entre las instituciones jurídicas y la planificación estatal, por lo que demanda la confluencia entre el

Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres, y los diferentes planes nacionales de desarrollo en sus diferentes momentos.

Es preciso reconocer que la formulación de un Plan Nacional que a su vez se articula con las estrategias de desarrollo socioeconómico, permitió a las mujeres ecuatorianas ganar terreno como sujeto político “construido socialmente”, es decir, un sujeto que encarna prácticas y relaciones diversas en las que debe concretarse la igualdad para que su participación sea decisiva en la consecución del “Buen Vivir”, el paradigma social más importante de la RC. El Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género, establece un conjunto de ejes estratégicos que derivan en acciones de transformación social determinantes para la igualdad de géneros que son: a) transformación de patrones socioculturales; b) fortalecimiento del sistema de protección integral; c) acceso a la justicia; d) sistema único de registro e información estratégica; y e) institucionalidad.

Siendo así, cuando se analizan, desde la perspectiva de géneros los logros de la RC, es posible aproximar algunas conclusiones acerca de los avances que fue posible realizar en el esfuerzo por lograr una vida libre de violencia para las mujeres. Esos logros/avances, se encuentran en la figura 11.

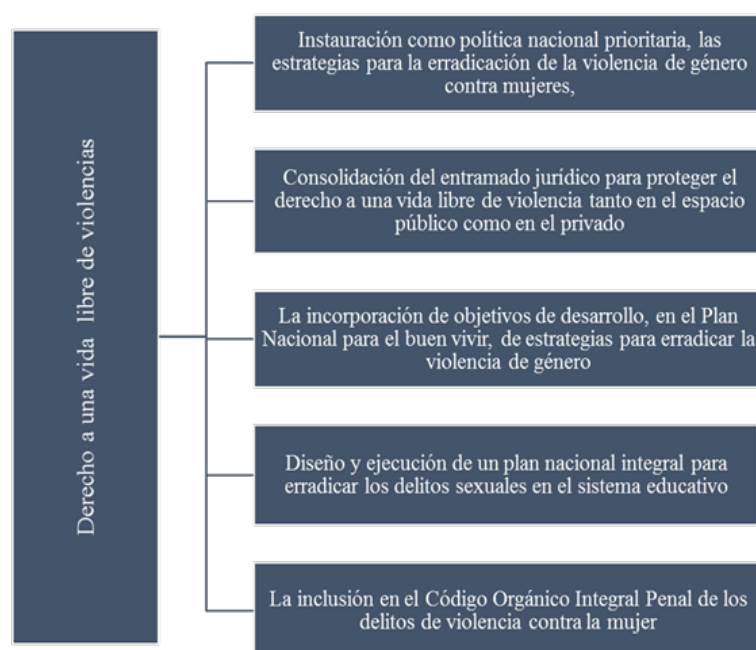


Figura 11. Derecho a una vida libre de violencia: logros en clave de género.
Fuente: elaboración propia basado en CNIG (2018)

Eje “Educación y conocimiento”

Educación y género están relacionados estrechamente, tanto en su origen cultural como en el hecho de ser ambos, construcciones sociales. Culturalmente, las mujeres han enfrentado serias dificultades en la mayoría de los países latinoamericanos para acceder con igualdad a la educación y, por ende, al conocimiento, se entiende por esto que, al educarse de formas y en espacios distintos, las mujeres han sido orientadas a procesos socializadores diferenciados que terminan por influir, decididamente, en sus opciones y capacidades para participar activamente en las organizaciones y la dinámica sociopolítica en general.

En el marco de la RC, Ecuador refuerza sus avances esta materia al establecer, para el año 2007, a la educación como un bien público, teniendo en perspectiva que esa condición favorecería la construcción de un sistema educativo con una mayor pertinencia social y de una ciudadanía más activa y participativa en la definición de los objetivos colectivos de la nación. De hecho, en el 2010, se aprueba la nueva Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), que se inspira en el enfoque transversal de géneros, e incluye un conjunto de modificaciones, relativas al resguardo jurídico de los derechos de igualdad social y calidad educativa para todos los ciudadanos y ciudadanas (Consejo Nacional de Igualdad de Género, 2018).

No obstante, los impulsores de la RC, parecen estar conscientes que la igualdad formal no garantiza un mejor y más equitativo trato para las mujeres ecuatorianas, por lo que se esfuerzan por llevar esa transformación de los elementos jurídicos, al ámbito de la dinámica social cotidiana, lo que se logra a partir de políticas y acciones concretas. En tanto, es válido impulsar una reflexión profunda en cuanto a la desigualdad histórica que le ha tocado sobrellevar a las mujeres, pero ello debe conducir a la adecuación de las políticas públicas, alimentando las estrategias que, desde el Estado se puedan diligenciar y, por supuesto financiar, siendo este aspecto uno de los más importantes, el gasto público es conducido a la implementación real de la igualdad de género en la educación.

De acuerdo con Gil, (2017), más allá del tema del género, la importancia que la RC le otorgó a las políticas públicas en el ámbito educativo se sintieron en todos los niveles. Esta situación, considera el autor, es uno de los indicadores del perfil humanístico del gobierno de Correa, y se entiende mucho mejor, cuando se le contrasta con el andamiaje interinstitucional con el que se soporta el sistema educativo “ciudadano”. Siendo así, el análisis de las políticas públicas de la Educación en ese contexto debe involucrar su vinculación con el “Régimen del Buen Vivir” que se presenta en la constitución de 2008. Según esto, la educación, la salud, la seguridad social, entre otras, son las variables sobre las que se debe construir este régimen propuesto en

el discurso de la RC y que toma cuerpo en la orientación y profundización de los criterios de igualdad social que se incluyen en el nuevo enfoque educativo. Explícitamente, el texto constitucional, establece que la educación es “Constituye un área prioritaria de las políticas públicas y la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir” (Asamblea Constituyente, 2008).

En ese orden de ideas, la sola vinculación axiológica entre educación y buen vivir, hace prever las condiciones de igualdad con las que deben ser incorporadas las mujeres en las políticas públicas educativas, es decir, no hay justicia social, ni equidad, si la transversalidad de género no regula esa articulación entre educación y sociedad, garantizando su centralidad en el ser humano, y la visión holística de su desarrollo. De nuevo, es clave en ese objetivo, lo que establece el legislador en el artículo 347 de la Constitución de 2008, entre cuyos preceptos se leen:

- Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas.
- Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica.
- Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.
- Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo.
- Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes

Como se puede observar, sin referirse directamente a la igualdad de géneros, en varios de estos aspectos normativos, la propuesta constitucional establece los parámetros que garantizan un enfoque igualitarista que tiene una amplia perspectiva que va, desde la calidad la cobertura y el equipamiento educativo; pasando por lo ambiental, lo psicoeducativo; hasta la protección contra la violencia de los diferentes actores involucrados en el proceso. Algunos de estos temas representan propuestas novedosas que buscan fomentar una mayor cultura participativa, al conminar a las instituciones a construir espacios para el ejercicio de la democracia y la convivencia pacífica, así como, el llamado de atención, para inculcar el respeto por igual niñas y niños, en cuanto a su desarrollo, físico, psicológico y sexual.

La concreción de estos preceptos constitucionales, en el caso de la realidad ecuatoriana se visualiza en los planes nacionales de desarrollo que, orientados por el enfoque del “Buen Vivir”, incorporan las políticas educativas como soporte de esas estrategias de desarrollo, considerando en ese sentido que, el logro en algunas estrategias como: a) transformación de la educación y transferencia de conocimiento, innovación y tecnología; b) impulso de la igualdad, la cohesión y la integración social; c) la priorización de la inversión pública en materia educativa (Gil, 2017).

Por otra parte, en cuanto a lo que respecta a los alcances concretos de la RC, en el campo de las políticas educativas con enfoque de géneros, el CNIG (2018) dedica parte de su evaluación en el 2015, a las variables más importantes que al respecto pueden dar cuenta de una preocupación educativa concretada en acciones. La figura 12, muestra algunos de esos logros.

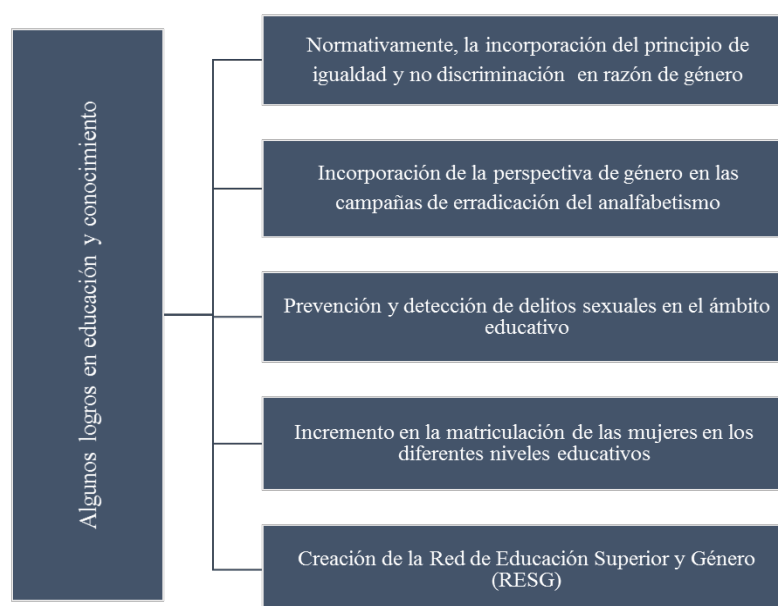


Figura 12. Algunos logros en educación y conocimiento.
Fuente: elaboración propia basado en CNIG (2018)

Producción y empleo

Indudablemente, uno de los indicadores más utilizados por los diferentes organismos que vigilan el cumplimiento de la igualdad social en materia de género en el mundo entero, está relacionado con el acceso de las mujeres al mercado laboral y el sector productivo en general.

En el caso específico del Ecuador y la RC, lo económico es presentado como uno de los ejes fundamentales que puede permitir el éxito de la transformación del país, y, en ese eje, se vuelven a encontrar la transversalidad de géneros y la propuesta del “Régimen del Buen Vivir”, entendido este último, más allá de su concepción cultural-tradicional que le asocia al *Sumak Kawsay*. Además, la perspectiva del desarrollo económico que se vislumbra en la propuesta correísta, desde sus inicios supone una “mirada de nuevo tipo”, en la que deben rechazarse las prácticas tradicionales-patriarcales que discriminan a las mujeres como parte de los estamentos sociales dominados. “Por ello, si en la América hispana no cambian las relaciones de poder, no habrá desarrollo económico para las grandes mayorías” (Arévalo, 2014, p. 116).

En general, la historia económica de los países latinoamericanos deja ver una orientación constante de las políticas públicas, dirigidas al sector productivo y al mercado laboral, hacia la necesidad de incrementar el ingreso de los ciudadanos y, en tanto, contribuir a un mayor bienestar económico. Sin embargo, es visible la ausencia de la perspectiva de géneros a la hora de formular e implementar esas políticas públicas. La cultura patriarcal se impone, de manera inercial, pues, al ser el género una construcción social, participa de las relaciones de dominación establecidas que, tradicionalmente han relegado a las mujeres a un segundo plano. Mujeres y hombres, siendo pensados como actores económicos y productivos, suelen tener un peso diferencial cuando se elaboran las políticas salariales, por ejemplo.

En búsqueda de una mayor claridad en el análisis de este elemento trascendental para constatar el avance de la igualdad de géneros en el Ecuador de la RC, Almeida (2017), considera importante detenerse en los elementos que componen integralmente una “política económica”, la cual debería incluir, desde el punto de vista teórico, el enfoque del gasto público, el empleo, la seguridad social y el uso de tiempo. Un gasto público direccionado hacia la construcción de la justicia social y la repartición equitativa de los recursos del Estado, bajo criterios de equidad, pero en la perspectiva de la sostenibilidad y de la sustentabilidad de las políticas sociales.

Precisa y paradójicamente, es en el marco de estas variables, y de su manejo gubernamental, en el que las mujeres tienden a ser discriminadas pues con frecuencia, es menor el gasto público dedicado a las políticas laborales que incluyan una remuneración equitativa para mujeres y hombres; son de menor calidad los empleos que se ofertan para las mujeres o, en el mejor de los casos, teniendo las mismas condiciones laborales, reciben un menor salario; y, finalmente, el uso del tiempo que emplean las mujeres en actividades del hogar, no remuneradas, no son tomadas en cuenta por las estadísticas oficiales, como tiempo de trabajo productivo.

De cualquier manera, y volviendo al enfoque utilizado por Almeida (ob.cit), la RC se propuso darle un giro importante a esa visión monetarista de las políticas económicas, sin llegar a incluir, sin embargo, un rechazo absoluto a las prácticas de la economía capitalista, como sí ocurrió en otros casos de gobiernos latinoamericanos de la época como Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia. Gobiernos abiertamente anti capitalistas con discursos contra hegemónicos, pero con una praxis económica, sobre todo la de Evo, que mantiene ciertos criterios de eficiencia en el gasto.

De hecho, en la propuesta inicial, la estructura del discurso de Correa, se basa en ese rechazo a la injerencia de los grandes centros del poder económico, sobre las políticas públicas del Ecuador. Cabría esperar entonces que esa rebeldía ideológica fuera la guía para un nacionalismo cuyo eje girara en torno a un desarrollo de las potencialidades internas y lo endógeno como pivote central para el desarrollo. Empero, al menos en sus acciones económicas concretas, la gestión de Correa está lejos de impulsar un divorcio de aquellos centros hegemónicos que tanto crítico, tal como lo revela Barbosa (2011).

A pesar de las contundentes críticas a la injerencia de los organismos multilaterales como el Banco Mundial o el FMI en la política económica de los países del continente, que incluyen la dolarización ecuatoriana, el gobierno de Correa no se propone revertir la medida. En términos concretos, su nacionalismo avaló una auditoría de la deuda externa que encauzó la revisión de parte de los contratos, y no renovó la cesión de la base militar de Manta para el ejército de los Estados Unidos, concretando así una promesa de campaña (p.4)

Una manera de constatar ese giro correísta en la economía, tomando como bandera paradigmática, e incluso metafórica, su propuesta del “Buen Vivir”, es seguirle la pista al comportamiento histórico que, en el contexto ecuatoriano van a mostrar, algunos indicadores económicos como: el gasto social y la distribución del ingreso en virtud de las políticas de igualdad de género, las características del mercado laboral, especialmente de aquel que tiene como actores principales a las mujeres y la evolución del crecimiento económico en clave de género. Se trata pues, de percibir el lugar de las mujeres ecuatorianas en el mercado laboral y el sector productivo, al trasluz del comportamiento general de la economía del país.

En cuanto a los recursos destinados a políticas públicas orientadas a equidad de género. Como se explicó en apartados anteriores de esta tesis, Ecuador es un país signatario de la mayoría de los convenios y convenciones internacionales que regulan la aplicación de la perspectiva de género en la dinámica sociopolítica interna. Eso, y la visión del Buen Vivir,

llevo a los gobiernos de Correa, a tener presente en la distribución del gasto social, aquellos factores que contribuyen a robustecer la transversalidad de géneros. Consistente con ese objetivo, tanto la Constitución del 2008, como la orientación del gasto público han reivindicado la obligatoriedad que tiene el Estado de impulsar la igualdad social de las mujeres desde la arista económica, particularmente, abriendo los espacios necesarios para que las mujeres alcancen su autonomía económica.

Una mujer con autonomía económica viene a ser la muestra más fiel del éxito de las políticas públicas con transversalidad de género, pues revierte los estados de desigualdad que, en, muchas ocasiones, fomenta la violencia de géneros. Es así como, el Estado ecuatoriano, dispuso en el contexto de la RC, la implementación de estrategias que, más allá de lo teórico, pudiesen ser objeto de financiación pública para resguardar el derecho de las mujeres a empleos de calidad, al tiempo de formular, algunos programas específicos para la formación o reforzamiento profesional de las mujeres, reconociendo además sus derechos de ser remunerada con equidad y de acuerdo a su labor, con independencia de su género.

Tal como lo señala Almeida (2017), la forma más fidedigna en que un gobierno puede enviar un mensaje positivo para la igualdad de género, es la asignación de los recursos financieros y /o presupuestarios que requieren las políticas públicas orientadas para ese fin. Ecuador mantuvo, por ejemplo, en el periodo de 2007 a 2010, una atención presupuestaria prioritaria a programas con perspectiva de género, como fueron los programas derivados de la aplicación de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia. Más allá de las críticas que reciben este tipo de programas, asumiendo que puedan incentivar una dinámica reproductora irresponsable; representan una política de atención y subsidio directo que transmite una idea de igualdad importante de cara a la consecución de una mayor calidad de vida para madres e hijos.

Destinar los recursos y hacerle el seguimiento necesario para una distribución transparente, son dos de las acciones que, al menos en esa fase de las políticas públicas, mantuvo la institucionalidad de la RC. Por supuesto, tanto la formulación de las políticas públicas, como la asignación de los recursos necesarios para su concreción, es de por sí un aval para que un gobierno sea bien calificado a la hora de evaluar su perspectiva de género y su disposición para lograr una sociedad más justa e igualitaria. Los aspectos culturales que se van configurando alrededor del manejo de esos recursos, forman parte de la herencia burocrática en la administración pública que depende más de la forma en las comunidades asumen su rol que de la atención del Estado.

En el lapso de tiempo que va del 2014 al 2016, hubo importantes iniciativas financieras para apoyar la lucha de las mujeres por alcanzar unas relaciones de igualdad en el ámbito de la economía. En el estudio ya reseñado, de Almeida, se registran esas iniciativas, de manera que puedan ilustrar con mayor realismo económico, lo que está suficientemente desarrollado en el nuevo entramado jurídico que soporta al Estado ecuatoriano a partir del 2008. Una estructura pensada en clave de inclusión democrática que, como modelo fue pensada con esa lógica de distribución más igualitario del poder, para que desde las comunidades más necesitadas pudiesen tener un peso específico en la planificación y ejecución de los presupuestos públicos, actuando así, desde la percepción que integra, la igualdad económica y social. En la tabla 13, se reproduce parte de los hallazgos que al respecto ubicó el autor.

Tabla 14

Gasto devengado registrado en el Clasificador de Orientación de Gasto para Políticas de Género (Millones de USD)

Descriptor del clasificador	2014	2015	2016
Promoción de la autonomía y empoderamiento de la mujer en el marco de la economía social y solidaria		193,04	249,14
Promoción, protección y garantía del derecho a la salud	315,78	168,73	269,43
Protección y garantía del derecho a la educación			0.12
Promoción, garantía y desarrollo de institucionalidad y políticas públicas con equidad de género	1,27	0,21	0,02

Fuente: Extracto tomado de Almeida (2017)

Los números tienden a transmitir poco cuando se utilizan este tipo de representaciones que no pasa de ser percibido como una parte abstracta de las políticas públicas que no llegan al ciudadano común, no obstante, una hermenéutica de estas cifras parciales de lo que fue el gasto público orientado por el enfoque de género en la época, dejan ver una baja preocupación por el tema de la educación, mientras, al parecer se dirigió una fuerte inversión al desarrollo de una economía social que tuviese como actor protagónico a las mujeres. El otro aspecto que destaca es el gasto social dedicado al área de la salud, lo que tiene un fuerte componente en el sector

referido a la atención prioritaria de la maternidad y de la infancia, consolidando esos programas que se convirtieron en bandera de la RC, en aquel momento.

En cuanto al progreso de algunos indicadores económicos respecto a la situación de las mujeres ecuatorianas. El proceso de cambios positivos de la educación con transversalidad de género tiende a impactar, en lo que respecta a su incorporación con criterios de igualdad en el ámbito laboral. Sin embargo, en el caso ecuatoriano, y a pesar de los esfuerzos legislativos realizados en la gestión del presidente Rafael Correa, las mujeres continuaron ocupándose de oficios con poca estabilidad, en empresas o sectores de poca proyección productiva, por lo que su remuneración sigue manteniéndose por debajo de la que reciben, en promedio, los hombres. En cualquier caso, al revisar la evaluación del CNIG, que es válida, aunque represente parte de la óptica oficial, y algunas referencias de Almeida, es posible identificar algunos indicadores de logro, en cuanto a las mujeres y el mercado laboral en el Ecuador de la RC. La figura 13, así lo muestra:

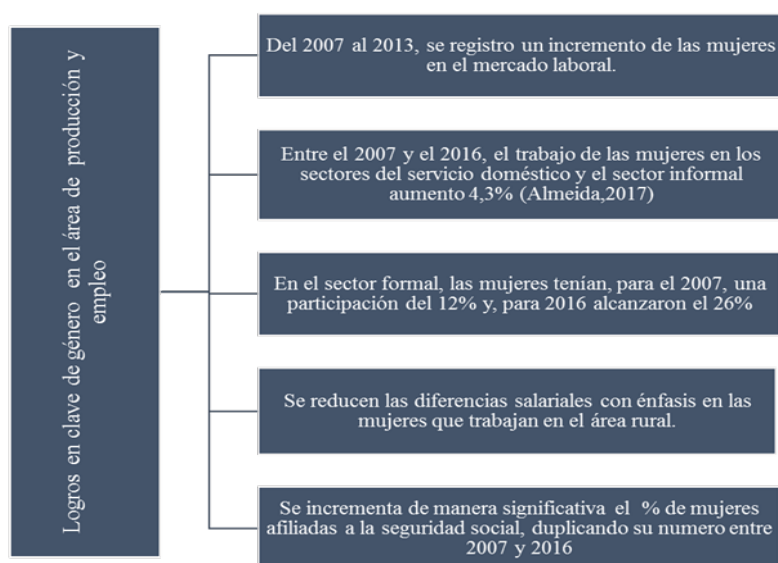


Figura 13. Algunos logros en clave de género en el área de producción y empleo
Fuente: elaboración propia basado en CNIG (2018) y, Almeida (2017)

Poder y toma de decisiones

En el espectro de interés de esta tesis doctoral, la incorporación de las mujeres ecuatorianas en los ejes del poder político, económico y social, en general, forma parte de su centralidad temática, en tanto, es lógico que el examen de la perspectiva de géneros, asociada a ese proceso de aproximación protagónica de las mujeres, tanto a las organizaciones políticas como a los

movimientos sociales, culturales, entre otros, sea importante. En lo que puede identificarse como la institucionalización del enfoque de género para las políticas públicas, (un tema que será tratado en el apartado que sigue), las mujeres fueron adquiriendo reconocimiento de los diferentes entes de planificación del Estado, de manera que su presencia activa como actor del proceso, a través del Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, se convirtió en una constante.

En ese “irse aproximando” a los centros de decisión política de las mujeres ecuatorianas, ha jugado un papel importante el objetivo de profundización de la democracia que, al menos discursivamente, se encuentra en el andamiaje axiológico de la RC. No puede haber una auténtica democracia, si no hay una participación activa y por demás, legítima de todos los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio del poder, una participación que implique el protagonismo de todos los sujetos colectivos, agrupados en organizaciones susceptibles de ser visualizadas y por ende tomadas como referencia para la gestión de esa democratización tan verbalizada desde el discurso correísta.

Conviene recordar aquí, que, hasta la llegada de Correa al poder, ningún líder democrático logro estabilizar social y políticamente al país, prácticamente todos fueron obligados a dejar sus mandatos inconclusos lo que produjo una fuerte debilidad de los esquemas de la democracia tradicional. Justamente uno de los enunciados discursivos más recurrente del correísmo, se refiere a las falencias de la vieja política y la necesidad de una democracia distinta, producto o hija de una verdadera revolución que abatiera los viejos privilegios de la clase dominante. Una democracia participativa y protagónica construida de abajo hacia arriba y con un rostro de inclusión inter y plurinacional. Esas máximas ideológicas, pretenden consolidar las prácticas de la RC, de donde se desprende la conclusión lógica de expansión de las políticas de igualdad de géneros.

De esta manera, la estabilización de la democracia ecuatoriana, de la mano de Correa y su revolución, resulto todo un hito en la región, con frecuencia se escucha y lee en el discurso del presidente, la necesidad de seguir impulsando las reformas previstas jurídicamente en la constitución de 2008 y cuyo norte es la profundización de los mecanismos de participación política que darán a las mujeres un claro protagonismo. En realidad, se habla de una participación comunitaria ampliada, en la que los grupos sociales puedan organizarse para tener una injerencia directa en el ejercicio del poder. Esta concepción del poder y del sistema político, ubica a las mujeres ecuatorianas en una situación privilegiada si se le compara con otras épocas y otras dinámicas de distribución y ostentación del poder político. En la figura 14, se muestra

parte de ese nuevo posicionamiento de las mujeres ecuatorianas, en el ámbito de la toma de decisiones.

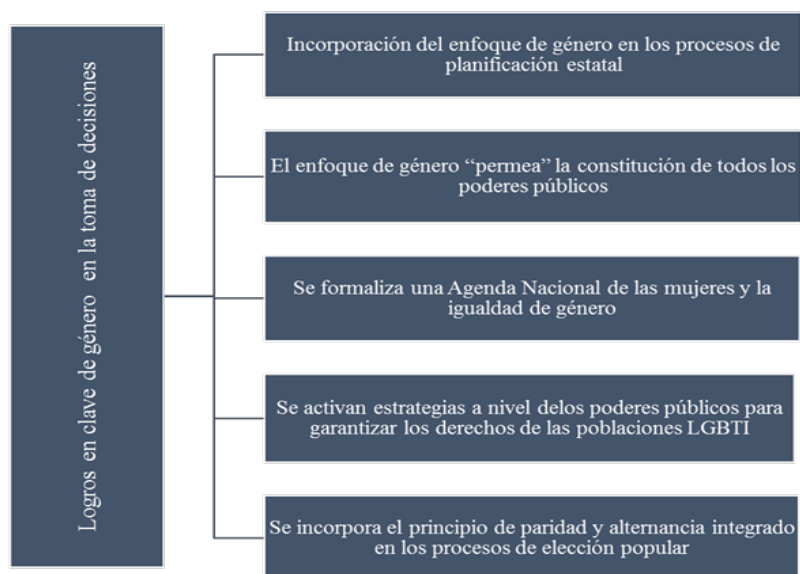


Figura 13. Algunos logros en clave de género en la toma de decisiones
Fuente: elaboración propia basado en CNIG (2018)

3. La Institucionalidad política y la igualdad de géneros en el marco de la RC

Las políticas públicas desplegadas durante la RC, tal como se ha mostrado a lo largo de este capítulo, son posibles por la presencia constante del Estado en los procesos de detección de las necesidades sociales y la determinación de las acciones y/o estrategias necesarias para atender esas necesidades, es decir, la institucionalidad colocada al servicio de la igualdad de géneros y sus derivaciones en la conformación formal de instancias de poder para orientar sus procesos. De esta manera, en este último apartado se complementarían y profundizará la explicación acerca del funcionamiento de todo el armazón corporativo que se consolidó al trasluz de la transversalidad de género, algunas de sus programas, estrategias y acciones para efectivizar las políticas públicas en clave de género en el Ecuador.

3.1. La Constitución de 2008

Aquí no se profundizará en las características “revolucionarias” que le atribuye el discurso correísta a esta carta magna, aprobada apenas iniciado el gobierno de Rafael Correa y que además fue su mayor apuesta política. Se intenta rebasar la visión simplista que implican los discursos políticos, voluntaristas acerca de la necesidad de un trato igualitario para hombres y mujeres porque obviamente, eso seguiría siendo discriminatorio para estas últimas. Lo que se logra con el nuevo texto constitucional en Ecuador, es develar las dificultades que, en la

práctica se le presenta a la igualdad formal y establecer los principios que puedan traducirse en las acciones para superar la discriminación históricamente soportada por las mujeres, eso involucra contrarrestar los prejuicios y estereotipos culturales tan arraigados en la sociedad ecuatoriana (Cajas, 2011).

En general, podría afirmarse que el “espíritu” de la Constitución, dicho de forma menos abstracta, la teleología de la misma está guiada por una suerte de igualitarismo que se plantea la superación de las inequidades históricas de una sociedad que alberga muchos grupos consecuentemente discriminados como los indígenas, la comunidad LGBTI y las mujeres, por ejemplo y, cuyas luchas son reconocidas por la RC, convirtiéndolas en leitmotiv de varios preceptos desarrollados por el constituyente proponente del texto constitucional aprobado en el 2008, algunos de esos mandatos constitucionales que pueden considerarse inspiradores de una posterior institucionalización de la transversalidad de género son:

El reconocimiento de la igualdad como parte esencial del ejercicio de los derechos. En el art. 11, la Constitución reconoce que “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades (...)”, principio que se desarrolla, agregando que no se permite la discriminación o el trato desigual, por razones étnicas, sexuales, género, religión, ideología política, entre otras. Esto es lo que Cajas (ob. cit.), señala como igualdad formal y que, conjuntamente con la igualdad material y el principio de no discriminación, soportan la igualdad de género. De acuerdo con esta perspectiva, no basta el reconocimiento puramente jurídico para alcanzar una sociedad de justicia e igualdad, cuando se trata del enfoque de género es importante que se de la transición hacia una igualdad económica, social, cultural y política, es decir una igualdad substancial, que se concreta en la cotidianidad que les toca vivir a las mujeres.

El reconocimiento a la participación política de las mujeres en términos de igualdad. En su art. 65, la Constitución establece que el Estado garantizará el derecho a la participación política de los grupos o sectores históricamente discriminados. Específicamente, en el caso de las mujeres, exhorta a su inclusión en las listas de candidaturas o designación para cargos de la función pública, así como su participación en los cargos de dirección de las diferentes organizaciones sociales o partidistas. Estos principios constitucionales han influido en el comportamiento organizacional de muchas instituciones políticas y parapolíticas del Ecuador, tal como se registró en el desarrollo del capítulo II de esta tesis, muchas mujeres se han

desempeñado al frente de las más importantes instituciones del país, incluyendo la Presidencia de la República.

La obligatoriedad del enfoque de género en el sector público. De manera explícita en su art. 70, anuncia la exigencia que tienen las instituciones del poder público, con especial énfasis, aquellas que tienen la función de la planificación o elaboración de planes de desarrollo, de incorporar la perspectiva de género, como parte de la centralidad, tanto para la formulación como para la ejecución de esos planes. Allí mismo se deja sentado que la atención o asesoría para que este mandato se concrete, es una obligación de los entes del Estado, pues una cosa son los mandatos jurídicos y la asignación de los recursos y otra cosa es lo que tiene que ver con la formación científico-técnica para ejecutar las acciones que se requieren al momento de cumplir con este enfoque.

En este punto, es importante no olvidar que de lo que se trata es de la institucionalización del enfoque de género, por lo que se está apostando por la sostenibilidad en el tiempo de estas medidas, en adelante, cualquiera sea quien esté al frente del Estado no puede ignorar esta obligatoriedad y, en tanto, la tarea de la RC pasa por crear los espacios y condiciones para que el reconocimiento de la igualdad, se de en el marco de políticas concretas, léase, instituciones con “rostro” y con presupuesto para poner en marcha estos reconocimientos jurídicos, en los hechos. Todo esto se inscribe en ese reconocimiento colectivo de las mujeres como sujetos sociales que tiene una vida pública, participan en ella y tienen todos los derechos que eso significa. Lejos queda el estereotipo de las mujeres reducidas al ámbito de lo privado, con tareas domésticas y excluyentes.

Destaca en este sentido, Ruano (2015), que la novedad constitucional está en reconocer la “igualdad en la diversidad”, pues el género es justamente un conjunto de diferencia que implican talentos diferenciados, pero no limitaciones en la capacidad que puedan tener unos u otros para desempeñarse en ciertos roles. Los cambios en los niveles educativos y del empleo certifican la naturalización de los talentos, por encima de las vinculaciones que se puedan establecer entre el hecho de pertenecer a uno u otro género y que ello, como si de una marca empresarial se tratara, te condicionara para el ejercicio de una profesión o un oficio determinado.

Dada la amplitud y abundancia de los derechos consagrados en la Constitución de 2008, puede ser difícil precisar las propuestas novedosas que, en materia de géneros pueden representar un progreso y fortalecimiento de la institucionalidad política, en esa perspectiva,

en la figura 14, se presentan, resumidamente las disposiciones que el constituyente ecuatoriano incluyó en tal sentido.

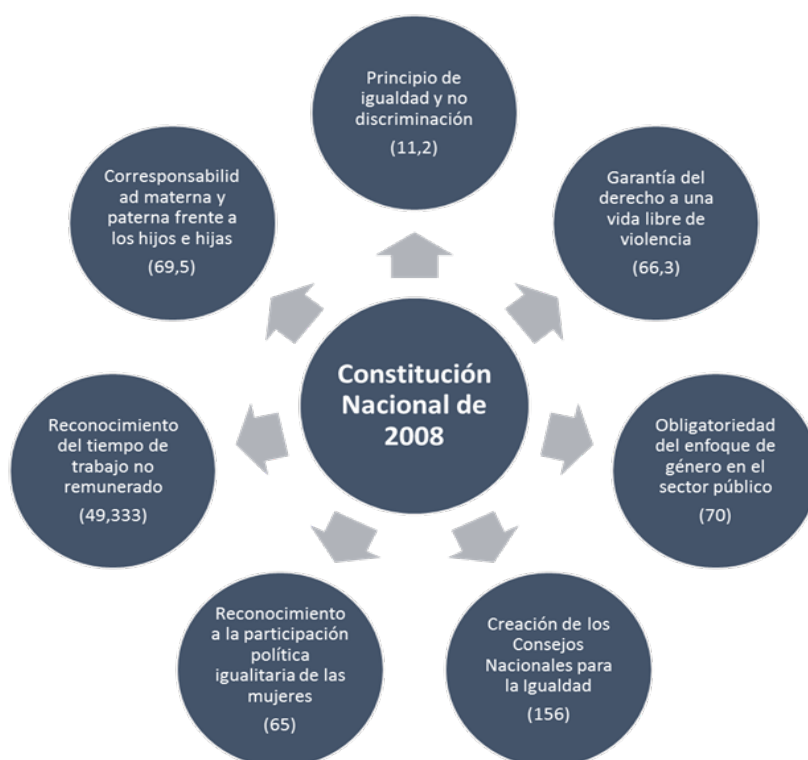


Figura 14. Constitución Nacional e institucionalidad de género
Fuente: elaboración propia

3.2. El Centro Nacional de Mujeres (CONAMU)

Si bien esta institución no es originaria del contexto en el que se desarrolla la RC, su figura es clave para el proceso igualitarista que emprende Correa, fundamentado en la Constitución del 2008 y por ello le otorga un protagonismo, quizá mayor al que tuvo en otras administraciones gubernamentales. Su origen se remonta a 1997, cuando fue creado mediante decreto, con la expresa finalidad de regir la planificación de las políticas públicas orientadas a la aplicación del enfoque de género. Siendo una institución Macro, este centro emite direccionamientos a otros entes que, en los espacios concretos de interacción ciudadana administran y ejecutan las estrategias que difunde el organismo.

La actuación de este organismo es importante porque sienta las bases de lo que luego será la visión rectora de la transversalidad de género en la RC. De acuerdo con CONAMU (2009), la institución despliega su accionar alrededor de un conjunto de estrategias tales como: a) la promoción y protección de la participación social y política, el ejercicio de la ciudadanía de las

mujeres y la gobernabilidad democrática; b) el impulso y amparo del derecho a una vida libre de violencia, a la paz, a la salud, a los derechos sexuales y reproductivos y acceso a la justicia; c) la promoción y protección de derechos educativos, culturales, interculturales, calidad de vida y autonomía y; d) el fomento los derechos económicos, ambientales, trabajo y acceso a recursos financieros y no financieros que tienen las mujeres.

Ahora bien, una vez Correa en el poder y, luego de ser aprobada la nueva Constitución, estas antiguas instituciones fueron remozadas algunas y transformadas otras. En el caso del CONAMU, hay que señalar que la misma carta magna, recién estrenada, contenía lineamientos para una nueva institucionalidad que comenzaba por la creación de los llamados “Consejos Nacionales para la Igualdad”, que debían reemplazar a otros organismos, como el caso de los Consejos Nacionales de Niñez y Adolescencia, entre otros. (Ferreira, García , Macías , Pérez , & Tomsich, 2011), esas disposiciones llevan a la creación, en el año 2009, de la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género, la cual tendrá la potestad de adelantar acciones para la estructuración de un nuevo organismo encargado de la aplicación de la transversalidad de género en las políticas públicas ecuatorianas: el Consejo Nacional de Igualdad de Género.

3.3. El Consejo Nacional de Igualdad de Género (CNIG) y los planes de desarrollo en el proceso de institucionalización del enfoque de género

Nacido del mandato constitucional, viene a representar la institución bandera en cuanto a la articulación entre la acción del Estado, la planificación del desarrollo y la transversalización de géneros. Una vez nombrada la Comisión de Transición, cuyo funcionamiento estuvo entrabado por el mismo proceso de recomposición institucional que involucraba al CONAMU, es en el año 2014, en el que, gracias a la promulgación de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, se crea esta institución, como mecanismo para regular o definir los Consejos para la Igualdad, al tiempo que recibe las prerrogativas para impulsar las políticas de igualdad de género en el nuevo marco constitucional.

En su función de rectoría de las políticas públicas con enfoque de género, el CNIGI, es responsable directo de mantener la observancia de los derechos, tanto de las mujeres como de las personas que integran la comunidad LGBTI, no solo en el contexto normativo de la Constitución ecuatoriana, sino a la luz de lo establecido por las diferentes convenciones y convenios suscritos por la nación. Las funciones que, en materia de género, formalizan la acción de esta institución serían, entre otras: formulación, transversalización, observancia,

seguimiento y evaluación de las políticas públicas. El cumplimiento de estas funciones se concreta en la formulación, seguimiento y ejecución de los planes de desarrollo y las agendas de igualdad de género, es decir, la concepción del Régimen del “Buen Vivir”, estipulado en la Constitución de 2008.

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010. El punto de partida, en cuanto a la transformación del discurso político electoral en una propuesta de gobierno y políticas públicas es la formulación de este plan que, tal como se señala en su presentación, presenta las líneas estratégicas que permitirán la concreción de los procesos revolucionarios propuestos por Rafael Correa para conseguir darle un verdadero golpe de timón a la estructuración y funcionamiento de la democracia ecuatoriana y la cultura ciudadana en el país. Un cambio que representa el “punto de quiebre” del viejo régimen de relaciones sociales, enquistadas en los procesos de dominación de las elites, políticas, económicas y, hasta culturales, pues la dominación contra la que se revela el líder de la RC, es precisamente aquella que está enclavada en los estereotipos históricos de la sociedad ecuatoriana (SENPLADES, 2007).

Una de las grandes novedades que presenta este plan, es el proceso mismo de su diseño, pues, se presenta como el resultado de un esfuerzo colectivo e integrador que asume la visión sistémica en la que el todo es mayor que la suma de sus partes. En esa concepción cada uno de los activos participantes, locales o sectoriales no son tomados como unidades discretas, sino que se articulan o alinean en la estela de la constitucionalidad de los principios rectores como la equidad de género, el desarrollo sustentable, la interculturalidad, entre otros. A esto se refieren los diseñadores del plan al advertir que la conjugación de todas las miradas nacionales en una sola dirección supuso un gran esfuerzo, político, económico y social de largo aliento.

Así mismo, en su diseño, este primer Plan de Desarrollo presentado por la RC, consta de tres partes interconectadas que llevan desde lo abstracto-teórico, hasta lo empírico-real, a saber: a) una primera parte conceptual que involucra una mirada crítica de los procesos sociales, económicos y políticos que definen la situación actual del Ecuador; b) una segunda parte dedicada a la definición de los objetivos de desarrollo bajo la concepción humanística que es propositiva frente al quiebre del desarrollismo capitalista, y recoge las propuestas realizadas por los diferentes grupos sociales, entidades y sectores que participaron en las mesas de consulta; c) una tercera y última parte, en donde se recogen todas las acciones anteriores pero con la idea de proyectar acciones concretas de intervención estatal a través de políticas públicas, ya no bajo una figura asistencialista, sino de acompañamiento de la ciudadanía en la superación de sus necesidades.

En suma, este Plan Nacional de Desarrollo, es presentado como un esfuerzo colectivo, social y no estatal, que busca la edificación de la igualdad a través de su institucionalización. El proceso que conduce a esa institucionalización requiere primero una socialización a partir de la cual se colectivicen, no tanto las demandas que de alguna manera ya se han difundido suficientemente, sino las convicciones de carácter cultural y axiológico que empujen socialmente ese cambio de óptica en la concepción del desarrollo. La tabla 14 reúne un extracto de los principales objetivos de este plan, en los que es posible constatar los esfuerzos de la institucionalización del enfoque de género.

Tabla 15

Síntesis de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010

Objetivo	Descripción
Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial	En el fundamento de este objetivo, el planificador reconoce que el problema del desarrollo del país pasa por superar las inequidades históricas en razón de género, ingreso, identidad sexual, entre otras. Por lo tanto, planificar para la igualdad supone, entre otras cosas, una nueva y más justa distribución de la riqueza, el cierre de las brechas salariales y, definitivamente, una transversalidad de género en la formulación de las políticas públicas.
Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía	El desarrollo con visión humanística considera que las personas, independientemente de su raza, sexo, género o cualquier otra diferencia, puede desarrollar asertivamente sus capacidades, siempre y cuando mantenga una adecuada alimentación, tenga acceso a la educación y al conocimiento actualizado. En tal sentido, este objetivo apunta a la igualdad de género al atender con criterios no discriminatorios la formación de las mujeres y sus talentos, las cuales, al educarse en igualdad de condiciones, estarán mejor capacitadas para enfrentar con éxito los procesos sociales y de la cultura patriarcal establecida.
Garantizar el trabajo estable, justo y digno	Una de las desigualdades más palpables en la sociedad ecuatoriana se encuentra en el establecimiento de condiciones de acceso al empleo o, más bien al trabajo con justicia y equidad, en términos de condiciones y de salarios. Así, la superación de las inequidades en las situaciones que enfrentan los grupos vulnerables, mujeres, niños, entre otros, es una de las metas de este plan que conecta con la igualdad de géneros.
Garantizar el acceso a la participación pública y política	Uno de los objetivos de la RC es la profundización de la democracia hasta alcanzar la concreción de un sistema participativo y protagónico que sustituya el injusto y elitismo modelo representativo. El adjetivo de “ciudadana” que tiene la revolución planteada por Correa, implica un proceso inclusivo que revierta la discriminación histórica de los grupos de indígenas, mujeres, comunidad LGBTI, y que, permita una incorporación sustantiva de esos grupos en los procesos e instancias de toma de decisiones.

Fuente: elaboración propia basada en SENPLADES (2007)

En definitiva, se podría afirmar que, más allá de las dificultades prácticas que enfrentan las orientaciones teóricas de este primer plan de Desarrollo, en la gestión de Correa, se observa una clara intencionalidad y voluntad política por asumir el proceso de transformación en sus raíces más profunda. Un repensar de la propia cultura ciudadana y un viraje en cuanto a la

visión economicista presente en la mayoría de los planes tradicionales, enfocado todo esto, en el paradigma del Buen Vivir propuesto por la RC que pretende superar la vocación pragmática de los planificadores anteriores. Cabe decir, que el fracaso de algunos de los objetivos aquí planteados, supone la inviabilidad de una verdadera transversalidad de género en la formulación y ejecución de las políticas públicas.

Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013. En el proceso de transición que lleva del CONAMU al CNIG, queda claro que este último debe ocuparse de operacionalizar teórica y metodológicamente el diseño de un plan para la igualdad que quede enmarcado en el paradigma emergente, cuando se trata de concebir el desarrollo, como es la visión del Buen Vivir. El diseño de este plan, al igual que el Plan Nacional de Desarrollo, descrito anteriormente, fue obra de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (SENPLADES) y representa la concreción, al menos en el papel, de los principios constitucionales que regulan la construcción de una sociedad de nuevo tipo, soportada en una transformación del paradigma desarrollista en su contraparte: “el Buen Vivir”.

Ahora bien, ¿qué implicaciones sociales, económicas y políticas tiene el cambio en el paradigma que rige las políticas públicas en el Ecuador y cuya centralidad la ocupa ahora este término denominado Sumak Kawsay o buena vida? De acuerdo con Arboleda (2011), lo que distingue este concepto de otros esquemas de desarrollo es el vínculo estratégico que traduce entre derechos y progreso. Entendido este último, no como una relación de propiedad entre la persona y los bienes materiales, sino los grados de satisfacción que es capaz de sentir con su cotidianidad y sus estilos de vida.

En otras palabras, se trata de un proceso integral en el que los ciudadanos y ciudadanas, deben ser provistos de las oportunidades para disfrutar sus derechos humanos, satisfacer su necesidad de ser libre, de sentirse reconocido, pero -sobre todo- de ser feliz en un ambiente de armonía social. Cuando se habla de proveer a los ciudadanos, no significa, asumirlos como simples recepcionistas de esas oportunidades, lo conveniente es que se creen las condiciones en las que se pueda convivir en ese espacio armonioso del que se hablaba antes, sin romanticismos candorosos, la idea es fortalecer el acto de ser ciudadanos, conscientes de sus atribuciones como tales y participativos en todas y cada una de las esferas en las que se haga necesaria la conciencia ciudadana.

El discurso de Correa, logra con esta referencia a un nuevo modelo de desarrollo económico y social, reunir unos rasgos de identidad entre el cómo presente y los políticos anteriores como “el pasado”. Así construye unos enunciados políticos que refuerzan la idea de edificar desde la

identidad propia, una alternativa frente al neoliberalismo imperante a finales del siglo pasado y enfoca su accionar, bajo la égida de las ideas del llamado socialismo del siglo XXI. Para ese nuevo enfoque, el discurso correísta no echa mano a las viejas organizaciones políticas, por el contrario, realiza un interesante giro hacia la configuración de una ciudadanía activa que, en esencia depende de las voluntades individuales, mucho más que de las capacidades organizativas de las comunidades o de la llamada sociedad civil (Manosalvas, 2014).

Como ocurre con el Plan Nacional de Desarrollo, esta estructuración planificada para el Buen Vivir, es el resultado de un trabajo sistémico realizado de manera colectiva y guardando todos los aspectos técnicos y metodológicos que favorezcan el alcance y cobertura de las principales necesidades asumidas en las agendas sectoriales. Al ser una propuesta construida en colectivo, este plan incorpora las deudas históricas que se tienen con muchos grupos vulnerables, entendiendo que el mismo concepto de Buen Vivir, recoge las derivaciones de muchos y antiguos debates por la construcción de una alternativa para vivir en una sociedad más justa y menos ligada a las lógicas de la dominación tradicional, entre las cuales, por supuesto, se encuentra la cultura patriarcal.

El concepto, no es en absoluto, inocente desde el punto de vista ideológico, sin embargo, tampoco podría desdeñársele como una simple retórica contestataria de los movimientos tradicionalmente oprimidos. Por el contrario, su importancia radica en haber sido llevado, desde el discurso político hasta la planificación y las estrategias concretas del desarrollo del país. Tampoco hay inocencia en su adaptación al discurso y propuesta de la RC, su integración allí, obedece a una de las estrategias discursivas de Correa para consolidar su liderazgo del lado de “lo distinto”. El “Buen Vivir”, se constituye en una manera cualitativa de concebir y medir el bienestar humano, precisamente considerando esa dimensión humanística del desarrollo en el que las personas se sienten felices con lo que son y lo que hacen.

En cuanto a la relación que puede establecerse entre las políticas de igualdad y el Buen Vivir, se entiende que operacionalizar ese vínculo, despeja en parte, las brumas que pueden surgir para institucionalizar la perspectiva de género. Operacionalizar una noción llena de subjetividades como esta, conlleva un esfuerzo, más que económico educativo y axiológico, hay que sentirse en igualdad para poder actuar consecuentemente, conformando de esa manera los lazos necesarios para la confección de una sociedad de justicia, donde, así como son los géneros, la igualdad es una construcción social. En la tabla 16 se recoge este debate, tomando como referencia la propuesta de Arboleda (ob. cit.).

Tabla 16

Relación entre enfoque, políticas y participación para el Buen Vivir

Enfoque	Tipos de políticas de igualdad y Buen Vivir	Participación y control
Bienestar y acceso	Políticas de bienestar: dirigidas a cambiar las condiciones inequitativas de vida de las mujeres y/o los hombres en aspectos como empleo, salud, educación, entre otros. Políticas de acceso: orientadas a superar las inequidades en el acceso de las mujeres a servicios y facilidades públicas como educación, salud.	Políticas de participación: Intentan incidir en la vinculación de mujeres y hombres en los procesos de toma de decisiones para el desarrollo, reduciendo la distancia en los porcentajes de participación que afecten a las mujeres y acercando la paridad.
Economía, economía solidaria y economía de los cuidados	Políticas de transformación económica: Articulación de las políticas macroeconómicas, las políticas redistributivas, las políticas sociales y las laborales con un enfoque de igualdad de género (...) como un eje fundamental en la construcción del buen vivir en las diversas dimensiones de la producción, el trabajo y la productividad, la reproducción y en el nivel macroeconómico.	
Cultura, interculturalidad y derechos de la naturaleza	Políticas que transforman la cultura, instalan prácticas de interculturalidad e intentan incidir en la construcción social de roles y en la valoración social de mujeres y hombres. Implica la transformación de los sistemas simbólicos de las sociedades para el desarrollo de nuevas identidades de género y el replanteamiento de las metas y horizontes de desarrollo de las localidades para la vigencia de los derechos de todos los seres vivientes, incluyendo aquellos que no tienen voz. Políticas de garantía de la igualdad de derechos para los y las diversas, con fuerte y decisivo reconocimiento a la diversidad de culturas o modos de vida, etnias, identidades y opciones sexuales, territorios. Junto a ello y para prevenir atentados a la igualdad derivados de normas colectivas, primado de las mujeres como titulares personales de sus derechos, los cuales no pueden ser violados.	Políticas de control: Intentan desarrollar las capacidades de negociación y concertación de las mujeres y/o los hombres afectados por inequidades de género, para orientar las acciones de desarrollo hacia la satisfacción de sus intereses y necesidades (apropiarse de los beneficios del desarrollo)

Fuente: Arboleda (extracto del original) (2011)

En la tabla 16, se puede observar algo sobre lo que se ha hecho énfasis desde el capítulo 1 de esta tesis, una de las claves para que las mujeres ecuatorianas participen protagónicamente en la dinámica social, política y económica del país, es la articulación de los tres ejes -lo económico, lo político y lo social- no existe un enfoque de “desarrollo blando”, en el sentido de obviar la necesidad de recursos económicos y sustituirlo por mero voluntarismo social y político. Toda cosmovisión de bienestar o, como le llama la RC, Buen Vivir, está estrechamente vinculado a la adquisición de bienes, ya no para la acumulación, pero si para la dignificación de la vida humana, en ese esfuerzo son necesarias las políticas de bienestar, pero también las de transformación económica, culturales y de equidad.

3.4. La Defensoría del pueblo

Una forma de constatar la importancia que adquirió la institucionalización de las políticas de géneros en el Ecuador en el ámbito de la RC, es observar la orientación, objetivos y estrategias bajo las que funcionaron algunas organizaciones, más allá de lo que señala la lógica en el caso de las instituciones que fueron pensadas para concretar las políticas de igualdad de géneros en el Ecuador, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo Ecuatoriana (DPE). Una institución que por su propia naturaleza está pensada para traducir en acciones el discurso igualitarista.

Como ejemplo de lo que ha significado la Transversalización de la Perspectiva de Género, se revisa un análisis intrainstitucional realizado por esta organización, en el año 2015. En ese contexto y como insumo para cumplir con ese diagnóstico, en los últimos meses de ese año se aplicaron dos cuestionarios, uno con la finalidad de pulsar la opinión que se han formado los ciudadanos y ciudadanas, respecto a la atención que reciben de la institución y, el respeto a las necesidades específicas de género (Defensoría del pueblo del Ecuador, 2016). Considerando así la percepción del servicio por parte de la ciudadanía como el termómetro más adecuado para establecer la pertinencia institucional.

Completar el diagnóstico institucional, implicó en este caso la aplicación de otro instrumento a los funcionarios que laboran en la DPE, en procura de obtener una visión más cercana de sus percepciones acerca de los asuntos vinculados a la perspectiva de género, cuáles son sus actitudes más frecuentes cuando les corresponde atender situaciones de este tipo y, en tanto, cuál sería su receptividad para profundizar la perspectiva de género en el marco de actuación de la DPE.

Como complemento de esta autoevaluación crítica, la estrategia metodológica incluyó, la realización de entrevistas a los principales responsables de la actividad gerencial en la institución, considerando que, aunque se determinen debilidades en la aplicación de la visión de género, a partir de la opinión de usuarios y usuarias y, si bien los funcionarios pueden mostrar una actitud proclive a participar en la institucionalización de la transversalidad; de no existir voluntad gerencial, difícilmente este objetivo podría lograrse.

En suma, el diagnóstico realizado por la DPE, como preámbulo para determinar las orientaciones a seguir en una adopción institucional de la perspectiva de géneros, permitió la descripción de la situación que para 2015, presentaba el organismo, haciendo una revisión de aquellas variables que podrían ser concluyentes al momento de profundizar o darle continuidad

a la transversalidad en accionar corporativo, al respecto, en la tabla 16, se observan algunos de estos aspectos.

Tabla 17

Diagnostico en clave de Género de la DPE

Área	Conclusiones
En cuanto a la Misión de la DPE	Se encuentra redactada de manera neutra, es decir la Institución atiende las necesidades de todas las personas indistintamente de su género; el enfoque de igualdad de género, como los otros enfoques, se incorpora y desarrolla a través del trabajo misional, incluso uno de los ejes de trabajo de la Defensoría, destacados desde esta óptica, es “la lucha contra la violencia y contra la discriminación”.
En cuanto al presupuesto	La DPE alinea el presupuesto y la orientación del gasto en políticas de igualdad en género al Ministerio de Finanzas del Ecuador, no obstante, hace falta una estrategia de seguimiento y evaluación que prevea indicadores de igualdad de género para medir su ejecución desde esta perspectiva.
En cuanto a la percepción de los funcionarios	Existen una actitud favorable a la igualdad material y formal de hombres y mujeres, sin embargo, cuando se profundiza en sus “creencias”, persisten un alto número de ideas estereotipadas que se alimentan de la cultura patriarcal y androcéntrica predominante en la sociedad ecuatoriana.
En cuanto a la percepción/opinión de los usuarios y usuarias	Los encuestados consideran que han sido atendidas siguiendo los principios de igualdad de géneros y de no discriminación, queda pendiente sopesar eso en la práctica real, pues se sabe que las ciudadanas y ciudadanos no cuentan con herramientas para identificar sus necesidades específicas respecto de su género.

Fuente: elaboración propia basada en DPE (2016).

En virtud de esta radiografía institucional, la institución asumió la necesidad de reorientar su misión institucional, aun cuando muchos de los hallazgos fueron positivos, de lo que se trata es de avanzar en la institucionalización de la perspectiva de géneros, como elemento transversal de la actuación de la defensoría, de manera que no haya posibilidades de cambio en ese objetivo, si llegara a cambiar el ejecutivo nacional, es decir, mantener la transversalidad de género en las naturaleza de la institución más allá de la gestión de Rafael Correa y de la teleología de la RC como paradigma político-social. En este sentido, la reorientación de la actividad institucional de la DPE, en clave de géneros comprende la redefinición de sus principios fundantes, a saber:

- Eficacia: implica alcanzar todos sus objetivos sin menoscabo de la eliminación de cualquier forma de discriminación en razón de la identidad de sexo o de género.
- Eficiencia: lograr armonizar los servicios y productos que se dispensan con los recursos asignados y utilizados para tal fin.
- Calidad: se muestra como el grado entendida como la adecuada combinación alcanzada entre los dos primeros principios. En esa complementariedad debe buscarse la satisfacción

de usuarios y usuarias en virtud de sus necesidades caracterizadas en razón de su identidad de sexo y géneros.

- Corresponsabilidad: comprende el sentido de pertenencia al momento de cumplir la misión y objetivos institucionales, en alusión directa a la cobertura de la transversalización de la perspectiva de géneros, esa corresponsabilidad conecta, desde la persona que mantiene el orden para que sean atendidos los ciudadanos y ciudadanas, hasta quienes gerencian la institución.
- Igualdad y no discriminación: se refiere al hecho de que todas las personas son iguales y gozan de los mismos derechos, deberes y oportunidades sin distinción alguna y en particular por razones de sexo, identidad de género u orientación sexual, “ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos” (DPE, 2015, p. 39). Incluye la adopción de medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de las y los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.
- Transversalidad: se trata de integrar en la implementación de las estrategias institucionales, considerando tanto las decisiones, como las normas, las directrices y los presupuestos, para mantener como un axioma perdurable una atención a las personas, haciendo abstracción de sus diferencias, en particular su identidad de sexo, género y su orientación sexual.
- Participación y complementariedad: todos y cada uno de los actores, internos o externos de la DPE, son reconocidos en su constitución personal y experiencial, de manera que todos se consideran esenciales “... para la comprensión o para la forma como se asume una determinada identidad de sexo, de género y la orientación sexual, las cuales están presentes en el proceso de transversalización” (Defensoría del pueblo del Ecuador, 2016, p. 20)
- Integralidad: impulsa la conjunción del ser humano como existencia plural pero única de muchas dimensiones simultaneas, desde lo biológico hasta lo emocional. Esto, en tanto, requiere una perspectiva transversa de géneros que solo tiene sentido en su concepción colectiva pero que se concreta en lo individual.

Todos y cada uno de estos principios, así como el diagnóstico realizado le permitieron a la DPE, articular una serie de acciones que le llevaran a la institucionalización de la perspectiva de géneros. Aunque esto (el caso de la DPE), se haya presentado en este apartado de las tesis, como una referencia para entender la institucionalización del enfoque de géneros en la realidad ecuatoriana que se desencadena con la RC, lo importante es integrar este caso, en una mirada

integral que ya fue ilustrada con la revisión de algunos planes nacionales que, a su vez, están concatenados con lo establecido como lógica de la democracia en Ecuador, en la Constitución Nacional de 2008.

Ahora bien, solo restaría decir, como corolario de este capítulo, que, ciertamente la RC acopló a su evolución, una serie de dispositivos jurídicos, programáticos y políticos para que la perspectiva de géneros en su concepción transversal no quedara como un enunciado más del discurso correísta contextualizado en la realidad de Ecuador. Su concreción se siente en la formulación y ejecución de las políticas públicas, en las realidades y dilemas de la transversalidad de géneros y, por supuesto en la institucionalidad de esa perspectiva. En adelante, será más fácil avanzar con algunas conquistas obtenidas y reorientar la búsqueda de aquellos objetivos no alcanzados, muchos de ellos relacionados, por cierto, con el tema de la inter y pluriculturalidad y, la cuestión indígena que será tratada en el desarrollo del capítulo IV de esta tesis doctoral.

Capítulo IV

PROTAGONISMO SOCIOPOLÍTICO DE LAS MUJERES INDÍGENAS EN LA REVOLUCIÓN CIUDADANA

Al igual que en otros países de Latinoamérica, el protagonismo político de las mujeres indígenas, en Ecuador ha sido aún más complejo que el de otras minorías. Siendo así, en el marco reflexivo de este capítulo, y una vez explorada las características generales de la inclusión sociopolítica de la mujer ecuatoriana en el desarrollo de la dinámica de la RC, adelantada por Rafael Correa, se pretende profundizar en el análisis de las diferentes iniciativas organizacionales, institucionales e incluso discursivas que han orientado ese protagonismo. Hay que considerar al respecto, que la inclusión de las indígenas en los procesos de participación y toma de decisiones políticas, es el resultado de la lucha desde diversos frentes, algunos de ellos globales, otros regionales, pero los hay nacionales, que son, a la luz de esta reflexión, los que más interesan.

1. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la perspectiva indígena como sustrato teórico de la RC

Una de las principales cualidades de las luchas indígenas por la igualdad social en el Ecuador, viene dada por la heterogeneidad organizacional bajo la que se presenta. De acuerdo con Altmann (2013), las organizaciones indigenistas en el Ecuador mantienen una gran diversidad tanto en sus objetivos, sus ideas-fuerza, sus discursos y sus orientaciones prácticas, sobre todo al momento de captar a sus miembros e impulsar las luchas contra la exclusión social. Tal variedad implica a su vez, una suerte de competencia interna entre esos grupos que muchas veces se traduce en mayor dificultad para articular, de manera unitaria, frentes de lucha más concretos, como es el caso del impulso requerido para alcanzar la igualdad social de las mujeres indígenas.

De cualquier manera, el análisis de esa travesía tortuosa que le ha tocado transitar a las ecuatorianas para alcanzar algunos de los éxitos contra los poderes establecidos, ya descritos en el capítulo III de esta tesis, debe tener como marco de referencia, la generalidad de un contexto frecuentemente hostil a sus aspiraciones. Contra esa hostilidad cultural es que se han constituido iniciativas de carácter institucional, como la CONAIE que, si bien va mucho más allá de las disputas de géneros y de derechos interculturales, representa un puntal muy

importante en el progresivo avance del reconocimiento político institucional de las mujeres en la dinámica social del Ecuador.

1.1. Rasgos históricos de la CONAIE

La relación histórica entre la lucha de los indígenas ecuatorianos por la igualdad social y la participación política de las mujeres en el país, data de la década de 1970, un periodo en el que se produjo un acercamiento solidario entre los campesinos y los indígenas del Ecuador. Es en ese proceso en el que se constituye la CONAIE, como resultado de unión entre los indígenas residentes en la sierra ecuatoriana y los del Amazonas. Es, en todo caso, un proceso complejo de construcción de identidades que realza el ser del indígena como una fuente ética para las estrategias que busquen su reivindicación. Y es que, tal como afirma Larrea (ob.cit.) Toda la historia de los movimientos indígenas “da cuenta de un proceso de construcción de un sujeto social que busca constituirse en sujeto político y cuyos planteamientos son un referente ineludible para el análisis de las propuestas de cambio social en el país” (p.67).

Hay en su fundación un objetivo étnico-cultural, pero también un esfuerzo por la reivindicación de un amplio sector de la población constantemente excluido de la toma de decisiones políticas y, peor aún, de los planes de desarrollo económico y social del país. Esa franja de la población comienza a hacer esfuerzos más organizados y sostenidos por el reconocimiento de las diferencias, más allá de las ideologías, la CONAIE, recuerda al Estado Nacional, que sin el aporte de la cultura indígena y sin su participación, no hay pluralidad democrática, por más partidos que existan en el entramado político del Ecuador.

De acuerdo con Pérez (2018), el reconocimiento formal de la pluriculturalidad en Ecuador solo se alcanza hasta el año 1998, cuando, constitucionalmente, queda asentada esa característica como un rasgo esencial del Estado, dando paso a la posibilidad de legitimar viejas aspiraciones que se consolidaron en la Confederación en el momento de su formación. Ciertamente, lo que se logra con la estructuración de la CONAIE, es la incorporación del pensamiento indigenista como una columna vertebral de los movimientos igualitarios en el país, pero su origen histórico está ligado a la búsqueda de una mayor accesibilidad en el plano político, de allí que una de sus primeras acciones programáticas fue la presentación de un “proyecto político” que contiene sus pretensiones como grupo unitario, sin desligarse de las diversidades que las propias nacionalidades indígenas representan.

En el documento que le sirve de presentación de su proyecto, la CONAIE, especifica claramente sus pretensiones de incorporarse a la dinámica sociopolítica del país sin ningún

atavismo relacionado con el pasado ni con los poderes constituidos, aclaran su perspectiva como grupo tradicionalmente marginado que se debate frente a un escenario que cree, históricamente más propicio para trascender más allá del mero reconocimiento cultural y étnico. Sus aspiraciones se encuentran ligadas, además, a la posibilidad de influir en los centros de toma de decisiones, formales o no, para que las nacionalidades indígenas sean consideradas como actores de primer orden. Así, su proyecto político parte de las convicciones históricas que se muestran en la figura 15.

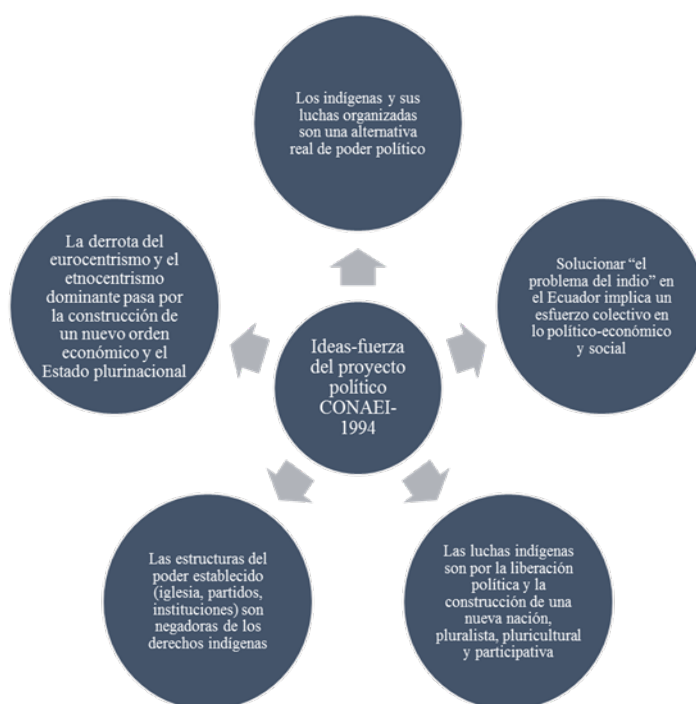


Figura 15. Ideas de partida del proyecto político CONAIE-1994
Fuente: elaboración propia, basado en CONAIE (1994)

Desde estas ideas originarias la CONAIE plantea un proceso de conquista de espacios para la participación política, con incidencia en la configuración de nuevas relaciones étnicas, culturales y, aunque no de forma explícita, de géneros. Allí queda reflejado, sin duda, una clara ambición reivindicativa no aislada, sino integral, no se trata de profundizar los logros en el plano de la etnicidad y la pluralidad sino de erigirse como pueblos, así en plural, que requiere integrar su visión de mundo a la de los grupos tradicionalmente dominantes. En su declaración de principios, hay una intencionalidad quizá grandilocuente pero no negociable, y tiene que ver con la conformación, en el mediano plazo, de un gobierno plurinacional y democrático.

En la evolución de su propuesta política, la CONAIE, asume la ampliación de su enfoque inicialmente cerrado en cuanto a la perspectiva indígena, e intenta ganar fuerza con la

incorporación de otras visiones en la que sus intereses confluyan con los de otros grupos vulnerables, dándole así un carácter verdaderamente pluralista al planteamiento político que presenta, tomando en cuenta además, la redefinición de la orientación político-ideológica del Estado ecuatoriano, una vez formalizado su carácter plurinacional y, los principios bajo los que se direcciona la RC propuesta por Rafael Correa, en muchos casos, coincidente con su percepción de la igualdad social. Esa ampliación de las ideas originarias del proyecto político de la CONAIE se constata en los cambios argumentativos de sus convicciones, como se puede observar en la figura 16.



Figura 16. Ideas de partida del proyecto político CONAIE-2012
Fuente: elaboración propia, basado en CONAIE (2012)

La convergencia discursiva alrededor de la denominación “pueblos originarios”, plantea una nueva mirada de los grupos tradicionalmente poderosos hacia esa enorme franja poblacional, por demás mayoritaria, conformada por indígenas, afrodescendientes y las mujeres, entre otros. A la luz de los acontecimientos desencadenados a raíz de la Constitución de 1998, el rasgo más distintivo de la CONAIE y su proyecto político tiene que ver con la consolidación de la figura, al menos desde el discurso político, del Estado Plurinacional. Algo que había quedado instituido en el artículo 3.1 de dicho texto, al establecer la necesidad de entender la realidad social, política, cultural y económica, como el resultado de la “unidad en la diversidad”, con la incorporación, además, del uso de las lenguas indígenas, como lengua oficial de estos pueblos

(Massal, 2010). Es fundamentalmente la construcción de ese nuevo Estado, el signo histórico que define a la CONAIE. Un Estado que, inscrito en una sociedad de corte democrático e inclusivo, vaya más allá de igualitarismos formales y promueva una verdadera unidad social, respetando las diferencias históricas de los pueblos originarios y su derecho a postular nuevos modelos políticos y económicos.

1.2. Ejes discursivos y praxis política de la CONAIE

Más allá de su heterogeneidad, como sujeto histórico, la CONAIE, mantiene desde su constitución, una serie de ideas-fuerza que le direccionan como un solo cuerpo, en pro de un ejercicio más equilibrado del poder político en el Ecuador y, por supuesto, ser incluido entre los sectores que toman las decisiones en ese nivel. Esas ideas, superpuestas en su proyecto político, se despliegan en su praxis social y cultural que se renueva con los cambios que la misma organización introduce al actualizar ese proyecto.

Existe una intencionalidad explícita, tanto en las ideas o el discurso de la CONAIE como actor político y su praxis, una profundización de la democracia ecuatoriana que permita superar las exclusiones en sus diferentes expresiones. Esa redemocratización del Estado ecuatoriano debe incluir una exaltación de los derechos colectivos, especialmente de los indígenas y una revitalización de los procesos de descentralización político-administrativos.

Es conveniente recordar, antes de ampliar el análisis de los ejes discursivos de la CONAIE, que su estructura es una mixtura, básicamente de tres organizaciones, con asentamiento en las tres principales regiones del Ecuador: la Sierra, la Amazonia y la Costa (Massal, ob.cit). Entonces, en ella convergen los intereses disímiles de tres corporaciones indígenas que autoconcebidas como “nacionalidades”, con todas las implicaciones socioculturales que ello implica. De cualquier manera, esa heterogeneidad es al mismo tiempo su riqueza desde el punto de vista igualitarista, una igualdad en la diversidad, tal como se puede observar en la manera que plantean sus preocupaciones ideológicas principales, cuya presentación se hace tomando en consideración lo plasmado por la CONAIE, en la renovación de su documento constitutivo (CONAIE, 2012).

Filosofía Integral. Entre sus elementos matrices, la CONAIE realza la integralidad como un principio rector que promueve la unidad en la diversidad. En tanto, se trata de impulsar un discurso y una acción política que no desecha ninguna cosmovisión del mundo, sino que se alimenta de la complejidad que representa la universalidad cultural. “Así, la vida se garantiza por una interrelación armónica entre los seres humanos (hombres y mujeres) y la naturaleza en

estrecha interrelación y armonía, cuyo fin último es la vida de todos los seres” (CONAIE, 2012, p. 8).

En la profundización de este principio, la organización destaca las ideas de complementariedad y reciprocidad, que describen como procesos complejos y necesarios. En cuanto a la primera idea, se recuerda, desde el proyecto político indígena, que aquello percibido como “lo opuesto”, no necesariamente debilita las posiciones propias, por el contrario, debe ser visto como la oportunidad de desarrollar una “dualidad complementaria”, que aplica, por ejemplo, cuando se emparejan elementos del mundo humano o natural que terminan conformando la integralidad.

Ejemplos de esta dualidad recursiva se pueden encontrar en la “oposición dialéctica” de: mujer-hombre; día-noche; noche-día. Hay en estas dualidades, una apuesta clara por la integralidad que podría trasladarse a la visión de la inter o multiculturalidad; el indigenismo o los enfoques de géneros, en tanto, no pueden concebirse como movimientos contrapuestos, con posiciones irreconciliables; se trata, por el contrario de impulsar la convivencia proteica con “los otros”, en una suerte de simbiosis social.

Así mismo, la idea de reciprocidad acude a la necesidad de obtener del mundo natural o social, respuestas cónsonas con los actos o actitudes que se desarrollan. Esto es interesante cuando se coloca al trasluz de las visiones interculturales y de géneros pues, se trata de dar y recibir, no solo de pedir o de tomar a la fuerza lo que se quiere. Para los pueblos originarios es de vital importancia promover una convivencia en equilibrio a tres niveles; en el nivel temporal, en el espacial y el espiritual. Los pueblos y su cultura tienen que respetarse en sus prácticas, en sus creencias y en el ejercicio de sus derechos, en contraprestación, los grupos indígenas retroalimentan y engrandecen los productos civilizacionales que se derivan de la convivencia plural con los demás grupos, manteniendo incluso sus “nacionalidades” dentro de la nacionalidad ecuatoriana.

Ahora bien, estos principios de la filosofía de los pueblos originarios no son neutrales ideológicamente y, allí esta parte de su jerarquía analítica en el marco de este apartado de la Tesis. La dualidad complementaria y la reciprocidad se inscriben en una visión socioeconómica que contradice parte de las máximas capitalistas que aluden al libre mercado y la competitividad. Reciprocidad, en la filosofía indígena, comprende un aprendizaje mutuo y un “intercambio de saberes”, en los que la cultura ancestral alimenta y es alimentada en su coexistencia con la modernidad, manteniendo la intencionalidad constante en el discurso y la praxis de la CONAIE, sobre la perpetuación de los valores culturales de los indígenas.

Comunitarismo. En congruencia con su planteamiento de una filosofía integral, la CONAIE, plantea lo comunitario como la sostenibilidad de su concepción unitaria entre cuerpo, alma y naturaleza. Los pueblos originarios no se plantean una vida sustentada en la explotación de los recursos de la “Pachamama”, como denominan a la tierra en la que viven o, más bien, con la que viven; por el contrario, rechazan la acción devastadora de la civilización moderna sobre su entorno natural pues se trata, desde su discurso, de una acción contra el ser que le dio la vida. Defender la tierra o el territorio es el punto de partido del Comunitarismo indígena, pues en esa defensa se intenta preservar el bien máspreciado desde el que se originan todos los demás bienes que requieren los pueblos para vivir, siempre en equilibrio.

Observado desde esta posición, lo comunitario encarna una visión integradora en la que se retroalimentan, lo político, lo cultural y lo social; conformando la promoción de un modelo económico alternativo frente al capitalismo dominante. Ese modelo se construye sobre la base del colectivismo, en lo productivo, pero -además- en una práctica auténtica de la democracia que depende de la participación activa de todos los integrantes de la comunidad, ya sean jóvenes o viejos; mujeres u hombres. Por supuesto, el modelo solo está completo por la naturaleza política que adopta cuando resalta la necesidad de esa participación, en algunos aspectos contradictoria con los esquemas sociales propios de los indígenas que, en muchos casos promueven la desigualdad social entre mujeres y hombres, por solo mencionar un ejemplo.

Como principio o eje político de la CONAIE, este Comunitarismo, implica un impulso decisivo a la conformación del Estado Plurinacional (CONAIE, 2020), en el que debe prevalecer el carácter familiar de las formas de propiedad, única figura que privilegia la autogestión y no la acumulación como axiomas de la acción económica de los pueblos. Precisamente, una de las primeras tareas políticas y jurídicas de ese nascente Estado, es la armonización de las nuevas formas de propiedad. Se entiende, sin embargo, que la propuesta de este modelo alternativo no es excluyente, por el contrario, se reafirma la necesidad de la complementariedad social, cultural y, hasta tecnológica; en esa nueva realidad, manteniendo, eso sí, el respeto por la naturaleza pues no existe Comunitarismo posible sin una defensa integral del territorio.

Democracia plurinacional. La profundización de la democracia es la piedra angular del proyecto político de la CONAIE, ello supone una constante preocupación tanto en su discurso como en su praxis y lo deja ver claramente cuando ahonda en su propuesta de la construcción de un Estado o, más bien, de un contexto social en el que se respete y promueva la

plurinacionalidad. En palabras de Barroso, Martínez y Lares (2018), la insistencia en la relación entre democracia y plurinacionalidad obedece a una reacción de las sociedades latinoamericanas, frente al agotamiento de los modelos políticos de la democracia moderna, cuyos pivotes fundamentales fueron contruidos bajo las directrices de un liberalismo que solo ha profundizado las desigualdades.

Visto de esa manera, la democracia permeada por la plurinacionalidad se robustece en función de su rechazo a la concepción universalizante de una democracia occidental, hija del proyecto de la modernidad y castradora de buena parte de las iniciativas colectivas provenientes de los pueblos originarios. Al acogerse, la plurinacionalidad como un rasgo definitorio de la democracia, en clave indígena, se redimensiona su poder para construir procesos de inclusión, muy lejos de la homogeneidad que representa la democracia como proyecto de la ilustración del siglo XVIII. En especial, los pueblos originarios de Latinoamérica, son repensados desde sus “mundos”, que son diversos y que incluyen cosmovisiones disimiles para las cuales hay que gobernar con justicia.

Una democracia plurinacional, de acuerdo con la CONAIE, involucra la construcción del consenso cultural acerca de la idoneidad de las organizaciones políticas, económicas y, en general, sociales. Ese entramado institucional debe ser amplio y abierto, de manera que pueda mantener la mayor neutralidad posible en la toma de decisiones que afectan a la sociedad ecuatoriana como colectivo y a la naturaleza diversa de los grupos socioculturales que la componen. Es de entender, que, en esa estructura democrática, la participación igualitaria incluye a las mujeres indígenas como sujeto social y político, pues la intención que subyace en la plurinacionalidad conlleva el ejercicio pleno de las potencialidades de los pueblos originarios, en los que la figura de las mujeres es, definitivamente trascendente.

Una transformación democrática con estas claves se asume como auténtica, al promover la incorporación de las diferentes visiones nacionales que, como en el caso ecuatoriano, pueden habitar sobre el territorio de un mismo país. En tal caso, las territorialidades se identifican con proyectos disimiles que deben ser consensuados, poniendo en práctica así, los principios explicados anteriormente de dualidad complementaria, reciprocidad y comunitarismo.

La Interculturalidad. Democracia, plurinacionalidad e interculturalidad se retroalimentan de manera constante. En su declaración de principios políticos, la CONAIE, asume esta última como la capacidad que deben mostrar los ciudadanos para reconocerse los unos a los otros, construyendo al cobijo de ese reconocimiento, un conjunto firme de relaciones manifiestamente equitativas, armoniosas y simétricas (CONAIE, 2012). Este rasgo del Estado

plurinacional, debe mantenerse en los procesos políticos, económicos y sociales que involucran la interacción entre los ciudadanos ecuatorianos, independientemente de su origen, su género, su credo o su filiación ideológica.

Al analizar este principio político de la CONAIE, debe tomarse en cuenta su contextualización, es decir, la transformación teórico-práctica que ha venido operándose alrededor del fenómeno intercultural. En ese mismo contexto teórico, hay que considerar que la etnicidad ha pasado a ser una variable política importante, no sólo en el ámbito del Ecuador, sino en el resto de América Latina, y han sufrido un conjunto de transformaciones que renueva el significado del mismo término y de las “relaciones étnicas”. De hecho, muchos pueblos originarios han redefinido sus referentes culturales, y sus procesos de diferenciación o identidad social, con los cambios en sus demandas sociales que ello conlleva (Lalander & Ospina, 2012).

En ese complejo proceso de construcción democrática de lo étnico o, más bien, lo cultural, la figura del Estado ha jugado un papel muy importante pues su concepción plurinacional, favorece la ampliación de la participación política de todos los actores. El Estado ecuatoriano, entonces, regula el forcejeo de los diferentes intereses culturales que “pulsean” para ser incluidos, sino con ventaja, al menos con justicia, en la toma de decisiones políticas de los actores institucionales. Para algunas organizaciones de corte culturalista, como es la CONAIE, es en ese juego de tensiones políticas en el que debe hacerse valer lo intercultural como un principio de justicia e igualdad, para que no se desdeñen las reivindicaciones de los pueblos originarios.

En ese orden de ideas, la interculturalidad viene a convertirse en un parámetro del igualitarismo que se propone desde la CONAIE, más aún, si se entiende que la cultura no es una cobertura abstracta para identificar “homogéneamente” a grupos sociales que, en esencia son diversos. Lo intercultural tiene que incluir, por ejemplo, las diferencias de género porque, ¿Qué otra cosa, sino la cultura, es la que ha promovido las desigualdades entre la participación política de las mujeres y la de los hombres?, el enfoque de géneros es, básicamente, una visión intercultural que hace fuerza del lado de las transformaciones políticas para que las mujeres adquieran un mayor protagonismo social y organizacional. En clave indígena, esta es quizá, una realidad más urgente, dado lo arraigado del patriarcalismo que impera en muchos de los pueblos originarios.

Desde el terreno del indigenismo, el impulso de una democracia plurinacional, un Estado con ese mismo rasgo y la interculturalidad como principio de las relaciones sociales, derivan

en la conformación organizacional necesaria para la consecución de unos derechos, largamente esquilmados por los poderes hegemónicos del Estado y los grupos dominantes. Es parte de una disputa, al tiempo factual y simbólico, por el control de los centros de decisión política del Estado y la activación del sentido de pertenencia de los pueblos que tradicionalmente han sido apartados de esos espacios. La movilización y las confrontaciones, materiales y discursivas, se amplían, con la incorporación de estos actores, para nada nuevos, desde el punto de vista social pero sí, novedosamente movilizados por la certeza de una oportunidad histórica para alcanzar sus derechos.

Libre determinación. Este es un principio político complejo que por esa misma complejidad suele ser interpretado a conveniencia de los grupos de poder. En el marco principista de la CONAIE, hay una constante demanda por mantener la capacidad para administrar sus propios sistemas organizacionales, sus territorios y sus bienes culturales, asumiéndose como nacionalidades originarias que, por derechos, ancestralmente adquiridos, deben poseer esa potestad.

Sin embargo, a pesar de la importancia que se le ha dado a nivel internacional la consagración de este derecho, la libre determinación suele enfrentar fuertes dificultades prácticas que terminan por convertirla en una bandera para las diferentes campañas políticas, pero sin verdadera concreción en la vida diaria de los indígenas. Esto es lo que parece haber ocurrido en el caso de las coincidencias entre la RC y los movimientos indígenas del Ecuador que, no se tradujeron en una profundización del libre determinismo de las comunidades originarias.

Precisamente, es la cuestión indígena y su denuedo en la defensa de sus identidades, uno de los puntos críticos entre la gestión del presidente Rafael Correa y los representantes de la CONAIE, a pesar de la cercanía histórica que mantuvieron los movimientos de izquierda ecuatoriana con los movimientos que finalmente confluyen en la Confederación, lo cierto es que muchas de sus organizaciones y, en general los grupos indigenistas, terminaron alejándose de la RC, encarnada por el correísmo, situación si se quiere contradictoria, siendo que una de las organizaciones políticas con abierta orientación indígena, el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik – Nuevo País (PK), se produjo en el contexto de las alianzas sociales para la consolidación de una democracia de corte popular, promotora de una ciudadanía participativa y protagónica, que significó la gestión de Rafael Correa.

Probablemente, el obstáculo más fuerte que enfrenta el principio ideológico de la libre determinación sea el temor al secesionismo que algunos actores políticos presentan como una

posible consecuencia de la aplicación de este principio; ante esta preocupación, los defensores del libre determinismo abogan por autonomía que les resguarde de la transculturización que implica la globalización neoliberal. Se trata de erigir la etnicidad y el sentido de pertenencia de los pueblos originarios, como parte de su reconocimiento social y político a lo interno del Estado, no como “pequeñas repúblicas”, sino como nacionalidades que pueden, dado el caso, fortalecer la unidad del Estado plurinacional, potenciado por cada uno de los colectivos que lo componen. Esto supone que la autonomía reclamada, aunque pueda significar la conformación de “autogobiernos”, se convierta en una estrategia de democratización del Estado ecuatoriano, bajo un modelo de mayor inclusión intercultural (Aparicio, 2009).

Soberanía e independencia. Aunque son presentados por la Confederación, como dos principios separados, en la práctica, no existe posibilidad de lograr independencia sin alcanzar la soberanía plurinacional y viceversa. Los pueblos originarios aspiran a ser soberanos, en la medida en que se les permita el acceso y protagonismo en los centros de decisión política, es allí en donde se logran los grados de autonomía que edifican esa soberanía plurinacional, entendida como la concreción de los derechos propios de los indígenas en contra de los intereses hegemónicos de los grupos dominantes, tradicionalmente impuestos como intereses de todos. La CONAIE, aspira lograr una soberanía plural, no de una “voluntad general”, sino de las voluntades diversas de las nacionalidades que encarnan el Estado ecuatoriano, entre ellas, cada uno de los pueblos y naciones originarios.

Así mismo, la soberanía plurinacional compleja y diversa, que permea la convivencia de los pueblos ecuatorianos a lo interno de su territorio, se fortalece en la defensa de la independencia del Ecuador, de los lazos que les atan a poderes de las transnacionales económicas y políticas del resto del mundo. Las potencias económicas, políticas y, sobre todo tecnológicas que dirigen subrepticamente los destinos de las sociedades modernas y sus democracias liberales, deben enfrentarse desde el frente común que conforman las nacionalidades ecuatorianas; la trascendencia de esos vínculos dominantes abre espacios para una democracia de cara popular, en el sentido contemporáneo e intercultural del término.

En la independencia intercultural del Ecuador y el robustecimiento de sus nacionalidades juega un papel determinante el anticolonialismo que permitió la conformación de la CONAIE, por lo que resulta lógico que ambos principios –soberanía e independencia- se superpongan indistintamente en el discurso de los actores indígenas y de los demás grupos sociales que han sido históricamente relegados a la subordinación mediante estrategias de poder que les coloca

en situación de fácil vulnerabilidad, sin importar, en esos caso, el blindaje jurídico que en materia étnica, haya creado el Estado plurinacional.

Sumak Kawsay. El principio democratizador por excelencia de la propuesta indígena tiene que ser este, su integralidad al momento de ser incorporado al discurso de la CONAIE, representa una respuesta de por si incluyente ante la acusación frecuente de secesionismo con que se les señala. “El Sumak Kawsay, es un principio filosófico, propio de la cosmovisión de los pueblos kichwa o Quechua, que en su traducción literal equivale a vida en plenitud” (CONAIE, 2012, p. 15). Como se observa su traducción es amplia e integradora, pues ¿qué es la vida en plenitud?, aquella en la que se alcanzan los grados de satisfacción necesarios desde lo político, lo económico, lo social y, principalmente lo cultural.

El Sumak Kawsay o, “Buen Vivir”, se traduce, como ya se adelantó en un apartado anterior, en una nueva concepción del desarrollo, no dependiente de la tradicional visión economicista que, ordinariamente se traduce en mayores grados de libertad económica, sino como la apertura hacia nuevas “formas de vida”, nuevas maneras de organizarse socialmente, legitimadas desde lo simbólico pero también desde la praxis política, con una clara orientación humanística que se afirma en los principios de la justicia y de la igualdad.

En la propuesta ecuatoriana, que incluso se asume como un paradigma sociopolítico a partir de la aprobación de la Constitución del 2008, El “buen vivir”, conlleva un repensar de los patrones culturales bajo los cuales se entiende el desarrollo, impactando sobre el sustrato discursivo de esa noción y sobre sus parámetros prácticos para ser medido. Un pueblo desarrollado no puede ser, únicamente aquel que logra “subir” sus estándares económicos, considerados cuantitativamente.

El desarrollo es una “sensación” de bienestar o, en otras palabras, los “grados de felicidad”, que se producen en una sociedad y que la población en general es capaz de alcanzar. Esta noción, eminentemente subjetiva del desarrollo, contrasta con la imposición de tasas de productividad, no porque se les considere innecesarias sino porque se les asume como complementarias y, en todo caso inútiles, si no existe la posibilidad de una vida plena para la ciudadanía, medida esa plenitud en claves culturales, sociales, políticas y, como no, económicas.

Este principio que redefine la concepción del desarrollo, o la forma en que se ha entendido el mismo en el contexto latinoamericano es, claramente contestatario; probablemente no sea nuevo, en cuanto categoría discursiva que contraviene los modelos impuestos desde modernización de las formas de vida en el continente, pero si es novedosa su inclusión en un

texto constitucional y, más aun, el protagonismo que adquirió en el debate político ecuatoriano a partir del 2006. El “Sumak Kawsay”, deja de ser un paradigma de los pueblos originarios y sus nacionalidades para convertirse en la guía de la RC, un conjunto de estrategias que permitan la articulación de los intereses de estos pueblos, con los de la sociedad en general, deviniendo a la postre en la configuración de una nueva forma de vida ciudadana, más inclusiva y justa.

Equidad de Género e intergeneracional. Con la postulación de este principio, la CONAIE, deja claro su pertinencia a la hora de considerar sus aportes para la igualdad de géneros, aspecto que no siempre queda claro su praxis cultural. Las mujeres adquieren un redimensionamiento en cuanto a su protagonismo, desde lo institucional y lo cultural; se considera una equidad real, aquella que se logra mediante un proceso que, más allá del igualitarismo formal de las leyes, permite la cimentación de relaciones de géneros, en el marco del respeto de las prácticas ancestrales pero, redefiniéndolas a la luz de las nuevas realidades en el que las mujeres son artífices de su propio destino; lejos de la violencia cultural que encierran diversas prácticas patriarcales, envueltas en la rutinización del poder, que terminan, frecuentemente en formas de intimidación institucionalizadas.

El igualitarismo de géneros en el contexto del indigenismo no deja de ser complejo, su concreción enfrenta la fuerza simbólica del patriarcalismo moderno, así como el atavismo de los pueblos originarios, en cuanto al papel de las mujeres para la crianza de los niños y niñas, la preparación de los alimentos, entre otras tareas tenidas como exclusivas de la función de las mujeres indígenas. Se trata de una discusión sobre la igualdad en la diferencia, una equidad, más bien, que se afirma en la necesidad de ser sujetos sociales de igual estatura, aun cuando las diferencias naturales (el sexo) y sociales (de géneros), puedan representar inicialmente un obstáculo:

El último modelo, el de la igualdad en la diferencia (también denominado de la complementariedad y corresponsabilidad varón-mujer), se propone hacer compatible la igualdad y la diferencia entre ambos, sin caer en la subordinación, en el igualitarismo, ni en la exaltación unilateral de la diferencia. Por un lado, se parte de la igual condición de personas del varón y la mujer y, en consecuencia, de su igual dignidad y derechos (Aparisi, 2015).

No obstante, el proyecto político de la CONAIE, incorpora plenamente un enfoque de géneros que propugna una figuración igualitaria de las mujeres y los hombres, tanto en la organización y administración de las relaciones familiares, como en su presencia de las instancias del gobierno, bien sea el autonómico, puertas adentro, o las esferas del gobierno o

instituciones del Estado plurinacional. Mujeres y hombres son considerados actores de estatura cultural similares y, ambos con el talento y la pertinencia necesaria para influir en la consolidación de la presencia indígena en las organizaciones de carácter político.

Destaca, en todo caso, la presencia de lo intergeneracional que acompaña la propuesta de equidad de género de la Confederación. Este elemento es valioso, desde lo ideológico y, desde lo operacional. Ideológicamente, el respeto diferencial de las nuevas generaciones gana adeptos para la causa indígena, entre los jóvenes, de hecho, mucho del nuevo liderazgo que hace vida en los partidos de orientación indigenista como es el PK, son parte de esa juventud que ha acudido al llamado de la CONAIE. Parece haberse entendido que, lo político no está separado de lo ambiental y, esto último es clave para la construcción de sociedades que, a futuro, mantengan sus potencialidades de sostenibilidad para las nuevas generaciones.

Territorialidad. Como sucede con las nociones antes descritas, la del territorio también ha sido repensada en el seno de la Confederación. La cosmovisión indígena, conceptualiza al territorio más allá de lo físico, es una figura intangible que si bien, se palpa como el espacio que provee los bienes para una vida plena, se siente como un hálito espiritual, herencia de la Pachamama, que debe ser honrado, mediante acciones de preservación de sus valores reales y simbólicos. Los pueblos originarios no “viven en”, sino que “viven con”, un territorio que les provee la vida sin el cual es imposible pasar a discutir acerca de formas de educación, de comunicación o de organización política. Las características del territorio, de su naturaleza, definen los rasgos simbólicos y prácticos de las relaciones sociales, por lo que se le considera un componente subjetivo más de las nacionalidades, sus valores y sus patrones de conducta.

En general, la CONAIE representa una realidad organizacional que supera los límites formales en los que se le ha presentado aquí, de hecho, su explícita vinculación con la RC adelantada por los gobiernos de Rafael Correa, pretenden exponer esa transcendencia formal que le llevan a ser incorporada como sujeto histórico en las continuidades y discontinuidades del discurso político del correísmo. Claro, una cosa es la “cuestión indígena” como categoría discursiva que pretende representar un conjunto diverso de nacionalidades y otra es, CONAIE como organización factual, en la que pueden incluso, distinguirse los roles que despeñan los preceptos político-ideológicos que acaban de ser analizados y que se resumen en la figura 17.



Figura 16. Ideas de partida del proyecto político CONAIE-2012
Fuente: elaboración propia, basado en CONAIE (2012)

2. La configuración de la participación política de las mujeres indígenas en el marco de la RC

La historia reciente de América latina muestra un claro avance en el logro de los derechos para los pueblos originarios y, en el caso de las mujeres indígenas, ese progreso, puede medirse en función de la apertura jurídica, institucional y ciudadana que se ha permitido en la mayoría de los países de la región, por encima de la cultura patriarcal que aún mantiene su vigencia en muchos de los escenarios, sobre todo organizacionales, de la política tradicional. Contra esa resistencia, se han venido construyendo espacios y modelos de participación en la escena pública que son el resultado de las transformaciones sociopolíticas promovidas por los llamados, “gobiernos progresistas”, entre los cuales es posible incluir el proyecto de RC, liderado por Rafael Correa en el Ecuador.

A la distancia, el análisis de la notoriedad que, adquirido el movimiento de las mujeres indígenas en el subcontinente, se puede enlazar con esa insistencia histórica de sus dirigentes por mantener su identidad y capacidad para el autogobierno, descrita en el apartado sobre el tema. Sin embargo, la verdad es que esta ha sido una lucha cruenta en la que muchos actores del mundo indígena han dejado la vida y, se trata ahora de reivindicar esos esfuerzos de manera

integral, algo que al parecer, forma parte de la razón de ser, de la RC, que ese objetivo se haya logrado no, forma parte del análisis y reflexión que sigue, pero de lo que si se está claro es que las organizaciones indigenistas han alcanzado el grado de madurez suficiente para convertirse en actores protagónicos de la discusión acerca del destino de sus pueblos.

2.1. Aproximación a la participación política de las mujeres indígenas en Ecuador

Una de las consecuencias de una mayor presencia social de las mujeres indígenas, en el ámbito de lo público, en la región latinoamericana; tiene que ver con una suerte de reconceptualización de la indigenidad (De la Cadena & Starn, 2009), esto es, una mirada más profunda al aporte intelectual y artístico que han realizado los indígenas en diferentes partes del mundo, Nueva Zelanda, Bolivia, Guatemala, entre otros. De allí, que haya emergido una resignificación multicultural de estos pueblos que, por cierto, no pretende avanzar hacia una igualdad social “neutra” sino, lograr influir en una comprensión de la indigenidad, como parte de un largo proceso histórico-social que incluye las transformaciones, autoritarias o no de los periodos colonizadores “viejos y actuales”, que están allí, y son parte de las búsquedas de la comunidad indígena, particularmente de sus mujeres, actores frecuentemente más vulnerables en dichos periodos.

El caso ecuatoriano no deja de ser emblemático cuando se le coloca en el marco de la realidad global, por sus propias características de sociedad multiétnica y plurinacional. Las mujeres ecuatorianas han enfrentado así, tanto colonialismos antiguos y modernos, como patriarcalismos locales y globales, y de ellas podría decirse que representan plenamente esa pluralidad ideológica que es posible encontrar en las causas indígenas, pues, en ellas ha habido siempre esa diversidad que solo se advierte, cuando se le analiza profundamente y sin universalismos. En los movimientos de mujeres del Ecuador, se encuentra entonces, ese afán por evitar las etiquetas que terminan desvirtuando sus aspiraciones, buscan, por el contrario, huir de los determinismos históricos que alguna historiografía les ha endosado.

La realidad que devela esta situación de las mujeres se enmarca en el contexto de las organizaciones indígenas en Ecuador, incluyendo, por supuesto, la CONAIE, en cuyo seno se libran fuertes debates acerca de las relaciones de poder aún vigentes entre hombres y mujeres indígenas, que reproducen la subordinación histórica a la que se han visto sometida las mujeres. Se trata de un dialogo intergéneros, que erigen a las mujeres como verdaderos sujetos políticos para la toma de decisiones. Como lo afirma Palacios (2005), así como los movimientos indígenas han reclamado su lugar como actores protagónicos de la democracia ecuatoriana, las

mujeres a lo interno de estos movimientos, mantienen sus propias pugnas con el poder establecido, para ser, no solo visibilizadas, sino determinantes en las transformaciones organizacionales y sociales que ha vivido el Ecuador y, mantienen algunas iniciativas y espacios para la organización y formación sociopolítica.

Escuela de Formación de Mujeres Líderes “Dolores Cacuango”

Esta iniciativa formativa que surge en 1996, en el marco organizativo de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador (ECUARUNARI), pretende convertirse en un centro de capacitación que potencie el talento de las mujeres indígenas del Ecuador, concretamente en sus rasgos de lideresas, promoviendo así, la autonomía y visibilización de uno de los grupos de mayor dimensión cultural y demográficamente del movimiento indígena en el país. Este Escuela quiere ir más allá de su quehacer institucional y, por ende, su impacto busca ser de carácter educativo, por lo que su orientación hacia las mujeres se fundamenta en el hecho concreto de la vulnerabilidad de estas; una realidad que les mantiene en un estado de pobreza estructural que, con frecuencia les impide incorporarse a las opciones de educación formal que ofrece el Estado ecuatoriano (Confederación de pueblos de la nacionalidad Kichwa del Ecuador, 2005).

La Escuela tiene una vocación eminentemente social, pero sin olvidar la variable de la participación política de las mujeres, para lo cual se perfila el trabajo de la institución y de los instructores que laboran en ella a partir de una serie de objetivos, tales como:

- Recuperación crítica y recreadora de los conocimientos de los Pueblos Indígenas.
- Recuperación del sentido identitario de comunidad y de pertenencia a un pueblo indígena / organización popular.
- Adquisición de conocimientos de manera recíproca entre los actores de la Escuela
- Capacitación en conocimientos y destrezas de elaboración, gestión y ejecución de proyectos de desarrollo y autogestión y
- Capacitación en conocimientos críticos acerca de los modelos de desarrollo, con las variables de etnicidad y género.

A diferencia de los espacios de formación institucionalizados, esta Escuela se afirma en la necesidad de humanizar y “territorializar” esa formación para las mujeres indígenas, de manera que sea, a través del intercambio de saberes, que se construya y comparta el conocimiento, con especial énfasis en la comprensión de los modelos de desarrollo que convengan para la región, en atención a sus características étnicas y culturales. Esto implica que la preparación educativa

de las mujeres indígenas está alineada a sus posibilidades de ser exitosas en un mundo tradicionalmente dominado por los hombres, independientemente que pertenezcan a sus mismos pueblos o no. Formarse atendiendo a los retos de géneros que su propia cultura les plantea significa una gran ventaja al momento de convivir en esos escenarios que tienden a ser diversos y complejos.

Así mismo, como todo espacio educativo, la escuela “Dolores Cacuango”, presenta un conjunto de saberes, habilidades y destrezas que perfilan a aquellas mujeres que se forman en este espacio, ese perfil contiene un conjunto de rasgos sociales, actitudinales, pero también, cognoscitivos que fortalezcan sus potencialidades para moverse exitosamente en una realidad cada vez más compleja, tanto a nivel local, como nacional y global, sus principales rasgos actitudinales se muestran en la figura 17.



*Figura 17. Ideas de partida del proyecto político CONAIE-2012
Fuente: elaboración propia, basado en CONAIE (2012)*

Otras experiencias organizativas/formativas de mujeres indígenas en Ecuador

Aunque la cita de la Escuela “Dolores Cacuango”, como referencia de la progresiva participación sociopolítica en Ecuador, pueda resultar algo limitada, lo cierto es que es un esfuerzo reconocido de este colectivo que apunta a ese esfuerzo integral de empoderamiento de las mujeres que se ha querido resaltar en este aparte. Sin embargo, es preciso aclarar que el

impulso de esa escuela desde la CONAIE, ya había iniciado su andar con las escuelas clandestinas que a mediados del siglo XX y, a escondidas de los grandes hacendados, algunos pueblos indígenas, con la orientación de la misma Cacuango, impulsaron con la finalidad de impulsar una educación intercultural que respetase sus propios saberes, pero que -además- les permitieran participar activamente en esas otras realidades que significan las diversas nacionalidades que habitan el país (González , 2015).

Interesa, en este sentido, remarcar que la participación política de las mujeres indígenas no es el resultado del esfuerzo de una individualidad, o de una iniciativa organizacional, solamente, es más bien, un proceso complejo, aún en desarrollo que, teniendo como destino el logro de una mayor inclusión social, política y cultural, de las mujeres indígenas en la vida pública del país, tiene su origen en la capacidad para educarse y formarse de las mujeres, paralelo a las oportunidades para lograrlo. Esa ampliación o restricción de las oportunidades es, la mayoría de las veces, el resultado del modelo político que impone las relaciones de poder en el país, por lo que se entiende el enfoque hacia el análisis de las ventajas y desventajas que la RC, significó para las mujeres ecuatorianas, durante el ejercicio gubernamental de Rafael Correa.

2.2. Condiciones favorables creadas por la RC para la participación política de las mujeres indígenas

No podría comprenderse la realidad ecuatoriana correspondiente a las dos primeras décadas del siglo XXI, si no se inscribe en el análisis que como modelo sociopolítico representa la Revolución Ciudadana y los periodos gubernamentales que desarrollo Rafael Correa. Desde el principio de esta Tesis Doctoral, ese ha sido el telón de fondo de todas las reflexiones aquí vertidas, por tanto, es lógico que la participación política de las mujeres indígenas sea puesta a bajo su contexto, en el entendido que, el movimiento indígena en general, y el de las mujeres, particularmente, ha estado ligado a esas reivindicaciones por las que, al menos desde su narrativa, la RC ha propuesto la transformación y democratización del Ecuador.

Ahora bien, en lo que respecta al movimiento de mujeres en el Ecuador, antes de la llegada al poder, de Rafael Correa, ya se habían los primeros pasos para un cambio de paradigma en el tema de las mujeres y su tratamiento desde la institucionalidad democrática, claro está, su papel secundario en la dinámica sociopolítica del país, no sufrió muchas modificaciones pero se lograron importantes avances como lo demuestran hechos como: la promulgación de la Ley de

Maternidad Gratuita y Atención a la infancia; la Ley de Amparo Laboral a la Mujer; la inauguración de las Comisarias de la Mujer; así como, el incremento de las veedurías ciudadanas para atender los casos de cobertura de la salud sexual y reproductiva (Monje, 2018).

Por otra parte, con el inicio del conjunto de cambios desarrollados a partir de 1997, con el proyecto político bautizado por Correa como “Revolución Ciudadana”, el Ecuador asumió ese viraje paradigmático del que ya se habló, hacia una consolidación del enfoque de géneros, que ha de colmar todos los espacios de organización y participación política, a la luz de un modelo de democracia nueva, participativa y protagónica, en absoluta oposición al viejos sistema representativo que alberga serias deficiencias a la hora de distribuir deberes y derechos ciudadanos, afectando, muy frecuentemente, la cuota de derechos que la que deben disfrutar los grupos más vulnerables de la sociedad. El correísmo, llega así, con un rostro atractivo para los grupos que históricamente han enfrentado los procesos de discriminación social propios del viejo modelo, entre ellos, los grupos indigenistas y los movimientos reivindicativos de las mujeres.

En el caso particular de las mujeres indígenas, si bien sus luchas están perfectamente delineadas desde las organizaciones que, como la CONAIE, procuran la creación de nuevos espacios de participación política para ellas, conviene recordar que les tocó enfrentar a lo interno de esas mismas organizaciones, procesos de invisibilización o, en el mejor de los casos, subordinación de sus demandas de géneros, con respecto a las demandas de los pueblos originarios en general. La RC viene a constituirse, a partir de la última década del siglo XX, una oportunidad para la emergencia de nuevos actores en la escena de la dinámica política ecuatoriana, entre ellos, los pueblos originarios, con sus naturales diferencias, se hicieron sentir en este periodo y, muy particularmente, las mujeres indígenas, para quienes, este proceso generó, ciertas ventajas, para consolidar sus luchas históricas.

La Constitución de 2008 y las mujeres indígenas

El progreso en el reconocimiento de sus derechos constitucionales, es uno de los puntos positivos que se encuentran al revisar la situación de las mujeres indígenas durante el periodo de la RC, por supuesto el camino jurídico, respecto a la protección de los pueblos originarios, en el Ecuador ya estaba bastante avanzado para finales del siglo XX, sin embargo, no sería justo, negarle los atributos que fueron recogidos en la Constitución que fue aprobada impulsada por el líder de la RC, como motor fundamentalmente para las transformaciones sociopolíticas y económicas que emprendió el Ecuador en esa época. En su generalidad, el texto

constitucional fue redactado acogiendo las principales demandas de los ciudadanos y, especialmente las de aquellos grupos que, como los indígenas han sido históricamente relegados. En ese intenso proceso de discusión del proyecto de Constitución que sería llevado a votaciones en 2018 hay elementos destacables respecto al papel jugado por las mujeres indígenas.

La participación de las mujeres indígenas en el proceso Constituyente. A través de la Red de Mujeres de la Provincia de Chimborazo dio una participación activa de las mujeres kichwas, en el marco de la de la Asamblea Constituyente que discutió el proyecto de Constitución. En un trabajo mancomunado con la Coordinación Nacional de Mujeres de Ecuador, lograron colocar sobre el tapete, el tema de la equidad de géneros, que incluyó una importante agenda acerca del derecho de las mujeres, independiente de su grupo étnico, a una vida libre de violencia, una mayor participación política. Aunque en estas actividades la meta era lograr una mayor inclusión social para las mujeres ecuatorianas como sujeto de derecho colectivo, la presencia de las mujeres indígenas implicó un reconocimiento a la diferenciación cultural y, por ende, el respeto a esas diversidades en el marco de la nueva Constitución (Sieder & Sierra, 2011).

Algunas disposiciones relevantes para las mujeres indígenas. El texto Constitucional aprobado en el 2008, tiene como cualidad general, el impulso de una democracia de nuevo tipo, un modelo con un mayor músculo ciudadano que, lejos del mecanismo puro y simple de la representatividad, pudiese facilitar la construcción de formas novedosas de participación directa, mediante las cuales, la ciudadanía, independientemente de sus características étnicas, culturales, económicas y sociales se involucrara en la mayoría de las decisiones del Estado, particularmente de aquellas que por su naturaleza, competen a la esfera ciudadana, bien sea en la educación, la política o la economía. Algunas de esas disposiciones que buscan una redemocratización de la sociedad ecuatoriana y que se reflejan en la letra de la Constitución impulsada por Correa son:

- El reconocimiento formal de la plurinacionalidad: siendo este un tema ya bastante desarrollado en esta investigación, lo importante es remarcar el énfasis que la RC, a partir de la aprobación de la nueva Constitución, le siguió dando a este tema, elevándolo a la categoría de norma constitucional, algo que en Latinoamérica representó un acto inédito y motivacional para las luchas indígenas en otras latitudes.

- El enfoque de géneros, también se contempla como un eje transversal de la Constitución, promoviendo el reforzamiento de aquellas leyes, ya aprobadas o propuestas, para contrarrestar la violencia contra las mujeres y su discriminación, ya sean indígenas o no. Lo importante es que, al ser letra de la Carta Magna, las indígenas cuentan con un nuevo mecanismo para oponerse a la subordinación histórica que son sometidas por sus propios pares comunitarios.
- La promoción de modelos o principios indígenas como el Sumak Kawsay: el perfil jurídico de la nueva Constitución contiene rasgos importantes respecto a la necesidad de construir la igualdad en la diversidad, algo que, definitivamente hace fuerzas hacia el lado de las luchas de mujeres por la equidad de géneros. El “Buen Vivir” como filosofía de un modelo de desarrollo en construcción, influye en una concepción humanística de las relaciones interpersonales en todos los espacios de la sociedad del Ecuador. La felicidad de las mujeres indígenas, su derecho a una vida plena, en virtud de este principio, pasa por su reconocimiento como coautora de su comunidad, con una estatura similar a la de los hombres.
- El énfasis colocado en los procesos sociales que conlleven la consagración de la “igualdad real”: sin duda, una de las preocupaciones omnipresentes del Constituyente del 2008, es la necesidad de superar la igualdad formal para alcanzar la igualdad real. La formalidad en el tratamiento de la igualdad sugiere que, todas las personas son iguales ante la ley y, por tanto, el Estado debe vigilar que eso se haga efectivo. No obstante, desde los mismos Organismos Internacionales, tiene tiempo alertándose acerca de la inmaterialidad en la que cae ese formalismo, entonces, lo que se intenta cambiar desde el texto constitucional, es que estas normas sean letra muerta y que, esa igualdad se convierta en mecanismos de concreción para la no discriminación de las mujeres.
- El reconocimiento a los mecanismos de justicia indígena: este aspecto es importante porque además de ser explícito en la Constitución, fortaleciendo de esa manera el carácter plurinacional del Estado ecuatoriano. Se interpela a las comunidades indígenas para que, en la acción de sus autoridades comunitarias, se pueda seguir su modelo tradicional de justicia, manteniendo, eso sí, la presencia activa de las mujeres en la discusión y resolución de los conflictos que como pueblos puedan presentárseles (Salgado, 2009).

El fortalecimiento de las organizaciones de mujeres indígenas

La RC impactó positivamente en la reorganización de las mujeres indígenas, incluso por encima de las clásicas organizaciones que como la CONAIE, mantienen y reproducen ciertas desigualdades de géneros, en detrimento de los derechos adquiridos por las mujeres a una vida libre de violencia. Concretar esos objetivos le significó a las mujeres indígenas un frente de lucha en dos espacios, claramente identificados con sus orientaciones plurinacionales, pero no con sus necesidades de igualdad de género. De acuerdo con Sieder y Sierra (2011), durante el periodo de discusión y puesta en práctica de la nueva Constitución, las indígenas debieron confrontar el poder de los hombres en las organizaciones indígenas que, alcanzando cierto reconocimiento cultural dejaban de lado el tema de géneros.

Un importante impulso organizacional fue el que recibieron las organizaciones de mujeres indígenas de las regiones rurales, quienes también lograron incorporar sus voces durante el proceso constituyente. En la agenda de estas mujeres, se establecían las demandas por el derecho a la auto-organización y su activa participación en los mecanismos que resguardan la aplicación de la justicia indígena; esa preocupación se concatena con la reiteración de la plurinacionalidad como una nueva cara de la institucionalidad estatal, con todas las implicaciones sociales, culturales y, hasta económicas, que eso implica. En el caso de las Kichwa, estas mantuvieron su demanda reiterada por la inclusión, por ejemplo, de la paridad de géneros en las disposiciones referidas a los derechos colectivos que, como pueblo, reclamaban, ya no desde las grandes y universalizantes corporaciones de nacionalidades de pueblos originarios, sino desde organizaciones locales y de base, femeninas.

2.3. Condiciones producto de la RC que desfavorecen la participación política de las mujeres indígenas

Aunque puede resultar bastante complejo encontrar elementos de análisis que permitan a la investigadora, subrayar algunos efectos perjudiciales de la RC, sobre la necesidad de participación política de un grupo sociocultural tan específico, lo cierto es que, como todo proceso político, este fenómeno tuvo sus seguidores y opositores, y, en varias circunstancias el movimiento indígena, confronto a Correa y su proyecto ciudadano. Hay que entender, en principio, que Ecuador venía de una serie de frustraciones políticas que sumieron al país en un verdadero caos, al punto de hacer peligrar, en diversas situaciones, el propio sistema democrático. Eso generó, de antemano cierta prevención de algunas organizaciones sociales

contra el planteamiento del presidente, e incluso, hubo alguna resistencia inicial de grupos como la CONAIE, de mucha tradición cultural.

El modelo político y social que encarna la RC, se debe ideológicamente de los llamados movimientos progresistas de la región, eso hace inevitable que, tanto la sociedad civil ecuatoriana como los grupos de personas tradicionalmente vulnerables, albergaran esperanzas y temores, al mismo tiempo, según se iban desarrollando otros procesos progresistas de la izquierda en la región, como en Brasil, o iniciativas con menos posibilidad de ser etiquetadas ideológicamente como lo que ocurría en Bolivia y Venezuela. En ese marco de polémicas, certezas e incertidumbres, la gestión del correísmo significó para una parte del indigenismo ecuatoriano, esperanza; y, para otros, desilusión.

Persistencia de la desigualdad real

El igualitarismo formal establecido en las normas constitucionales del Ecuador, si bien representa un éxito importante de algunos grupos tradicionalmente vulnerado en sus derechos, sobre la dominación histórica de otros sectores, no llega a concretarse a plenitud en sus aspectos concretos. Por ejemplo, en la libertad para seguir ejerciendo la justicia indígena, esta cualidad mantiene la discriminación del rol que pueden jugar las mujeres en esas situaciones, al parecer el patriarcalismo imperante a nivel de la sociedad en general, logra colonizar los espacios interculturales, de manera que las demandas de equidad de géneros, enfrenta la dificultad de ser vista positivamente por las comunidades de nacionalidades indígenas. De hecho, aunque se estipula que sea el Estado Plurinacional del Ecuador quien se encargue de vigilar la observancia de las normas referidas a la igualdad social de hombres y mujeres, lo que parece ocurrir es que se deja mucho espacio para el albedrío de los hombres indígenas cuando se trata de poner en práctica la igualdad real de las mujeres de sus nacionalidades (Sierra, 2009).

Esa situación de desigualdad entre hombres y mujeres en el terreno de la aplicación de la justicia comunitaria indígena se mantiene en otros espacios de su convivencia, así, no hay modificaciones de fondo en la definición de las tareas que se corresponden con el sostenimiento de los hogares. Las mujeres, de las diferentes nacionalidades, preservan un sitio subordinado que les relega al rol de actrices secundarias, en cuanto a la consecución de los recursos económicos. Se les sigue considerando indispensables para sostener la unidad sentimental del grupo familiar, pero hay poca apertura efectiva para que las decisiones que tienen que ver con la sostenibilidad de sus hogares puedan ser el resultado consensuado de lo que piensan “los hombres y mujeres de la casa”.

Presencia de la imagen de indefensión social de las mujeres indígenas

Aunque se avanza significativamente en el reconocimiento de las mujeres como sujetos de derecho, desde el punto de vista de los estereotipos sociales, la RC, abonó muy poco el terreno para la construcción de una visión crítica y justa, de las mujeres indígenas. Se entiende que en ámbito comunitario y social del Ecuador, existe la necesidad perentoria de revertir los procesos de discriminación e injusticia que se cometen contra las mujeres, mucho más en los espacios indígenas y rurales; pero hay que reforzar el proceso de empoderamiento de géneros que prepara a las mujeres para ser sus propias defensoras, no son seres minusválidos sobre los que hay que mantener una vigilancia constante para que no sean abusados, son ciudadanos con derechos explícitos e implícitos que requieren una educación sociocomunitaria que les fortalezca sus propias potencialidades y autonomía.

La RC, ciertamente logró avanzar en diversos procesos sociales de empoderamiento de formal de las mujeres y ello debe ser justamente valorado, en lo que parece haberse avanzado poco es en la transformación del imaginario social que suele colocar a las mujeres en una situación de debilidad, tanto intelectual y física que no les permite, ni les permitirá, actuar con suficiencia en aquellas circunstancias en la que deba enfrentarse con las ideas o acciones de los hombres. Ese imaginario se encuentra ligado a atavismos que están por encima de los alcances de un instrumento legal como es la Constitución de 2008, o el comportamiento organizacional de las corporaciones indigenistas. Cambiar esa concepción, involucra procesos culturales complejos que no se decretan pero que si pueden contrarrestarse en sus impactos negativos; en esa acción cultural y educativa parecen haber aportado más, las escuelas clandestinas de Dolores Cacuango, que los cambios jurídicos promovidos por la RC.

Violencia de géneros como recurrencia histórica

El contexto de vulneración de derechos en que se mantiene a las mujeres en la sociedad ecuatoriana habla lo suficiente acerca de la inoperancia de algunos instrumentos jurídicos que se han implementado, incluso desde mucho antes de la aparición de Correa como protagonista del escenario político en el país. Y es que la violencia de géneros, particularmente la intrafamiliar, parece ser una situación endémica y es capaz de aparecer aun en aquellos espacios en los que ya se han cubierto las principales aristas legales del problema. Es justo reconocer que, en este caso, la gestión de Correa y su proyecto de RC, enfrentan un problema antiquísimo que ha sorteado, casi cualquier estrategia en su contra, sobre todo en el terreno latinoamericano y en aquellos contextos rurales, en donde, con frecuencia, las situaciones de violencia son

alimentadas por una precaria formación educativa y dependencia, afectiva y económica, de las mujeres respecto a los hombres.

En relación a las especificidades de la violencia de géneros en las comunidades indígenas, hay que tener presente que, estas nacionalidades, poseen una justicia propia que coadyuva en los procesos de adecentamiento de aquellas circunstancias adversas que puedan enfrentar las mujeres, ello de acuerdo a ciertos preceptos culturales que se encuentran ligados a sus costumbres y tradiciones. Más aún, unos de los principios políticos que determinan el accionar de la CONAIE, tiene que ver con la autonomía y la libre determinación, así como la posibilidad del autogobierno, de lo que se desprende una mayor complejidad cuando se trata de la atención que puedan prestar los organismos del Estado ecuatoriano a las mujeres indígenas en los eventos de violencia que pueda sufrir.

Sin embargo, en esos mismos mecanismos de justicia indígena está contemplada la necesidad de actuación complementaria del Estado Plurinacional, en defensa al derecho a una vida libre de violencias por parte de las mujeres. Desde los nichos culturales en los que crecen los niños y niñas indígenas, debe haber un conjunto de acciones preventivas que articulen los diferentes actores institucionales. La idea es promover, no una “automatización” del derecho formal que puede estar en las leyes, sino, estrategias sociocomunitarias en las que, los mismos hombres que forman parte de las comunidades indígenas, se involucren en la construcción cultural de una convivencia no violenta (Camacho, 2014).

3. Presencia y activismo de las mujeres indígenas en cargos públicos

Un indicador de la igualdad real por la que abogan las mujeres indígenas, es la posibilidad de desempeñarse en los centros de decisión pública, dirigiendo instituciones u organizaciones que tengan una vocación colectiva, es decir, poder demostrar que tienen el talento necesario para trascender los pequeños espacios familiares y la responsabilidad de opinar en el contexto hogareño para ser tomadas en cuenta como lideresas en el ámbito gerencial, bien sea en los contextos comunitarios y organizacionales de sus pueblos o, en áreas de la convivencia ciudadana plurinacional.

3.1. Presencia y activismo de las mujeres indígenas en el ámbito económico.

El logro de su autonomía económica y reconocimiento de sus capacidades para actuar en ese escenario es uno de los principales objetivos de las luchas de las mujeres de los pueblos originarios en el Ecuador, especialmente de sus mujeres, pues, de lo que se trata es de posicionar una imagen nueva en el imaginario colectivo, una imagen que le presente con el

potencial necesario para alcanzar, por su cuenta, una mejor calidad de vida en virtud de sus propios talentos. Las mujeres indígenas, no sólo en el Ecuador sino en la escena mundial, requieren transmitir la certeza de poder ser artífices de su propio destino, sin asistencialismos estériles que solo perpetúan su estado de dependencia, ya sea en los ámbitos de sus familias, sus comunidades o la sociedad en general. Ese reconocimiento de las indígenas refiere a la percepción novedosa que debe imperar en las sociedades locales, nacionales y globales, acerca de los aportes que estos grupos, otrora discriminados, realizan para el progreso colectivo (Iturralde, 2003).

Más allá de los casos particulares de protagonismo de las mujeres, lo que se remarca es la emergencia de nuevos liderazgos formados en el fragor organizativo que ha devenido la construcción de una redemocratización del Ecuador, en clave ciudadana. Las indígenas ecuatorianas han logrado situarse en espacios de visibilización, primero como una respuesta colectiva a la vulneración de sus derechos sociales y políticos, pero luego han trascendido a la escena de la acción, procurándose el reconocimiento de sus talentos para tomar decisiones importantes para la organización de las economías populares y, en reclamo de sus derechos como ciudadanas que, por ejemplo, sean consideradas para las gestiones financieras en cajas de ahorro e instituciones que manejan las carteras crediticias para sus comunidades agrícolas.

La experiencia de las indígenas en el contexto de la economía ha variado en cuanto a su valoración social y organizacional, lo que ha determinado un cierto viraje en la perspectiva de las políticas económicas del Estado plurinacional, asumiendo explícitamente que, frecuentemente, las acciones institucionales, aun cuando dicen estar guiadas por el enfoque de géneros, terminan por reproducir las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Se debe entender, en tal caso, que una visión enfocada en el carácter monetario y cuantitativo de las decisiones económicas puede estar impregnada de discriminación porque sus efectos no son neutros.

Ahora bien, aunque se rechace el enfoque monetarista en la medición de los avances que puedan tener las indígenas para el logro de su independencia y contribuciones económicas, es desde el estudio de esas variables, que los poderes públicos enfilan su actuación, de manera que, cuando se contextualiza el desarrollo económico del país, en virtud de la reducción de pobreza multidimensional, por ejemplo, se está considerando la situación de las mujeres en el acceso a bienes y servicios. Esa capacidad económica de las mujeres, indígenas o no, está relacionado con su incorporación al mercado laboral, y esto último a su vez, está vinculado a la formación técnico-profesional que puedan recibir. “Uno de los principales mecanismos de

desigualdad de género se explica examinando los sectores en los que laboran, así como por los ingresos que perciben por su trabajo” (Almeida, 2017).

La cualidad del trabajo que se realiza también tiene importancia al momento de analizar esa fortaleza económica, pues no es igual si se analiza la presencia de las mujeres en labores de trabajo doméstico, que, si se refiere al trabajo profesional que, para el sector de las indígenas está bastante deprimido. Con el agravante que, al no hacer presencia importante en cargos profesionales de responsabilidad empresarial, las mujeres pierden la oportunidad de una mayor visibilización social. En términos economicistas, cuando las mujeres se incorporan al sector formal de la economía, se convierten en protagonistas de la dirección del desarrollo del país, pueden acceder a mayores ingresos y, en consecuencia, ver ampliadas sus posibilidades de seguir formándose en el sector de la economía donde se encuentre. Ser autónomas mediante la solidez que puedan tener en el ingreso propio, les convierte en actrices referenciales para otras mujeres.

En definitiva, consolidarse como agentes económicos, más allá de ser un objetivo de autonomía y realización personal, es para las indígenas ecuatorianas, una carrera de largo aliento cuyos inicios, quizá puedan hallarse en los esfuerzos por una educación intercultural de mayor pertinencia comunitaria para ellas y un reconocimiento social humanístico, no asistencialista, eso implica una gesta cultural enmarcada en la necesidad de impulsar modelos propios o, en el peor de los casos, adaptarse con ventajas competitivas a los modelos impuestos por los demás pueblos del Ecuador, que están impulsados siempre, por la realidad de la sociedad global.

La confrontación con la economía de mercado

La RC y el discurso del presidente Rafael Correa en general, promueven una construcción de un modelo económico propio, capaz de potenciar las cualidades de la interculturalidad y, más aún de los saberes y conocimientos ancestrales de los indígenas. En ese contexto discursivo y práctico, el papel de las indígenas para la autogestión o la gestión económica tiende a ser reconsiderada, y debe parte de su naturaleza actual a la confrontación con los patrones de colonización capitalista que han sojuzgado la economía indígena campesina, imponiendo relaciones de dominación que se reproducen, incluso, en las actividades económicas de las comunidades. Existen diversas evidencias de la manera en que los agentes de la industria moderna, en nombre de esa modernización, han generado formas de organización u oficios

para las comunidades originarias que terminan por repetir esos mecanismos de dominación a lo interno de sus propias comunidades.

El abandono de los oficios tradicionales e incorporación al mercado laboral impuesto.

El proceso de deterioro de la economía agrícola, producto de la crisis del campo ecuatoriano en la década de los años de 1990, lleva a las comunidades indígenas a insertarse obligatoriamente en la economía de mercado que de a poco fue convirtiéndose en el modelo omnipresente para todos, así, al sufrir la degradación de los suelos y la carencia para la adquisición de insumos agrícolas con los cuales seguir produciendo, algunos de ellos, se ocuparon en las empresas de floricultura u otros ramos, así como el establecimiento de nexos con las agroindustrias que les utilizan como mano de obra cautiva y barata. Esa inserción a la economía, en todo caso, refuerza los lazos de una dominación antiquísima que no ofrece mayores oportunidades de autonomía de las mujeres.

La llamada comercialización de la agricultura indígena redimensiona la situación de discriminación de las mujeres, pues estas quedan aún más relegadas en la distribución de los oficios, hacia aquellos de menor responsabilidad, contribuyendo, además, a la doble explotación de las mismas por su trabajo doméstico y su incorporación laboral. De hecho, algunos autores consideran que la economía de mercado logra convertir en uno de sus apéndices funcionales a la fuerza de trabajo indígena, profundizando los procesos de alienación económica que les dificultan su derecho a autonomía, la soberanía y la libre determinación que establece la CONAIE, en su proyecto político (Korovkin, 2002).

De cualquier manera, la convivencia desigual entre las prácticas económicas de los indígenas y la economía de mercado permite desvirtuar la imagen de minusvalía subyacente desde hace muchos años en la ciudadanía ecuatoriana al analizar la importancia de los indígenas en el desarrollo del país. En adelante hay una comprensión integral de la diversidad étnica que presenta la población ecuatoriana, ya un poco lejos de las consideraciones racistas que campeo por mucho tiempo en este mundo de relaciones interculturales que es el Ecuador. La presencia de las mujeres también comienza a sentirse como un elemento separado de la acción de sus compañeros hombres y, por lo tanto, tanto las políticas laborales como las oportunidades que se le abren allí, les perciben como sujetos autonómicos, en su mayoría.

3.2. Presencia y activismo de las mujeres indígenas en el ámbito de las políticas públicas

La participación política de las mujeres, indígenas o no, por fuera de sus ámbitos familiares ha devenido en un largo proceso de forcejeos prácticos y discursivos que le han llevado a

obtener importantes cuotas de protagonismo en escenarios que hasta hace poco le eran ajenos. Así, en el caso ecuatoriano, ha significado una redimensión de la importancia de opinión y formación del sector de las mujeres, ya sea para impulsar los mecanismos de democratización de la sociedad o el reforzamiento de la institucionalidad que puede vigilar la adecuación de esa refundación democrática a lo interno de aquellas figuras corporativas que tienen como objetivos la búsqueda de la igualdad de géneros, con las implicaciones sociales que eso conlleva.

Hay ejemplos organizativos en el contexto del correísmo que fácilmente mostrarían como ha avanzado esa presencia y activismo de las mujeres, como pudiera ser el reforzamiento de la atención institucional de las comunidades organizadas en la CONAIE, así como la reconstitución de otras organizaciones enmarcadas en la visión de géneros como la CONAMU. Sin embargo, una cosa es el progreso formal o nominal de las instancias de apoyo para la participación de las mujeres en la escena pública, y otra es su materialización a través de oportunidades de gestión que representen la capacidad de las indígenas, por ejemplo.

En ese sentido, interesa mostrar, en este subapartado, algunas circunstancias situacionales que, bien sea previas a la RC o en su seno, puedan dar cuenta de la movilidad sociopolítica que hoy muestra el mundo de relaciones en el que se mueven las indígenas, sin olvidar que al considerarse su inclusión aquí, no necesariamente significa su protagonismo absoluto, de hecho, son solo ejemplos referenciales acerca del tema.

La experiencia representada por la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa de Ecuador (ECUARUNARI)

Aunque en páginas anteriores se profundizó analíticamente en la figura y trascendencia organizativa que representa la CONAIE para las reivindicaciones de los indígenas del Ecuador, en este caso, la mención sectorizada de la ECUARINARI, que es parte de la CONAIE, se justifica en términos de su importancia para el progreso de la democratización de la causa indígena y, en su seno, de las mujeres de la comunidad Kichwa. Esta organización surgió en el año 1972, con la intención explícita de defender los derechos colectivos de su comunidad, en particular, aquellos que están referidos al disfrute sano de la naturaleza, la libertad para organizarse y participar en la dinámica política del país y, poder acceder a los servicios públicos o, en su defecto, el derecho a protestar por la violación de ese derecho (ECUARUNARI, 2016).

En su demanda de un mejoramiento de la gestión pública y, por supuesto, a ser tomados en consideración para esa gestión, esta confederación promueve su inclusión en lo que respecta a

la gestión del agua. Alegan que, en este tema, el Estado ecuatoriano no ha implementado las políticas necesarias que garanticen, su uso y disfrute por parte de las comunidades indígenas, lo que además repercute en la restricción del derecho a la naturaleza, como aspecto fundamental para el buen vivir. Los indígenas Kichwa, levantan su voz de protestas ante lo que consideran la privatización de un recurso natural que les pertenece por derecho natural y que debe ser gestionado por las comunidades, lo contrario es contravenir derechos constitucionales de todos y culturales de aquellos que, como ellos son habitantes ancestrales de este territorio.

En cuanto a la situación de las mujeres y su importancia en el seno de la ECUARUNARI, se debe considerar que ellas son sujetos históricamente determinados por una cultura autóctona que les forma mediante procesos complejos, tras los cuales, adquieren una identidad que les habilita para la configuración de un imaginario colectivo que le da sentido al lugar que ocupan en esta comunidad. En otras palabras, las mujeres Kichwa encarnan, a un tiempo, la necesidad de la rebelión contra el orden establecido y, la sumisión cultural que los lleva a reproducir los mecanismos de dominación, su cotidianidad se desenvuelve en un entorno o territorio en el que las prácticas culturales se confunden con las dinámicas de la convivencia diaria que las reviste de un ropaje de naturalidad, nada fácil de contrarrestar e incluso, visibilizar.

A lo interno de la ECUARUNARI, se libran también importantes confrontaciones de géneros que, a pesar de representar conflictos internos, son oportunidades para que las indígenas fortalezcan sus dotes para el liderazgo en la función pública organizacional. De hecho, una de las personas que funda esta organización es una mujer, Blanca Chancoso, quien además forma parte de la dirección de la CONAIE. Esta mujer es una fiel representante de las luchas incesantes que han mantenido las indígenas para defenderse de una cultura castradora de tradiciones como es la cultura moderna, pero también para erigir a las mujeres como sujetos políticos que están habilitados para la orientación colectiva de este tipo de organizaciones. “De esta manera, Blanca intenta recuperar las diversas maneras de ser, pensar, expresarse y relacionarse con el mundo como un método para construir una realidad basada en la pluralidad, más justa y sin discriminación de ningún tipo” (Cevallos, 2004).

La vida de Chancoso, puede representar el proceso que le toca trascender a todo el movimiento de mujeres indígenas para alcanzar personalidad propia, en el campo de la gestión pública del indigenismo. Perteneciendo a una familia pobre hubo de emigrar para poder formarse y graduarse como maestra, teniendo apenas 18 años de edad. A partir de ese perfil pudo contribuir decisivamente en la implementación de las políticas alfabetización que se llevaron a cabo en las comunidades rurales y mayoritariamente indígenas, por lo que pudo

identificar con mayor propiedad cada una de las falencias que presentan las políticas públicas orientadas a la atención de los pueblos originarios del Ecuador.

En suma, obviando lo anecdótico que pueda parecer en ocasiones, la revisión puntual de una biografía, lo cierto es que la experiencia de las mujeres Kichwa, en el contexto de la ECUARUNARI, es un ejemplo claro de su persistente lucha por la igualdad de géneros, específicamente en lo que trata a la gestión pública. Desde aquí se apuntala el reforzamiento del liderazgo femenino que impulsa una mayor presencia y protagonismos de las mujeres indígenas en general, no solo de esta comunidad. Una muestra de ese impulso a la gesta autonómica de las mujeres es la importancia que tuvieron, desde la CONAIE, al momento de establecer la agenda del indigenismo en clave de géneros que fue incorporado a la Asamblea Constituyente y, posteriormente al texto constitucional aprobado en el año 2008.

Vale decir, respecto a esta confederación que su relevancia en las reivindicaciones de géneros para las indígenas, pasan por la mancomunidad de esfuerzos que es capaz de constituir cuando se incorpora a la CONAIE, solo que, al ser tan diversa la dimensión humana, cultural y espiritual de los grupos que conforman esta última organización, hay una asignatura individual que corresponde cumplir a la ECUARUNARI y es, su rol promotor de la comprensión integral del mundo de vida de los Kichwa, incluida en ella, la cosmovisión de las mujeres como sujetos sociopolíticos.

Otras experiencias destacables

El empoderamiento sociopolítico de las mujeres indígenas en el Ecuador vive con la RC, altibajos que se pueden interpretar como etapas de encanto y desencanto pero que, en todo caso, es producto de un proyecto que removió todo el andamiaje institucional del país. Parte de esa transformación del modelo político resulta en una revisión profunda del “ser indígena”, en el marco de una reconceptualización de la ciudadanía, a la que se le demanda un mayor compromiso social y sentido de pertenencia, en una sociedad cuya heterogeneidad hace verdaderamente complejo el desarrollo de ese sentido. Está clara la intencionalidad que tiene la RC de reinventar los nexos nacionalistas, de manera que puedan aflorar los visones hasta ahora invisibilizadas por los intereses de los grupos dominantes; el indigenismo y la ciudadanía deben acoplarse bajo el principio de dualidad complementaria que propone la CONAIE, sino esa nueva visión será incapaz de promover cambios reales.

En esa dinámica transformadora, el rol de las lideresas indígenas es esencial para enrumbar las demandas de sus pueblos, pero también lo es, la capacidad de respuesta organizada que

puedan tener los grupos sociales a los que pertenecen estas mujeres. Se trata generalmente de una lucha a dos manos, es decir, por un lado las mujeres deben trascender sus entornos comunitarios en los que se reproducen situaciones de sometimiento patriarcal, al abrigo incluso de ellas mismas, y por el otro, enfrentar una cultura política “ilustrada”, en el sentido moderno de la palabra, que apunta a una formación académica profesional, que las indígenas pocas veces poseen, no por ausencia de talentos, sino por las escasas posibilidades que el Estado les ofrece para formarse de esa manera.

El caso de las indígenas amazónicas del Ecuador.

De acuerdo con Vallejo y Duhalde (2019), la capacidad organizativa de la población indígena de la Amazonía ecuatoriana comenzó a desarrollarse alrededor de la década de 1960, en medio del proceso de Reforma Agraria llevado a cabo, en aquel entonces por Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria (IERAC), que generaron una situación de alarma en las comunidades indígenas que se vieron de pronto, “invalidadas” por la migración hacia sus tierras, por parte de otras nacionalidades del país. Más tarde, durante las últimas décadas del siglo XX, debieron estar atentos a los procesos de ocupación territorial, dirigidos desde la centralidad institucional, para evitar ser avasallados, no solo en cuanto a sus derechos económicos de producir las tierras ancestralmente habitadas por ellos, sino en la defensa del derecho a la libre determinación que se ve comprometida en ese proceso de “colonización territorial”.

Una vez iniciada la RC, el movimiento organizativo de los indígenas ecuatorianos ganó fuerza y su cercanía con las consignas y el discurso correísta fue evidente, sobre todo al iniciarse ese proceso, en un amplio contexto de transformaciones latinoamericanas que se cobijaban en el llamado a la construcción de una sociedad igualitaria, con frecuencia referencia al pensamiento socialista de la izquierda, renovada por la llegada al poder de varios líderes progresistas. Es, por demás lógico, que la lucha de los pueblos originarios organizados en las Confederaciones indígenas, hicieran causa común con las propuestas iniciales del gobierno de Correa que emergió con fuerza, afianzado en su rechazo a las oligarquías nacionales y al modelo neoliberal, dominante por largos periodos no solo en Ecuador sino en todo el Continente.

La “luna de miel” entre la RC, el correísmo la causa indígena formalmente organizada en la CONAIE, solo se prolongó hasta el 2010, año en que esta Confederación le retiró oficialmente el apoyo al gobierno, alegando una traición a los preceptos originarios de su proyecto político, y oponiéndose al manejo, según ellos, autoritario de las políticas públicas, este alejamiento de

los indígenas para con la propuesta Ciudadana, tuvo sus puntos de quiebre en ciertas circunstancias que se sucedieron a finales de la primera década del siglo XXI, entre las cuales vale mencionar: la marginación de la participación indígena en la discusión y aprobación de las leyes de agua y minería; la abolición del manejo autónomo de la educación intercultural bilingüe por parte de las organizaciones indígena y; la muerte durante las manifestaciones del 2009, de un profesor perteneciente a estas comunidades (Vallejo & Duhalde, ob. cit).

Una curiosa circunstancia política impulsó en este contexto, la acción de las mujeres indígenas para oponerse a las políticas gubernamentales que se pusieron en práctica a raíz de la XI Ronda petrolera en la Amazonía ecuatoriana y la megaminería. Y es que, en su afán por fracturar la unidad de los grupos indígenas que le hacían oposición, el gobierno de Correa logro alianzas con ciertos liderazgos individuales, la mayoría de ellos hombres, que intentaban convencer a sus comunidades, de las bondades del negocio minero y petrolero. Frente a esta situación, mujeres fraguadas en las luchas de sus comunidades, como como Gloria Ushiwa, desde la Asociación de Mujeres Ashiñwaka, encabezaron movimientos de protestas ante, lo que consideraban, era el regreso al extractivismo, tan dañino para la sobrevivencia de las comunidades y la sanidad de la Pachamama.

Lo cierto es que, a raíz de esta situación mujeres pertenecientes a las más diversas nacionalidades indígenas -shiwiar, kichwa, sapara, waorani y shuar- iniciaron un proceso de articulación organizativa que los llevó a confrontar, desde la posición de algunos líderes naturales de sus comunidades, hasta los personeros gubernamentales de Correa. En el transcurso de esa confrontación, estas mujeres, organizaron talleres de información sobre los efectos perjudiciales de la actividad extractiva y, paralelo a ello, promovieron asambleas y movilizaciones regionales y nacionales para manifestar su repudio a la gestión del correísmo en el tema petrolero y minero. “De la Asamblea Mujeres en Vigilia por la Vida realizada en Fátima en octubre de 2013, surgió un manifiesto dirigido al presidente Rafael Correa en el que cuestionaron las concesiones petroleras” (Vallejo & Duhalde, 2019, p. 38).

En una de sus más recientes acciones colectivas, ya en el contexto del nuevo gobierno, el de Lenin Moreno, que, de cualquier manera heredó y continuo con el manejo del negocio minero, asumiendo también una actitud de indiferencia ante la protesta de las mujeres indígenas, estas realizaron una movilización nacional, al término de la cual, consignaron ante la Secretaria de la Presidencia un documento la que titularon “Mandato de las Mujeres Amazónicas Defensoras de la Selva de las bases frente al Extractivismo”, cuyos puntos más importantes se encuentran resumidos en la figura 18.



*Figura 18. Ideas de partida del proyecto político CONAIE-2012
Fuente: elaboración propia, basado en Vallejo y Duhalde (2019)*

3.3. Presencia y activismo de las mujeres indígenas en el ámbito educativo

El tema educativo es uno de los más sensibles cuando se analiza el papel que han jugado las mujeres frente al desarrollo de la RC en el Ecuador, se trata de una realidad compleja e histórica que hereda un conjunto de paradojas como fruto de una transformación, ciertamente controversial, pues la educación en clave intercultural ha sido una importante apuesta de la mayoría de las comunidades indígenas, en el país. Por supuesto, los problemas que enfrentan las indígenas del Ecuador no son patrimonio exclusivo, en la mayoría de los países latinoamericanos, las demandas educativas de los pueblos originarios enfrentan obstáculos para ser asumidos y operacionalizados, de acuerdo con López y D'Alessandre (2011) entre esas dificultades se cuentan las siguientes:

- La dificultad de los Estados, en sus diferentes niveles, para implementar mecanismos de consulta y para incluir las voces y los saberes de los actores indígenas en la mejora de las políticas educativas
- Los conflictos entre los niveles del Estado para concretar la implementación de las políticas educativas, en otras palabras, hay problemas en el diálogo Estado Nacional-Estado regional-Estado local

- A través de la formulación de políticas públicas llegan a implementarse meras iniciativas que no logran constituirse en verdaderas directrices de Estado, con el debido seguimiento y control de las acciones implementadas.

No obstante, esta situación en el contexto general, en lo que atañe a la gestión educativa de un Estado plurinacional como es el Ecuador, las iniciativas gubernamentales han apuntalado, al menos durante los primeros años de la RC, diversas estrategias para el aseguramiento de una educación pertinente, territorial y, por supuesto bilingüe. Es lo coherente con un proyecto político que pretende ampliar las oportunidades y profundizar la equidad, cultural y de géneros en el país. Se entiende que parte de la situación de pobreza en la que se mantienen muchas familias indígenas, no es una falla sistémica, sino provocada por modelo de explotación de estos pueblos, en aras de mantener los procesos de dominación arraigados desde los mecanismos coloniales en los que llegó a perseguirse las iniciativas de lideresas indígenas como Dolores Cacuango.

En el nivel macro, la política del “Buen Vivir”, resulta de imposible concreción si el Estado ecuatoriano insiste, en una educación sectorizada que desvirtúa el carácter intercultural de su población, se impone entonces, la necesidad de construir modelos educativos cuya praxis, lejos de reproducir la lógica de los grupos dominantes, se asocie al pensamiento indígena con todo lo que eso significa: idiomas, imaginarios, tradiciones, sistemas de organización y justicia, propios; contruidos en el marco de desarrollo de sus derecho a la soberanía y la libre determinación.

Educación y Estado, la reproducción de las lógicas dominantes en Ecuador

El reclamo más inmediato que puede hacerse a la gestión educativa durante la RC, se encuentra en la permanencia de la figura estatal como el gran sensor de lo que puede o no enseñarse en el proceso educativo. En justicia, hay que decir, que la educación suele ser un mecanismo al servicio de la política, por lo que, mal podría, el correísmo adoptar políticas que alimentaran un pensamiento contestatario que, de a poco, se fue gestando en las comunidades indígenas que vieron traicionadas las promesas del tratamiento igualitario que difundió el discurso presidencial en sus primeras alocuciones y acciones. El indigenismo como categoría cultural e histórica, parece ser, nuevamente invisibilizada por un proyecto político que prometió todo lo contrario.

Las instituciones administradas por el Estado procuran la reproducción de la ideología, la cultura, los mundos de vida y la visión de las clases dominantes que controlan el

aparato estatal. Se puede suponer que, en circunstancias generales toda forma de concebir el mundo desarrollado por los sectores subalternos, por aquellos que Freire llamaba oprimidos, se halla oculta, negada, expulsada del discurso oficial que rige en dichas instituciones (Flores, 2016, p. 32).

Normalmente, esta es la situación histórica que se ha repetido una y otra vez, en la sucesión de gobiernos, cuyos proyectos políticos estuvieron enlazados y respaldados desde los principales centros del poder económico que, para su consolidación siempre necesitaron del funcionamiento de una educación, justamente “funcional”. Sin embargo, en el caso ecuatoriano, estas circunstancias, adversas para el sentir cultural de los pueblos originarios, ya había sido enfrentado con la fundación de las escuelas indígenas clandestinas que, desafiando el poder estatal, formaron, bajo patrones propios de su cosmogonía, los primeros maestros indígenas que fueron a establecer su propio sistema educativo a través, no de la enseñanza-aprendizaje, sino de un intercambio de saberes.

Ya en la última década del siglo pasado, y en las primeras del actual, la educación con rostro indígena se consolidó para establecer una formación intercultural y plurinacional, con docentes de sus propias comunidades que, manteniendo su dialogo con el Estado, pudieron desarrollar un modelo de mayor pertinencia social para sus comunidades. Un rasgo importante de este sistema es el carácter bilingüe de la formación, y el desarrollo de estrategias pedagógicas asociadas a las formas de organización indígenas y sus maneras de ver y verse en el mundo. Precisamente, esta última característica, puede ser señalada como un rasgo negativo, pues la educación indígena, no acierta a contradecir la sumisión de las mujeres indígenas frente al poder del patriarcado, tanto a lo interno de sus comunidades, como fuera de ellas.

Educación y mujeres indígenas, encuentros y desencuentros

Las demandas más fuertes de las organizaciones de mujeres indígenas, respecto a las políticas educativas del Ecuador, se refieren a la debilidad del modelo intercultural bilingüe que comenzó a ser administrado por el Estado, ya en el gobierno de Correa, siendo que en, un primer momento, se le había concedido a las Confederaciones indígenas mantener su orientación e incluso su administración. La situación de la educación de las indígenas del Ecuador, sigue siendo una preocupación que llega a rebasar el contexto nacional, siendo que la CEDAW, en el 2015, le hace un llamado al Estado ecuatoriano para que proceda a rectificar sus políticas educativas del sector y, asegurar el acceso de las mujeres y niñas indígenas y su derecho a recibir instrucción en sus propios idiomas (Melgar & Gil, 2017).

Parece ser un hecho suficientemente reconocido, por los diferentes actores involucrados en el tema de la educación indígena, que los cambios promovidos por la RC, llegaron a impactar positivamente algunas instancias del proceso educativo, otrora eminentemente castrador de la cultura de los pueblos originarios y, también coadyuvaron para la construcción de una educación más igualitaria desde la perspectiva de géneros, no obstante, el mismo gobierno llega a aceptar que los problemas se mantienen y que no ha podido ser contrarrestada la desigualdad que restringe la adecuada formación de los pueblos originarios frente a los que tradicionalmente han manejado los hilos del poder político y económico.

Con todo, las mujeres y, en general las comunidades indígenas del Ecuador, siguen reclamando una educación que les constituya en protagonistas, no solo de sus procesos particulares en el contexto de sus culturas, sino en el ámbito general de un Estado plurinacional. Concretamente, las demandas de los colectivos indígenas y, en especial de las mujeres, confluyen en una serie de rasgos que son indispensables para la edificación de una sociedad como la proyecta el discurso correísta, una educación que promueva o contenga entre otros aspectos: un reconocimiento a la diferenciación cultural y no una mera acomodación de la escuela tradicional; incorporación de los contenidos referentes al conocimiento indígena, en un dialogo sin ambages con el conocimiento universal; la revalorización de los vínculos entre la escuela y las comunidades indígenas; una reorganización del trabajo y la institución escolar a la luz de los valores y los imaginarios indígenas y; una acentuación de la perspectiva de géneros, inter y extracomunitariamente (González, 2011).

4. Interculturalidad, mujeres e indigenismo: prácticas y discursos políticos en el marco de la RC

Los avances de la RC en lo que respecta a la incorporación o renovación de nuevas categorías discursivas y, como consecuencias, diversificación de la praxis de las comunidades indígenas son hechos incontestables; desde sus inicios se activaron diferentes actores políticos que, bien sea, habían permanecido invisibilizados por la lógica dominante o, se habían refugiado en un perfil bajo durante las últimas décadas del siglo pasado, en medio de las sucesivas crisis que vivió el país. En el contexto de ese nuevo discurso y praxis política, la interculturalidad y el indigenismo como categorías inherentes a la dinámica social que define la acción de las mujeres se convierte en un lugar común; la diversidad que subyace en los mundos de vida de los indígenas ecuatorianos, emerge como una carta de presentación para el

impulso de las practicas interculturales que redefinen los proyectos colectivos de estos grupos, en sus relaciones internas y en sus vínculos con el Estado plurinacional recién nacido.

4.1. A propósito de la interculturalidad y las mujeres indígenas

La interculturalidad, viene a ser, en todo caso, una categoría teórica-discursiva compleja que no puede ser “des-cubierta” en toda su plenitud, de hecho, sus dimensiones solo se advierten cuando se le relaciona con los fenómenos de forma particular. Siendo así, en este apartado, se intenta una aproximación a sus relaciones con la RC, pero más concretamente con la manera en que se expresa este fenómeno en la dinámica reivindicativa de las indígenas que se han incorporado a la movilización social a través de las Confederaciones o, a partir del ejercicio individual de su liderazgo; de manera que, la interculturalidad va más allá de una cualidad que define la composición de los pueblos originarios y no originarios del Ecuador, para convertirse en un instrumento estratégico de las políticas de transformación democrática enarboladas por el correísmo, durante su gestión.

Aproximando el concepto

De forma sucinta la interculturalidad puede entenderse como un diálogo interactivo entre diferentes posiciones culturales que, en esa dialéctica se fortalecen, se diversifican y promueven nuevas cosmovisiones. Concebida así, permite la edificación de entornos interactivos en los que las relaciones sociales, entre grupos o géneros distintos se vinculan de forma igualitaria, respetuosa y armónica, basados, no en aquellos que les acerca sino en las características que les hace distintos. Es un concepto integrador que, adoptado por un proyecto político se bifurca contra los colonialismos y/o racismos vigentes por generaciones en los pueblos latinoamericanos (Andrade, 2009).

Conceptualmente, es un término polisémico que refiere a la búsqueda de la igualdad en aquellos procesos sociales que tienden a fomentar discriminación o imposición de prácticas culturales. Siguiendo la reflexión de Higuera y Castillo (2015), puede afirmarse que la interculturalidad se produce como derivación del debate en cuanto a lo que representa el fenómeno cultural y la búsqueda de coincidencias en la concepción de la cultura con todas las implicaciones terminológicas que ello representa. Lo intercultural aparece entonces como la búsqueda del equilibrio entre diversidad y unidad, se trata de generar procesos en los que la inclusión no sea meramente retórica, sino que impregne todos los procesos inherentes a la convivencia social, reconocida en la propia letra de la Constitución.

Interculturalidad y géneros

Si el respeto a la dimensión intercultural en las relaciones sociales es, asimismo, respetar la diferenciación con los otros, resulta evidente su cercanía con la perspectiva de géneros. Cuando desde el discurso de la RC, se arremete contra la discriminación racial o étnica, se incluye el rechazo a cualquier forma de pretendida subordinación por razones de sexo, géneros o credos, las mujeres indígenas son distintas entonces, no solo en contraste con los hombres de sus comunidades, sino en relación con las demás mujeres pertenecientes a otras nacionalidades. En esas diferencias se deben anclar los procesos facticos que conlleven a la transformación del modelo societal, si lo que se pretende es un cambio de fondo y no un simple revestimiento de las antiguas formas de dominación.

El camino: una educación multicultural con perspectiva de géneros. Las diferencias asumidas como talentos que, sumados, alimentan el fortalecimiento de las luchas contra las desigualdades sociales, es un elemento importante en un proceso educativo que permita a las mujeres indígenas, alcanzar el reconocimiento social y convertirse, a su vez, en actoras determinantes del cambio en un Estado plurinacional. Tanto en el caso ecuatoriano, como en otros de similares características, la educación intercultural representa una dinámica para la que deben ser formados, tanto los docentes como quienes ejercen la docencia, y es allí, en lo que radica el valor de la formación de maestros y maestras indígenas. En pocas palabras, una educación intercultural con enfoque de géneros supone, entre otras cosas: la incorporación de peculiaridades lingüísticas y religiosas de las minorías; desarrollar esquemas conceptuales inclusivos y, atender las necesidades educativas especiales producto de la diversidad cultural o de géneros.

Educar en clave intercultural y de géneros, tiene matices utópicos, pues la complejidad de su currículo, sus estrategias pedagógicas y los recursos de aprendizaje, aparecen sobredimensionados, tomando en cuenta la trayectoria de la educación ecuatoriana y el rezago teórico-práctico que se presenta en el modelo de educación establecido. A pesar de esa circunstancia, no hay otro camino que pueda emprenderse para concretar una redemocratización de las relaciones sociales, al estilo que se pretende desde el discurso ciudadano y la neoinstitucionalidad que emerge de la aplicación inicial, de la Constitución de 2008. En breve, una educación intercultural con perspectiva de géneros debe incluir una serie de ideas fuerza que podrían resumirse de la siguiente manera:

- La educación es asumida como un proceso eminentemente social, cuyo principal objetivo es la realización humanística.
- La globalización como proyecto civilizacional omniabarcante, no es una obligación, pero tampoco una simple estética discursiva que pueda obviarse, por el contrario, se requiere su abordaje crítico y aprovechamiento en aquellos aspectos que también le hacen intercultural.
- La equidad y la igualdad social solo adquieren contenido sustantivo, cuando son el resultado de la formación educativa, bajo un modelo intercultural y de inclusión
- El consenso social alrededor de un determinado modelo sociopolítico, solo se construye desde el intercambio de saberes interculturales y el respeto a la otredad que debe regular las relaciones entre los ciudadanos, especialmente entre hombres y mujeres.

Retos de la Interculturalidad para la reivindicación de las indígenas en la RC

Aunque uno de los principales desafíos de la interculturalidad es la construcción de un modelo educativo que permita una verdadera igualdad en la diversidad, cuando se le evalúa teniendo como baremo las necesidades de las mujeres indígenas, surgen otros desafíos que no dejan de ser importantes y que también determinaron el desencanto de los pueblos originarios del Ecuador al sopesar los logros de la RC. La interpelación de las indígenas ecuatorianas se afianza en las falencias de una interculturalidad manejada, en el mejor de los casos, como un mero voluntarismo o, lista de buenas intenciones, pero que, en la práctica, pudo haber terminado por trivializar la dualidad complementaria, planteada por la CONAIE y, en consecuencia, hacer de las diferencias culturales, una suerte de ornamento para la difusión turística, más que una fuente de las políticas públicas para la equidad e igualdad social.

Es abundante la literatura que da cuenta de esta claudicación de la propuesta intercultural ante el avasallante poder que aún mantienen las transnacionales económicas y la hegemonía de los paradigmas universalizantes en el campo político, en tal sentido, cuando se trata de analizar esa situación en un caso concreto como la RC en el Ecuador y la realidad de las mujeres indígenas; los aspectos tomados son solamente referenciales y obedecen a algunas de esas fuentes que se han dado a la tarea de estudiar aquel caso. Para Aguilar y Buraschi (2012), la interculturalidad y su gestión sociopolítica es complicada porque su naturaleza no es coyuntural sino estructural, por lo que ningún país, por más normativas que establezca garantizando la plurinacionalidad, como el caso de Ecuador, puede ser exitoso, sin que sus iniciativas se inscriban en una transformación global, que involucre a múltiples naciones.

Preocupa, en todo caso, el fracaso de la interculturalidad en cuanto a sus alcances para la construcción de políticas públicas que reivindiquen la igualdad de géneros y el desarrollo de una ciudadanía plena, en un Estado declarado constitucionalmente como plurinacional. Y es que, la discusión por la igualdad de géneros, si bien tiene ya un largo recorrido, como se mostró en el capítulo I, de esta tesis, es conveniente recordar que ese debate surge, básicamente, impulsado por un feminismo urbano que, muy pocas veces expuso como argumentos para sus luchas, la situación que viven las mujeres indígenas o pertenecientes a otras minorías étnicas. Esta circunstancia es a la que se refiere, en sus palabras, Andrade, cuando habla de los errores que han cometido los movimientos que promueven la igualdad de géneros.

“uno de los errores fue el no incluir las particularidades de la diversidad de mujeres que existimos, si bien la sociedad es otra, también las mujeres constituimos pueblos y nacionalidades, porque somos diversas cultural, ideológica y políticamente, urbano-rural diferencialmente, entonces me parece que existieron varios errores por el lado de la mujer indígena, por falta de acceso a la educación, información y capacitación” (2009, p.300).

En definitiva, más allá de las lamentaciones por aquello que se pudo hacer y no se hizo, esta autora plantea un conjunto de elementos que pueden tomarse como avances o, en su defecto como oportunidades que están allí, esperando ser potenciadas para el apuntalamiento de políticas interculturales con enfoque de géneros, orientadas con mayor precisión hacia las cosmovisiones de las mujeres indígenas, en el entendido que esa reorientación puede ser parte del camino que aún falta por recorrer. Más concretamente, algunos de los avances/oportunidades que hay que tener presente en el marco de la interculturalidad y la vida de las indígenas, se encuentran:

- La incorporación de las mujeres indígenas, en los consejos de igualdad e instituciones gubernamentales encargadas de diseñar las políticas públicas respectivas. Parte de esto se ha logrado a medias, por lo que se trata de retomarlo y fortalecerlo.
- Retomar y renovar el sistema de indicadores sociales acerca de la situación nacional de las mujeres indígenas, pues solo así es posible, por una parte, fortalecer la protección de los derechos de estas comunidades y, por el otro, contar con la información necesaria para ser asertivos al momento de formular políticas públicas interculturales.
- En aspectos puntuales como el resguardo de la salud sexual reproductiva, es preciso involucrar a los gobiernos locales, incluyendo por supuesto, las administraciones indígenas, vigilando a su vez, la correcta aplicación de las disposiciones legales al respecto. Esto

además se puede convertir un mecanismo de fortalecimiento de la autonomía y responsabilidad de las mujeres, en las decisiones sobre su salud y su sexualidad.

- Fortalecer el papel que cumplen las autoridades comunitarias de los pueblos y nacionalidades indígenas, más allá de la simple administración de justicia, que se garantice desde ellos la participación plena de las mujeres en la toma de decisiones y en la defensa de sus derechos colectivos.

4.2. El indigenismo como reivindicación histórica de las mujeres ecuatorianas en el contexto de la RC

El indigenismo no es una categoría discursiva nueva en el contexto latinoamericano, de hecho, las luchas ya reseñadas, de las mujeres indígenas del Ecuador, enmarcadas y acompañadas por movilizaciones campesinas desde la década de 1960, hablan de su vieja presencia en la escena política del país, aunque haya tardado bastante en convertirse en un lugar común, hablar de indigenismo como lectura de la capacidad organizativa de las comunidades indígenas; tuvo mayor resonancia el tema del “campesinado”, como referencia de los actores contestatarios que, cada cierto tiempo emprendieron movimientos de carácter social que interpelaron las clases dominantes.

A inicios del año 2000, grandes movilizaciones con protagonismo indígena lograron en el Ecuador, la remoción del Presidente Jamil Mahuad, se vivió en ese contexto, una fuerte presencia popular de la CONAIE, que se movilizaron en las calles del país, principalmente en la capital, en donde avanzaron hacia el Congreso Nacional, hecho que fue decisivo para que las Fuerzas Armadas, exigieran la renuncia de Mahuad, sucediéndose el nombramiento de un triunvirato en el cual hubo representación indígena, aunque no duro mucho tiempo, fue una demostración de capacidad de movilización y musculo político por parte de las organizaciones indígenas.

El indigenismo como construcción discursiva y praxis social

Considerando la poca claridad de su origen y su utilización para nombrar, tanto corrientes teóricas como posiciones sociales y políticas, es necesario partir de alguna conceptualización que facilite el establecimiento de las posibles relaciones entre indigenismo, mujeres y RC. En lenguaje foucaultiano, las palabras y las cosas están vinculadas como creador y criatura, así que, las dimensiones conceptuales desde donde se “mira” a los indígenas, repercute en su

tratamiento social y en las políticas que es el Estado pueda formular para su protección y bienestar.

Incluso, puede pensarse, en esa misma orientación, que las palabras llegan a condicionar la realidad, no solo porque las crean, que puede darse el caso, sino porque condicionan las características fácticas de las cosas que pertenecen a esa realidad. Esto significa que, a las circunstancias reales de subordinación a la que han sido sometidos los pueblos originarios del Ecuador, y, particularmente las mujeres indígenas, se debe sumar, el sometimiento discursivo en el que se les ha tenido, que oculta o matiza la explotación, pues en la medida que se impide hablar de ella, los explotadores se fortalecen. El indigenismo, como expresión conceptual, no se mueve en un mundo neutro, sus implicaciones van más allá de lo abstracto, y por lo tanto, no es igual considerarlo un dialogo entre pueblos, que una oportunidad para que la igualdad social entre esos pueblos se construya, sin menosprecio de uno de ellos: los indígenas.

Conceptualizando el indigenismo. Es probable que una de las tareas más importantes del investigador que analiza el mundo indígena, bien sea desde adentro o desde afuera, sea la desmitificación del término. Ayuda en ese esfuerzo, una documentación acerca de lo que se dice, lo que se piensa y como se percibe, el “ser indígena”. Los escenarios sociales que rodean a estas personas, en cualquier parte del mundo donde se les ubique, tienen esa cualidad especial de aquello que ha estado allí tanto tiempo, que anteceden a cualquier nomenclatura moderna. En algún momento se llegó a o pensar, incluso a teorizar acerca del momento en el que desaparecerían como pueblos, aludiendo al irremediable avance de la “civilización” que terminaría por eliminarlos o absorberlos, pero la realidad muestra que no ocurrió así, por el contrario, ya sea en Nueva Zelanda, o en el Ecuador, las comunidades indígenas se mantienen y fortalecen.

La indigeneidad¹ es una condición social renovada, transformada y activada más que nunca en estas primeras décadas del siglo XXI, en el caso particular de Latinoamérica, ha sido repotenciada a partir de la llegada al poder de ciertos liderazgos provenientes de su seno o, cercanos, por su discurso y acción, a las demandas milenarias que les mantienen activados como sujetos históricos, tal es el caso de Correa en el Ecuador. Pero ¿qué se entiende por

¹ Este concepto solo tiene un carácter referencial aquí y se usa en función de ampliar el foco del análisis del indigenismo. Está suscrito por algunos autores como De la Cadena y Starn, para quienes, esta categoría tiene implicaciones discursivas importantes ya que revierte la visión simplista de lo indígena como proteccionismo nacionalista de algunos países, especialmente en Latinoamérica. Indigeneidad, tal como se explica en la siguiente página de este capítulo, es un enunciado discursivo dialéctico en el que lo indígena está representado, tanto por la cultura de los pueblos originarios como por aquella que se le opone o contradice.

indigenismo?; es un concepto sucedáneo al de indigeneidad, son derivaciones de la caracterización de una misma realidad histórica o son términos relacionados por una formación discursiva que les exhibe como enunciados, solo perceptibles en la realidad. Al respecto hay algunas consideraciones teóricas realizadas por De la Cadena y Starn (De la Cadena & Starn, ob. cit), que pueden resultar interesantes y esclarecedoras.

Estas autoras plantean que el indigenismo refiere a la condición de pertenecer a los pueblos indígenas. Esto implica que su manifestación, solo se percibe cuando se convive con ellos y es propia de aquellos, no puede ser adoptada por personas que no han nacido en estas comunidades, por más que quieran “experimentar el indigenismo”, como lo haría un antropólogo que los estudia, o un político comprometido con su causa. Obviamente, como corriente intelectual, en América Latina, el indigenismo posee una historia dilatada, que se puede ubicar al inicio del siglo XX, con aportes inoportunos en México y Perú, donde se le tiene como una reflexión acerca de la cultura indígena y sus perspectivas sociales. Pero aquí no se pretende profundizar en esa orientación, sino dejarlo planteado, en el sentido más reciente, como un sentido de pertenencia, que no es transferible.

Esta idea de indigenismo, contradice la simple manifestación ideológica que, habiendo colocado al indígena en el centro del debate, pueda significar su simple utilización retórica, como ha ocurrido en muchas ocasiones con políticos que han asumido un “indigenismo cosmético”, para afincar sus propuestas y ganar adeptos, lo que lleva a esta noción, al mismo nivel de otras etiquetas como las de “socialismo”, “nacionalismo”, entre otros. Se apuesta entonces por un indigenismo con contenido, pleno de significaciones que solo puede obtener cuando se le construye desde el propio mundo experiencial del indígena. En ese sentir, las mujeres indígenas tienen más oportunidades de ser oídas y, como no, respetadas en sus demandas, sin olvidar que, el espacio para lograr sus reivindicaciones trasciende lo indígena y se edifica en un diálogo constante con aquellos, que, no siendo indígenas, manifiestan cercanía con la indigeneidad.

En ese marco interpretativo, algunos pueden argumentar que la RC, instrumentalizó el indigenismo, en el sentido ilustrado del término, es decir, lo vacío de contenido cultural y lo convirtió en un enunciado retórico que a pesar de granjear beneficios jurídicos para los indígenas ecuatorianos, finalizó como todos los proyectos de asimilación intencionada de la terminología, un final como puede avistarse, en las posiciones de Correa, en su último periodo; las cuales fracturaron definitivamente el apoyo de la mayoría indígena a su prosecución en el poder. Para las mujeres indígenas, esta concepción ornamental y porosa del indigenismo es

más dañina, pues le impide incluso, desarrollar empatía con los logros del feminismo tradicional, al quedar atrapadas en una especie de limbo cultural, difícil de superar en la complejidad de la sociedad global actual.

¿Y la indigeneidad? Tal como se reseñaba en una nota al pie anterior, en ese contexto de reconceptualizaciones, la indigeneidad viene a ser entonces, la capacidad que muestran, las personas no indígenas, para identificarse con sus causas o, también puede entendersele, como la iniciativa de algunos intelectuales provenientes de las comunidades indígenas, para teorizar sobre sus condiciones y proponer caminos para su reconocimiento pleno, cultural y jurídicamente hablando. Esto involucra tanto el discurso como la praxis, pero se concreta con mayor plenitud en esta última porque la indigeneidad se alimenta con especial intensidad de lo no indígena, es la otredad lo que la fortalece y por eso trasciende su propio origen, que se encuentra, obviamente, en el ser del indígena.

Lo que quiere decir es que las prácticas culturales, las instituciones y la política indígenas *se hacen indígenas* en articulación con lo que no se considera indígena en la formación social particular en la que existen. La indigenidad, en otras palabras, es a la vez históricamente contingente e integra lo no indígena (De la Cadena & Starn, ob. cit., p. 196).

De acuerdo a esta reflexión, la indigeneidad, se comprende en la convivencia con lo indígena y sus opuestos, se realiza en la propia historicidad de estas comunidades pero se construye en las fronteras con las “otras historias civilizacionales”, que le dan sentido y le renuevan a cuanta de sus diferencias. Teóricamente la indigeneidad tiene un valor científico para percibir lo simbólicamente representativo del indigenismo y, las reconfiguraciones prácticas de esa simbología, en una sociedad cada vez con menos fronteras culturales y con un “afán” histórico por eliminar los particularismos.

En suma, lo que se deriva de estas ideas, es la ampliación de las formaciones discursivas que circundan la construcción social del indigenismo que limita de forma recursiva con la indigeneidad, un término que para ser justos, tiene una dilatada producción intelectual de fondo, cuya caracterización no es parte de la tarea intelectual planteada en este apartado de esta investigación. Sin embargo, también es necesario remitir esa discusión porque podría entenderse que se está ignorando sin razón, de lo que se trata, en cualquier caso, es de pincelar esas ramificaciones terminológicas porque sus consecuencias suelen concretarse en las situaciones experienciales de las comunidades indígenas, ampliamente mencionadas a lo largo de este texto.

Finalmente, determinar el lugar de las mujeres indígenas, en ese debate que mezcla el indigenismo, la indigeneidad y la RC en Ecuador, continua siendo algo confuso, las aparentes reivindicaciones alcanzadas en las leyes y que apuntan, como ya se ha dicho, a una igualdad formal, parecen sustentarse en el originario concepto maniqueo o, intencionalmente ambiguo de indigenismo, no obstante, es mucho el camino recorrido hacia una mayor presencia de lo indígena en la escena pública del país, lo que aunado a la madurez que ha alcanzado el movimiento de mujeres indígenas, diverso y multiforme, fortalece las potencialidades de su praxis social y apuntala, de manera muy importante su capacidad para la organización y la influencia en las políticas públicas que seon, en definitiva, el fibra que conecta la realidad con el discurso, tarea por demás fundamental, para develar las ilusiones que, frecuentemente se les dibuja a los pueblos indígenas, desde los centros de alienación política y dominación.

Capítulo V

CONCLUSIONES

Una visión integradora del protagonismo sociopolítico de las mujeres en Ecuador durante la RC desde todas las perspectivas teóricas, incluyendo el trabajo social crítico

Desde el inicio de esta Tesis Doctoral, se ha intentado ir perfilando, construyendo y sustentando, una perspectiva teórica crítica integradora que abarca en el Trabajo Social y que recoge las categorías discursivas más relevantes en cada una de las orientaciones que se han ido presentando, desde la relación entre Mujeres, Géneros y Política en América Latina, hasta el análisis del Protagonismo Sociopolítico de las Mujeres Indígenas en la Revolución Ciudadana. En ese proceso de construcción teórica, la visión crítica se fortalece en la consideración de los elementos que permitieron la Reconceptualización del Trabajo Social en América Latina, que mucho tiene que ver con los procesos de transformación de la sociedad ecuatoriana y la inclusión sociopolítica de sus mujeres.

1. En cuanto a la Reconceptualización del Trabajo Social y el proceso de inclusión sociopolítica de las Mujeres.

La historia del trabajo social en el mundo está estrechamente vinculada con el carácter gregario del ser humano y la necesidad de cooperación y solidaridad que siempre surge en ese proceso de aproximación al otro, se relaciona con las luchas por la emancipación social y política de las mujeres. Sin duda, las circunstancias sociales que crean las condiciones para que esas necesidades sean visibilizadas por los poderes establecidos, se dan en Europa, como consecuencia de grandes transformaciones civilizacionales. En lo económico con la Revolución Industrial; en lo político, con la Revolución Francesa y; en lo socio-jurídico, con la proclamación Universal de los Derechos Humanos. De los cambios que generaron esos tres grandes procesos históricos, surgió la problematización de la vida social y muchas iniciativas de liberación en todo el orbe (Aranciaga , Oliva, & Perroni, 2010).

Ya entrado el siglo XX, América Latina, se convierte en uno de los escenarios más convenientes para un Trabajo Social que permita contrarrestar las consecuencias de la implementación del sistema capitalista, productor de pobreza, desplazamiento, desempleo y desigualdad social en general. Tal como se plantea en el Capítulo I de esta investigación, a principios de aquel siglo, tanto la iglesia como el Estado, encabezan las iniciativas de servicio

social entre cuyos principales “beneficiarias”, se encontraban las mujeres, por lo que puede decirse que el Trabajo Social, tiene como uno de sus motores motivacionales, precisamente la necesidad de inclusión femenina en los procesos de desarrollo.

Siendo así, desde una postura intelectual propia, se considera que la concepción original del Trabajo Social en el subcontinente está relacionada directamente con la hegemonía del sistema capitalista después de la Segunda Guerra Mundial y la implementación del Estado de Bienestar, que permitió, atender las necesidades de los más pobres, casi todas como resultado de los efectos del capitalismo periférico y dependiente que se consolidó en estos países. Las políticas del Estado de Bienestar tenían un doble propósito: por un lado, se atendían los problemas sociales provocados por el mismo sistema, para evitar presión sobre él y, por otra parte, se mantenía el crecimiento del gran capital, garantizando la reproducción en paz de la mano de obra asalariada. Parte de esta situación permea hasta las condiciones de subordinación social y política en las que permanecen las mujeres hasta bien avanzado el siglo XX.

1.1. La transformación teórico-práctica del Trabajo Social y el protagonismo sociopolítico de las mujeres

Existe cierto consenso histórico e intelectual en situar el movimiento transformador o de Reconceptualización del Trabajo Social, entre las décadas de 1950 y la de 1970. Si bien el sistema capitalista había logrado superar con éxito las crisis periódicas que se le presentan entre 1929 y 1950, a finales de este último año, suben de tono las protestas sociales en América Latina, e incluso en el mismo Estados Unidos y, aunque allí la visibilidad de las mujeres es muy tenue, ya comienzan a articularse algunos enfoques feministas que reciben su influencia del continente europeo. El triunfo de la Revolución Cubana, y la situación política de Chile, por ejemplo, comenzaron a mostrar que otro sistema era posible o, en su defecto que, a través de la lucha y la crítica sostenida, se podían lograr cambios de sentido en los modelos dominantes del capitalismo y, paralelo a ello, de la cultura patriarcal.

Desde la perspectiva teórico-crítica del Trabajo Social, la Reconceptualización promueve una profunda revisión de sus fundamentos filosóficos, metodológicos y procedimentales. Se aboga por una redefinición de la lucha contra la pobreza de las grandes mayorías latinoamericanas, una lucha que supere el asistencialismo estatal y que construya sus propias teorías y métodos, en convivencia estrecha con la realidad social de los países a los que se pretende ayudar. Se trata de atender, no coyunturalmente, sino desde el punto de vista estructural, una crisis que repercute en la escasez del empleo formal, especialmente el de las mujeres; la poca conexión

de la población con las actividades productivas y, la persistencia de situaciones de injusticia social (Estrada, 2019)

Entre los rasgos que definen el movimiento de Reconceptualización del Trabajo social latinoamericano, se encuentra, el rescate de la capacidad crítica para situarse en el lugar de los dominados y no verlos como clientes o necesitados de auxilio, así como superar la visión burocratizada del servicio social para lograr una empatía subjetiva con los pobres. De manera que, al transformarse el ejercicio profesional propio del trabajador social, se le está acercando a esas luchas que, en aquel contexto, emprenden grandes grupos poblacionales, entre los cuales destacan las mujeres, que demandan no ser vistos como “objetos de estudio”, sino como personas que sufren las consecuencias de circunstancias sociales propias de un modelo de dominación clasista y patriarcal. Esas mismas condiciones de producción intelectual son las que acercan al trabajo social y a los movimientos feministas, al pensamiento marxista y la dialéctica como método de transformación social.

Otra característica de esta corriente es su pluralidad o heterogeneidad, pues uno de los principales llamamientos de sus pioneros, es la necesidad de mantener la autonomía de pensamiento y así rechazan los automatismos mentales y empíricos que llegó a crear el Trabajo Social Tradicional. Reconceptualizar se convierte en sinónimo de repensar, tanto las teorías como las prácticas profesionales; su afinidad originaria con la Revolución Cubana viene dada, justamente por ese estilo contestatario y de rechazo a la autoridad de las ciencias como única fuente de la verdad.

Como señala Repetti (2011), las respuestas frente a la crisis social que provoca el sistema capitalista, no solo la tienen los expertos, muchos de ellos plenos de fórmulas europeas y ajenas a la realidad social latinoamericana. Desde la perspectiva teórica del Trabajo Social Crítico, las organizaciones políticas, por ejemplo, deben auscultar e inspirarse en la sabiduría popular que nace del examen del sentir autóctono de los pueblos, allí encontraran las razones más importantes para dar a las mujeres el protagonismo sociopolítico que por derecho se han ganado.

En ese sentido, los casos presentados de países como México, Perú, Argentina y, por supuesto, Ecuador, muestran que la dominación patriarcal sobre las mujeres no sólo se fundamenta en procesos de subordinación social, con expresiones empíricas concretas, sino que se relacionan con estructuras de poder, discursivamente reproducidas, incluso desde las profesiones que, como es el caso del Trabajo Social, tienen una vocación eminentemente popular. Por tanto, la emergencia del movimiento transformador a lo interno de esta profesión

busca reivindicar su praxis y su teoría emancipadora. De hecho, la Reconceptualización surgió en clara oposición a la perspectiva Asistencialista del Trabajo Social, tratando de superar esa visión de la emergencia social, en la que los trabajadores acudían en auxilio de los más necesitados en aquellos casos de extrema pobreza y cuando la ayuda era casi un recurso de último momento. Es cierto que, con el tiempo, la concepción de asistencialismo estatal se consolidó bajo la figura de políticas sociales del Estado, pero mantuvo la reproducción de las fuerzas sociales dominantes, como el patriarcalismo y, la idea de un Estado que ayuda a los más pobres, cuando en realidad solo preserva su control ideológico y fáctico.

1.2. El Trabajo Social, el enfoque de géneros y la inclusión sociopolítica de las mujeres

El proceso de transformación del Trabajo Social también tiene implicaciones para la concepción de géneros como instrumento dinamizador de la inclusión sociopolítica de las mujeres. Y es que, la teoría revolucionaria que toma cuerpo entre los representantes de la sociología latinoamericana y sus propuestas de transformación, es parte del marco histórico en el que se gesta el movimiento del Trabajo Social Crítico. Es preciso que los esfuerzos, desde la teoría y la praxis, apunten a la superación definitiva de la dependencia, por lo que la lucha es, en realidad, una gesta libertaria que abreva su acción en corrientes teóricas de profunda crítica al estado de cosas, como la filosofía de la liberación o la Teología latinoamericana que toma fuerza a raíz de la Conferencia Episcopal en 1968, en Medellín (Aranciaga , Oliva, & Perroni, 2010, ob. cit.).

La reflexión generada por los procesos revolucionarios y la sociología del subcontinente no solo exige un cambio paradigmático en el orden de la realidad concreta que viven números grupos sociales como las mujeres, sino que plantea un escenario de reconversión de las ideas más protegidas de la modernidad, tal es el caso de la Justicia, la Libertad y la Igualdad Social. Cuestionar estas premisas iluministas, supone la necesidad de construir nuevos abrevaderos epistemológicos y filosóficos, se trata, nada más y nada menos, que de la emergencia de un nuevo paradigma que, entre otros aspectos principistas, debe proponerse:

Una nueva concepción del ser humano. Se parte de la convicción según la cual, el proyecto de la modernidad, bajo el cual se ampara la lógica de la cultura patriarcal, ha permitido la reproducción de los mecanismos de dominación, fortaleciendo un mundo jerárquico en el que algunos son modernos y desarrollados y otros subdesarrollados. Esa concepción objetivista del ser humano, que le convierte en un número o una estadística más de los planes desarrollistas debe ser sustituida por la de un sujeto históricamente determinado que mantiene sus

aspiraciones libertarias y el libre albedrío para decidir sobre su presente y su futuro. (Bettina, 2005)

Un puesto de observación distinto para las ciencias y los científicos sociales latinoamericanos. Cuestionar la modernidad, implica el cuestionamiento de sus criaturas, una de ellas, la razón científica, que, en el caso latinoamericano, está del lado de la racionalización del Trabajo Social, burocratizando su praxis y recreando constantemente, esa imagen de un trabajador que no va más allá de la asistencia remedial del necesitado. Una nueva ciencia, debe promover el pensamiento crítico y la construcción de modelos de desarrollo propios, en los que, lo endógeno se convierta en un valor agregado para una economía propia, y no en materia prima para el desarrollo de los centros capitalistas. A esto se suma, la inclusión de un nuevo sujeto histórico que desvirtué los prejuicios sociales que mantienen a las mujeres, alejadas del imaginario social en los que se fundamenta el poder político.

Una Perspectiva Filosófica Crítica Contrahegemónica. En palabras de Arriagada (2017), la transformación teórico-práctica del Trabajo Social en Latinoamérica, requiere un acto de rebeldía del pensamiento, que asuma su autenticidad, afirmándose en un discurso ético-político, cuya concreción sea una praxis liberadora. En esa praxis, la necesidad de concretar la igualdad de géneros, se muestra como una constante pues, no puede haber liberación real, cuando el poder político se encuentra vedado para ciertos sectores de la población, sólo por su identidad sexual. En otras palabras, la acción de los profesionales en el campo del Trabajo Social, tiene que expresarse en nuevas formas de organización comunitaria que interpelen, desde el sentir de las clases más vulneradas en sus derechos, al poder hegemónico de los dominadores históricos. Hay que develar los nudos más invisibles de la dominación, esto es, la alienación de aquellos grupos sociales, quienes, en su dinámica cotidiana, deben reflejar esa concepción crítica conducente a posturas emancipadoras.

El mismo Arriagada, subraya la necesidad de producir conocimiento desde las particularidades sociohistóricas y epistémicas de Latinoamérica, pero con el agregado de edificar sus propios cimientos cognitivos, en claro desafío a las formas eurocéntricas dominantes. De allí, se promueve una referencia filosófica que no se queda en el nivel abstracto, sino que anima las relaciones sociales, más allá de la reproducción del sistema de dominación cualquiera sea su adjetivo: cultural, político o patriarcal. Es preciso entonces, la confluencia de una conciencia crítica que debe guiar las luchas de los pueblos históricamente dominados, para

alcanzar cada vez mayor grado de liberación y autonomía y, sobre todo, capacidad para la autodeterminación.

2. En cuanto a las transformaciones históricas y organizacionales de las mujeres ecuatorianas

El devenir histórico que se ilustra con especial énfasis en el desarrollo del Capítulo II de esta Tesis, da cuenta de un proceso tan extenso como complejo que condujo la lenta incorporación de las mujeres ecuatorianas a la vida de las organizaciones políticas en el país. Así como en el contexto internacional, la primera década del siglo XX, conllevó cambios significativos desde el punto de vista formal-jurídico en el tratamiento de la igualdad de géneros, en el caso ecuatoriano, en esos años se realizaron ciertas transformaciones, tanto a lo interno de los partidos políticos, como de las representaciones sociales acerca del papel de las organizaciones de mujeres en la consolidación de una sociedad más justa y democrática.

El proceso en cuestión no es lineal ni sistemático, por el contrario, es una historia llena de avances y retrocesos, de recovecos, propios de las contradicciones sociales en las que emergen las luchas, en principio de las organizaciones de mujeres y, más tarde de los movimientos feministas que se hicieron con la bandera de las reivindicaciones sociales para ese sector de la sociedad históricamente subordinado al poder patriarcal. En este ejercicio de síntesis teórica, guiado por la perspectiva integradora de la investigadora y, apoyado en el método hermenéutico se intenta entonces, dibujar algunas ideas conclusivas que permitan construir una imagen más concreta de este tema. Se trata de subsumir las principales tendencias, sistemas o perspectivas desde las cuales se ha analizado e interpretado el tema de la participación e integración de las mujeres ecuatorianas en el mundo de la política hasta llegar a la RC.

Fiel a esta orientación, planteada desde la misma concepción de la idea de investigación para esta Tesis, en lo que respecta a las transformaciones históricas y organizacionales de las mujeres ecuatorianas en su proceso de incorporación al ámbito político, no se pretendió hacer un registro de prácticas o herramientas organizacionales, emprendidas y usadas por las mujeres para incorporarse de manera exitosa y determinante en el espacio político, sino, generar, a partir de la investigación documental y el análisis de discurso, un conjunto de matrices y categorías teóricas como resultado de la hermenéutica aplicada a las diferentes perspectivas expuestas, tanto desde los teóricos del tema analizados, como desde los enunciados discursivos de las organizaciones de mujeres y pro-mujeres.

2.1. Una lectura integradora del siglo XX y la situación de las mujeres ecuatorianas frente a la educación, la familia y el trabajo

La aproximación hermenéutica a los textos que “informan” o “deforman” las ideas que se han gestado para entender las discontinuidades históricas del protagonismo sociopolítico de las mujeres en el contexto de la Revolución Ciudadana, se ha realizado siguiendo, en parte, los principios esgrimidos por Heidegger (2000), que refieren a la construcción de las evidencias de una realidad determinada socio-históricamente, mediante la aplicación de un análisis comprensivo, usado como instrumento para filtrar las categorías discursivas presentes en los textos e intertextos, esto es, lo se dice y lo que se deja de decir, en las diferentes fuentes puestas bajo observación. Entiéndase que, al hablar de “fuentes”, se echa mano a la concepción de la Arqueología del Saber foucaultiana, que las presenta como “monumentos”, a los que hay que auscultar históricamente.

Así cada una de las organizaciones o autores “leídos” a propósito del tema que da su título al Capítulo II de este trabajo, presenta un conjunto de enunciados discursivos a los que no se interpela en cuanto a su veracidad o falsedad, solo se les presenta en su contexto y se les interroga al trasluz de los acontecimientos concretos que les circundan, dejando así material suficiente para que la autora pueda construir, hermenéuticamente su propia visión integradora entre “las palabras y las cosas”. Siendo así, las tendencias que se derivan del análisis presentan a unas mujeres que, poco a poco, se van posicionando, desde sus propios lugares de observación, para cuestionar la subordinación cultural, desde los inicios del siglo XX. Se rebelan como sujetos históricos que precisan un protagonismo educativo, económico y político, frente a una realidad que les niega ese derecho, bien sea por atavismos culturales o por los juegos de poder propios de la vida política del Ecuador.

El proceso que se muestra en ese espacio textual dibuja una línea que asciende, desciende y se bifurca, según el ámbito en el que se sitúa el análisis. En las primeras décadas del siglo XX, las mujeres ecuatorianas están subyugadas por ciertas Tecnologías de Poder, asociadas al discurso patriarcal que les impide ser protagonistas en el quehacer político del país. Eso se puede observar en la educación que, sin embargo, de la mano de cierto impulso soterrado del liberalismo, comienza a transpirar una imagen de insurgencia femenina, que irrumpe contra la división entre lo público y lo privado. Educar a las mujeres comienza a ser una necesidad para la construcción de un espacio público más coherente con el protagonismo que las mujeres tienen en el ámbito privado. Es completamente disonante, que la educación familiar este, casi

exclusivamente en mano de las mujeres y que, por el contrario, para ellas se encuentre vedada la oportunidad de la educación formal.

En ese contexto referenciado, el sujeto histórico “mujeres ecuatorianas”, adquiere una dimensión concreta en la figura de Matilde Hidalgo, primera mujer en recibirse como médico y en ejercer el sufragio. No obstante, lo que se detecta como una constante histórica es que, las mujeres estuviesen limitadas en su acceso educativo, para aquellas áreas del saber “feminizadas”, reforzándose así, la imagen de un poder disciplinario, con rostro de género que considera la vocación como un tema de naturaleza biológica. Mujeres y hombres se distancian en cuanto a las habilidades naturales que les son proveídas, lo que representa una forma de estereotipar para dominar.

Esa representación social que utiliza la educación como una herramienta discursiva para sublimar o parcelar los procesos formativos a los que pueden acceder las mujeres ecuatorianas, se mantienen hasta finales del siglo XX, con las mutaciones propias de una sociedad compleja que es impactada por las olas de transformación política. Manteniéndose, sin embargo, la formación discursiva manejada desde el poder político-patriarcal que perfecciona la dominación haciendo creer que cede espacios. De hecho, la sublimación del poder es coadyuvada desde los espacios del dominado, cumpliéndose la máxima foucaultiana de la convivencia del poder y la resistencia, en la que, quienes se resisten, suelen contribuir con su propia sumisión.

La relación entre la dinámica social de las mujeres y sus posibilidades de acceder a la educación en las mismas condiciones que sus pares masculinos, se convierte a finales del siglo pasado en una expresión de las plasticidades que se justifican desde los centros de poder, para que cambien algunas cosas sin que no cambie nada. Es, en todo caso, una de las estrategias del poder, para dar cuenta de una “magnanimidad” que solo se presenta como el ropaje que cubre la permanencia de la cultura patriarcal. Políticamente, se promueven ciertas acciones gubernamentales, sobre todo a finales del siglo XX, para que la educación se muestre como un espacio democrático y plural, lográndose, ciertamente, importantes avances en aspectos como la inclusión de las mujeres en profesiones, tradicionalmente asignadas o identificadas con los hombres. Como aporte de esta investigación a partir de la figura 19, se comienzan a mostrar a manera de Epílogos Hermenéuticos, la confluencia, en una sola imagen, de las recurrencias y contradicciones encontradas en los diferentes discursos, alrededor de los temas principales.

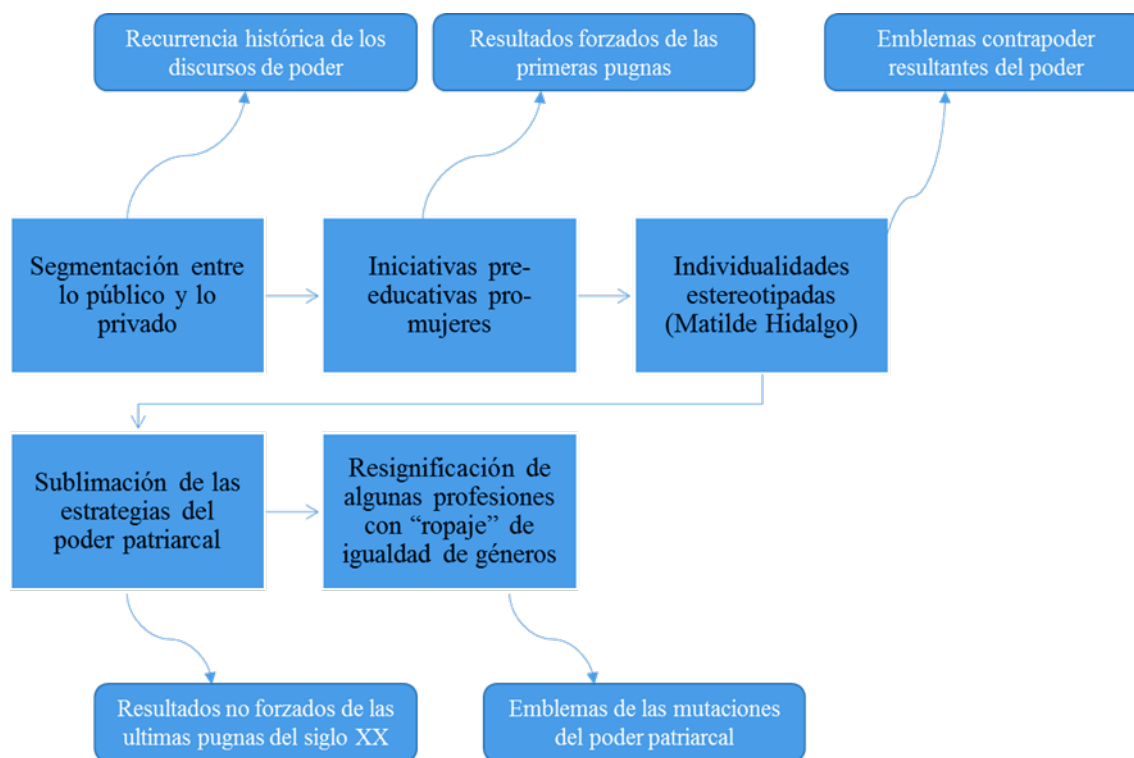


Figura 19. Epílogo Hermenéutico 1 del Capítulo II
Fuente: elaboración propia

Los temas relacionados con el trabajo y la familia representan igualmente, formaciones discursivas que se desprenden del ambiente socio-político en el que se fraguan los movimientos de las mujeres ecuatorianas, durante el siglo XX. La familia de esta época se crea y recrea, alrededor de la figura materna, articulando alrededor de su imagen, una suerte de pivote, desde el que se justifican muchas de las inequidades de las que son víctimas las mujeres. Las madres son las responsables directas de la formación axiológica de la prole, y al asumir esa tarea, se le condena socialmente a permanecer en un extenuante y delicado proceso, que le aleja o, al menos, le hace más complejas sus luchas en el terreno de la vida pública.

Uno de los elementos que contribuye al fortalecimiento del poder patriarcal y la sumisión familiar de las mujeres, es la intervención de la iglesia católica y el estereotipo del matrimonio como una aspiración más de las mujeres que de los hombres. Es en ese ambiente cultural que el adulterio masculino es medido de una manera diferente que cuando es cometido por las mujeres y, en el que la unidad familiar se le atribuye más, como una atribución moral de las “amas de casa”. Hay una tacita comprensión de las fallas que puedan presentar los padres, mientras se condena de forma irrestricta, cualquier distensión femenina que conduzca a un debilitamiento del grupo familiar.

Así mismo, un factor que se destacó durante ese proceso y en el desarrollo del Capítulo II, es la importancia del laicismo como contrapoder, al momento de acompañar el rechazo de las mujeres a ser recluidas en sus hogares como carceleras morales. En este punto, conviene atender como parte de las conexiones discursivas que apuntalan la lucha de las mujeres ecuatorianas, la relación entre la ideología liberal, el Estado y el laicismo, en contra del poder del catolicismo oficial, pilar del poder patriarcal. Situación que se consolida a finales del siglo XX, cuando las mujeres logran ser reconocidas como factor de poder, y logran mayores grados de emancipación respecto a su imagen de figura indispensable para la construcción y sostenimiento de las familias.

Por su parte, la historia del siglo XX, leído en clave de géneros, presenta una progresiva incorporación de las mujeres en el campo laboral, muy lenta en sus primeros años pero que, de a poco gana fuerza jurídica y organizacional para verse consolidada a finales del siglo. El discurso reivindicativo de los sindicatos que abogan por una igualdad laboral de las mujeres, se resquebraja al momento de definir la posición salarial que ocupan las mismas dentro de las empresas. En esa confusa madeja que forman las iniciativas de los movimientos de mujeres, las políticas gubernamentales con enfoque de géneros y las propuestas para el reforzamiento de la institucionalidad democrática en el Ecuador, suele dislocarse el empeño histórico de las mujeres por un tratamiento igualitario en el terreno del trabajo.

En cuanto al tema de los movimientos de mujeres, que se encuentra conectado con lo educativo y laboral; su análisis dejó en claro que el debate por un mayor protagonismo sociopolítico, no es exclusivo de la psiquis y la praxis femenina, se trata de movimientos humanistas que se encuentran enraizados a las aspiraciones más antiguas de las grandes revoluciones. Durante la primera mitad del siglo, las mujeres ecuatorianas, particularmente las campesinas y las perecientes a los pueblos originarios, mantuvieron alguna visibilidad de sus luchas, fueron articulando iniciativas organizacionales que, más adelante tomarían las banderas de la participación política en términos de igualdad en el Ecuador. La vertiente feminista de estos movimientos adquiere un mayor grado de resonancia social, pero de allí se alimentan, sub-movimientos de corte ecológicos o pro-abortistas, por nombrar algunos.

Ya en la segunda mitad de ese siglo XX, al amparo discursivo de las nuevas legislaciones y las organizaciones internacionales, el papel de los movimientos de mujeres se revaloriza de cara a la necesidad de una mayor participación de las mismas en el terreno de lo político, no solo como apoyo de los procesos que le son inherentes a su condición bajo el enfoque de géneros, sino en aquellas disputas que forman parte de la búsqueda inconclusa por un

tratamiento igualitario. En definitiva, la diversidad de caras, discursos y prácticas que muestran las organizaciones de mujeres a finales del siglo XX ecuatoriano, viene a ser el reflejo más fidedigno de la complejidad de este periodo histórico para las luchas por la inclusión e igualdad política, en el país. En la figura 20, se ilustra a manera de Epílogo Hermenéutico, una síntesis de esta parte.

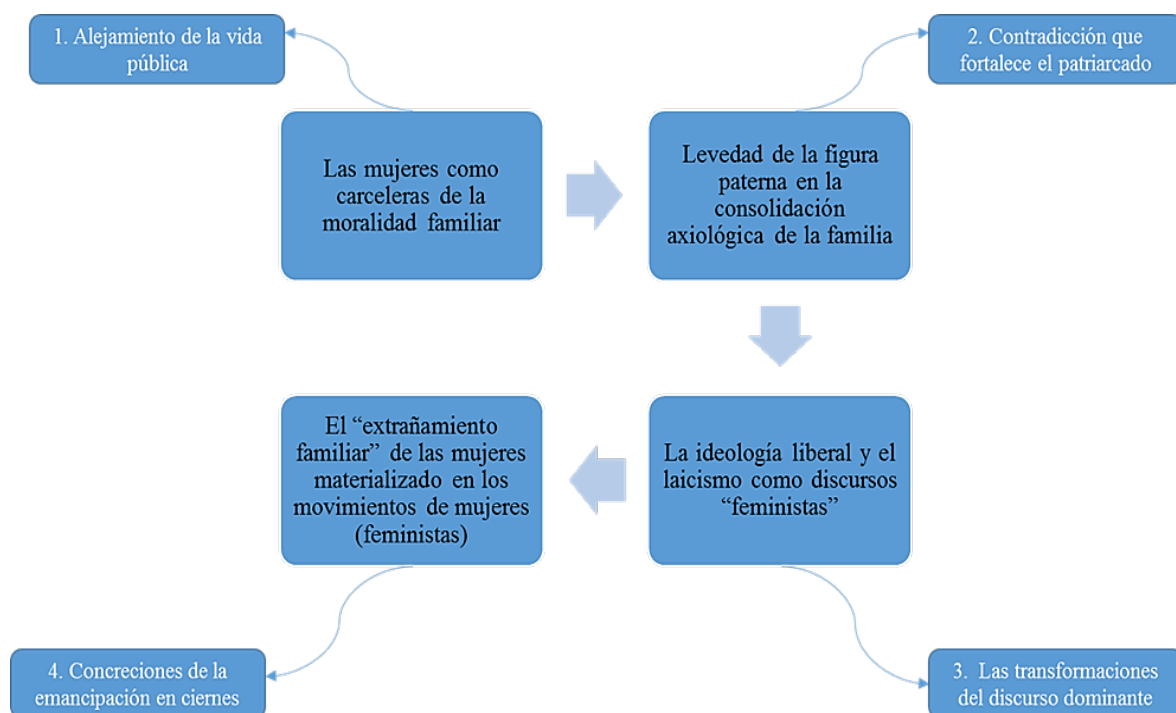


Figura 20. Epílogo Hermenéutico 2 del Capítulo II
Fuente: elaboración propia

2.2. El siglo XXI: dos décadas ecuatorianas con rostro de mujeres

Si bien los primeros años de este siglo han estado llenos de efervescencia política, en un principio con muchas incertidumbres, no cabe duda, que de a poco el panorama se fue despejando. Más allá de la llegada al poder, de Rafael Correa, (lo que fue analizado en el Capítulo III), lo cierto es que las dos primeras décadas del siglo XXI, han permitido la consolidación de un proceso en el cual, el feminismo en sus diversas manifestaciones, ganó mucho terreno jurídico e institucional. No solo en el Ecuador, sino en el orbe entero, las reivindicaciones por la igualdad educativa, laboral, sexual y, política, de las mujeres han avanzado sólidamente, de tal manera que, aunque culturalmente persisten herencias

patriarcales que se resisten a desaparecer, el contexto se ha transformado de manera importante y positiva.

El “dispositivo” Educativo. La lectura hermenéutica realizada en este periodo, precisa un conjunto de cambios en los temas ya tocados para el siglo XX pues, a manera de formación discursiva, se le sigue la pista al lenguaje social e institucional acerca la educación, el trabajo, la política, entre otros. La realidad ecuatoriana es, decididamente otra, en el terreno del discurso educativo; los diferentes actores, tanto intelectuales como organizacionales que nos “hablan” del lugar de las mujeres en los espacios formativos han distendido sus posiciones y cedido frente a un fenómeno que ya no es transitorio, la colonización del discurso dominante, por parte de las ideas de las mujeres que reclaman una mayor presencia en las universidades, en estudios de cuarto y quinto nivel y, en el reconocimiento de esa formación.

En este contexto, los objetos del discurso, del poder educativo y sus instancias (fuentes), se modifican, de forma que ya no existen parcelas profesionales, “naturalmente” masculinas, sino que, la competitividad se asocia a la legitimación del saber a partir de la titulación. Por supuesto, la intervención de las figuras formales del poder político, en la formulación de políticas de igualdad de géneros en el acceso educativo, juega un papel central para que esta nueva formación discursiva se fortalezca. Lucio Gutiérrez, Correa y el Consejo Nacional de las Mujeres del Ecuador, son tres fuerzas, instancias o subjetividades, desde las que se intervienen para modificar el “Régimen de Existencia” (Navia, 2007), en el que la subordinación educativa de las mujeres se vuelve porosa.

En su metalenguaje, pretendidamente reivindicador de las mujeres, el CONAMU, alerta acerca de la realidad que pueden ocultar las estadísticas oficiales de acceso igualitario a la educación por parte de niños y niñas. Aunque, factualmente hay un ingreso muy similar, en números, cuando se observa la variable “prosecución”, suele mostrar otras inequidades, entre ellas el abandono prematuro de los estudios por parte de las niñas o, las situaciones de violencia de géneros que se presentan a lo interno de las instituciones escolares. Ese régimen de existencia del discurso, del cual habla Foucault, “Un régimen que hace decir, que se produce como un acto de la palabra mediante lo cual se puede decir ciertas cosas y otras no”, se utiliza de forma tendenciosa por quienes, desde la formulación de las políticas educativas, defienden la idoneidad de las mismas.

Sin embargo, profundizando en el enunciado discursivo² que encarna la “igualdad educativa”, se asume como válido el planteamiento que presenta este enunciado como lleno de porosidades teóricas que igual puede referirse a “oportunidades o posiciones” (Colella, 2015). Por igualdad de oportunidades se entendería, las recurrencias discursivas de los organismos públicos ecuatorianos al intentar reducir “las desigualdades de origen” y promover una justa competencia entre niños y niñas. Por su parte, la igualdad de posiciones, “apuntaría más bien a reducir la distancia entre las diversas posiciones sociales que expresarían las diferentes condiciones materiales de vida” (p.121). En esta segunda enunciación de igualdad es en la que se detienen los críticos de las estadísticas gubernamentales, acerca de la apertura educativa con enfoque de géneros.

Colocada bajo la lupa foucaultiana, la igualdad de posiciones para las mujeres en el campo educativo, alude a las funciones enunciativas propias de los movimientos feministas y al enfoque de géneros. La idea metalinguística, conlleva la imagen de lo que en estos momentos, en este tiempo y, en estas circunstancias es legítimo decir. El objeto del discurso no preexiste su enunciación, por lo que la igualdad de géneros, llega a concretarse, solo en la medida en que es posible referirse a ella y construir el conjunto de relaciones discursivas que la hacen posible, aunque, en el caso ecuatoriano, se discuta su veracidad.

El dispositivo “laboral”. En el devenir del discurso patriarcal, puesto en contexto en algunas secciones del Capítulo II de esta Tesis, el tema del trabajo de las mujeres también fue demarcado en su ruta por las primeras décadas del siglo XXI. En este periodo, es posible observar las discontinuidades, rupturas y pliegues de un dispositivo cuyos enunciados se recomponen en el orden de una realidad que se trasmuta incesantemente. Las mujeres ecuatorianas, empiezan a consolidar una praxis laboral de nuevo tipo que logra ir más allá de un mero feminismo nacional. Se abren espacios en las organizaciones empresariales casi con la fuerza que se requiere para la construcción de nuevas relaciones de poder necesarias en una sociedad de iguales.

No obstante, la apertura laboral y la reivindicación del trabajo femenino, implica la superación del estereotipo que sigue presentando a las mujeres como las “naturales responsables” de la formación o cuidado de los hijos en el hogar. Revertir esa realidad, obliga al diseño de nuevos enunciados que revelen la pertinencia de un proceso liberador integral, un

² Entendiendo que esta noción no está clara ni siquiera en el mismo Foucault, se asume el enunciado como “...un elemento último, que no se puede descomponer, susceptible de ser aislado por sí mismo, y capaz de entrar en un juego de relaciones con otros elementos semejantes a él” (Foucault, Arqueología del Saber, 2002, p. 133).

proceso social, en el que las niñas no deban abandonar la escuela porque se le exigen funciones laborales a destiempo, un trabajo invisible que se realiza puertas adentro y que, aún adultas, las mujeres no han podido contrarrestar. El ejercicio conclusivo de este espacio textual (El siglo XXI: dos décadas ecuatorianas con rostro de mujeres), se ilustra en el Epilogo Hermeneútico de la figura 21.



Figura 21. Epilogo Hermeneútico 3 del Capítulo II
Fuente: elaboración propia

3. En cuanto a la relación teórica, axiológica y práctica de la perspectiva de géneros en el contexto de la Revolución Ciudadana

La Revolución Ciudadana es tenida en esta Tesis, como el “objeto” del discurso más significativo, tanto desde el punto de vista enunciativo, como desde la praxis, en el periodo histórico central que se estudia, desde el Capítulo I. Sin embargo, es en el desarrollo del Capítulo III, en el que se realizó un análisis detenido en cada una de las fuentes que se consideraron más importantes y de unas individualidades que, por sus perfiles, también entraron en ese contexto que hemos llamado, siguiendo a Foucault el Régimen de Existencia que define este proceso. En el marco de ese examen crítico, los dispositivos discursivos tomados como referentes, para ser descompuestos, en sus enunciados y comprender, las formaciones discursivas que se derivan de ella son, entre otros, las políticas públicas, la igualdad de géneros y, la institucionalidad política.

3.1. La igualdad de géneros: bifurcaciones teóricas respecto a la RC

Leyéndola en clave histórica, la RC, tiene un origen diverso y complejo, en su seno se acunan una gran cantidad de deudas sociales, entre las cuales, la inequidad de géneros toma un lugar protagónico. Las circunstancias en torno al origen de la RC y la heterogeneidad de sus propuestas reivindicativas, se intentó mostrar a lo largo de ese tercer capítulo con una doble intención: a) reconocer, desde el análisis, la amplitud de la propuesta social del correísmo y, b) develar la imposibilidad de estos periodos gubernamentales, de lograr la ubicuidad política del enfoque de géneros.

En el terreno del discurso, la igualdad de géneros se convirtió en un enunciado persistentemente utilizado, tanto por el Presidente Correa, como por sus principales voceros, lo que implica un giro importante en la creación de las condiciones de existencia del objeto, que en este caso es un trato igualitario para las mujeres ecuatorianas. Estas últimas, convertidas en sujetos del discurso político, fueron “gestionadas” desde el poder, muchas veces, en el plano internacional, en otros escenarios latinoamericanos, en los que el progresismo, hizo piso, como Venezuela, Bolivia y, hasta cierto momento, Argentina. Uno de los elementos novedosos que se vislumbran en la primera fase del correísmo, es que la igualdad de géneros, más que una construcción social, se enlista entre una serie diversa de propuestas programáticas de la RC, lo que le quita peso cultural.

Puede decirse que, en este periodo, la igualdad de géneros, forma parte de aquellos objetos del discurso de los que se habla constantemente y que, por ello, volviendo a la terminología del análisis foucaultiano, se posiciona en las instancias del saber y del poder, pero es particularmente débil, en la instancia de las subjetividades (Navia, 2007, ob. cit.). En lo que respecta a la instancia discursiva del saber, la igualdad de géneros adquiere protagonismo como resultado del esfuerzo de los profesionales de la educación (burocratas, maestros, docentes), que incorporan el lenguaje del enfoque de géneros, en las políticas educativas, en los programas académicos y en las tareas concretas a partir de las cuales los estudiantes se forman. Ello hace que el tratamiento igualitario para los diferentes géneros pase a ser parte del Régimen de Existencia, de las ciencia y la técnica.

Así mismo, el poder establecido, representado por el correísmo y el contrapoder, encarnado por la oposición de muchas caras que tuvo Correa, asume a la igualdad de géneros como una recurrencia discursiva. Aquí se da lo que Jaramillo (2019) llama “transversalización de la igualdad de géneros”, pero solo en esa instancia. ¿Qué sucede entonces?, cuando tienes a todos

los personeros gubernamentales a favor de esta exigencia, cuando se legisla para que se haga realidad la paridad dentro de las organizaciones políticas, se puede decir que se han creado las condiciones necesarias para que la igualdad de géneros se mantenga en el Régimen de Existencia, liderado por el enfoque de la RC. Algunas pistas empíricas de esto, se encuentran al revisar la figura “corporativista” que adopta el Estado, al intentar asumir una imagen de “abogado defensor” frente a las manifestaciones de desigualdad de géneros.

Si el Estado pretende construir un muro de contención institucional para evitar las violaciones de la igualdad social de géneros, eso puede significar un avance importante comparado con otra época, sin embargo, al prolongarse esa situación en el tiempo, las tensiones entre el poder factual del Estado y el poder residual de los estereotipos culturales terminan por debilitar el voluntarismo de la posición estatal. El otro aspecto significativo en cuanto a esta instancia discursiva en la que se visibiliza la igualdad de géneros es que llega a convertirse en una moneda de cambio para quienes ostentan la dirección de los poderes públicos. Así, cuando las mujeres reclaman su lugar en la escena pública, se les “atiende” como si ellas fueran invitadas, y no como las protagonistas de la cotidianidad ecuatoriana en todas las esferas de socialización.

En relación a la instancia discursiva que Foucault llama “de las Subjetividades”, la igualdad de géneros no ha llegado a consolidarse por completo. Como instancia, la subjetividad mantiene una serie de formalidades que reproducen los esquemas patriarcales e impiden que ciertos grupos, ciertas personas, ciertas individualidades, lleguen a confluír en el respeto por la igualdad que reclaman las mujeres ecuatorianas en el contexto de la RC. Es así como se pueden sopesar en su justa dimensión, las diferencias que se encuentran entre la valoración social de las mujeres que hacen los políticos socialistas, cuando se les compara con los liberales, por ejemplo. Y, si se profundiza más en el espacio de las subjetividades, se encuentran una gran variedad de posiciones en ese sentido, si se interpela sobre el tema a adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, entre otros.

Hay en este tema, un punto de inflexión para el análisis hermenéutico que discurrimos. Cuando el poder establecido, enarbola una bandera cultural y antiquísima, como la igualdad de las mujeres, pregonando su papel de propietario sobre ella, puede llegar a difuminar su trascendencia social, convirtiéndola en un dispositivo discursivo transitorio o discutible, en cuanto a su pertinencia e identidad con el Régimen de Existencia del que se trata. Las fronteras entre las reivindicaciones sociales que exigen las mujeres ecuatorianas y el voluntarismo político que en algún momento se platea el correísmo para lograr esas reivindicaciones, deben

ser remarcadas socialmente, mejor aún, deben ser subjetivadas, en el sentido de colocarles, rostros y cuerpos. Por el contrario, el proceso ciudadano, pareció, en algunas vueltas de esa madeja política que representó, lograr una objetivación de la igualdad de géneros, en su esfuerzo por construir a su alrededor, un entramado institucional que le concretara.

Si se considera a la igualdad de géneros en el marco de esas instancias discursivas que se han explicado aquí, también hay que acordar que la relación teórica entre ese dispositivo discursivo (la igualdad de géneros), y la RC como Formación discursiva, refrenda algunos atavismos históricos de los que precisamente las mujeres ecuatorianas intentan escapar. La equidad de las mujeres frente a los hombres y, en general, la equidad de géneros dibuja una espiral, que no una línea ascendente, en la que constantemente se vuelven a presentar, la violencia de géneros, la paternidad irresponsable, el embarazo adolescente, y la discriminación político- partidista. La igualdad de géneros no llega entonces a independizarse como formación discursiva, frente a la RC, sino que le sirve como referente subordinado para apropiarse de algunos espacios sociales que de otra manera no tendría.

Allí se presenta la necesidad de interpelar y superar el discurso paternalista del Estado que parece, una vez más, asumir la actitud retrograda del patriarcalismo frente a los derechos de las mujeres. Para quienes proponen una igualdad de hecho, de las mujeres en la sociedad ecuatoriana, no es admisible esa figura de “emergencia discursiva” que muchas ocasiones asume la defensa de la igualdad de géneros, porque desde ese “lugar teórico”, resultaran inocuas todas sus estrategias de lucha y resistencias, tanto discursivas como prácticas emprendidas históricamente frente al poder. En algunos casos, sobre todo en el campo del debate político, los voceros de la RC, dan cuenta de la necesidad de rebelarse frente a los fantasmas de la dominación patriarcal pero ese esfuerzo retórico no alcanza a convertirse en una evidencia empírica cuando de la igualdad de géneros se trata.

Una conclusión lógica luego de esas reflexiones, respecto a las bifurcaciones teóricas, de la RC con la igualdad de géneros, muestra que hay bastante cercanía entre esos dos fenómenos, en su condición de dispositivos del discurso teórico, pero el discurso ciudadano queda en deuda cuando de “crear la cosa”, se trata. Es decir, hay un indiscutible desarrollo de la retórica igualitaria que implica a la igualdad, en el contexto correspondiente a la RC, diríamos, en su Régimen de Existencia. Desde la educación, las religiones, las instituciones, las personalidades; se hace frecuente hablar de los géneros y la necesidad de su igualdad, pero queda faltando una re-culturización, si es posible utilizar el término, para refrendar esos cambios, en la praxis de

la cotidianidad ciudadana. Ilustremos estas ideas a partir del Epílogo Hermenéutico que muestra la figura 22.



Figura 22. Epílogo Hermenéutico 1 del Capítulo III
Fuente: elaboración propia

3.2. Fuentes axiológicas para la igualdad de géneros en el contexto de la RC

Uno de los lunares de la RC respecto a la igualdad de géneros, especialmente en el tema de la igualdad sociopolítica de las mujeres, tiene que ver con las dificultades para transformar los principios teóricos y legales en valores socialmente compartidos. Mientras por el lado de la igualdad formal, los principios jurídicos se desarrollaron plenamente en la Constitución del 2008 e instrumentos legales derivados de ella, por el lado de la socialización axiológica que requiere la construcción de esa cultura igualitaria. Aquí se presenta la distorsión clásica entre lo que se dice y lo que se hace, no basta con nombrar las cosas y crear las condiciones formales para que existan, es preciso que las personas concretas y las organizaciones políticas, asuman y cotidianicen, a partir de sus vivencias los elementos valorativos que esas cosas (la realidad de las relaciones humanas), significan.

El papel que juega la axiología para que finalmente la RC pudiese concretar su discurso igualitario, es determinante, porque no hay manera de conseguir la construcción de una sociedad de iguales si desde la educación no se forma a hombres y mujeres bajo ese precepto. Pero además de la educación formal, se trata de lograr una familia pro-igualitaria en la que las niñas y niños sean educados para compartir las tareas y responsabilidades sin menoscabo de

las circunstancias que imponen sus géneros. Desde lo que sucede en los hogares se puede contribuir mucho más a una mayor solidez axiológica que cualquier programa educativo o iniciativas organizacionales que, finalmente, son cascarones vacíos si no se les llena de ese contenido humanístico que los valores otorgan.

¿Por qué es tan complejo que se produzca un cambio axiológico cuando de la igualdad de géneros se trata?, a esta pregunta se ha respondido en algunas ocasiones desde la religión y desde la filosofía, pero en el caso de la RC, sus enunciados discursivos permiten vislumbrar un obstáculo que va más allá de esas respuestas y del voluntarismo de Correa y sus burócratas. En su praxis sociopolítica, la Revolución no termina de vulnerar el muro de contención que representan las relaciones de poder establecidas en torno a la accesibilidad de las mujeres a ese mundo de iguales que se aspira desde el enfoque de géneros. La sexualidad, el debate en cuanto a los derechos humanos de los sexo-diverso, la posibilidad del matrimonio gay, entre otros dilemas axiológicos, persisten en ese universo de relaciones que se entretienen entre los discursos, las representaciones sociales y la realidad.

Al analizar las iniciativas ciudadanas en cuanto al igualitarismo, en el desarrollo del tercer capítulo, se puede uno detener en las significaciones que tiene para las Reglas de Existencia de esa igualdad, las viejas discusiones acerca de la comprensión de lo que el mismo enunciado “género”, significa. A estas alturas, se da por sabido que los géneros, así en plural, no resultan de las determinaciones biológicas que la naturaleza les impone a las personas, sino que serán la consecuencia de una construcción social, en la que es definitiva, la influencia de los valores que la sociedad le atribuye a ciertos correlatos como la familia, la maternidad, lo femenino y lo masculino, entre otros (Mantilla, s/f). Como toda construcción social, los géneros se imbrican en una serie de factores que se destacan enseguida:

- a) La identidad de géneros y la socialización. La RC implicó la promoción de nuevas formas de mirar las diferencias, entre ellas aquellas que derivan de las maneras en que se construyen y manifiestan las identidades y los estereotipos sociales. Así, axiomas ancestrales como la idea de las relaciones naturales entre el ser de las mujeres y las labores del hogar, por ejemplo, suponen parte de una formación discursiva inherente al patriarcado que ha de superarse. No obstante, el proceso revolucionario se atascó en el tremedal de las nuevas enunciaciones de la identidad de géneros, al no comprometerse decididamente con causas emblemáticas culturalmente, como, por ejemplo, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y la decisión de abortar.

- b) La superación de la imagen de las mujeres como “cuerpos necesitados de control”. El enfoque de géneros y su afán igualitarista, forcejea, en este contexto, contra esa cualidad del poder patriarcal de imponer los límites axiológicos y comportamental de las mujeres. Resulta que la igualdad es una mera retórica si no se es capaz de trascender lo que se dice, a partir de lo que se hace y se muestra. Se asoma aquí, el tema del biopoder, como una praxis propia de:

la problemática del cuerpo, su construcción social y científica, pone de manifiesto un poder de una naturaleza distinta, un poder disperso, difuso, que se expande subrepticamente y se consolida gracias a prácticas sociales e instituciones aparentemente neutras cuyo objetivo último es la legitimación de un orden cultural, político y económico dominante (Peres, 2016).

En la perspectiva de Peres, La igualdad de géneros queda atrapada en el marco de una cultura que la RC no logra superar, esa cuyo fundamento es la contraposición dualista entre las formas masculinas y femeninas de enfrentar las relaciones sociales. La masculinización del mundo lleva implicada esa segregación de las mujeres hacia modelos culturalmente alimentados por las creencias, los saberes, las praxis, en definitiva, por los discursos que arrinconan al ser mujer, hasta aquellos espacios en los que la dominación de género se naturaliza.

- c) La “disidencia de la sexualidad”. El elemento sexual suele ser invocado entre los críticos del simplismo del concepto de género. Las formaciones discursivas construidas desde el poder que “normalizaron” históricamente el uso y la concepción de la sexualidad, han venido siendo rebatidas de forma tal que, las estructuras axiológicas de la RC, se cuidan en exceso de ser anticuadas al respecto. El rechazo de las comunidades gays, lesbianas, trans, contra toda enunciación que pretenda estigmatizar la orientación de la sexualidad, converge en esa suerte de contrapoder que hoy día reviste las iniciativas de estas comunidades. En el contexto de la RC, la igualdad de géneros como recurso de rebeldía se acerca a esas posturas de la disidencia sexual que revoca todo intento de “axiologizar” la sexualidad, no se logra en su orientación holística, este recurso, pero se avanza en la presencia social del discurso de la diferencia, como patrimonio del igualitarismo.

En el lenguaje de Foucault, estas deliberaciones en cuanto a la axiología y la igualdad de géneros, nos plantean la necesidad de re-buscar, las fuentes desde las que la noción de géneros se entrecruza con los valores. En la enumeración que se acaba de listar, se encuentran algunas

de esas fuentes, sin embargo, se considera importante concluir que la igualdad de la que habla el enfoque, encuentra su mayor complejidad en el proceso social que la hace posible, y que nos lleva a afirmar que si bien el discurso de la igualdad de géneros, le presenta con rasgos performativos, es decir, este sólo existe en la medida en que se utilizan sus enunciados. “Dando un paso más, podemos afirmar que el sujeto depende de una regla discursiva, esto es, existe gracias a que tenemos un nombre para decir que existe” (Peres, ob. cit. P. 127).

Los fundamentos axiológicos de la igualdad de géneros en el contexto de la RC, trascienden su natural levedad y conducen al análisis de las relaciones de fuerza que cimbran el tejido societal sobre el que se contruye el discurso correísta de la igualdad. En parte, las dificultades de la segunda parte del correísmo en el poder, son el resultado de una lectura mediada por los mismas herencias estereotipadas de lo que significan los géneros y la gestión de su igualdad en el ambito de las relaciones sociopolíticos. En alusión a lo dicho sobre la relación entre las palabras y las cosas o, en nuestro caso, entre el enunciado y el objeto del discurso, se puede colegir que, en la relación entre lo axiológico, la igualdad de géneros y la RC, falto el esfuerzo necesario para que la retorica alcanzara a crear las reglas de existencia que la igualdad requiere. En todo caso, la figura 23, resume esta situación a manera de epílogo hermeneutico.

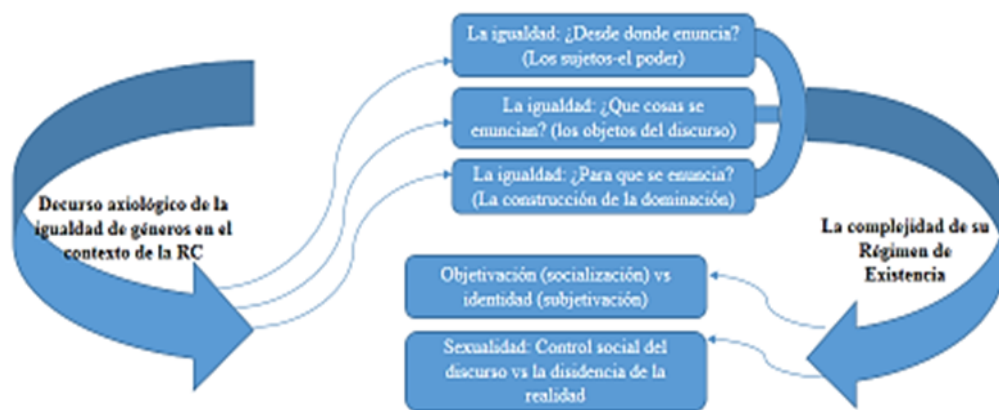


Figura 23. Epílogo Hermenéutico II del Capítulo III
Fuente: elaboración propia

3.3. La praxis o la objetivación de la igualdad de géneros en la RC

En el terreno de las relaciones de poder, los discursos no designan, sino que fundan las praxis que hacen posible los fenómenos sociales, como es el caso de la igualdad de géneros en un Régimen de Existencia particular y en el marco de un contexto específico como el que representa la RC. Convertida en objeto del discurso, esa igualdad transfiere los rasgos fundacionales de otros enunciados que dan cuenta de los actores o sujetos entre los cuales se definen y libran las luchas inherentes a todo proceso social en el que se determinan jerarquías, dominados y dominantes.

Conviene aclarar que el proceso de objetivación que regula la existencia de la igualdad de géneros en el campo del discurso de la RC, va más allá de la mediación que, para el caso de las Representaciones Sociales, se produce entre lo abstracto y lo concreto. En esos casos, “la objetivación lleva a hacer real un esquema conceptual, a duplicar una imagen con una contrapartida material que acopla la palabra a la cosa” (Bruehl dos Santos, 2008), se trata de una estrategia comunicacional o lingüística, cuyo análisis conduciría más a la gramática que a la política.

Para un análisis de discurso como el que se ha venido desarrollando, al estilo foucaultiano, objetivar es un proceso que implica, por supuesto, el proceso de construcción social de la igualdad de géneros, lo histórico, pero involucra más que eso. Se trata de establecer, desde la genealogía del concepto, las complicidades, las resistencias y las tensiones sociales de lo que se nombra cuando se habla del igualitarismo entre mujeres, hombres y, como no, otros géneros. Precisamente, la superación de la concepción binaria del género, como “masculino y femenino”, se observa con mayor integralidad desde la visión metódica de Foucault, quien diría que lo transexual, la homosexualidad, y otras “disidencias de la sexualidad”, constituyen emergencias discursivas sobre esa superficie binaria de la que se habló antes.

Para analizar las reglas de formación de los objetos, se ha visto que no se debía ni enraizarlos en las cosas ni referirlos a las palabras; para analizar la formación de los tipos enunciativos, no se debía referirlos ni al sujeto del conocimiento, ni a una individualidad psicológica. Tampoco para analizar la formación de los conceptos, se debe referirlos ni al horizonte de la idealidad, ni al caminar empírico de las ideas (Foucault, 2002, p. 103-104).

Al superar el esquema lingüístico, el discurso de la igualdad de géneros conlleva a poner de relieve, no un conjunto de significantes y significados que permiten la interacción de una

sociedad en particular, sino las relaciones de poder implicadas en las palabras y los conceptos. Es decir, es el poder y no el lenguaje, el que regula lo que se dice, como se dice y desde donde se dice. La igualdad de géneros, aparece entonces, no como el resultado momentáneo de la gestión correísta y su RC, sino como una concreción histórica en la que encarnan las regularidades discursivas de la historia de las relaciones entre las mujeres y el poder patriarcal, cuya caracterización parte desde el Capítulo 1, de esta Tesis Doctoral.

En todo caso, la RC, se convierte en ese Régimen de Existencia en el que la igualdad de géneros permea una serie de prácticas sociales, políticas y educativas que determinan las estrategias, tanto del poder establecido, en la figura, acción y discurso de Correa; como las de los grupos que representan la defensa de esa igualdad. Los movimientos de mujeres, las organizaciones feministas, las organizaciones indigenistas representadas en las Confederaciones Indígenas.

4. En cuanto a “los lugares” de las mujeres indígenas antes, durante y después de la Revolución Ciudadana

La demarcación discursiva del protagonismo sociopolítico de las mujeres ecuatorianas en el contexto de la Revolución Ciudadana habría estado incompleta si en ese ejercicio realizado desde diferentes perspectivas, no se hubiese incluido la perspectiva indígena. El Capítulo IV de esta disertación doctoral, nos permitió, así, en primera persona, aproximarnos críticamente al fenómeno indigenista en el Ecuador y precisar las claves históricas que explican el devenir de las mujeres indígenas, de sus organizaciones, sus conflictos, internos y externos, y su situación actual.

Se trata de recurrir a lo que se dice y lo que hace en el contexto de las luchas de los pueblos originarios, sometidos desde tiempos antiquísimos, a un sistema de expoliación social que, siendo Ecuador un Estado plurinacional e intercultural, solo puede responder a la lógica de la dominación. En ese indagatorio bajo las premisas del análisis del discurso, una vez frente a la cuestión indígena ecuatoriana y de la situación de sus mujeres, cobra vigencia la argumentación de Foucault (Foucault, 2002, ob. cit.), en cuanto a la necesidad de incluir en este tipo de análisis “los conceptos de discontinuidad, de ruptura, de umbral, de limite, de serie, de transformación” (p.33). Y es que la configuración del indigenismo en el país, y de las mujeres en particular, es tan heterogeneo como complejo, no hay simplezas ni linealidades cuando se le sigue la pista a organizaciones como la CONAIE, o sujetos historicos como Dolores Cacuango o Transito Amaguaña.

La discontinuidad o, más bien, las rupturas en el orden del discurso, entendiendo aquí la potencia de este para forjar las prácticas culturales, son frecuentes y “naturales” entre los protagonistas de la posición indigenista. Los hombres y las mujeres construyen enunciados distintos acerca de sus realidades, los hombres entre ellos, las mujeres entre ellas, hacen lo mismo, de manera que no hay ninguna “ruta segura” para precisar certezas acerca de la forma en que se procesan los acontecimientos sociopolíticos que desencadena la RC y como ello puede aunar el protagonismo de las mujeres en este periodo. Sin embargo, en los intersticios discursivos que se exploraron, entre las emergencias y las superficies encontradas, hay algunos elementos destacables.

4.1. La CONAIE y las mujeres, entre certezas y ambigüedades

Las Nacionalidades Indígenas en Ecuador logran cierta articulación que las podría signar como parte de una formación discursiva, sin que ello pueda ser tomado como uniformidad, por el contrario, se trata de realizar un trabajo “negativo”, en el sentido de negar los conceptos que, a fuerza de unificar las diferencias, ocultan las emergencias que se manifiestan en la diversidad y que dan cuenta de las estrategias de dominación. Lo que ocurre con la CONAIE es que logra colectivizar un conjunto de enunciados que le permite a los pueblos originarios, un cuestionamiento sostenido al poder político, desde lo formal, y al patriarcal desde lo axiológico. En la instancia discursiva de las subjetividades, hay una superación de la dispersión, alcanzando cierto grado de fortaleza para negociar, con justicia, los derechos de los y las indígenas.

Certeza 1. Hay un proyecto político alternativo: desde su génesis, la confederación logra establecer un consenso mínimo para presentarse frente a los demás actores con un documento que precisa un derrotero por el que los pueblos originarios quieren circular; desde donde quieren construir sus nuevas estrategias discursivas y confrontar las del poder dominante. Aunque en sus inicios existen cierta confluencia entre el discurso correísta y el indígena, la ruptura se hace presente muy pronto. La presentación del proyecto de la CONAIE, promueve una confrontación y no negociación de los preceptos axiológicos que devienen en la caracterización de las demandas culturales de los pueblos originarios.

Ambigüedad 1. El lugar de las mujeres indígenas en el proyecto alternativo: El movimiento indígena ha logrado interpelar el poder constituido, alertando los estragos que la dominación ha causado a un pueblo que es, demográficamente mayoritario y, en esencia con

un mayor grado de pertinencia. Sin embargo, los umbrales de esa insurgencia colectiva, parece haber sojuzgado, una vez más, la voz de las mujeres indígenas, no como sujetos individuales sino sociales. A fuerza de demandar atención para la cuestión indígena, la CONAEI y los partidos políticos con orientación indigenista, no se muestran tan democráticos en su interior como para contribuir decisivamente a un mayor protagonismo sociopolítico de las mujeres, en el contexto histórico y el discurso de la RC.

Certeza 2. Difusión y aceptación social de un nuevo modelo de desarrollo: Uno de los enunciados discursivos más resonantes de la CONAIE y de todo el movimiento indígena en Ecuador tiene que ver con el recazo al modelo desarrollista impuesto por la visión neoliberal. De hecho, mucho antes de la formación de las Confederaciones, las iniciativas de los pueblos originarios lograron cambios importantes en las formas de organización económica cuya fortaleza era la exclusión social de la cultura indígena.

El antecedente inmediato para el surgimiento del movimiento indígena en el Ecuador como sujeto social es la desestructuración del sistema de haciendas. La lucha por la tierra vino acompañada del fortalecimiento de las organizaciones rurales y la revitalización de procesos identitarios con profundos contenidos étnicos (Larrea, 2004).

La visibilización de las estrategias de poder para tejer relaciones de subordinación de las causas indígenas, se logró desde la época descrita por Larrea, la construcción de un modelo económico alternativo que atendiera tanto al crecimiento económico como a una vida plena es importante, y se hizo más visible con la llegada de la RC que, al menos desde el discurso, contravino las lógicas de la economía capitalista e impulso el Sumak Kawsay, de procedencia, justamente indígena, como posibilidad práctica para un desarrollo multiforme, heterogéneo, como la misma población ecuatoriana.

Ambigüedad 2. El lugar de las mujeres indígenas en el nuevo modelo de desarrollo. El discurso del Sumak Kawsay y sus prácticas, proponen una profundización de justicia social, especialmente en el terreno de lo cultural. Un desarrollo cuya filosofía sea la satisfacción de las aspiraciones colectivas, del derecho a la igualdad, moral más que económica, alcanzar cada vez mayores grados de felicidad, lo que implica sentirse bien, con lo que se tiene, pero con lo que podría tenerse; logrando así “un buen vivir”. No obstante, a pesar de este paradigma del desarrollo asumido por la RC, como propio, persisten la herencia cultural que ubica a las mujeres en un segundo plano, con papeles secundarios, económicamente hablando, que

desdibuja el discurso del igualitarismo y le mantiene vedada un mayor acceso a la dinámica sociopolítica del país.

En definitiva, tanto los esfuerzos aparentemente conjuntos de la CONAIE, como de la fuerza histórica reunida en la RC como promotora de otros movimientos y grupos reivindicativos, tienden a difuminarse, cuando se les coloca en clave discursiva y se les contrasta empírica y axiológicamente en el ambiente post-revolucionario. No se trata de ensalzar el clima social de la RC como el espacio de la realización de las causas de las mujeres indígenas, sino d reconocer que en su contexto hubo, por lo menos, una mayor alterabilidad en la dinámica de la dominación tradicional. La lista de certezas y ambigüedades podría ser mucho más larga si, además del tema de las mujeres indígenas, incursionáramos en los intersticios discursivos que dan cuenta del Régimen de Existencia de las organizaciones sindicales, gremiales, los medios de comunicación entre otros. Por ahora, creemos convenientes llegar a este nivel del análisis sobre este tema y cerrar con el epílogo hermenéutico que se muestra en la figura 24.

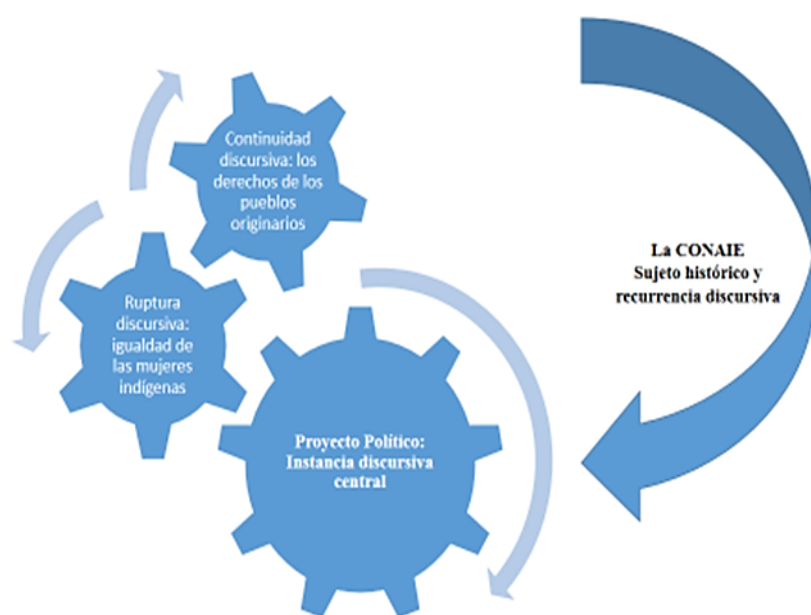


Figura 24. Epílogo Hermenéutico 1 del Capítulo IV
Fuente: elaboración propia

4.2. Sujetos históricos, fuentes de las discontinuidades

Al detenernos en la figura de la CONAIE, básicamente estamos profundizando en la síntesis de una serie de luchas históricas de las Nacionalidades Indígenas que habitan en Ecuador y que encontraron en la conformación de esta entidad, una manera de reaccionar, organizativamente frente a la lógica de la dominación cultural a la que han sido sometidos desde hace mucho tiempo. No obstante, si nos quedamos allí, “los árboles nos impedirán ver el bosque”, o, en el lenguaje que hemos venido utilizando como herramienta heurística, la formación discursiva, nos impediría precisar los rasgos de los objetos del discurso. Objetos que, por cierto, distan mucho de ser objetivables, se trata, por el contrario de sujetos, llenos de determinaciones sociales, culturales y, por supuesto, políticas que intentamos aquí resaltar como epílogos, pero que ya se destacaron con mayor amplitud, en el texto del Capítulo IV.

Las mujeres Kichwa

Representan la imagen de la resistencia basada en la demanda del derecho más universal y humano que se puede solicitar: el derecho a la tierra donde se nació. Su importancia como sujeto histórico implica la conjunción del mundo amazónico en una nacionalidad compuesta, en el caso ecuatoriano por los pueblos de Napo-Kichwa y Canelo-Kichwa, los cuales comparten el idioma Runa Shimi. Este rasgo es uno de los signos distintivos de las mujeres que forman parte de esta comunidad, pero en absoluto les convierte en una excepción cuando se trata de examinar el lugar que se les ha dado en el proceso de reivindicaciones de los indígenas en el marco revolucionario.

Las mujeres indígenas Kichwa, a pesar de haber tenido una participación activa en la formación de la ECUARINARI, se ha visto invisibilizada por el liderazgo masculino que el mismo Estado, reproductor de las lógicas del poder, ha sostenido. La prolongación del patriarcado, producto a su vez, de la herencia colonizadora es una de las situaciones que se pueden observar en el proceso de empoderamiento de las Kichwa. Se las sigue relegando a lugares secundarios porque desde el Estado sus políticas con enfoque de géneros se toman decisiones para un grupo que suponen homogéneo, sin considerar las diferencias sociales que dentro del mismo pueblo Kichwa, existen entre hombres y mujeres.

La conversión en sujetos históricos se concreta cuando en su disidencia sostenida, algunas intelectuales indígenas comienzan a mirarse a sí mismas y escribir su historia desde sus propias voces. Cuestionan el solapamiento del sexismo y racismo de las estrategias discursivas del

poder político, por lo que intentan hacer circular, no una arenga discursiva reivindicativa, sino fundadora de un nuevo enfoque de las relaciones de género que debe ser integral. Un posicionamiento social de las mujeres indígenas debe revertir todo vestigio amenazador de la identidad de género, pero también de la identificación étnica-cultural.

En ese esfuerzo proactivo se inscriben algunas gestas intelectuales y organizativas de lideresas Kichwa que han trascendido a ese sujeto social del discurso para adquirir una estatura propia pero referencial de lo que significa ganar protagonismo social. Este quizá sea un ejemplo emblemático de ¿cómo se puede ser parte de una formación discursiva, salir de ella y regresar, cada cierta vez para fortalecerla? La discontinuidad y las rupturas de las que habla Foucault, se subliman en ese proceso en el que ciertas individualidades adquieren notoriedad, pero contradictoriamente, no por lo que son como particulares, sino por lo que representan como sujetos históricos.

Dolores Cacuango

A estas alturas del planteamiento desarrollado hasta aquí, cualquier lector, medianamente atento, habrá comprendido lo que significó este personaje en la historia de los movimientos indigenistas y, muy especialmente, en el terreno del feminismo indígena. Que en estos momentos quizá podríamos llamar, con otras voces, feminismo comunitario³. Su papel histórico en el campo de la educación intercultural y como promotora de las Confederaciones de Nacionalidades Indígenas es indiscutible. En contraste con esa imagen de lideresa, de paradigma para una forma de ser de la mujer indígena, se rescata aquí, el valor que tiene Cacuango como ruptura. No hay que dejarse engañar por la recurrencia discursiva que presenta a la “obra” de esta mujer, como la expresión de las luchas de los pueblos originarios porque seguramente, no siempre fue esa la guía de sus acciones.

Se trata de mirar más allá de la superficie, de detenernos en las emergencias que representa el discurso de Cacuango, que, en ninguna forma tiene que ser un calco de su biografía, en parte presentada en el cuerpo del Capítulo IV. En cuanto al pensamiento y la acción socio-política de esta intelectual Kichwa, es necesario, como dice Foucault (2002), “revisar esas síntesis fabricadas, esos agrupamientos que se admiten de ordinario antes de todo examen, esos vínculos cuya validez se reconocen al entrar en el juego” (p. 35). Adoptar esta postura analítica,

³ El feminismo comunitario fue creado por mujeres aymaras bolivianas de “Mujeres Creando Comunidad” y mujeres xinkas de la “Asociación de Mujeres indígenas de Sta. María en la montaña de Xalapán”, Guatemala. Tiene el objetivo de decolonizar el feminismo, cuestionando la representación del sujeto feminista dentro de las teorías y praxis feministas, como la mujer blanca, de clase media y heterosexual (Rincón, Vizcarra, Thome, & Gazcón, 2017).

permite superar la historiografía, frecuentemente lineal que nos presentaría al personaje, pero encubriría a la persona.

Consideramos que Cacungo representa un sujeto histórico para lo que ha sido la genealogía de las comunidades indígenas, su posición abiertamente anti-oficial, logró la construcción de una narrativa indigenista y de géneros propia, abriendo las posibilidades de un feminismo no universalizante, sino comunitario, localista y quizá sectorial que, precisamente por eso, enaltece las prácticas y estrategias contra la opresión y la sumisión de las mujeres ecuatorianas en general. El comunitarismo de Cacungo y de Amaguaña, por nombrar otro sujeto histórico derivado del movimiento indígena, logra burlar los sistemas de vigilancia, concretos y discursivos que el patriarcalismo, indígena, blanco y mestizo, mantiene a pesar de los avances democráticos de la RC.

El pensamiento discontinuo de esta mujer Kichwa, se alineará más tarde con lo que ya se ha dado a nombrar como feminismo del sur o feminismo comunitario, el cual intenta, más que cualquier otra cosa, socavar la imagen de homogeneidad del feminismo europeo, blanco o mestizo. Es una propuesta en acción, que se nutre del pensamiento ancestral de los pueblos originarios y que buscan una sociedad holísticamente más justa, con una transversalización de los principios más elevados de las comunidades indígenas, como son el respeto a la tierra, la territorialidad y el derecho a la autodeterminación.

Es así como, la figura de Cacungo, como sujeto histórico, es contradictoria y, metafóricamente se opone a sí misma, pues no debe ser enmarcada en la coherencia obligada al que se acostumbra a clasificar los discursos que es en esencia algo que siempre rechazo. Su planteamiento, sus ideas no son tan suyas, sino de su tiempo, y uno de sus mayores logros fue poder decir y hacer cosas para las que su tiempo, aparentemente no estaba preparado. Por eso, la violencia a la que se oponen ella y otras intelectuales indígenas no solo es una violencia de género, sino aquella que permea la mayoría de las relaciones de género y que, incluso, se convierte en leyes cuando quienes legislan lo hacen desde el mismo patriarcalismo que pretenden superar.

En un esfuerzo que quizá contraviene la máxima que hemos venido planteando acerca del rechazo de la uniformidad, podríamos plantear en este cierre un par de los enunciados de mayor trascendencia del discurso de Cacungo, de acuerdo a Prieto y Guaján (2013):

El descentramiento de la nación. La trayectoria de Cacungo en el ámbito educativo no es de poco peso, su labor se reconoce además como la productora de un nuevo discurso acerca de la creación de la patria y, más importante aún, de quienes deben ser reconocidos como sus

creadores. La expresión, “kichwización del mundo”, nace de ese reconocimiento que se le hace en torno a descentrar la imagen colectiva que considera al Estado plurinacional como una consecuencia de la confluencia de muchas etnias. En este caso, el discurso de Cacuango habla más bien de expropiación territorial y simbólica, la patria viene dada por entidades jurídicas o identidades ciudadanas. Lo que define la patria es la naturaleza, y se muestra cuando se producen los alimentos, cuando se canta, cuando se lucha por los territorios, incluso, cuando se bebe el agua de sus arroyos.

La Educación intercultural. Este es el otro enunciado discursivo, aunque no nace de los planteamientos teóricos de Cacuango, tiene su génesis en su praxis. Al lado de otras figuras de los movimientos indígenas y ciertas iniciativas socialistas como Luisa Gómez de la Torre género una formación importante de maestros indígenas que contravienen la lógica de la dominación cognitiva. Lo intercultural aquí es lo discontinuo, lo emergente, lo contestatario que se erige al lado del poder dominante y logra adquirir una esencia propia. Se rompe la uniformidad del discurso educativo blanco y mestizo, para que, entre sus rendijas, nuevas instancias discursivas se posicionen: Mujeres indígenas empresarias, mujeres indígenas legisladores, mujeres indígenas empresarias. La trayectoria sinuosa, incongruente y compleja de este apartado sobre los sujetos históricos indígenas como fuentes de las discontinuidades discursivas, se muestran en la figura 25.

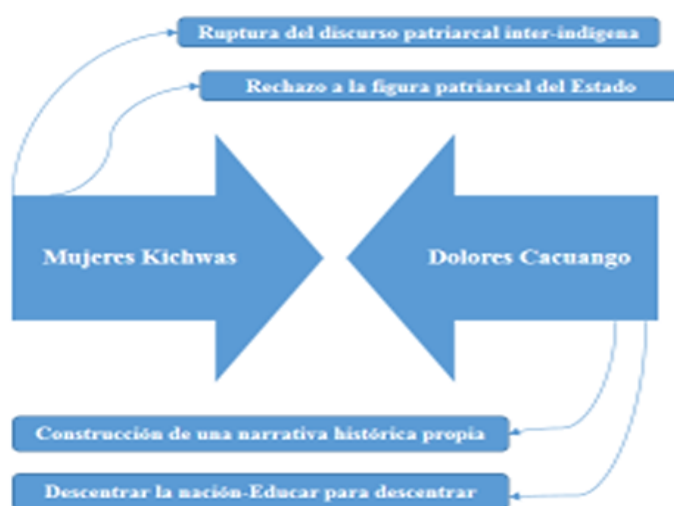


Figura 25. Epílogo Hermenéutico II del Capítulo IV
Fuente: elaboración propia

5. El epílogo de las conclusiones

Los diferentes apartados de estas conclusiones se han estructurado de forma tal que se pudiese observar, no en forma de síntesis, sino en lenguaje foucaultiano, las convergencias y las disidencias, las continuidades y discontinuidades, las superficies y las emergencias, en fin, el universo discursivo que, a manera de formaciones se desglosaron a lo largo de los cuatro capítulos temáticos que componen esta Tesis Doctoral. Un hilo serpentino, que no busco, hablar desde la coherencia sino desde la contradicción que representa el camino (lleno de atajos, a veces circulares) del progresivo protagonismo sociopolítico de las mujeres ecuatorianas, enmarcado en el contexto de la Revolución Ciudadana, emprendida, propuesta y/o malograda durante los gobiernos de Correa.

No ha pretendido ser esta una mirada feminista de las luchas por la inclusión y participación política de las mujeres en el Ecuador, al menos no pretendió ser un estudio desde el feminismo clásico que, generalmente solo reproduce las lógicas de la dominación y que llega a crear jerarquías entre los mismos dominados. Si algún feminismo se ha mostrado como parte de un discurso subyacente, pocas veces designado en el cuerpo del trabajo, ha sido como punto de llegada de la reflexión y se trata del feminismo comunitario o feminismo del sur. Se termina manifestando, como emergencia discursiva, un rechazo a todo tipo de hegemonía, particularmente a esa que representa el feminismo europeo, occidental que, clasifica y jerarquiza los “otros feminismos” (Moore, 2018).

Terminamos con esta convicción: Existe un feminismo alternativo construido desde otros lugares, con las voces de otros actores, que cuestiona el poder patriarcal que, aún en un contexto pretendidamente reivindicativo de las causas justas, como la RC, no llegó a ser hegemónico, ni cultural, ni políticamente. El correísmo, más que el propio Correa, finalizó su periplo temporal, atrapado en los mismos dilemas que pretendió enfrentar. Persisten las desigualdades fácticas que, desde el punto de vista económico, político y axiológico filtran, negativamente, el protagonismo sociopolítico de las mujeres ecuatorianas.

El problema no es más la necesidad de privilegiar el enfoque de géneros, el dilema no es más de igualdad formal; el verdadero obstáculo continúa entronizado en las reminiscencias del patriarcalismo que no ha podido ser descentrado del pensamiento y la acción de las personas que habitan el país. No solo de quienes nominalmente ostentan el poder, sino de todos aquellos, indígenas, afrodescendientes, mestizos y blancos, que siguen reproduciendo, explícita o implícitamente las lógicas de un poder que, como decía Foucault (1980), no se posee como un

objeto, sino que está en todas partes, encubierto a veces, en la misma praxis de los dominados que, con frecuencia, participan ingenuamente de su dominación.

REFERENCIAS

- Convención Nacional de la Izquierda Democrática. (18 de Diciembre de 1993). Declaración de principios de la izquierda democrática 1994. Riobamba, Ecuador. Obtenido de <http://americo.usal.es/oir/opal/Documentos/Ecuador/Izquierda%20democratica/Declaracideprincip1994.pdf>
- Sieder, R., & Sierra, M. (2011). Acceso a la justicia para las mujeres indígenas en América Latina . *CMI Chr. Michelsen Institute*, 1-58. Obtenido de <https://www.cmi.no/publications/file/3941-acceso-a-la-justicia-para-las-mujeres-indigenas-en.pdf>
- Aguilar , M., & Buraschi, D. (2012). El desafío de la convivencia intercultural. *Revista interdisciplinar da mobilidade humana*, 27-43. Obtenido de <https://www.scielo.br/pdf/remhu/v20n38/a03v20n38.pdf>
- Aguinaga, M. (2012). 2006-2012: Feminismos, patriarcado y perspectiva de la lucha de mujeres en el Ecuador. *La tendencia, revista de análisis político*, 48-54. Obtenido de <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/handle/10469/4287>
- Alberdi, I. y. (1984). Mujer y educación: un largo camino hacia la igualdad de oportunidades. *Revista de educación*, 5-18. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=18459>
- Albuja, W., & Enríquez, M. (2018). Análisis de la discriminación laboral hacia las mujeres en Ecuador 2007-2016. 13-41. doi:<https://convergencia.uaemex.mx/article/view/9692>
- Alcañiz, M. (2007). Aportaciones de las mujeres al discurso y la práctica de la paz . *Feminismo/s*, 31-50. Obtenido de https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/3639/1/Feminismos_09_03.pdf
- Almeida, M. (2017). Justicia económica y equidad de género en Ecuador. 1- 40. Obtenido de <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/13577.pdf>
- Altmann, P. (2013). El movimiento indígena ecuatoriano como movimiento social. *Revista Andina de Estudios Políticos*, 6-31. Obtenido de <http://revistas.ojs.es/index.php/revistaestudiosandinos/index>
- Andrade, M. (2009). Interculturalidad, Género y Ciudadanía. En M. C. Patrimonio, *Lineamientos para la construcción de políticas públicas interculturales* (págs. 299-314). Quito: Flacso. Obtenido de <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/55572.pdf>
- Andrade, S. (2007). La Función Judicial y la nueva Constitución Política de la República. *revista de derecho UASB-Ecuador*, 51-74. Obtenido de <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1463/1/RF-07-TC-Andrade.pdf>
- Andrade, S. (2009). ¿Cómo abordar la interculturalidad? interculturalidad, plurinacionalidad y ciencias sociales en el Ecuador. En M. C. Patrimonio, *Lineamientos para la construcción de políticas públicas interculturales* (págs. 3-15). Quito: Flacso. Obtenido de <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/55572.pdf>

- Aparicio, M. (2009). La libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas. El caso de México. *Boletín mexicano de derecho comparado*, 13-38. Obtenido de <http://www.scielo.org.mx/pdf/bmdc/v42n124/v42n124a1.pdf>
- Aparisi, A. (2015). Discursos de género. Del igualitarismo y el postfeminismo de género, al modelo de la igualdad en la diferencia. *EDUCATION SCIENCES & SOCIETY*, 37-50.
- Aranciaga , I., Oliva, L., & Perroni, R. (2010). Fundamentos y Construcción Histórica del Trabajo Social. Caleta Olivia, Argentina. Obtenido de <https://www.aacademica.org/ignacio.aranciaga/75.pdf>
- Arboleda, M. (enero de 2011). Plan de Igualdad, No Discriminación y Buen Vivir para las mujeres ecuatorianas”: marco conceptual, ruta metodológica y estrategia de transversalización, 2010 -2014. Quito, Ecuador. Obtenido de <http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu152820.pdf>
- Arévalo, G. (2014). Ecuador: economía y política de la revolución ciudadana, evaluación preliminar. *CENES*, 109-134. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4949995>
- Arriagada, L. (2017). Aportes del pensamiento latinoamericano al trabajo social crítico. *SOPHIA AUSTRAL*, 71-82.
- Asamblea Constitutiva de Fundación del Partido. (2001). Estatutos del PRIAN. Obtenido de <http://americo.usal.es/oir/opal/Documentos/Ecuador/PRIAN/ESTATUTOS.pdf>
- Asamblea Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Quito, Ecuador. Obtenido de https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
- Asamblea Constituyente de Bolivia. (2009). *Constitución Política del Estado plurinacional de Bolivia*. La Paz: Ediciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Obtenido de https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf
- Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. (9 de junio de 1994). Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Belem, Brasil. Obtenido de https://www.oas.org/dil/esp/convencion_belem_do_para.pdf
- Asamblea General de las Naciones Unidas. (07 de 07 de 1954). Convención sobre los derechos políticos de la mujer. Obtenido de <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0019.pdf?file=fileadmin/Doc>
- Asamblea General de las Naciones Unidas. (7 de julio de 1954). Convención sobre los derechos políticos de la mujer . Obtenido de http://www.derechos.org/ve/pw/wp-content/uploads/convencion_mujer.pdf
- Asamblea Nacional. (24 de junio de 2013). Ley Orgánica de Comunicación. Quito, Ecuador. Obtenido de https://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/07/ley_organica_comunicacion.pdf

- Asamblea Nacional. (28 de enero de 2014). Código Orgánico Integral Penal. Quito, Ecuador. Obtenido de https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/EQU/INT_CEDAW_ARL_EQU_18950_S.pdf
- Asamblea Nacional. (31 de julio de 2014). Ley orgánica de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua. Quito, Ecuador. Obtenido de <https://www.agua.gob.ec/wp-content/uploads/2012/10/LEYD-E-RECURSOS-HIDRICOS-II-SUPLEMENTO-RO-305-6-08-204.pdf>
- Asamblea Nacional. (29 de diciembre de 2016). Ley Orgánica de Cultura. Quito, Ecuador. Obtenido de <http://www.lexis.com.ec/wp-content/uploads/2018/07/LI-LEY-ORGANICA-DE-CULTURA.pdf>
- Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador. (20 de Octubre de 2008). Constitución de la República del Ecuador 2008. Quito, Ecuador. Obtenido de https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
- Asamblea Nacional del PSP. (2000). Partido Sociedad Patriótica. Obtenido de <http://americo.usal.es/oir/opal/Documentos/Ecuador/Sociedad%20Patriotica/Ideario.pdf>
- Atenea. (2015). *Informe Chile*. Obtenido de <https://ateneaesparidad.com/indice-de-paridad-politica/paridad-politica-por-paises/chile/>
- Avila, R. (2012). Evolución de los derechos fundamentales en el constitucionalismo ecuatoriano. *Revista de la Universidad Andina Simón Bolívar*, 1-51. Obtenido de <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/3015/1/%C3%81vila%2C%20R-CON-008-Evoluci%C3%B3n.pdf>
- Banco Interamericano de Desarrollo . (2015). *Partidos políticos y paridad: Un desafío de la democracia en América Latina*. Creative Commons. Obtenido de <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Partidos-politicos-y-paridad-Un-desafio-de-la-democracia-en-Am%C3%A9rica-Latina.pdf>
- Banda, A., Morales, M., & Vanegas , A. (2015). Hablando de empoderamiento. *Revista de Psicología y Ciencias del Comportamiento de la U.A.C.J.S.*, 86-99. Obtenido de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-18332015000100006
- Barbosa, f. L. (2011). Dilemas de la revolución ciudadana en Ecuador. *Vientos Sur*, 1-8.
- Barrig, M. (2005). Los malestares del feminismo latinoamericano: una nueva lectura. *Mujeres en red*, 1-18. Obtenido de http://www.herbogeminis.com/IMG/pdf/malestares_feminismo_latinoamericano.pdf
- Barroso, K., Martinez, N., & Larez, R. (2018). Pensar al Estado: democracia y plurinacionalidad. Aportes teóricos de Álvaro García Linera. *Encuentros. Revista de Ciencias Humanas. Teoría social y pensamiento crítico*, 63-75. Obtenido de <http://biblioteca.clacso.edu.ar/Venezuela/ceshc->

unerm/20180315055739/03_BARROSO_MARTINEZ_LAREZ_PensarAlEstadoDemocraciayPlurinacionalidad.pdf

- Bartra, F. (1992). La mujer nuevo sujeto social: un reto para la educación . 95-106. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5056926.pdf>
- Bettina, A. (2005). El Desarrollismo y la Reconceptualización. ¿Contraposición o avances para una nueva realidad? *Revista Katálysis*, 193-198. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179616343006>
- Bohorquez, V., & Aguirre, J. (2009). Las tensiones de la dignidad humana: conceptualización y aplicación en el derecho internacional de los derechos humanos. *Revista internacional de derechos humanos*, 40-63. Obtenido de http://www.scielo.br/pdf/sur/v6n11/es_03.pdf
- Bonilla, G. (2007). La Lucha de las Mujeres en América Latina: Feminismo, Ciudadanía y Derechos. *Palobra*, 42-58. Obtenido de <https://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/palobra/article/view/225/185>
- Bruel dos Santos, T. (2008). REPRESENTACIONES SOCIALES DE GÉNERO: Un estudio psicosocial acerca de lo masculino y lo femenino. Madrid, España: Tesis Doctoral. Obtenido de https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/3965/27615_bruel_dos_santos_teresa_cristina.pdf?sequence=1
- Cajas, A. (2011). Igualdad de género en la Constitución de 2008. 139-152. Obtenido de <http://167.172.193.213/index.php/foro/article/view/403>
- Camacho, G. (2014). *La Violencia de Género contra las mujeres en Ecuador; Análisis de los Resultados de la Encuesta Nacional Sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres*. Quito: El telegrafo. Obtenido de https://oig.cepal.org/sites/default/files/violencia_de_gnero_ecuador.pdf
- Camacho, G. (2014). *La violencia de género contra las mujeres en el Ecuador: Análisis de los resultados de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres* . Quito: El Telegrafo. Obtenido de https://oig.cepal.org/sites/default/files/violencia_de_gnero_ecuador.pdf
- Camino, A. (08 de 03 de 2017). *Tendencias*. Obtenido de <https://www.tendencias.com/feminismo/en-el-dia-de-la-mujer-recordamos-21-momentos-historicos-que-contribuyeron-a-avanzar-en-la-lucha-por-la-igualdad>
- Caminotti, M. (2017). *La paridad política en Argentina: avances y desafíos* . PNUD, IDEA y ONU Mujeres. Obtenido de <https://www.ar.undp.org/content/argentina/es/home/presscenter/pressreleases/2017/06/23/-la-paridad-pol-tica-en-argentina-avances-y-desaf-os-.html>
- Canto, M. (2008). Gobernanza y participación ciudadana en las políticas públicas frente al reto del desarrollo. *Política y cultura*, 9-37. Obtenido de <http://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n30/n30a2.pdf>

- Cardona, J., Carrillo, Y., & Caicedo, R. (2019). La garantía de los derechos de la mujer en el ordenamiento jurídico colombiano. *Hallazgos*, 83-106. Obtenido de <http://www.scielo.org.co/pdf/hall/v16n32/1794-3841-hall-16-32-83-106.pdf>
- Carosio, A. (2014). Mujeres y género en las políticas sociales latinoamericanas . En A. Carosio, *Feminismos para un cambio civilizatorio* (págs. 85-110). Caracas: CELARG. Obtenido de <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20140512054036/FeminismosParaUnCambioCivilizatorio.pdf>
- Carrasco, C. (2003). La sostenibilidad de la vida humana: ¿un asunto de mujeres? En C. Carrasco, *Mujeres y trabajo: cambios impostergables* (págs. 5-25). Porto Alegre: Veraz Comunicação. Obtenido de <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101012020556/2carrasco.pdf>
- Castaño, D. (2016). El feminismo sufragista: entre la persuasión y la disupción . *Polis, Revista Latinoamericana*, 229-250. Obtenido de https://scielo.conicyt.cl/pdf/polis/v15n43/art_11.pdf
- Centro Nacional de Consultoría. (2014). *Ranking de Igualdad de Mujeres y Hombres en los Partidos y Movimientos Políticos en Colombia 2014-2015*. Obtenido de <https://colombia.unwomen.org/es/biblioteca/publicaciones/2016/11/ranking-partidos-politicos-meta>
- Cevallos, F. (2004). Mestra Blanca Chancoso: aportes desde las luchas contra las formas de discriminación, una condición para la garantizar la vida. *Cuadernos de ECUARUNARI*, 1-22. Obtenido de <https://alice.ces.uc.pt/en/wp-content/uploads/2014/03/Nueva-Versi%C3%B3n.-MESTRA-DO-MUNDO.pdf>
- Chaparro, M. (2015). Rafael Correa: Estrategia de politing en el siglo XXI. *Opción*, 429-445. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/310/31045567022.pdf>
- Colella, L. (2015). El concepto de “sujeto colectivo” en la educación. Un abordaje desde la teoría del sujeto de Alain Badiou y la noción de “emancipación intelectual” de Jacques Rancière. . *Tesis Doctoral*. Buenos Aires, Argentina. Obtenido de http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/44976/Documento_completo.pdf?sequence=3&isAllowed=y
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2000). *Organizacion de Estados Americanos. Los Derechos de la Mujer*. Obtenido de <https://www.cidh.oas.org/countryrep/Peru2000sp/capitulo7.htm>
- CONAIE. (1994). *Proyecto político de la CONAIE*. Quito: Consejo de gobierno-CONAIE. Obtenido de <https://conaie.org/proyecto-politico/>
- CONAIE. (2012). *Proyecto político para la construcción del Estado plurinacional. Propuestas desde la visión de la CONAIE*. Quito: Consejo de gobierno de la CONAIE. Obtenido de <https://conaie.org/2015/07/21/proyecto-politico-conaie-2012/>
- CONAIE. (2020). *¿Quiénes somos?* Obtenido de <https://conaie.org/quienes-somos/>

- CONAMU. (2009). Derechos de las mujeres en la nueva constitución. Obtenido de <http://repositorio.iaen.edu.ec/bitstream/24000/4306/1/DERECHOSDELASMUJERES ENLANUEVACONSTITUCIONCONAMU2008.pdf>
- Confederación de pueblos de la nacionalidad Kichwa del Ecuador. (2005). *Escuela nacional de formación de mujeres líderes "Dolores Cacuango"* . Obtenido de <http://mujerkichua.nativeweb.org/contenidos.html>
- Congreso de la Republica de Colombia. (1991). *Constitución de la Republica de Colombia* . Bogota. Obtenido de <http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf>
- Consejo Nacional de Igualdad de Género. (2018). El Consejo Nacional para la Igualdad de Género y su articulación en el territorio. Obtenido de <http://repositorio.iaen.edu.ec/bitstream/24000/4478/1/ElConsejoNacionalparalaIgualdaddeGeneroyarticulacionenelterritorio.pdf>
- Consejo Nacional de las Mujeres del Ecuador. (2005). *Plan de igualdad de oportunidades de la mujer ecuatoriana*. Quito: AH/editorial. Obtenido de http://www.siiise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/pubsim/pubsim_M009.pdf
- Consejo Nacional de las Mujeres - CONAMU. (24 de julio de 2008). Los derechos de las mujeres en la nueva Constitución de la Republica del Ecuador . Quito, Ecuador. Obtenido de <http://repositorio.iaen.edu.ec/bitstream/24000/4306/1/DERECHOSDELASMUJERES ENLANUEVACONSTITUCIONCONAMU2008.pdf>
- Consejo Nacional para la Igualdad de Género. (2020). *Consejo nacional para la igualdad de género*. Obtenido de <https://www.igualdadgenero.gob.ec/resena-historica/#>
- Contreras, F., Pedraza, J., & Mejía, X. (2012). La mujer y el liderazgo empresarial. *Diversitas: Perspectivas en Psicología*, 183-194. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/679/67923973012.pdf>
- Convención Interamericana de los Derechos sexuales y los Derechos Reproductivos. (s.f.). *Convención Interamericana de los Derechos sexuales y los Derechos Reproductivos*. Obtenido de http://convencioninteramericana.org/wp-content/uploads/2016/04/Propuesta_Convencion.pdf
- Corte Nacional de Justicia. (01 de abril de 2020). Obtenido de <https://www.cortenacional.gob.ec/cnj/index.php/pages/194-24-presidencia>
- Cruz, A. (1995). Sobre los fundamentos del nacionalismo. *Revista de estudios políticos*, 199-222. Obtenido de <https://recyt.fecyt.es/index.php/RevEsPol/article/view/46819>
- Dagnino, M. (2019). *20 mujeres del siglo XX. Venezolanas que cambiaron nuestra historia*. Caracas: Transparencia Venezuela y Asamblea Nacional. Obtenido de <https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2019/11/20-mujeres-venezolanas-del-siglo-XX.pdf>
- De Giorgi, A. (2016). A la calle con la cacerola . El encuentro entre la izquierda y el feminismo en los ochenta. En M. Valdivieso, *Movimientos de mujeres y lucha feminista en*

- América Latina y el Caribe* (págs. 239-276). Buenos Aires: Clacso. Obtenido de http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20160713103853/Movimiento_mujeres.pdf
- De la Cadena, M., & Starn, O. (2009). Indigeneidad: problemáticas, experiencias y agendas en el nuevo milenio. *Tabula Rasa*, 191-223. Obtenido de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=396/39612022007>
- Defensoría del pueblo del Ecuador. (2016). Política institucional de igualdad de género 2016-2019. Quito, Ecuador. Obtenido de <http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu164407.pdf>
- Del Alamo, O. (2011). Tierra, educación y lucha política: las mujeres y los procesos organizativos indígenas y campesinos de la Sierra ecuatoriana durante la primera mitad del siglo XX. 1-28. Obtenido de <http://www.ub.edu/SIMS/hojasWarmi/hojas16/articulos/oscarAlamo.pdf>
- Delgado, D. (2009). *Sindicalismo latinoamericano y política de género*. Montevideo: Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung. Obtenido de <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/uruguay/06532.pdf>
- Díaz, C. (2007). La red latinoamericana de mujeres transformando la economía: construir puentes entre la justicia económica y la igualdad de género. *La ventana*, 70-101. Obtenido de <http://www.scielo.org.mx/pdf/laven/v3n26/1405-9436-laven-3-26-70.pdf>
- Dirección Nacional del MUPP-NP. (2006). Estatutos del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo país . Obtenido de <https://reformaspolicas.org/wp-content/uploads/2015/03/ecuadorestatutopachakutik1996.pdf>
- Distintas latitudes. (19 de 06 de 2018). *Entre avances y penalización absoluta. Comparativo de la situación del aborto en América Latina*. Obtenido de <https://distintaslatitudes.net/explicadores/aborto-america-latina>
- Durkheim, E. (2014). *La división del trabajo social (VOL. 1)*. Buenos Aires: Ediciones Lea, S.A. Obtenido de https://books.google.co.ve/books/about/La_divisi%C3%B3n_del_trabajo_social.html
- ECUARUNARI. (2016). *Informe sombra de la Confederación de pueblos de nacionalidad Kichwa*. Quito. Obtenido de https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/ecuador/session_27_-_may_2017/pddhe_upr27_ecu_s_main.pdf
- Enríquez, E. (2017). La derecha latinoamericana bajo el postneoliberalismo. La derecha ecuatoriana durante la presidencia de Rafael Correa (2007-2017). *Revista Andina de estudios políticos*, 15-40. Obtenido de <https://www.flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/%25f/agora/files/175-1-413-3-10-20180120.pdf>
- Escandón, C. (2011). La perspectiva de Género en la versión norteamericana de las mujeres en América Latina. *Anuario de Hojas de Warmi*, 1-28. Obtenido de <http://www.ub.edu/SIMS/hojasWarmi/hojas16/articulos/carmenRamos.pdf>

- Estrada, R. (2019). *Mujeres Ejecutivas 2019*. Quito: Deloitte. Obtenido de <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ec/Documents/deloitte-analytics/Estudios/EstudioMujeres2019.pdf>
- Fernández, A. (2006). Mujeres y política en América Latina: Dificultades y aceptación social. *Argumentos*, 117-143. Obtenido de <http://www.scielo.org.mx/pdf/argu/v19n51/v19n51a5.pdf>
- Fernández, P. (2012). El camino hacia la transversalidad de género, el empoderamiento y la corresponsabilidad en las políticas de igualdad de género. *Universitas. revista de filosofía, derecho y política*, 79-104. Obtenido de <http://universitas.idhbc.es/n16/16-05.pdf>
- Ferreira, C., García, K., Macías, L., Pérez, A., & Tomsich, C. (2011). Mujeres y hombres de Ecuador en cifras. Obtenido de https://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Libros/Socioeconomico/Mujeres_y_Hombres_del_Ecuador_en_Cifras_III.pdf
- Flores, E. (2016). Las instituciones educativas indígenas en el Ecuador y su dialéctica con el Estado. *Rehuso*, 30-44. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7047183.pdf>
- Foucault, M. (1980). *Microfísica del poder*. Madrid: Las Ediciones de La Piqueta. Obtenido de <http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/12/doctrina39453.pdf>
- Foucault, M. (2002). *Arqueología del Saber*. México: Siglo XXI. Obtenido de https://monoskop.org/images/b/b2/Foucault_Michel_La_arqueologia_del_saber.pdf
- Freidenberg, F., & Alcántara, M. (15 de abril de 2004). *Los dueños del poder. Los partidos políticos en Ecuador (1978-2000)*. Quito: Flacso. Obtenido de <https://www.flacso.edu.ec/portal/publicaciones/detalle/los-duenos-del-poder-los-partidos-politicos-en-ecuador-1978-2000.3268>
- Fries, L. (2000). Los derechos humanos de las mujeres: aportes y desafíos. En G. Herrera, *Las fisuras del patriarcado, reflexiones sobre feminismo y derecho* (pág. 134). Quito: Flacso. Obtenido de <http://www.flacso.org.ec/docs/safisuras.pdf>
- Gil, B. (2017). Las políticas educativas de Educación en Ecuador, como una de las manifestaciones e instrumentos del Plan Nacional para el Buen Vivir. Alicante, España. Obtenido de https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/66589/1/tesis_benito-gil.pdf
- Gobierno Bolivariano de Venezuela. (2013). *Plan para la igualdad y equidad de género "Mamá Rosa" 2013-2019*. Obtenido de https://oig.cepal.org/sites/default/files/venezuela_2013-2019_pieg.pdf
- Godinho, D. (2017). La construcción del poder sindical con paridad de género. El caso de la Central Única de trabajadores de Brasil. *Nueva Sociedad*, 87-111. Obtenido de https://nuso.org/media/articles/downloads/4.TC_Godinho_EST.pdf
- Gómez, S. (11 de octubre de 2013). Gabriela Rivadeneira, la encarnación de la "revolución ciudadana" de Ecuador. *La Información*. Obtenido de

https://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/gabriela-rivadeneira-la-encarnacion-de-la-revolucion-ciudadana-de-ecuador_3cawyglPTdQJST1MqgNas1/

González, M. (2011). *Movimiento indígena y educación intercultural en Ecuador*. Buenos Aires: CLACSO. Obtenido de <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20120417111214/Movimiento.pdf>

González, M. (2015). Las escuelas clandestinas en Ecuador. Raíces de la educación indígena intercultural. *Revista colombiana de educación*, 75-95. Obtenido de <http://www.scielo.org.co/pdf/rcde/n69/n69a04.pdf>

González, M. (27 de abril de 2017). Gabriela Rivadeneira presentó su última rendición de cuentas de la Asamblea. *El Comercio*. Obtenido de <https://www.elcomercio.com/actualidad/gabrielarivadeneira-ultima-rendicioncuentas-asamblea-ecuador.html>

Gutierrez , P., & Luengo María. (2011). Los feminismos en el siglo XXI. Pluralidad de pensamientos. 335-351. Obtenido de <https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/brocar/article/view/1610>

Heidegger, M. (2000). *Ontología. Hermenéutica de la Facticidad*. Madrid: Alianza.

Higuera, É., & Castillo, N. (2015). La interculturalidad como desafío de la educación ecuatoriana. *Sophia*, 147-162. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/4418/441846095009.pdf>

Iribarne, M. (junio de 2009). Flora Tristán y la tradición del feminismo socialista. 2009. Getafe, España. Obtenido de https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/7654/mmacarena_iribarne_tesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Iturralde, D. (2003). Pueblos indígenas, derechos económicos, sociales y culturales, y discriminación. *Revista del IIDH*, 233-256. Obtenido de <https://www.corteidh.or.cr/tablas/R06729-7.pdf>

Iturrez, A. (s/f). *Mujer y política en Argentina*. Obtenido de <https://www.oas.org/es/CIM/docs/DemocraciaI-IturrezdeCappellini.pdf>

Jaramillo, M. (2019). El papel de las mujeres en la Revolución Ciudadana. Análisis del gobierno de Rafael Correa desde el enfoque de género como elemento de democratización. *Analecta Política*, 75-96. Obtenido de <http://dx.doi.org/10.18566/apolit.v9n16.a05>

Kirkwood, J. (1986). *Ser política en Chile: Las feministas y los partidos*. Santiago de Chile: FLACSO. Obtenido de <http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0049932.pdf>

Korovkin, T. (2002). *Comunidades indígenas, economía de mercado y democracia en los Andes ecuatorianos*. Quito: CEDIME e IFEA. Obtenido de https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1036&context=abya_ya_la

- Lalander, R., & Ospina, P. (2012). Movimiento indígena y revolución ciudadana en Ecuador. *Cuestiones políticas*, 13-50. Obtenido de <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r30192.pdf>
- Larrea, A. (2004). El Movimiento Indígena Ecuatoriano: participación y resistencia. *OSAL*, 66-76. Obtenido de <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/osal/20110307010944/6ACMaldonado.pdf>
- López, A. (2016). Movimiento de mujeres, Estado, Política y Poder: Lecturas feministas de la política pública de género en la Venezuela Bolivariana. En M. Valdivieso, *Movimientos de Mujeres y luchas feministas en América Latina y el Caribe* (págs. 315-360). Buenos Aires: Clacso. Obtenido de http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20160713103853/Movimiento_mujeres.pdf
- López, N., & D'Alessandre, V. (2011). *Informe sobre tendencias sociales y educativas en América Latina*. Buenos Aires: IIPE - UNESCO. Obtenido de <https://unesdoc.unesco.org/images/0023/002300/230080s.pdf>
- Lozano, M. F. (2010). Mujeres en América Latina. *Explora*, 1-16. Obtenido de <http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002326.pdf>
- Lugo, S. (2010). Análisis de la incorporación del enfoque de género en los proyectos públicos de desarrollo. *FES - ILDIS*, 1-22. Obtenido de <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/07691.pdf>
- Luna, L. (2005). Abordajes de la historia de las mujeres en la enseñanza de la historia de América Latina, Siglo XX. *Boletín Americanista*, 20-24. Obtenido de <http://revistes.ub.edu/index.php/BoletinAmericanista/article/view/13124>
- Mancero, M. (2017). “¡Avanzamos, patria!” La invención de la nación en el correísmo. *Revista mexicana de sociología*, 319-344. Obtenido de <http://www.scielo.org.mx/pdf/rms/v79n2/0188-2503-rms-79-02-00319.pdf>
- Manosalvas, M. (2014). Buen vivir o sumak kawsay. En busca de nuevos referenciales para la acción pública en Ecuador. *Temas*, 101-121. Obtenido de <https://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/download/1273/1144/>
- Mantilla, L., Galarza, J., & Zamora, R. (2017). La inserción de la mujer en la educación superior ecuatoriana: Caso universidad técnica de Ambato. *Revista latinoamericana de estudios educativos*, 12-29. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=134154501002>
- Mantilla, J. (s/f). La conceptualización de género y su importancia a nivel internacional. *Agenda internacional*, 153-167.
- Massal, J. (2010). El proyecto político indígena ecuatoriano. Convergencia y divergencias con su entorno político. *Colombia internacional*, 9-33. Obtenido de <http://www.scielo.org.co/pdf/rci/n71/n71a02.pdf>
- Matos, M., & Paradis, C. (2013). Los feminismos latinoamericanos y su compleja relación con el Estado: debates actuales. *Iconos, Revista de Ciencias Sociales*, 91-107. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4162217.pdf>

- Meléndez, C., & Moncagatta, P. (2017). Ecuador, una década de correísmo. *Revista de Ciencia Política*, 413-447. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/324/32453264009.pdf>
- Melgar, L., & Gil, A. (2017). La educación de las mujeres indígenas en Ecuador. *Revista con la A*, 1-3. Obtenido de <https://conlaa.com/la-educacion-de-las-mujeres-indigenas-en-ecuador/?output=pdf>
- Melgar, R. (2015). Marxismo y socialismo en el Ecuador: la cuestión de los orígenes. *Pacarina del Sur*, 1-25. Obtenido de <http://pacarinadelsur.com/home/alma-matinal/1259-marxismo-y-socialismo-en-el-ecuador-la-cuestion-de-los-origenes>
- Ministerio de educación del Ecuador. (2013). Guía para la transversalización de la perspectiva de género en la gestión operativa de la educación técnica del Ecuador. Quito, Ecuador. Obtenido de https://ecuador.vvob.org/sites/ecuador/files/6.2013_09_26_guia_genero_en_ed_tecn_ed_fin.pdf
- Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. (Noviembre de 2015). Política pública del Estado ecuatoriano para la erradicación de la violencia de género hacia la niñez, adolescencia y mujeres. Quito, Ecuador. Obtenido de <http://americalatinagenera.org/newsite/includes/fichas/politica/ECUADOR.pdf>
- Molina, P. (2018). Política en tacones : campaña electoral de Cynthia Viteri en Ecuador durante 2006 y 2017. *Revista San Gregorio*, 131-139. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6592045.pdf>
- Monje, J. (2018). ¿ Revolución o reforma ciudadana? Participación social y procesos de transformación política en Ecuador. Quito, Ecuador.
- Moore, C. (2018). Feminismos del Sur, abriendo horizontes de descolonización. Los feminismos indígenas y los feminismos comunitarios. *Estudios políticos*, 237-259. Obtenido de <http://doi.org/10.17533/udea.espo.n53a11>
- Morán, M. (2011). La cultura política de las mujeres, Un campo de estudio todavía por explorar. *Psicología Política*, 45-68. Obtenido de <https://www.uv.es/garzon/psicologia%20politica/N42-3.pdf>
- Moscoso, M. (1996). Imagen de la mujer y la familia a inicios del siglo XX. En Conuep, *Mujer, economía e imaginario colectivo* (págs. 67-82). Quito. Obtenido de <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1249/1/RP-08-ES-Moscoso.pdf>
- Moscoso, M. (1999). El papel de las mujeres en la educación familiar en Ecuador . Inicios del siglo XX. En P. Aizpuro, *Familia y educación en Iberoamérica* (págs. 285-307). México: Colegio de México. Obtenido de <https://www.jstor.org/stable/j.ctvhn09mb.19>
- Mota, G. (15 de 12 de 2017). Los derechos de las mujeres en la Revolución Bolivariana: avances y retos. (R. S. TV, Entrevistador) Obtenido de <http://www.albatv.org/Los-derechos-de-las-mujeres-en-la.html>
- Munevar, D., & Villaseñor, M. (2005). Transversalidad de género. Una estrategia para el uso político-educativo de sus saberes. *La ventana*, 44-68. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5202252.pdf>

- Murguialday, C. (2006). *Empoderamiento de las mujeres: conceptualización y estrategias*. Cepaz. Obtenido de https://cepaz.org/documentos_informes/empoderamiento-de-las-mujeres-conceptualizacion-y-estrategias/
- Navia, C. (2007). El Análisis de Discurso de Foucault. 57-62. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2293007>
- Noragueda, C. (10 de 06 de 2015). *Hipertextual*. Obtenido de El sufragio femenino en España y América Latina: <https://hipertextual.com/2015/06/derecho-voto-mujeres-hispanoamerica>
- Núñez, E. (30 de 06 de 2016). *Aprendizajes y desafíos en el monitoreo a los Estados de la región en el cumplimiento de la Convención Belém Do Pará*. Obtenido de http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/Presentacion_CLADEM_%20MESECVI.pdf
- OIT. (10 de agosto de 1982). Convenio sobre igualdad de remuneración. Ginebra, Suiza. Obtenido de <http://www.mpppst.gob.ve/mpppstweb/wp-content/uploads/2016/08/Convenio-N%C2%BA-100-sobre-Igualdad-de-Remuneraci%C3%B3n-1951.pdf>
- ONU Mujeres. (2014). *Guía estratégica empoderamiento político de las mujeres: Marco para una acción estratégica*. Flacso. Obtenido de <https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2014/10/guia-estrategica>
- Orsini, M. (2012). El concepto de empoderamiento en los estudios de género y en la prensa femenina. *Revista de la Universidad Autónoma de Barcelona*, 951-971. Obtenido de <https://idus.us.es/handle/11441/34591>
- Ortiz, S. (27 de Enero de 2018). *El Comercio.com*. Obtenido de <https://web.archive.org/web/20180127072332/http://www.elcomercio.com/actualidad/paulinaaguirre-mujer-cortenacionaldejusticia-posesion-jueces.html>
- Ospina, P. (2009). El proyecto político de la revolución ciudadana: líneas maestras. *Revista de la Universidad Andina Simón Bolívar*, 1-18. Obtenido de <http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/3223/1/CON-002-Ospina%2C%20P.pdf>
- Páez, A. (2001). *Los orígenes de la izquierda ecuatoriana*. Quito: Fundación de investigaciones andino amazónicas. Obtenido de https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1317&context=abya_ya la
- Páez, A. (2011). La participación ciudadana desde la perspectiva del género: Ecuador. *Revista Derecho Electoral*, 259-281. Obtenido de https://www.tse.go.cr/revista/art/13/paez_moreno.pdf
- Palacios, P. (2005). Construyendo la diferencia en la diferencia: mujeres indígenas y democracia plurinacional. En P. Palacios, *Pueblos indígenas, estado y democracia* (págs. 1-25). Buenos Aires: CLACSO. Obtenido de <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20101026012655/14Palacios.pdf>

- Paltan, J. (2005). La crisis del sistema político ecuatoriano y la caída de Gutiérrez. *Íconos: Revista de Ciencias Sociales*, 47-54. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4823189>
- Peres, D. (2016). Poder, teoría queer y cuerpo Cyborg. *Daimon. Revista Internacional de Filosofía*, 125-134. Obtenido de <http://dx.doi.org/10.6018/daimon/269401>
- Perez, L. (2018). Participación política de mujeres indígenas en tiempos de la Revolución Ciudadana. *Alteridades*, 61-72. doi:<https://www.doi.org/10.24275/uam/izt/dcsh/alteridades/2018v28n55/Perez>
- Pérez, M., Vásquez, V., & Zapata Emma. (2008). Empoderamiento de las mujeres indígenas de Tabasco. El papel de los fondos regionales de la CDI. *Cuicuilco*, 165-179. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/351/35112172010.pdf>
- Piedra, N. (2004). Relaciones de poder: leyendo a Foucault Desde la perspectiva de género. *Revista de Ciencias Sociales*, 123-141. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/153/15310610.pdf>
- Pila, G. (2019). La mujer en el poder legislativo de Ecuador: Análisis desde la comunicación verbal y no verbal. *Revista de Comunicación de la SEECI*, 81-102. Obtenido de <http://doi.org/10.15198/seeci.2019.49.81-102>
- PNUD. (2019). *Sin igualdad de género, no hay erradicación de pobreza*. Ciudad de Panamá: Naciones Unidas. Obtenido de <https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/presscenter/pressreleases/2019/-sin-igualdad-de-genero--no-hay-erradicacion-de-pobreza.html>
- PNUD, IDEA y ONU Mujeres. (2018). *Uruguay: una democracia consolidada aun muy lejos de la paridad*. Atenea. Obtenido de <https://www.undp.org/content/dam/uruguay/docs/Genero/undp-uy-pub-atenea-2018.pdf>
- Prieto, M. (2006). Mujeres ecuatorianas entre las crisis y las oportunidades. *Íconos: Revista de Ciencias Sociales*, 173-181. Obtenido de <http://www.flacso.org.ec/docs/i24resenas.pdf>
- Prieto, M., & Guaján, V. (2013). Intelectuales indígenas en Ecuador: mujeres kichwas. *Nueva Sociedad*, 136-148. Obtenido de https://www.nuso.org/media/articles/downloads/3946_1.pdf
- Puente, D. (23 de marzo de 2018). *El Comercio.com*. Obtenido de <https://www.elcomercio.com/actualidad/elecciones-seccionales-cronograma-presupuesto-ecuador.html>
- Quintero, R. (27 de Diciembre de 1980). *El mito del populismo en el Ecuador*. Quito: Flacso. Obtenido de <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/44254.pdf>
- Quintero, R. (9 de Abril de 1980). *El mito del populismo en el Ecuador*. Quito: Flacso. Obtenido de <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/44254.pdf>
- Ramírez, E. (2002). Las mujeres y la Guerra. *Psicología desde el Caribe*, 89-124. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/213/21300906.pdf>

- Repetti, G. (2011). Algunas reflexiones sobre el movimiento de reconceptualización del trabajo social argentino, en el contexto social latinoamericano. *Revista de Trabajo Social – FCH – UNCPBA*, 162-195.
- Retamozo , M., & Morris , M. (2015). Sindicalismo y política. La Central de Trabajadores de la Argentina en tiempos Kirchneristas. 63-87. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6142721.pdf>
- Rincón, A., Vizcarra, I., Thome, H., & Gazcón, P. (2017). Empoderamiento y feminismo comunitario en la conservación del maíz en México. *Estudios Feministas*, 1073-1092. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=38152752006>
- Rincón, L. (2015). *Mujer y poder político en Latinoamérica: Una reflexión desde el siglo XXI*. Obtenido de Utop: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27937090006>
- Rostagnol, S. (2017). El difícil camino de las mujeres en los partidos políticos. En M. C. Sagot, *Feminismos, pensamiento crítico y propuestas alternativas en América Latina* (págs. 127-144). Buenos Aires: Clacso. Obtenido de <http://repositorio.ciem.ucr.ac.cr/jspui/handle/123456789/187>
- Ruano, A. (2015). La Igualdad de Género en la Función Pública del Estado Ecuatoriano. 107 - 119. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5774746.pdf>
- Rubenstein, S. (2005). La conversión de los shuar. *Íconos*, 27-48. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/509/50902203.pdf>
- Salgado, J. (2009). Violencia contra las mujeres indígenas: entre las “justicias” y la desprotección. Posibilidades de interculturalidad en. *Aportes Andinos*, 1-14. Obtenido de <http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/1051>
- Sanchez, A. (10 de 04 de 2017). *Entender a las mujeres*. Obtenido de <https://entenderalasmujeres.com/capacidad-multitarea/>
- Sánchez, M., Llanos, B., & Burgos, A. (2019). *Colombia: la hora de la paridad*. PNUD, IDEA y ONU Mujeres. Obtenido de https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/democratic_governance/colombia--la-hora-de-la-paridad.html
- Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (abril de 2014). Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 2014-2017. Quito, Ecuador. Obtenido de <https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/09/Agenda-Nacional-de-Mujeres-y-Igualdad-de-Genero.pdf>
- SENPLADES. (2007). Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2010 . Quito, Ecuador. Obtenido de <https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/09/Plan-Nacional-Desarrollo-2007-2010.pdf>
- Serrano, P. (2012). La perspectiva de género como una apertura conceptual y metodológica en salud pública. *Revista Cubana de Salud Pública* , 811-822 .
- Sierra, M. (2009). Género, diversidad cultural y derechos: las apuestas de las mujeres indígenas ante la justicia comunitaria. En L. Miriam, *Mujeres indígenas y justicia ancestral* (págs.

- 15-32). Quito: UNIFEM. Obtenido de <http://bdigital.unal.edu.co/48867/1/mujeresindigenas.pdf>
- Silva, C., & Loreto, M. (2004). Empoderamiento: Proceso, Nivel y Contexto. *Psykhé*, 29-39. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/967/96713203.pdf>
- Sinardet, E. (1999). El papel educador de los padres de familia: táctica de la iglesia en la lucha contra las reformas educativas liberales en Ecuador (1906-1914). En P. Aizpuru, *Familia y educación en Iberoamérica* (págs. 211-222). México: Colegio de México. Obtenido de <https://www.jstor.org/stable/j.ctvhn09mb.15>
- Stoessel, S. (2014). Los claroscuros del populismo. El caso de la Revolución Ciudadana en Ecuador. *Pasajes: revista de pensamiento contemporáneo*, 28-41. Obtenido de <http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/48916/28-41.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Tamayo, G. (2003). *La convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, su protocolo opcional y el comité de la cedaw: herramientas para la acción*. Barcelona-España: Fundación INDERA. Obtenido de <https://europa.eu/capacity4dev/file/9949/download?token=kuWC5dYk>
- Tello, F. (2009). La participación política de las mujeres en los gobiernos locales latinoamericanos: barreras y desafíos para una efectiva democracia de género. España. Obtenido de http://americalatinagenera.org/newsite/images/cdr-documents/publicaciones/participacion_mujeres_gob_locales_flavia_mabel_tello.pdf
- Tello, P., & Villar, E. (2018). *La paridad que no llega: Avances y desafíos de la participación política de las mujeres peruanas*. Lima: PNUD, IDEA y ONU Mujeres. Obtenido de <https://ateneaesparidad.com/publicaciones/la-paridad-que-no-llega-avances-y-desafios-de-la-participacion-politica-de-las-mujeres-peruanas/>
- Tibán, L. (2001). La ruptura del ventrilocuismo y el establecimiento de normas propias de representación en el pueblo Kichwa de Cotopaxi. *Revista Yachaikuna*, 1-13. Obtenido de <http://icci.nativeweb.org/yachaikuna/1/tiban.pdf>
- Trimiño, C. (abril de 2010). Aportaciones del feminismo liberal al desarrollo de los derechos políticos de las mujeres. Getafe, España. Obtenido de https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/9167/celina_trimino_tesis.pdf?sequence=5&isAllowed=y
- Trujillo, J. (2018). Participación de las mujeres ecuatorianas en la política ¿se reduce la brecha? . *Tendencias*, 1-6. Obtenido de <http://www.defensayjusticia.gob.ec/?p=32950>
- Valente, V. (2005). *Los feminismos latinoamericanos en su tránsito al nuevo milenio. Una lectura político-personal*. Buenos Aires: Clacso. Obtenido de <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20100912064332/18Valente.pdf>
- Vallejo, I., & Duhalde, C. (2019). Las mujeres indígenas amazónicas: Actoras emergentes en las relaciones Estado - organizaciones indígenas amazónicas, durante el gobierno de Alianza País en el Ecuador. *Polis*, 30-44. Obtenido de <https://scielo.conicyt.cl/pdf/polis/v18n52/0718-6568-polis-18-52-00030.pdf>

- Vargas, J. (2007). Liberalismo, neoliberalismo y potneoliberalismo. *Revista Mad*, 66-89.
- Vásquez, S. (2018). *Si somos más de la mitad ¿por qué no tenemos paridad?. Avances y desafíos en la participación política de las mujeres en Guatemala*. PNUD, IDEA y ONU Mujeres. Obtenido de https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/democratic_governance/si-somos-mas-de-la-mitad--por-que-no-tenemos-paridad--avances-y-.html
- Vega, S. (2004). Movimiento de mujeres ¿Cuál es el nuevo momento? *Tendencia*, 68-76. Obtenido de http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20160713103853/Movimiento_mujeres.pdf
- Vitale, L. (2020). *Robertexto.com*. Obtenido de http://www.robertexto.com/archivo15/movim_feminist.htm#2
- Vos Obeso, R. (2004). Balance histórico de la participación política de las mujeres colombianas en el siglo XX. 7-22. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/937/93700902.pdf>
- Zúñiga, P. (2006). Mujeres ecuatorianas: Panorama de sus situaciones y perspectivas finales del siglo XX y principios. *Araucaria*, 190-211. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28281610>